



Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
Facultad de Derecho
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas

Tesis Doctoral

**ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN SU SISTEMA DE GESTIÓN
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

MANUEL BLANCO PEREIRA

Tesis dirigida por las Dras.:

D^a. CARMEN FERRADANS CARAMÉS
D^a. ROSA MARÍA GALLARDO GARCÍA

Cádiz, 2019

*Cuando asumimos ser soldados,
no dejamos de ser ciudadanos
George Washington*

*A mi mujer Chary,
a mis hijos Laura y Álvaro,
por su cariño y apoyo incondicional
y a mis nietos Luca y Paola*

AGRADECIMIENTOS

Quiero, debo y tengo que expresar mi agradecimiento, a todas aquellas personas que, con su apoyo desinteresado, me han alentado a la elaboración de esta investigación.

Especialmente a las Dras. Doña Carmen Ferradans Caramés y Doña Rosa María Gallardo García, por su plena confianza desde el inicio en el estudio a afrontar. Que, a pesar de sus apretadas agendas como profesoras, he contado en todo momento con su eficaz asesoramiento y orientación durante el transcurso de nuestra investigación. Mi reconocimiento más sincero por su esfuerzo y apoyo incondicional.

También quiero expresar mi gratitud a los profesores de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz que, gracias a su preocupación, permitieron que pudiera culminar con éxito las actividades formativas de doctorado, que impartieron durante los cursos académicos. Gracias a ellos incrementaron mi vocación por las investigaciones científicas.

Y especialmente a Chary, mi mujer, en quien he encontrado siempre la suficiente comprensión para entender que, de las ya escasas horas que la vida militar nos deja para la vida familiar, le quitara algunas más para la realización de esta nueva tarea. Con mi cariño, mi agradecimiento por su comprensión e inequívoca colaboración en esta y en tantas otras cosas.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Abreviaturas.....	1
Gráficos.....	5
Tablas.....	7
Resumen.....	9
Introducción.....	17

CAPÍTULO I

LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SU ADAPTACIÓN A LA PRL

1. El Ministerio de Defensa.....	35
1.1. La reestructuración gubernamental. La creación del Ministerio de Defensa	36
1.2. Delimitación del campo militar de actuación de los ejércitos y su diferenciación del campo político-administrativo	39
2. La estructura orgánica actual del Ministerio de Defensa	47
2.1. La organización básica actual de las FAS	48
2.2. La organización del Ejército de Tierra	52
3. Normativa que afecta a los empleados públicos civiles del Ministerio de Defensa.....	56
4. Normativa que afecta a los empleados públicos militares del Ministerio de Defensa... ..	59
5. Clasificación de los empleados públicos en el Ministerio de Defensa	76
5.1. Los empleados públicos de carácter civil	79
5.2. Los empleados públicos de carácter militar	86

CAPÍTULO II

LA AFECTACIÓN PARTICULAR DE LA PRL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

1. El carácter de Administración pública de la Administración militar	95
2. Normativa de PRL que afecta al personal de las Administraciones públicas	99
2.1. Antecedentes	99
2.2. Reglamentación jurídica vigente de adaptación de la LPRL a la AGE y a la Administración militar	104
2.3. Modelo de sistema de gestión de PRL para la AGE.....	107
3. La adaptación de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa a la gestión de la PRL.....	110
3.1. La estructura orgánica de la gestión de la PRL en el Ejército de Tierra.....	119
4. La labor de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros y establecimientos militares.....	124

CAPÍTULO III

TRANSPOSICIÓN DE LA DM EN EL ACERVO JURÍDICO DE OTROS PAÍSES DE LA UE. LA IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS FAS

1. La DM y el inicio de la armonización en materia de seguridad y salud en el trabajo en los países de la UE	129
2. El ámbito de aplicación de la DM.....	131
2.1. Interpretación en relación al personal militar. Transposición de la legislación en algunos países de la UE.....	134
3. Desarrollo de la normativa de PRL que afecta al personal militar en algunos países de la UE.....	141
3.1. Normativa vigente	142
3.2. La estructura orgánica de la gestión de la PRL en los Ministerios de Defensa.....	154
3.2. La implantación de la PRL en los respectivos Ejércitos de Tierra	162
4. Análisis comparativo de los aspectos diferenciales	170

CAPÍTULO IV

INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I/A DEL EJÉRCITO DE TIERRA, EN SU SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL

1. La siniestralidad laboral del personal militar durante las actividades de I/A.....	177
1.1. Mirada cuantitativa de la siniestralidad laboral del personal militar	179
1.2. Mirada cualitativa de la siniestralidad laboral del personal militar	182
2. Las actividades excluidas de la LPRL	191
3. Principios limitadores de la integración de las actividades excluidas	193
3.1. La salvaguarda de la defensa nacional, un derecho no exclusivo del personal militar.....	198
3.1.1. La defensa nacional: concepto y alcance	199
3.1.2. Fuerzas Armadas, Administración militar y defensa nacional.....	205
3.2. El cumplimiento inevitable de la misión: la inevitabilidad del riesgo	209
3.3. La asunción del riesgo grave e inminente por el personal militar	214
4. El plan de PRL del conjunto de las normas propias de seguridad y operación...	220
5. Aspectos diferenciales entre las actividades de I/A y las actividades Operativas.....	223
5.1. La adecuada exclusión de las actividades Operativas consideradas como acontecimiento excepcional.....	230
5.2. La Instrucción en la enseñanza de formación	232
6. Objeto y alcance de las actividades de I/A en el Ejército de Tierra.....	234
6.1. Las actividades de I/A en el Sistema de Mando y Dirección del Ejército de Tierra	237
6.2. La Instrucción en el Ejército de Tierra	241
7. La investigación de la siniestralidad laboral en el Ejército de Tierra	244
8. La integración de las actividades de I/A en el sistema de gestión de la PRL del Ejército de Tierra.....	249
8.1. El sistema de gestión de la PRL en el Ejército de Tierra para las actividades comunes.....	252
8.2. Selección de las tareas propuestas de integración	255

9.	Evaluación de las tareas seleccionadas.....	258
9.1.	Fases de la evaluación de las tareas de instrucción individual	262
9.1.1.	Fase 1. Descripción de las tareas	275
9.1.2.	Fase 2. Análisis de los riesgos	283
9.1.3.	Fase 3. Normas propias de seguridad	291
9.1.4.	Fase 4. Evaluación de los riesgos.....	291
9.1.5.	Fase 5. Discriminación del tipo de riesgo.....	316
9.1.6.	Fase 6. Medidas preventivas	325
9.1.7.	Fase 7. Impacto de las medidas preventivas en el desarrollo de la tarea de las tareas.....	334
9.1.8.	Fase 8. Propuesta de medidas preventivas	336
10.	Resumen de la evaluación de las tareas de la actividad de Instrucción individual	336

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

1.	Conclusiones.....	341
2.	Propuestas de mejora.....	361

	BIBLIOGRAFIA Y OTRAS FUENTES.....	365
--	-----------------------------------	-----

ABREVIATURAS

AAVV	Autores Varios
AGE	Administración General del Estado
AJEMA	Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
AMeLTAI	<i>Antinfortunistica, Medicina del Lavoro, Tutela Ambientale e Infrastrutture</i>
BOE	Boletín Oficial del Estado
BAE	Bases, Acuartelamientos y Establecimientos
BPMR	<i>Bureau de Prévention et Maîtrise de Risques</i>
CE	Constitución española de 1978
CEE	Comunidad Económica Europea
CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CESEDEN	Centro Superior de Estudios de la defensa nacional
CGC	Cuerpo de la Guardia Civil
CNI	Centro nacional de Inteligencia
COSHH	<i>Control of Substances Hazardous to Health</i>
DEF	Defensa
DIACU	Dirección de Acuartelamiento
DIDOM	Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales
DIRIN	Dirección de Infraestructura
DIVLOG	División de Logística
DM	Directiva Marco (Directiva 89/391/CEE)
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EBEP	Estatuto Básico del Empleado Público
EM	Estado Mayor
EME	Estado Mayor del Ejército
EPI	Equipo de Protección Individual
ET	Ejército de Tierra
FAS	Fuerzas Armadas
FLO	Fuerza Logística Operativa
FUTER	Fuerza Terrestre
FUSA	Fusil de Asalto
GEJEMA	General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
GEJEME	General Jefe de Estado Mayor del Ejército
HSCT	<i>Hygiène Sécurité Conditions Travail</i>
I/A	Instrucción y Adiestramiento
IGE	Inspección General del Ejército
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSHT	Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
INSST	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

INTA	Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”
INVIED	Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
ISFAS	Instituto Social de las Fuerzas Armadas
ITSS	Instituto de Trabajo y Seguridad Social
JAL	Jefatura de Apoyo Logístico
JEME	Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra
JEMAD	Jefe de Estado Mayor de la Defensa
JEPER	Jefatura de Personal
JUJEM	Junta de Jefes de Estado Mayor
LO	Ley Orgánica
LODN	Ley Orgánica 5/2005, de defensa nacional
LOJM	Ley Orgánica de Jurisdicción Militar
LPRL	Ley de Prevención de Riesgos Laborales
MADOC	Mando de Adiestramiento y Doctrina
MAPER	Mando de Personal
MINISDEF	Ministerio de Defensa
MOPS	Mando de Operaciones
NBQ	Nuclear, Biológico y Químico
NGPRL	Negociados de Prevención de Riesgos Laborales
NIOSH	<i>The National Institute for Occupational Safety and Health</i>
NOP	Norma Operativa
NPRL	Negociado de Prevención de Riesgos Laborales de los Mandos
NTP	Nota Técnica de Prevención
OGSHT	Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
OHS	<i>Occupational Health and Safety</i>
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPRL	Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de las Unidades, Centros y Organismos
OSHAS	<i>Occupational Health and Safety Assessment Series</i>
OTAN	Organización de Tratado del Atlántico Norte
PIA	<i>Publication Interarmées</i>
PAP	Plan Anual de Preparación
PCI	<i>Protection Contre l’incendie</i>
PGIA	Plan General de Instrucción y Adiestramiento
PGPP	Plan General de Preparación
PGPRLET	Plan General de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra
PMET	Publicación Militar del Ejército de Tierra
PRL	Prevención de Riesgos Laborales
RD	Real Decreto
RDCEM	Real Decreto Centros y Establecimientos Militares

RDPRLGC	Real Decreto 179/2005, de Prevención Riesgos Labores de la Guardia Civil
RDPRLFAS	Real Decreto 1755/2007, de Prevención Riesgos Labores de las Fuerzas Armadas
REBA	<i>Rapid Entire Body Assessment</i>
ROE	Reglas de enfrentamiento
RSP	Reglamento de los Servicios de Prevención
SCPRLET	Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra
SECPAR	Sección de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Armada
SEPRE	Sección de Prevención del Ejército del Aire
SEPREFLOT	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Flota
SEPREJAL	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Jefatura de Apoyo Logístico
SIAE	Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
SID	Servicio de Infraestructuras de la Defensa (Francia)
SIMADE	Sistema de Mando y Dirección del Ejército.
SIPLA	Sistema de Planeamiento
SPRLEA	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército del Aire
SEPREPER	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Jefatura de Personal
SEPRESER	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Jefatura de los Servicios Generales
SEGOP	Seguridad Operativa
SGPRL	Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
SGSSTE	<i>Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do Exército</i>
SID	Servicios de Infraestructura de la Defensa (Francia)
SM	Su Majestad
SP	Servicio de Prevención
SPR	<i>Section de la Prévention Routière</i>
SRT	<i>Section des Risques Technologiques</i>
SST	Seguridad y Salud en el Trabajo
STANAG	Acuerdo de Normalización (<i>Standardization Agreement</i>)
STJCE	Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia Tribunal Supremo
SVPRL	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
STJUE	Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TCCE	Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TME	Trastornos Musculoesqueléticos
UCO	Unidades, Centros y Organismos
UCoCeV	<i>Ufficio di Coordinamento Centrale de la Vigilanza</i>
UCoSeVA	<i>Unità di Coordinamento della Vigilanza d'Area</i>
UCSVPR	Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
UE	Unión Europea
UME	Unidad Militar de Emergencias

GRÁFICOS

Gráfico 1	Organigrama Ministerio de Defensa
Gráfico 2	Estructura orgánica FAS
Gráfico 3	Estructura operativa FAS
Gráfico 4	Organización del Ejército en relación con la PRL
Gráfico 5	Organigrama gestión PRL Ministerio de Defensa
Gráfico 6	Organigrama estructura UCSVPRL Ministerio de Defensa
Gráfico 7	Organigrama estructura SVPRL del Ejército de Tierra
Gráfico 8	Diagrama árbol de causas
Gráfico 9	Esquema general del SIMADE
Gráfico 10	Procedimiento de evaluación de riesgos
Gráfico 11	Métodos de transporte de heridos, bombero y cinturón
Gráfico 12	Métodos de transporte de heridos, recogida de apoyo, en brazos y transporte a caballo.
Gráfico 13	Resultados COSHH. «RHL-1. Exposición a agentes químicos (310)»
Gráfico 14	Resultados COSHH. «RHL-1. Exposición a agentes químicos (310)»
Gráfico 15	Resultados COSHH. «RHL-2. Exposición a agentes químicos (310)»
Gráfico 16	Resultados aplicación manipulación manual de cargas. «RE-2. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 17	Resultados EPR. «RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410)»
Gráfico 18	Resultados EPR. «RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410)»
Gráfico 19	Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 20	Resultados calculadora Manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 21	Resultados aplicación manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 22	Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 23	Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)»
Gráfico 24	Hasty Harness ® y DRAGON®

TABLAS

Tabla 1	Prepuesto Inicial del Ministerio de Defensa, periodo 1978-1999
Tabla 2	Prepuesto Inicial del Ministerio de Defensa, periodo 2000-2019
Tabla 3	Efectivos del personal civil y militar del Ministerio de Defensa
Tabla 4	Comparativa personal militar FAS, FFCCSE y SSEE
Tabla 5	Estadística de accidentes en el Ejército de Tierra, por tipo de accidentes
Tabla 6	Bajas de personal militar en cumplimiento de las misiones
Tabla 7	Categorías de las actividades de I/A
Tabla 8	Clasificación de los riesgos
Tabla 9	Detalle de la frecuencia de los distintos pasos
Tabla 10	Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Orden Cerrado
Tabla 11	Análisis de los riesgos de higiene en la tarea de Orden Cerrado
Tabla 12	Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de Orden Cerrado
Tabla 13	Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de armamento individual
Tabla 14	Análisis de los riesgos de higiene laboral en la tarea de armamento individual
Tabla 15	Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de tiro individual
Tabla 16	Análisis de los riesgos de higiene laboral en la tarea de tiro individual
Tabla 17	Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de instrucción táctica individual
Tabla 18	Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de instrucción táctica individual
Tabla 19	Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de primeros auxilios
Tabla 20	Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de primeros auxilios
Tabla 21	Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Orden Cerrado
Tabla 22	Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Armamento individual
Tabla 23	Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de prácticas de tiro individual
Tabla 24	Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de instrucción táctica individual
Tabla 25	Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de primeros auxilios y transporte de herido
Tabla 26	Medición de niveles pico de exposición al ruido
Tabla 27	Medición de niveles pico de exposición al ruido
Tabla 28	Resumen atenuación del nivel Lpico
Tabla 29	Resumen de riesgos laborales

RESUMEN

La reciente implantación de la normativa de prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas españolas despierta un interés cuyo estudio se considera necesario. Ello es así, porque se ha producido un gran avance en materia de seguridad y salud laboral para el personal militar que hasta el momento no existía, pero su eficacia se ve limitada al excluirse del ámbito de aplicación de la normativa preventiva vigente las actividades de Instrucción, Adiestramiento y Operativas. Así pues, estas actividades no se regirán por las previsiones contenidas en la legislación preventiva y tampoco por su sistema de gestión. Su carácter restrictivo permite que el personal militar quede al margen de la regulación común preventiva cuando realice estas actividades. Sin embargo, las inconcreciones en la regulación de los procedimientos preventivos, denominados normas propias de seguridad y de las tareas en las que se dividen las actividades de Instrucción y Adiestramiento, supeditadas al cumplimiento de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas distintas del resto de actividades comunes, impiden la aplicación de los principios de la acción preventiva dimanados de la legislación preventiva. El simple hecho de una interpretación o definición particular de la cadena de mando, puede integrar tareas de actividades comunes en las actividades excluidas de forma arbitraria y, por ende, incluirlas en sus planes generales de Instrucción y Adiestramiento, apartándolas del beneficio de evaluación de riesgos alguna, por regirse por sus normas propias de seguridad y, por consiguiente, dejándolas al margen de todo provecho que pudiera proporcionarle la propia normativa preventiva.

El Ejército de Tierra, componente de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, implementó, en cumplimiento de la normativa preventiva, un sistema de gestión preventiva, que afecta únicamente a las actividades comunes, a través de un conjunto de normas, basadas en la propia legislación preventiva y en su desarrollo normativo. Lo que las convierten, *de iure*, en vinculantes y de obligado cumplimiento. Para las actividades excluidas, reguló su seguridad mediante unas orientaciones, actualmente derogadas y que no han sido sustituidas, que como tales pretendieron servir de guía, *de facto*, para garantizarla. La exclusión citada de las actividades de Instrucción y Adiestramiento; los vacíos en las normas propias de seguridad, ya que por ejemplo no contemplan evaluación alguna de los riesgos; su negativa, por imperativo legal, a la aplicación de los mismos principios preventivos que las actividades comunes, han motivado el interés de este estudio, centrado en este ejército.

Para ello hemos entendido que era necesario el inicio de este estudio con la descripción de las características particulares de la Administración militar, su estructura, organización y miembros civiles y militares que la componen, así como de aquellas que las diferencian y a su vez las acercan a otras Administraciones públicas. De esta forma, se obtiene una familiarización con las singularidades de este departamento ministerial, que permite conocer, - qué es y quién la compone -, y, en relación con la investigación, cómo su subordinación a la legislación preventiva le ha obligado a realizar las oportunas modificaciones internas. Sucesivamente, se ha abordado el análisis comparativo de los aspectos diferenciales que existen sobre la interpretación del ámbito de aplicación de la

Directiva Marco sobre la seguridad y salud de los trabajadores en tres países de la UE, y el desarrollo de la normativa de prevención de riesgos laborales que afecta al personal militar. Ello permite analizar desde una visión de conjunto, el tratamiento que ha recibido el personal militar en estos Estados, en relación a la seguridad y salud en el trabajo.

El enfoque de este trabajo, basado en el estudio de la ejecución de las actividades de Instrucción y Adiestramiento en el seno del Ejército de Tierra, persigue su integración en los procedimientos preventivos marcados para las actividades comunes. Por consiguiente, una vez adecuadas idóneamente, si se utilizan los mismos principios que para las actividades comunes, probablemente se proporcionaría un aumento de la eficacia y operatividad de la Unidades, sin que ello afecte a la misión encomendada. Y se conseguirá la eliminación y disminución de los riesgos que afecten a la seguridad y salud de este personal militar, en el desarrollo de las tareas comprendidas en las actividades de Instrucción y Adiestramiento, aumentando la operatividad de sus miembros y, por ende, las de las Unidades en las que están integrados.

Los resultados quedan abiertos a nuevas líneas de investigación futuras, que quizás despierten nuevas inquietudes que sirvan para completar las normas específicas, dentro del marco preventivo de la seguridad y salud, tanto en el propio Ejército de Tierra como en el resto de los que constituyen las Fuerzas Armadas españolas.

ABSTRACT

The recent implementation of occupational health and safety regulations (OHS) in the Spanish Armed Forces arouses an interest which study is considered necessary. This is so because of the breakthrough in health and safety matters for military personnel, that to date has not existed, its effectiveness to have been to be limited because of the exclusion of Training and Operations business from the scope of the current regulations. Therefore these provisions contained in the preventive legislation of the OSH legislation of its system of management. Its restrictive nature permits military personnel to be excluded from the ordinary OHS regulations when carrying out these activities. However, the vagueness in the regulations of OHS procedures- named security rules- of the tasks in which Training activities are divided, dependent on the compliance with the missions entrusted to the Armed Forces, different from the rest of common activities, prevent the application of the principles of preventive action emanating from the OHS legislation. The simple fact of a personal interpretation or definition of the chain of command, will be able to arbitrarily integrate tasks regarding common activities into the excluded ones and, therefore, including them in the overall Training plans, becoming separated from the benefits of any risk assessment, being governed by their own safety rules and, subsequently, leaving them out of any advantage that could be provided by the OHS regulations.

The Army, as a part of the Armed Forces structure, implemented an OHS management system in compliance with the OHS regulations, affecting only ordinary activities, through a set of rules based on its own OHS legislation and developed normative. Which makes them legally binding and mandatory. For the

excluded activities, safety was regulated through some guidelines, currently revoked but not replaced, which intended to serve as a de facto guideline to warrant it. The aforementioned exclusion of Training activities; the gaps in the own security rules since, for example, it does not contemplate any kind of risk evaluation; its refusal, by legal imperative, to the application of the same OHS principles as regular activities, have motivated the interest of this study, focused on the army.

For this we understood that it was necessary to begin this study describing the peculiar characteristics of the military Administration, its structure, organization and both civil and military members forming it and those other that both differentiate and approximate to other Public Administrations. Thus we find a familiarization -with the singularities of a ministerial department-, the awareness and culture of defense is increased, which allows to know it what is and who composes it, and regarding the investigation, how the subordination to the OHS legislation, has forced the convenient internal modifications. Successively, the comparative analysis of the differential aspects on the interpretation of the scope of the European Union Framework Directive on worker's safety and health has been addressed and the development of regulations for the occupational safety and health affecting the military personnel, in three EU countries, which allows us to analyze, from a joint overview, the treatment that military personnel has received in these Member States, regarding safety and health at the workplace.

The focus of this work, based on the study of the execution of Training activities within the Army, aims to integrate these activities into those OHS

procedures designed for regular activities. Therefore -once suitable adapted- if the same principles are used for regular activities, it would probably provide an increase of efficiency and operability of the Military Units without affecting the mission entrusted. Furthermore, the elimination and reduction of risks affecting the safety and health of this military personnel while development of the tasks belonging to Training activities are achieved, will increase the effectiveness of its members and, therefore, of the Units of which they are part of.

The results are open to further new paths of research -that may be generated by this study- and may arouse new concerns useful to conclude the specific rules, within the preventive framework of occupational safety and health, both in the Army itself, as in the rest of those constituting the Spanish Armed Forces.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación versa sobre el estudio de la posible integración de las actividades de Instrucción y Adiestramiento (I/A), en el sistema de gestión preventiva del Ejército de Tierra. Se pretende con ella un beneficio de la seguridad y salud de sus miembros durante la ejecución de estas actividades, que redunde en un aumento de la operatividad de sus Unidades.

La estructura de la investigación ha conllevado que se inicie, procurando localizar indicios que permitan encontrar información relevante, desde los orígenes del ordenamiento jurídico español sobre el término seguridad y salud en las Fuerzas Armadas (FAS), hasta la publicación e implantación de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales (PRL) que les afecta.

El seguimiento de una adecuada sistemática para este estudio, exige realizar una búsqueda en las fuentes del Derecho. Por un lado, las fuentes primarias, donde se recopiló toda la normativa significativa, relacionada con la investigación. Y por otro, las fuentes secundarias, que abarcan las escasas publicaciones científicas que versan sobre el tema de la investigación. Ello ha permitido descubrir la precariedad de los existentes antecedentes, y el estado actual del tema propuesto.

Así, se ha considerado oportuno para entender cómo el ordenamiento jurídico actual en materia de seguridad y salud en el trabajo ha afectado al ámbito castrense, realizar una búsqueda en los antecedentes normativos desde épocas

anteriores hasta la actualidad, que nos permita observar su evolución y afectación al personal militar. Para ello, se han marcado distintas reformas normativas destacadas por su importancia en la PRL.

La primera referencia existente es una norma originadora de la legislación social española, que marcó un punto de inflexión en la sociedad española del siglo XIX. Considerada por muchos como la primera Ley española de accidentes de trabajo y, norma iniciadora de la legislación social, fue aprobada el 25 de junio de 1873 y conocida como la «Ley Benot», debido a su promotor, a la sazón del ministro de Fomento Eduardo Benot Rodríguez, sobre el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos¹. Esta Ley reflejaba una carencia de medidas de seguridad y salud laboral en la sociedad que requirió de la intervención positiva del Estado para su solución. A su vez, amparaba la protección de los menores que trabajaban en condiciones deplorables y abusivas en la industria del momento. Obviamente, lejos quedaba, la preocupación gubernativa y legislativa sobre la prevención de los accidentes profesionales del personal castrense².

Las siguientes reformas normativas consideradas, se produjeron en distintas etapas y regímenes políticos del siglo XX. El primero, la Ley de 30 de

-
1. Autores, como Martínez Peñas y Fulladosa, consideran esta Ley iniciadora de la seguridad y salud de los trabajadores en España. Vid. MARTÍNEZ PEÑAS, L., «Los inicios de la legislación laboral española: la Ley Benot», *Revista Aequitas: Estudios sobre historia, derecho e instituciones*, núm. 1, 2011, pág. 32. Vid. FULLADOSA, M., «¿Sabes cuál es el origen de la prevención en España?», Blog *Prevenblog*, 1 de marzo de 2015. [Consulta: 30/09/2018], «<http://prevenblog.com/sabes-cual-es-el-origen-de-la-prevencion-en-espana/>». Sin embargo, Molina Benito revela sus carencias, «*la falta de órganos administrativos eficaces en la inspección y exigencia de lo incluido en la Ley, hizo que su nivel de aplicación fuera, lamentablemente, mínimo o nulo; pero al menos, permitió diez años más tarde, en 1883, el que se realizara una encuesta con carácter nacional, sobre las condiciones de trabajo en las industrias españolas, que dio luz a actuaciones posteriores por parte de gobiernos más sensibilizados en atajar el problema de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales*». Vid. MOLINA BENITO, J.A., *Historia de la seguridad en el trabajo en España*. Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo Dirección General de Trabajo y prevención de riesgos laborales, Valladolid, 2006, págs. 107-108.
 2. Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., «Los militares y la política en los siglos XIX-XX», *hispanoteca.eu*. [Consulta 28/01/2018], «<http://hispanoteca.eu/Landeskunde-Spanien/Historia/Los%20militares%20y%20la%20pol%C3%ADtica%20en%20los%20siglos%20XIX-XX.htm>».

enero de 1900, de accidentes de trabajo, que supuso un *«detonante grandioso del sistema español de seguridad social»*³. En la misma se estableció la responsabilidad del empresario (patrono); se definió el accidente de trabajo; se fijaron las prestaciones económicas; se facilitó la asistencia sanitaria y por último se ofreció la posibilidad de aseguramiento. De las cinco partes, se consideran de mención en relación con la investigación, dos. Por un lado, la relativa a la responsabilidad del empresario, respecto a lo que Alonso Olea señaló el principio *volenti non fit iniura*, *«quien acepta trabajar para otro, acepta los riesgos inherentes al trabajo»*⁴. De lo que se deriva la no aceptación de responsabilidad alguna por parte de la Administración pública como empleadora, y menos aún de los riesgos del personal militar. Por otro, el concepto de accidente de trabajo, definido como *«toda lesión corporal que el operario sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena»*⁵. Según Alonso Olea, *«la clave de este precepto centenario, en su literalidad, es que el accidente lo es de trabajo, tenga en el trabajo su causa o sea simplemente el trabajo su ocasión»*⁶. Este precepto si se aplica al personal militar no se consideró inherente a su profesión⁷.

Durante la dictadura del General Primo de Rivera (1921-1930), se publicó la Ley reformada, relativa a los Accidentes del Trabajo, de 10 de enero de 1922,

-
3. Vid. GARCÍA MURCIA, J., Y CASTRO ARGUELLES, MA., «Preliminar: un nuevo centenario para la seguridad social», GARCÍA MURCIA, J., Y CASTRO ARGUELLES, MA (Dirs.), en *La previsión social en España. Del Instituto Nacional de Previsión al Instituto Nacional de Seguridad Social*, Proyecto 2007/65 FIPROS, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2007, pág. 5.
 4. Vid. ALONSO OLEA, M., «El origen de la Seguridad Social en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900», *Papeles y memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, núm. 8, pág. 3.
 5. Art. 1, Ley de 30 de enero de 1900, de accidentes de trabajo.
 6. ALONSO OLEA, op. cit., pág. 4.
 7. No obstante, la ocasionalidad es origen actualmente de interpretaciones ambiguas que, provocan equívocos y controversias, en otros ordenamientos europeos, *«en el alemán y en el austríaco, por ejemplo, al exigir la doctrina tradicional que el trabajo haya sido "condición esencial" (wesentlichen Bedingung) del accidente, y no simplemente su ocasión o concausa, teoría de la "adecuación" (Addquanztheorie); o en el italiano al hablar de la norma de infortunio por causa violenta in occasione di lavoro, e interpretarse estrictamente la ocasión como "evento del riesgo inherente a un acto intrínseco de la actividad"»*, loc. cit., pág. 5.

que sustituyó a la anterior Ley de 1900⁸. Esta derogación, supuso la introducción de dos novedades importantes. Por un lado, la inclusión de la imprudencia profesional, considerada como un riesgo más, e imputable a la responsabilidad del empresario, dado que en la anterior normativa se desprendía que la carga del riesgo debía ser asumida por el trabajador. Y por otro, la creación del «*Fondo de Garantía de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo*», en la que la Administración pública se instituía como garante⁹. Esta reforma, tampoco reflejaba referencia alguna al personal militar, a pesar de tener como Jefe del Gobierno a un militar. Y ello porque el *status* del militar, en los albores del siglo XX, no admitía comparación con trabajo alguno¹⁰.

A partir de la finalización de la Guerra Civil Española (1936-1939), y con el comienzo de la dictadura franquista (1939-1975), se publicaron distintas normas que constituyeron el acervo jurídico en seguridad y salud laboral de aquel período. El Gobierno aprobó en 1949 un Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo que estuvo vigente hasta 1971¹¹. El mismo fue derogado por la Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo, manifestándose en ella aspectos tan importantes como la realización de

8. Según Molina, «*La Primera Guerra Mundial había supuesto para España, un importante desarrollo de la industria en general y la textil en particular, dada su no entrada en el conflicto bélico. Pero ello supuso, además del consiguiente incremento de la producción, una espectacular subida del número de accidentes de trabajo, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de aprobar la nueva Ley de Accidentes de Trabajo, en enero de 1922, incorporando como novedad, la obligatoriedad del descanso nocturno de la mujer trabajadora*». MOLINA, op.cit., pág. 123.

9. Vid. MERCADER UGUINA, JR., *Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales*, La Ley, Madrid, 2007, pág. 40.

10. Según Caballero Domínguez, la situación político-militar en 1921 se agravó por el desastre de Annual, en la que perdieron la vida muchos militares y un número importante cayó prisionero. El rescate de los prisioneros «*vino a sembrar nuevas divisiones en la sociedad española: el dinero del rescate, según no pocos militares, se traduciría en armas para los rifeños con las que combatir, más acremente todavía, al ejército español, mientras que para la mayoría de los españoles la necesidad del pago del rescate era incuestionable: mera cuestión de humanidad*». No era el momento oportuno para cuestionar los riesgos de la profesión militar y menos para su prevención. Vid. CABALLERO DOMÍNGUEZ, M., «*La cuestión marroquí y su corolario de Annual como causa y consecuencia de la crisis del sistema restauracionista*», *Revista Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, núm. 17, 1997, pág. 241.

11. Este Reglamento destacó entre sus predecesores por ser el primero que se aprobó en España sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo con carácter propiamente técnico, ya que los anteriores fueron aprobados regulando el accidente de trabajo y, a diferencia de los anteriores, este contemplaba y regulaba la forma de prevenirlo aplicando técnicas específicas. Vid. Orden Ministerial de 31 de enero de 1940

funciones para el ejercicio de *«una acción tuitiva más eficaz en defensa de la vida, integridad, salud y bienestar de los trabajadores»*¹². Sin embargo, Ruiz Resa considera que esta relevancia del trabajador, no es más que un *«holismo de tipo corporativista, organicista y armónico que rechaza la consideración del sujeto titular de los derechos como individuo opuesto a la sociedad y el Estado»*¹³. La consolidación institucional e ideológica del régimen en materia preventiva, se fundamentó en sus inicios en un interés nacional supeditado a criterios políticos y económicos, en detrimento de la legislación social en materia de seguridad e higiene en el trabajo. El Estado reguló las condiciones de los trabajadores y adoptó medidas preventivas en base a sus intereses de reconstrucción de una nación de la posguerra, más que a la preocupación por las condiciones del trabajo¹⁴. En correspondencia con los principios de la dictadura, las condiciones laborales del personal militar no se contemplaban, ya que el adoctrinamiento y formación de los futuros oficiales, que integrarían la cúpula militar, en opinión de Cardona Escanero, se basaba en la veneración al jefe del Estado, las virtudes militares y la ideología del régimen¹⁵. Como se observa, todo está muy alejado de la filosofía proteccionista laboral de la Ordenanza.

En el último cuarto del siglo XX, se pueden destacar dos grandes reformas normativas. La primera, la publicación de la Constitución Española de 1978 (CE), que en su art. 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e

12. Texto de la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE, de 16 de marzo de 1971, núm. 64.

13. Vid. RUIZ RESA, J.D., *Los derechos de los trabajadores en el franquismo*, Dykinson, Madrid, 2015, pág. 406.

14. Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, G., «Seguridad e higiene en el trabajo durante el primer franquismo: estructuras jurídicas e institucionales», *Revista Jurídica de los Derechos Sociales*, núm. 1, pág.141.

15. Vid. CARDONA ESCANERO, G., *El gigante descalzo*, Aguilar, Madrid, 2003, pág. s/n.

higiene en el trabajo. Y la segunda, la publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, prevención de riesgos laborales (LPRL), que en la dicción literal de su art. 3.1, en su ámbito de aplicación subjetivo, hacía clara alusión a su afectación limitada en la Administración pública, al personal civil. Por ende, parece excluirse al personal militar, miembros de las miembros de las FAS y al Cuerpo de la Guardia Civil (CGC), de toda afectación cuya denominación aglutina a los y, obviamente, a todas las actividades ya fueran comunes o no, que realizan en el ejercicio de su profesión¹⁶. Pérez Guerrero señala el cambio cualitativo que supuso la publicación de la LPRL en el tratamiento innovador de la PRL al introducir el concepto de la «cultura de prevención», según la autora esta Ley *«Dejó atrás el espíritu reparador del daño que conservaban las normas sobre prevención de riesgos laborales, para sustituirlo por un concepto preventivo que se acomodaba más y mejor a las exigencias de la normativa comunitaria»*¹⁷.

Llegados al siglo XXI, se produce la reforma normativa más importante que afecta al personal militar. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de enero de 2006 (STJUE 12/01/2006), establece que España ha incumplido las obligaciones para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, por haber excluido, injustificadamente, a una parte de ellos: el personal militar. Consecuentemente, se produce un gran cambio en el ámbito de la seguridad y salud laboral en las FAS. La correlativa modificación de la LPRL permitió sustituir el término «personal civil» por «personal», permitiendo

16. Vid. RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., «La prevención de riesgos laborales en las fuerzas armadas a la luz del derecho de la Unión Europea», *Revista Trabajo y Derecho*, núm. 25, pág. 63.

17. Vid. PÉREZ GUERRERO, M.L., «La aplicación del acuerdo nacional de negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales», *Revista digital de salud y seguridad en el trabajo*, núm. 1, 2009, pág. 3.

la inclusión del personal militar¹⁸. Y a continuación ello obligó a aprobar una regulación propia y específica, con la finalidad de garantizar una efectiva protección en materia de riesgos laborales al personal militar, publicándose el RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, (RDPRLCGC) y el RD 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa, (RDPRLFAS). En ellos se establecía que la regla general es la aplicación de la normativa sobre PRL a todo el personal, sean civiles o militares, y en consecuencia a todas sus actividades, excluyendo únicamente aquellas que realizara el personal militar perteneciente a las FAS cuyas peculiaridades lo impidieran. Entre ellas se encuentran las actividades de I/A y Operativas, siendo éstas excluidas de los principios preventivos derivados de la LPRL y pasando a regirse por sus propias normas de seguridad.

Una vez expuesta la evolución del ordenamiento jurídico en materia preventiva relacionado con el estudio, se ha procedido a recopilar todo el material publicado que guarde relación con el planteamiento del problema. El primer criterio de búsqueda ha sido la localización de libros, artículos de revistas jurídicas, tesis y otros trabajos de investigación que versaran sobre objetivos e hipótesis similares a la investigación¹⁹. Sin embargo, los resultados en la

18. La STJUE provocó la modificación inmediata de la LPRL, a través de la publicación de una disposición adicional, inserta en una Ley que poca relación guardaba al efecto. Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

19. Se utilizaron herramientas fundamentales que, por su prestigio y reconocimiento a nivel científico proporcionaran resultados fiables. Tales como, la Base de datos TESEO y el Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación (RODIN), de la Universidad de Cádiz. Se emplearon descriptores: «militar»; «prevención riesgos laborales»; «seguridad y salud»; «Instrucción» y «Adiestramiento», en lengua española e inglesa, y se conjugaron con operadores booleanos.

búsqueda, determinaron la escasez y carencias de trabajos de investigación parecidos o similares al propuesto.

Finalizado el proceso de búsqueda, se evidencia de los resultados obtenidos de las fuentes primarias, durante el reciente periodo comprendido entre los siglos XIX y XX que, en la normativa publicada sobre la seguridad y salud en el trabajo en España, no se ha hecho alusión alguna al personal militar y que en el siglo XXI, como consecuencia de la STJUE de 12 de enero de 2006, se ha adaptado la actual legislación preventiva a este personal, pero excluyéndose las actividades de I/A y Operativas. Esta exclusión suscita el estudio de su posible incorporación en la normativa común preventiva, como tema novedoso que pretende estudiar y analizar la posibilidad de integrar las tareas en las que se subdividen las actividades de I/A, o al menos algunas de ellas, en el sistema de gestión de PRL del Ejército de Tierra. Asimismo, se constata que, una vez revisadas las fuentes secundarias publicadas sobre el tema propuesto, salvo error u omisión, no hay publicaciones que traten, en profundidad, el tema de investigación específico que se pretende realizar, por lo que procede conocer el estado actual de la materia.

El Ejército de Tierra, demoró más de cuatro años la implantación de la aplicación del RDPRLFAS a todo el personal excluido de la normativa común preventiva. A consecuencia, por un lado, del desarrollo previo normativo que tuvo que acometer el Ministerio de Defensa, y, por otro, de la dificultad de definir las actividades no estrictamente militares en materia de seguridad y salud laboral²⁰.

20. En la Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa.

Este difícil proceso llegó a su culminación con la publicación de la Directiva 02/11, del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), de PRL en el Ejército de Tierra. En la misma se han establecido los criterios, el desarrollo y los procedimientos de implantación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra (SVPRLET), los cometidos de los órganos que participan en él y las relaciones que se establecen entre ellos.

Sin embargo, a pesar de que dicha Directiva es de aplicación al conjunto del Ejército de Tierra en todas las actividades que se realizan en las Unidades, Centros y Organismos (UCO), cuando se alojan en las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAE), se excluyeron, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 6.4 del RDPRLFAS, las actividades de I/A y Operativas.

Ello conduce a afirmar que actualmente no existe un procedimiento similar al regulado por esta Directiva, que de igual manera recoja todas las normas propias de seguridad de las actividades excluidas. Y por ello, pretende sostenerse que algunas tareas en las que se dividen estas actividades, podrían beneficiarse de los mismos principios preventivos destinados a evitar y/o disminuir los riesgos laborales de las actividades comunes, a los que el personal militar se ve sometido en el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Asimismo, se echa en falta una mayor coordinación y estructuración, bajo la necesaria jerarquía de las disposiciones reglamentarias del Ministerio de Defensa, ya que ello permitiría ofrecer a la estructura de los SVPRLET la cobertura de la clasificación, revisión y modificación de las tareas en las que se

dividen las actividades de I/A y Operativas; así como acreditar aquellas tareas, que sin ocasionar menoscabo en el cumplimiento de la misión encomendada, fueran incluidas en las competencias de este Servicio.

La exclusión completa de determinadas actividades militares del ámbito de aplicación de la normativa sobre PRL, podría no ser ajustada a Derecho y, caso de demostrarse, constituiría una potencial discriminación. En esta hipótesis es posible que, a dos militares, que realizan el mismo trabajo en la misma Unidad militar y que cuentan con la misma normativa preventiva, les sean aplicables unas reglas distintas. Así, mientras que uno cumple con los cometidos asignados en el ámbito de las actividades comunes y, por lo tanto, cuenta con unas disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar donde desarrolla la actividad, amparado por una normativa de rango superior²¹; el otro, en el desempeño de las actividades excluidas, presta sus servicios sólo con sujeción a las normas propias de seguridad (si existen) o al criterio que sus superiores puedan acordar. Para González Ortega, «Los funcionarios militares se regirán en este tema por normas internas; lo que obviamente no quiere decir que no haya algún tipo de previsión de seguridad, pero eso lo determinará la propia Administración Militar»²².

Tradicionalmente, el Ejército de Tierra ha adoptado normas internas de seguridad e higiene en el trabajo, de obligado cumplimiento, encaminadas a

21. El RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso, para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.

22. Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, núm. 72, 2003, pág. 17.

salvaguardar la integridad personal de los militares. En ocasiones estas normas, no homogéneas y particulares, han dado lugar a interpretaciones que interfieren en la finalidad de la gestión preventiva, dado que, al quedar integradas en su propio plan de prevención de riesgos laborales, quedan excluidas de la normativa reguladora común preventiva²³. Y a consecuencia de ello, se niega una información vital sobre todos aquellos accidentes e incidentes acaecidos durante la ejecución de las actividades excluidas, cuya investigación desde el punto de vista preventivo, de haberse seguido con el mismo procedimiento para los accidentes laborales en las actividades comunes, hubiera proporcionado resultados conducentes a evitar que el suceso no volviera a producirse²⁴.

El Ejército de Tierra, afectado por la cultura preventiva y por lo reconocido sobre los derechos y deberes de sus miembros, entre ellos su seguridad y salud en el ejercicio de sus actividades, considera al recurso humano, como el elemento más importante en su seno²⁵. Por ello, se ha estimado necesario realizar un estudio centrado en las actividades de I/A que realiza el personal militar, desde la perspectiva de la PRL aplicada para las actividades comunes. Dado que la exclusión en la legislación actual, que rige en el sistema de gestión de seguridad y salud en las Unidades del Ejército de Tierra, las relega a regirse por sus normas propias de seguridad. Este estudio, podría permitir observar la

23. Al respecto, el punto 4 del art. 27, de la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, guarda especial atención a los riesgos específicos que se derivan de las funciones del personal de las FAS, impulsando una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, pero su desarrollo es mínimo, haciéndose una breve alusión en el art. 6.4 del RDPRLFAS, en el que tan solo señala que, estos riesgos específicos, aglutinados en las actividades de I/A y Operativas, derivados del cumplimiento de la misión asignada a este personal quedan sujetos a sus normas propias de seguridad y operación, cuyo conjunto constituirá el plan de prevención de riesgos laborales, y a pesar de su nombre no guarda relación directa con los principios preventivos enunciados en la LPRL, al exponer en su art. 3.2, que no será de aplicación en aquellas particularidades que lo impidan.

24. El art. 16.3 LPRL, obliga al empresario a realizar una investigación, a fin de detectar las causas de aquellos hechos que hayan producido un daño para la salud de los trabajadores.

25. Vid. RIMBAU GILABERT, E., «Liderazgo y prevención de riesgos laborales». *Revista Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo*, 2013, nº 75, pág. 12. La cultura preventiva se define, «como el conjunto de creencias, normas, actitudes, roles y prácticas sociales y técnicas que se ocupan de minimizar la exposición de los trabajadores, directivos, clientes y público a situaciones consideradas peligrosas o nocivas».

repercusión de la aplicación de la LPRL en las actividades de I/A excluidas, así como analizar e interpretar las causas teóricas y significados profesionales que motivan esta escisión.

Las particularidades del ejercicio de la profesión militar exigen una regulación propia. Por este motivo, y dado que, en el cumplimiento de la misión pueden producirse riesgos que no pueden ser anulados, se ha considerado necesario pormenorizar las tareas en las que se dividen las actividades de I/A, cuya posible inclusión en el sistema de gestión de la PRL del Ejército de Tierra permitiría un beneficio para aumentar la seguridad y salud del personal militar.

La gestión del riesgo está basada en los procedimientos establecidos, así como en la lógica y el sentido común para decidir de forma coherente sobre factores humanos, materiales y ambientales, antes, durante y después de cada tarea contenida en las actividades excluidas. La integración de algunas de ellas en el sistema de gestión preventiva común del Ejército, permitiría maximizar las posibilidades operativas, a la vez que minimizaría los riesgos de los recursos (personal y material).

En este sentido, las Orientaciones del Ejército de Tierra, sobre la *Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza*, ya derogadas, afirmaban que: «*Las Unidades que integran la gestión de riesgo en sus actividades, disminuyen sensiblemente sus porcentajes de siniestralidad y conservan una mayor eficacia de combate y trabajo*»²⁶. Motivo por el cual se

26. Las Orientaciones son unas publicaciones militares del Ejército de Tierra (PMET), que se elaboran al objeto de servir como directrices no coercitivas a los Cuadros de Mando para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades. La Orientación

considera que esta investigación puede ayudar a formular, integrar y probar que los riesgos generados, al menos en algunas de las tareas de las actividades de I/A del Ejército Tierra, puedan ser incluidas en su gestión preventiva, abordándose los principios de la actividad preventiva de la misma forma que en el resto de las actividades.

La experiencia en este campo del doctorando, oficial militar de carrera, obtenida como Jefe del SVPRL y Técnico Superior en PRL de un área geográfica de responsabilidad del Ejército de Tierra, y como profesor en los Centros de Formación de Tropa, ha sido determinante en la elección del tema objeto del estudio²⁷. La práctica preventiva en el Ejército de Tierra permite recapacitar sobre las necesidades preventivas concretas en el complejo ámbito castrense, para corroborar la conveniencia de realizar un estudio que determine la posibilidad, conveniencia y oportunidad de la inclusión de aquellas tareas contenidas en las actividades citadas o al menos algunas de ellas en la gestión preventiva regulada por la normativa preventiva común.

En consecuencia, la formulación del problema se ha concretado en mostrar la necesidad de incluir algunas de las tareas comprendidas en las actividades de I/A, que no afecten a las particularidades específicas del Ejército de Tierra, regidas por sus normas propias de seguridad, en su sistema de gestión

a la que se hace referencia en el texto fue redactada por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC), OR7-020. *Orientaciones. Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza*, aprobada por Resolución 552/09019/02, de fecha 20 de junio de 2002 (BOD núm. 120). En ella se trata el concepto de protección de la Fuerza y aspectos relacionados con la seguridad. Derogada quince años más tarde de su publicación, por Resolución 513/09200/17, de fecha 9 de junio de 2017 (BOD núm. 125). Vid. Ejército de Tierra, España, MADOC. OR7-020. *Orientaciones. Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza*, Ministerio de Defensa, Granada, 2002., pág. 2-1.

27. Vid. Ejército de Tierra, España, IGE. *Instrucción Técnica 20/11. Plan General de prevención de riesgos laborales del Ejército de Tierra*. Ejército de Tierra, Barcelona, 2011, anexo II.

de PRL para las actividades comunes ²⁸. Así se pretende lograr un beneficio que redunde en el aumento de la seguridad y salud de todos sus miembros. Y a su vez, abrir la posibilidad de constituir el punto de partida de otras investigaciones que ayuden a construir sólidos pilares que solucionen la problemática formulada.

Por ende, el objetivo general cuya pretensión ha marcado esta investigación, ha sido elaborar un estudio exhaustivo y minucioso sobre la exclusión de la normativa de PRL de las actividades de I/A, que realiza en el desempeño de sus funciones el personal militar perteneciente al Ejército de Tierra. El estudio pretenderá ayudar a definir aquellas tareas que pueden integrarse en su sistema de gestión preventiva. Como objetivos específicos derivados del general, se han propuesto:

- La descripción del origen y desarrollo de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa y sus modificaciones en relación a la legislación preventiva.
- El estudio de la caracterización laboral de los funcionarios públicos, civiles y militares en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa y su diferente afectación por la normativa de PRL.
- El análisis de Derecho Comparado, basado en las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos europeos, sobre la interpretación del alcance del ámbito de la Directiva 89/391/CEE, del

28. Vid. TAMAYO, M., *El proceso de investigación científica*. Limusa, México, 1993, pág.169. «Reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos».

Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DM) y su posterior implementación en la PRL de sus Ejércitos.

- El esclarecimiento y definición de conceptos indeterminados que puedan limitar o impedir la integración de las actividades de I/A, tales como «*salvaguarda de la defensa nacional*», «*cumplimiento de la misión*», entre otros.
- La adaptación de la metodología general de evaluación de riesgos, entre los utilizados en la gestión preventiva derivada de la LPRL, que permita sistematizar una propuesta metodológica que diferencie aquellas tareas incluidas en las actividades de I/A, en las que una vez identificado el riesgo pueda realizarse una evaluación más allá de sus normas propias de seguridad.
- La proposición de pautas, que sirvan de aplicación al Ejército de Tierra para tomar decisiones de mejora en la seguridad y salud de sus miembros, durante la ejecución de las actividades excluidas, bajo el auspicio de los principios de la actividad preventiva.

Finalmente, en lo que se refiere a la estructura de la investigación, la misma se ha dividido en cinco partes. En la primera, introductoria, se exponen los antecedentes y los objetivos de la investigación. La segunda parte, abarca los capítulos I y II, en los que se muestra la evolución del Ministerio de Defensa, así como la adaptación que ha sufrido su estructura orgánica a consecuencia del

RDPRLFAS. E igualmente se estudia la normativa de desarrollo de la legislación en materia de PRL que afecta al personal civil y militar perteneciente a las Administraciones públicas, y en concreto a la Administración militar. La finalidad de estos capítulos ha sido conocer la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, distinta a las de otros departamentos ministeriales por la idiosincrasia castrense de su personal, y las modificaciones que se han realizado en virtud de la legislación preventiva. Los mismos, permitirán familiarizar al lector con el ámbito castrense, para facilitar la comprensión sobre los aspectos diferenciados de la normativa de PRL común.

La aproximación comparativa a los aspectos diferenciales, sobre la interpretación del ámbito de aplicación de la DM y el desarrollo de la normativa de prevención de riesgos laborales, en tres países pertenecientes a la UE, es el objetivo marcado para la tercera parte. El capítulo III se ha dedicado al análisis de la normativa prevencionista en nuestro país, que al igual que el resto de países de la Unión se ha visto contagiado de la homogenización europea. Ello ha permitido observar cómo se ha transpuesto la DM y los aspectos diferenciales con la legislación de desarrollo española, con objeto de comprobar en otros países si existen, o no, peculiaridades similares a las existentes en España.

La cuarta parte, la ocupa el capítulo IV, en el que se desarrolla el eje fundamental sobre el que rota la investigación propuesta. El mismo, se inicia con la exposición de la necesidad de investigación de los accidentes laborales acaecidos durante las actividades de I/A, para continuar con el estudio de los principios limitadores que impiden la integración de las actividades excluidas en

la gestión preventiva. Ello permite adentrarse en el análisis de los aspectos diferenciales entre las actividades de I/A y las Operativas. Este estudio sirve de base para elaborar la propuesta de su integración, fundamentada en la evaluación de una selección de tareas iniciales de la actividad de Instrucción, lo que permite el estudio pormenorizado de las fuentes de riesgo o condiciones en cada tarea, para así detectar las causas o factores de riesgos que pueden conducir a un peligro. Con ello se pretende la búsqueda de mejoras que aumenten la operatividad de las Unidades del Ejército de Tierra, que les permitan el cumplimiento de las misiones encomendadas y, por ende, optimizar la seguridad y salud en el trabajo de sus miembros.

La quinta y última parte, capítulo V, se destina a las conclusiones. A partir de todas las consideraciones expuestas, se ha descrito el cumplimiento del objetivo general y de los específicos en base a las respuestas obtenidas en cada uno de ellos, y se han formulado propuestas de mejora que puedan solucionar el problema planteado, justificando si los objetivos son coadyuvantes o no.

CAPÍTULO I

LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SU ADAPTACIÓN A LA PRL

1. El Ministerio de Defensa

En la actualidad el Ministerio de Defensa se estructura en las FAS²⁹, la Secretaría de Estado de Defensa, la Secretaría General de Política de Defensa y la Subsecretaría de Defensa³⁰. Al profundizar en las funciones de este Ministerio, órgano superior de la Administración General del Estado (AGE), se observa que la dirección y coordinación de los SVPRL del departamento ministerial se le asigna a la Subsecretaría de Defensa. Para ello, cuenta con la Unidad de Coordinación de los SVPRL (UCSVPRL), encargada de la determinación de criterios y directrices que deban aplicarse por las distintas estructuras que conforman el SVPRL de la Defensa³¹.

Ante una primera lectura, al lector, que carezca de nociones sobre la idiosincrasia de la Administración militar, quizás pueda parecer lógica esta estructura preventiva y que se deba a las obligaciones que en materia de seguridad y salud laboral el departamento ministerial debe cumplir. Incluso puede parecer que desde su creación, siempre ha existido una estructura relacionada estrechamente con la PRL para el personal civil y militar de las FAS. Por ello, para aclarar estas cuestiones se ha considerado conveniente el

29. Las FAS, están constituidas, según art. 8 de la CE, por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

30. Adscrito al departamento se encuentra el Centro Nacional de Inteligencia, con dependencia directa del ministro de Defensa. Vid. Art. 1 del Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

31. El art. 24 del RDPRLFAS y punto 4ª, de la ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa.

conocimiento previo de la estructura del departamento ministerial, y cómo se encuentra integrado su personal, ya que ello proporcionará una información crucial, en aras del discernimiento de la implementación de la PRL en su estructura orgánica.

Por lo tanto, el objeto de este capítulo es describir las características particulares de la Administración militar, su estructura y organización. Aquellas notas que la diferencian o la acercan a otras Administraciones públicas, desde su origen a la actualidad. De esta forma, se obtiene una familiarización con las singularidades de este departamento ministerial y un acercamiento al concepto de cultura de defensa, que permite conocer qué es y quiénes son sus miembros y, en relación con la investigación, cómo su subordinación a la legislación preventiva le ha obligado a realizar las oportunas modificaciones internas.

1.1.La reestructuración gubernamental. La creación del Ministerio de Defensa

Durante el periodo de transición política iniciado en España en un momento posterior a la dictadura franquista, se introdujeron una serie de cambios en la estructura gubernamental³². Según Mariño Lamamie de Clairac, durante este periodo *«las primeras modificaciones en el ámbito militar afectaron fundamentalmente a los niveles más altos de la institución, con la finalidad de subordinar el poder militar al político y de transformar su función de orden público hacia la disuasión y la seguridad exterior»*³³. Promovidos estos cambios en el

32. Este periodo denominado «transición», fue definido como, *«el proyecto político de cambio de un sistema autoritario de casi cuarenta años a una democracia plena, un régimen de libertades y un Estado autonómico, su articulación y su desarrollo durante el trienio 1976 a 1978, [...]»* Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, A., «Consideraciones sobre la transición española», *Revista Cuentayrazón del pensamiento actual*, núm. 41, 1988, pág. 1. [Consulta: 27/07/2016], [«http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/041/Num041_002.pdf»](http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/041/Num041_002.pdf).

33. Vid. MARIÑO LAMAMIE DE CLAIRAC, M., *Soldados españoles en Afganistán: tendencias culturales en una misión de paz*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2015, Murcia, pág. 54.

RDL 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, el mismo, en su art. 26, disponía y otorgaba a la voluntad del presidente del Gobierno, la potestad para la supresión, refundición o reestructuración de los departamentos ministeriales, y de los Organismos y Servicios de la Administración del Estado e Institucional.

La situación política del país en ese momento, preconizaba un cambio radical en la estructura gubernamental y por consiguiente en la Administración militar. Su justificación dimanaba del deseo de integrar los departamentos ministeriales militares existentes durante el régimen franquista³⁴, pues estaban caracterizados por un alto grado de autonomía en su dirección, además de su escasa participación en las actividades relacionadas con la defensa nacional. Dado que la principal función de los ejércitos, hasta entonces, fue la salvaguardia del orden público. Ello provocó que el despliegue militar en la nación, se orientara más a asuntos del interior, que a las amenazas exteriores. Esta estructura acentuó la distancia entre la sociedad militar y la sociedad civil global del momento³⁵.

El objetivo marcado, suponía ir más allá de un simple proceso aglutinador de departamentos. La reforma ministerial eliminaría funciones y características anacrónicas, asumidas por los ejércitos en el régimen político anterior³⁶. Lo que permitió concebir un verdadero Ministerio de Defensa, que quedó incorporado a

34. Los departamentos ministeriales militares tenían su base en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que, junto con las Fuerzas de Orden Público, constituían las Fuerzas Armadas, que a su vez se integraban en la Junta de defensa nacional, definidas en los arts. 37 y 38 de la LOE, número 1/1967, de 10 de enero. BOE, núm. 9, de 11 de enero de 1967, págs. 466 a 477.

35. Vid. FRIEYRO DE LARA, B., «La transición en el ejército español de 1975: del modelo institucional al plural», QUIROSA-CHEYROUZE, R. (Coord.), en *Los inicios del proceso de democratización*, Congreso Internacional Historia de la Transición en España, Almería, 2005, pág. 3.

36. Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., *El rey y otros militares. Los militares en el cambio de Régimen Político en España (1969 – 1982)*, Trotta, Madrid, 1998, pág. 44.

la Administración del Estado como el órgano encargado de la ordenación y coordinación de la política general del Gobierno, en cuanto se refiere a la defensa nacional y la ejecución de la política militar correspondiente.

Este hecho es constatado a partir de la publicación del RD 1558/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados Órganos de la Administración Central del Estado, en el que se destaca la creación del Ministerio de Defensa, exigido por la necesidad de modernización de las FAS. Reforma y modernización militar constituirán, por lo tanto, un objetivo prioritario en este proceso.

Mientras que la reforma se dirigió a conciliar la función militar con las nuevas instituciones democráticas, la modernización definió los cambios importantes del Ministerio de Defensa en su estructura orgánica, plantillas de personal, recursos materiales y futuros programas de adquisiciones³⁷. Y así, en su art. 2, lo define como Órgano de la Administración Central del Estado, encargado de la ordenación y coordinación de la política general del Gobierno en cuanto se refiere a la defensa nacional. Así como de la ejecución de la política militar correspondiente, quedando integrados en el mismo todos los organismos y unidades de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire. Este hecho supuso la supresión de los departamentos vigentes en el régimen político anterior, atribuyendo a la figura del titular del Ministerio de Defensa la responsabilidad de capacitar a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire para el cumplimiento de sus misiones.

37. Vid. AGÜERO, F., *Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada*, Alianza editorial, Madrid, 1995, pág. 32.

El proceso innovador acometido por esta normativa que creaba el Ministerio de Defensa, supuso la derogación de los antiguos Ministerios militares, integrando a los ejércitos en un solo departamento ministerial y señalándole unas funciones y responsabilidades que se extienden del campo estrictamente militar, al más amplio de la defensa nacional.

1.2. Delimitación del campo militar de actuación de los ejércitos y su diferenciación del campo político-administrativo

Posteriormente y transcurrido el plazo marcado en el citado RD 1558/1977, de 4 de julio, para la creación de la correspondiente organización del Ministerio³⁸, se publicó el RD 2723/1977, de 2 de noviembre, por el que se estructura orgánica y funcionalmente el Ministerio de Defensa. En él se adoptaba la primera estructura orgánica del Ministerio de Defensa, con un marcado carácter unificador y funcional. Se realizaron una serie de cambios, de los que se destacan, entre otros, la figura del Rey como Mando Supremo de los ejércitos y la delimitación del campo de actuación militar de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, diferenciándolos del campo político-administrativo.

Para Gómez Martínez, *«En el ámbito específico militar, con la reorganización de la Administración y la creación de un Ministerio de Defensa que refundió los tres anteriores, afloraron un cúmulo de problemas antiguos y modernos para cuyo afrontamiento se estudiaron varias posibilidades: empezar por el vértice hasta llegar abajo; la contraria, es decir, comenzar por la base, y*

38. En el punto uno de la disposición final segunda del RD 1558/1997, de 4 de julio, se regulaba un plazo de cuatro meses para que el Gobierno, por Decreto acordado en Consejo de Ministros, aprobara las disposiciones reguladoras en las estructuras orgánicas de cada departamento, acordando la creación, modificación, fusión y supresión de cuantas unidades, dependencias y organismos se consideraran convenientes, así como su definitiva adscripción a los departamentos ministeriales que correspondieran.

*una tercera intermedia que consistía en ir dictando disposiciones parciales que posteriormente se integrarían en un conjunto y que fue la seguida»*³⁹. Los altos mandos y organismos de la cadena de mando militar, constituidos por los jefes de Estado Mayor de cada ejército, por sus cuarteles generales respectivos y por los órganos de la Administración militar, dependientes de los mismos, quedarían integrados en el terreno militar⁴⁰. Y el campo político-administrativo, sería asumido por las autoridades y organismos que apoyan de forma principal al ámbito militar, proporcionándoles los recursos que precisaran los ejércitos para cumplir su misión. De esta forma quedaba institucionalizada la diferencia entre los dos campos de actuación, ya que, desde la legislación predecesora, se recomendaba su dualidad y que ambos quedaran subordinados y supeditados al poder civil⁴¹.

La estructura del nuevo departamento ministerial comprendía⁴²:

- Los órganos de mando y dirección de la cadena militar de cada uno de los tres Ejércitos.
- Los órganos políticos-administrativos que por su naturaleza no se encuentren encuadrados en la cadena de mando militar.
- La Dirección General de la Guardia Civil.

39. Vid. GÓMEZ MARTÍNEZ, R., *El estatuto jurídico-constitucional del militar de carrera en España. Antecedentes, fundamento y situación actual*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2008, pág. 53.

40. Así se dispuso en el art. 6 del RD 2723/1977, de 2 de noviembre.

41. Puell de la Villa destaca en su obra la importancia que sobre esta dualidad realizaba el Teniente General Gutiérrez Mellado en una Directiva enviada a la Subsecretaría de Defensa y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), el 17 de septiembre: «La creación del Ministerio de Defensa culmina un proceso en el que, a lo largo de nueve meses, se han elaborado una serie de disposiciones de carácter orgánico y funcional, de forma ordenada, y persiguiendo, por un lado, una definición y delimitación de lo que constituye el campo de actuación militar por cadena de mando, para diferenciarlo del campo político-administrativo, aunque naturalmente ambos supeditados al poder político, y de otro lado, al tratar de lograr, en cada uno de los campos, una mayor cohesión y coordinación, así como una integración de mando en la cúspide». Vid. PUELL DE LA VILLA, F., *Gutiérrez Mellado: Un militar del siglo XX (1912-1995)*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, pág. 209.

42. La estructura se definía en el art. 3 del RD 2723/1977, de 2 de noviembre.

- Los órganos de información y de relación dependientes directamente del ministro.
- Los altos órganos consultivos y de asesoramiento del ministro.

La estructura orgánica del nuevo Ministerio, suponía la unificación de los tres ejércitos en un único Ministerio y la desaparición de los distintos organismos adscritos a los antiguos Ministerios militares y Alto Estado Mayor. Así como la transferencia y absorción de funciones y cometidos, pasando los anteriormente adscritos a los departamentos militares y Alto Estado mayor a los nuevos órganos creados por este real decreto. Este proceso se consolidó posteriormente con la adscripción administrativa de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) al departamento ministerial⁴³. Y por la organización del campo político-administrativo, en dos grandes órganos bajo la autoridad inmediata del Ministro de Defensa: la Subsecretaría de Política de Defensa y la Subsecretaría para los recursos económicos y la política de armamento y material⁴⁴.

Pero el aspecto más importante de este período, fue marcado por la desaparición de la autonomía militar, de todos los aspectos sociales y políticos de los que gozaba el personal militar durante el régimen franquista. El intervencionismo militar, según Gómez Martínez, este que hasta entonces «*se mantiene en segundo plano y actúa cuando considera que el rumbo político no marcha como debiera, a juicio de los líderes intervencionistas*», desaparece⁴⁵. En palabras de Payne, «*El Ejército ha estado justamente, o casi, en el meollo de*

43. El RD 836/1978, por el que se desarrolla el RDL 11/1977, de 8 de febrero, en su texto, matizaba la dependencia política y administrativa de la JUJEM.

44. El RD 252/1982, de 12 de febrero, determinó la reestructuración de determinados órganos del Ministerio de Defensa.

45. GÓMEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 54.

*los problemas públicos españoles desde el comienzo del régimen liberal*⁴⁶. Esto supone un importante cambio militar, político y social, quedando la nueva estructura supeditada y subordinada al poder político civil⁴⁷. Aspecto cuya consolidación definitiva tardaría seis años en visualizarse⁴⁸. De esta forma, la normativa adaptada alcanzaba el objetivo de ser el instrumento transformador del pensamiento, composición y actuación de las FAS⁴⁹.

En este sentido, la creación del Ministerio de Defensa no supuso solamente la supresión de los antiguos y anacrónicos Ministerios del Ejército, Armada y del Ejército del Aire, sino que su reunificación sirvió para homologar la Administración militar española, con las existentes en la Unión Europea (UE)⁵⁰. Para Mariño Lamamie de Clairac, *«En menos de tres décadas se pasó de un ejército hipertrofiado y anquilosado, centrado en su propia supervivencia y encargado del control interno, a un ejército profesional, reducido, altamente especializado y avanzado, que realizaba misiones de paz por todo el mundo, al nivel de los demás ejércitos occidentales»*⁵¹. Su desarrollo, pretendió conseguir

46. Vid. PAYNE, S.G., «El Ejército, la República y el estallido de la Guerra Civil», RAYMOND CARR, (Ed.), en *Estudios sobre la República y la guerra civil española*, Biblioteca de la Historia núm. 23, Ediciones SARPE, Madrid, 1985, pág. 131.

47. Puell de la Villa puntualiza al respecto: *«Varias son las peculiaridades que, a este respecto, quedaban patentes en el citado real decreto: - Coexistencia de dos ámbitos de actuación diferenciados. Uno militar, encabezado por la JUJEM, integrado por los jefes de Estado Mayor, sus cuarteles generales y las fuerzas a sus órdenes, y regulado por su propia normativa, tanto en lo operativo como en ciertas competencias administrativas. Y otro político, materializado en la estructura ministerial, cuya única función era proporcionar recursos a los ejércitos. - Segregación de la actividad política y la militar. Según este esquema, el ministro de Defensa carecía de papel y competencias directas sobre la fuerza, y la estructura ministerial debía limitarse a financiarla y a dotarla de medios humanos y materiales. - Autonomía de las Fuerzas Armadas respecto a la AGE, quedando inmersas en una especie de limbo de difícil encaje legal y ajeno al Gobierno, situación que éste optó por mantener, de forma que la política militar quedase totalmente en manos de los militares.»*. Vid. PUELL DE LA VILLA, F., *La transición militar*, Documento de Trabajo número 6, Fundación Transición Española, Madrid, 2012, pág. 29.

48. Vid. SERRA, N., *La transición militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas*. Debate, Barcelona, 2008, pág. 140.

49. Vid. SEPÚLVEDA MUÑOZ, I., «Tres décadas de historia. Ciclos de transformación», SEPÚLVEDA, I., Y VACA, R. (Edits.), en *II Congreso de historia de la Defensa. El Ministerio de Defensa creación, desarrollo y consolidación*, Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, Madrid, 2008, pág. 75.

50. Al respecto se citan las reestructuraciones que realizaron los ministerios de Defensa británico y francés. El ministerio de Defensa del Reino Unido (*Ministry of Defence UK*), creado en 1964, supuso un proceso de reunificación de cinco departamentos de Estado: el Almirantazgo, el Ministerio de la Guerra, el Ministerio del Aire, el Ministerio de Aviación y el propio Ministerio del Aire, que se llevó a cabo desde el año 1946 hasta su culminación en 1964. [Consulta: 02/02/2018], «https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/49053/history_of_mod.pdf». El origen del ministerio de Defensa de Francia (*Ministère de la Défense*), parte desde la Segunda Guerra Mundial, adoptando el nombre de Ministerio de Defensa nacional, convirtiéndose a partir de 1974, en el Ministerio de Defensa actual. [Consulta: 02/02/2018], «<https://www.defense.gouv.fr/>».

51. MARIÑO LAMAMIE DE CLAIRAC, op. cit., págs. 54 a 55.

unos objetivos ambiciosos⁵², que abarcaban una serie de aspectos de mejora, que afectaban a su política presupuestaria y financiera, a fin de garantizar la modernización exigida por las organizaciones internacionales a las que pertenece España⁵³.

La modernización del Ministerio de Defensa fue y es considerada, como el instrumento imprescindible para dotar a unas FAS de los recursos humanos y materiales que les permitan alcanzar el nivel óptimo de operatividad y seguridad. Requiere de un considerable esfuerzo por parte de la economía estatal, debiendo justificarse un equilibrio entre inversión y necesidades. Y además, este proceso ha de ser dinámico y permanente, para conseguir su adaptación a las circunstancias y necesidades derivadas de la situación estratégica.

No obstante, desde la creación del Ministerio de Defensa la evolución del presupuesto, según Valiño Castro, «se resume en una insuficiencia permanente»⁵⁴. Las necesidades del gasto, surgen de la profesionalización del

52. Según Fajardo Terribas, la reforma que supuso la creación del Ministerio de Defensa pretendía los siguientes objetivos: *«Una política presupuestaria y financiera que garantizara la modernización material de las FAS y que ayudara al militar a obtener la satisfacción profesional que ello conllevaba. Una equiparación conceptual y retributiva con el resto del funcionariado. Un sistema de asistencias que supusiera para la familia militar alcanzar las cotas logradas por el incipiente Estado de Bienestar. Una mejora generalizada de las condiciones de las Clases Pasivas Militares, así como el aumento de éstas, fundamentalmente a través del reconocimiento de los derechos de aquellos militares que lucharon durante la Guerra Civil en el bando republicano. La creación de una estructura y organigrama de las FAS moderna y eficaz, bajo la subordinación del poder civil. La configuración de las funciones y misiones de las FAS en un marco democrático. Una adecuación de las plantillas a las verdaderas necesidades del Ejército español. Una política de ascensos donde se primará la formación y el perfeccionamiento militar. La separación funcional de los militares de las actividades de seguridad interior, y/o la delimitación de la jurisprudencia militar para ámbitos específicamente castrenses»*. Vid. FAJARDO TERRIBAS, R., *El ejército en la transición hacia la democracia (1975-1982)*. Acercamiento a la política reformista de Gutiérrez Mellado, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2000, pág. 496.

53. España, en su objetivo de contribuir a la defensa de la paz y seguridad internacional, pertenece a las siguientes organizaciones internacionales: Naciones Unidas, actualmente participa en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), participa en el Documento de Viena y el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE) y el Tratado de Cielos Abiertos (TCA). Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las FAS españolas, mantienen su presencia en las operaciones Ocean Shield, Resolute Support, Active Endeavour, Policía Aérea en el Báltico y defensa antiaérea de Turquía. Unión Europea, actualmente participa en EUFOR Althea, Atalanta, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, Apoyo a Malí, EUTM Malí, y Apoyo a RCA. También es miembro integrante de EUROCUEPPO, EUROMARFOR, Fuerza Anfibia hispano-italiana, Iniciativa Anfibia Europea Iniciativa 5+5, Fuerza de Gendarmería Europea, Mando de Transporte Aéreo Europeo. [Consulta: 28/02/2018], «<http://www.defensa.gob.es/defensa/seguridaddefensa/>».

54. Vid. VALIÑO CASTRO, A., «Evolución reciente del presupuesto y el gasto español en Defensa», *Cuadernos de información económica*, núm. 248, 2015, pág. 58.

personal de tropa y marinería, de la modernización de su armamento, equipo y material, y de la participación en misiones internacionales con la finalidad del mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. El gran impulso que supuso la reforma ministerial, no repercutió de igual forma en el apoyo económico del Estado. Las razones que explican el déficit financiero, se deben fundamentalmente a dos causas. Por un lado, el coste del proceso de transición del régimen franquista a la democracia, y por otro las crisis económicas posteriores, que provocaron las medidas de austeridad del gasto público⁵⁵. En la siguiente tabla, se muestra la evolución del presupuesto del Ministerio de Defensa hasta la actualidad.

*Tabla 1. Presupuesto inicial del Ministerio de Defensa. Fuente período (1978-1999)
Pérez Muínelo, F.*

Año	Presupuesto (millones €)	Aumento (millones €)	Disminución (millones €)
1978	1.317		
1979	1.427	110	
1980	1.725	297	
1981	2.028	304	
1982	2.460	432	
1983	2.875	415	
1984	3.323	448	
1985	3.718	395	
1986	3.792	74	
1987	4.232	439	
1988	4.580	348	
1989	4.916	336	
1990	5.231	316	
1991	5.159		-73
1992	4.723		-435
1993	4.554		-169
1994	4.841	287	
1995	5.208	367	
1996	5.229	21	
1997	5.229		0
1998	5.394	165	
1999	5.578	185	

55. VALIÑO CASTRO, loc.cit., pág. 52.

Tabla 2. Presupuesto inicial del Ministerio de Defensa. Fuente período (2000-2019) elaboración propia a partir de los presupuestos generales del Estado.

Año	Presupuesto (millones €)	Aumento (millones €)	Disminución (millones €)
2000	5.588	10	
2001	6.063	475	
2002	6.323	259	
2003	6.480	157	
2004	6.747	267	
2005	6.991	244	
2006	7.417	426	
2007	8.053	636	
2008	8.494	441	
2009	8.256		-238
2010	7.695		-561
2011	7.156		-538
2012	6.316		-840
2013	5.937		-379
2014	5.746		-191
2015	5.768	22	
2016	5.788	20	
2017	7.639	1.851	
2018	8.456	817	
2019	8.537	81	

A pesar del desfase financiero, desde la creación del Ministerio de Defensa se observa un incremento del 32% en el presupuesto para el año 2017. Las razones aludidas para este considerable aumento son⁵⁶:

- Atender a las necesidades de seguridad y defensa nacional.
- Permitir un mejor adiestramiento de los hombres y mujeres que integran las FAS.
- Mejorar el material.

56. El incremento del gasto en defensa fue defendido por el Secretario de Estado de Defensa, ante la Cámara Alta de las Cortes Generales, en la que adujo las razones, de este considerable aumento. Vid. Cortes Generales. Diario de Sesiones Senado. XII Legislatura. Comisión de presupuestos, sesión celebrada el 8 de junio de 2017, núm. 133, pág. 7.

Todo lo anterior, tiene como objetivo llevar a buen fin el mandato constitucional que señala el art. 8 de la CE sobre las FAS. No obstante, algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios en la sesión celebrada el 8 de junio de 2017 en el Senado, expusieron sus dudas al respecto, al considerar que el incremento del presupuesto tendría una escasa repercusión en el bienestar y en la modernización de las FAS, en la seguridad nacional, y en las condiciones de vida y trabajo de los miembros de la FAS.

En la tabla se puede apreciar que en el año 2017 es la primera vez, desde la creación de departamento ministerial, que se produce un incremento de tal magnitud. El motivo principal que lleva a ello, es amortizar la pérdida del gasto público en Defensa producido en años anteriores. La actual Ministra de Defensa, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, abogó por asegurar una financiación del departamento *«suficiente, previsible, estable y acorde con las necesidades, que proporcione seguridad y continuidad a los compromisos del departamento»*. El objetivo perseguido camina en función de alcanzar una estabilidad presupuestaria, que permita y facilite el cumplimiento de las misiones encomendadas a las FAS, ya sean nacionales o internacionales⁵⁷. Por lo tanto, el gasto en defensa gira en función de factores económicos, militares y geoestratégicos ⁵⁸, y de su combinación surgen los argumentos que esgrimen los Estados para incrementar o disminuir su gasto en defensa⁵⁹. El presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2019 crece,

57. Vid. DEL VADO, D.F., «Margarita Robles expone su programa en el Congreso», *Revista Defensa*, núm. 352, págs. 11 a 12.

58. No obstante, Fonfría afirma que las necesidades sociales de los Estados, inclusive España, abarcan la mayor parte de sus presupuestos, en detrimento del gasto en defensa. Vid. FONFRÍA, A., *Proyecciones del gasto de defensa 2040*, Documento de investigación 0/2018, I.E.E.E., Ministerio de Defensa, Madrid, 2018, pág.3.

59. Vid. FONFRÍA, A. Y MARÍN, R., *Factores explicativos del gasto en defensa en los países de la OTAN*, I.E.E.E., Ministerio de Defensa, Madrid, 2012, pág.13.

aunque en menor medida que años anteriores, el grueso de la dotación son destinados a gastos de personal, más del 50%, con motivo de la creciente profesionalización de las FAS. También acapara una importante partida, aproximadamente un 30%, la modernización del armamento, material y equipo. Otro aspecto que afecta a la política presupuestaria del Ministerio es la reincorporación del Centro Nacional de Inteligencia que en gobiernos anteriores estaba en manos de la Vicepresidencia del Gobierno.

El objeto de este estudio, no es profundizar en un análisis económico, pero si mostrar el gran esfuerzo del Estado por mantener un departamento ministerial que responda a las necesidades impuestas por la defensa nacional. Con unas FAS modernas y bien adiestradas, que les permitan preservar la soberanía e independencia y proteger a los ciudadanos contra las diversas amenazas. El presupuesto tendrá repercusión en la seguridad y salud laboral del personal militar, que contribuirá en mayor medida a la operatividad de sus Unidades.

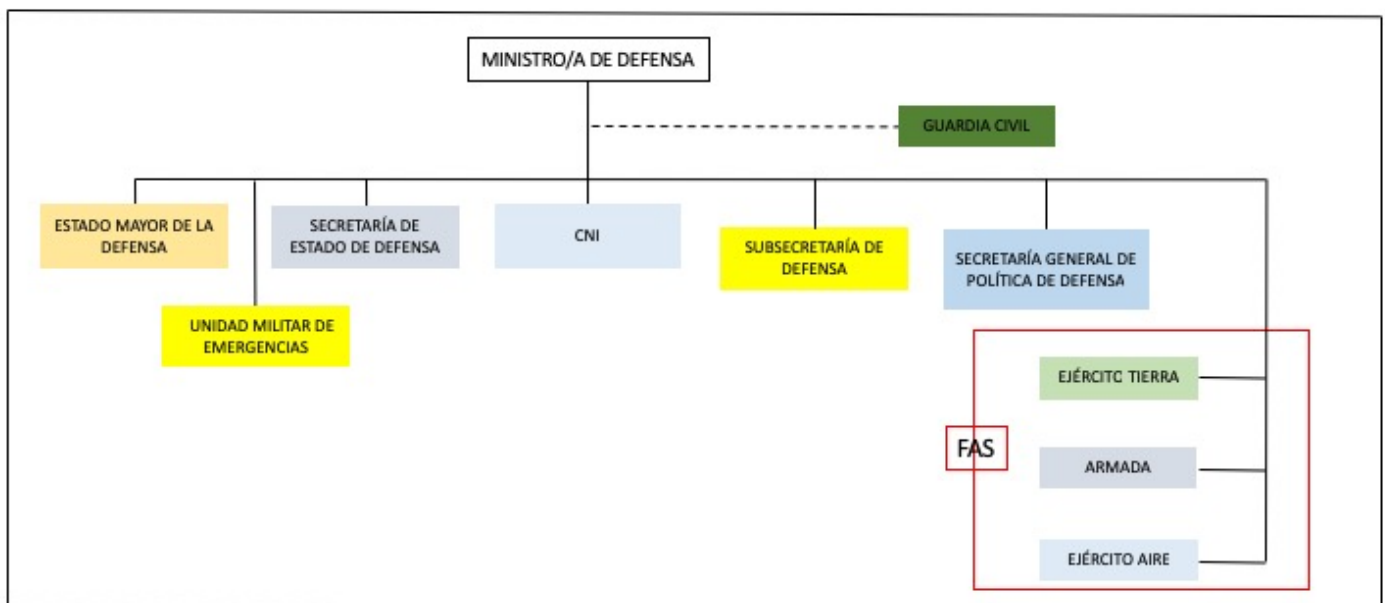
2. La estructura orgánica actual del Ministerio de Defensa

Como consecuencia de la moción de censura adoptada por el Congreso de los Diputados en el 2018, se publica el RD 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales⁶⁰. Si bien, el único cambio significativo se produce con la adscripción del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al Ministerio de Defensa,

60. Por RD 354/2018, de 1 de junio, se nombró al nuevo Presidente del Gobierno, como consecuencia de la adopción por el Congreso de los Diputados de la moción de censura votada en la sesión celebrada los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, de acuerdo con lo establecido en el apartado dos del art. ciento catorce de la norma constitucional.

que en las dos anteriores legislaturas estuvo encuadrado orgánicamente en el Ministerio de la Presidencia⁶¹. Seguidamente con la publicación del RD 1399/2018, de 2 de noviembre, se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, en el que además de destacar la principal novedad, la adscripción del CNI, se producen cambios significativos en la organización de la FAS, ya que la UME pasa a depender del titular del Ministerio de Defensa.

Gráfico 1. Organigrama Ministerio de Defensa. Elaboración propia. Fuente Ministerio de Defensa. «<http://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/organigrama-minisdef.pdf>».



Cadena de relación Orgánica: _____
 Cadena de relación Funcional:

2.1. La organización básica actual de las FAS

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (LODN) estableció en su art. 11, la organización de las FAS en dos estructuras: la orgánica y la operativa. Esta dualidad, conlleva distintas responsabilidades,

61. Vid. Portal web CNI. [Consulta 13/07/2018], «https://www.cni.es/es/preguntasfrecuentes/pregunta_006.html?pageIndex=6&faq=si&size=15»

que nunca pueden provocar un descenso en su eficacia y eficiencia. Su diseño está orientado a mejorar las capacidades y aptitudes de las FAS, para afrontar con éxito las amenazas y riesgos que pueden afectar a la defensa nacional y, por ende, a la seguridad nacional. Frías Sánchez, con gran acierto, afirma que *«las Fuerzas Armadas se configuran para ejecutar una doctrina determinada, que obliga a disponer de medios específicos, organizaciones capaces de ejecutarla, y personal adiestrado para hacerlo»*⁶². En la misma línea, Marino Lamamie de Clairac, expone que *«las Fuerzas Armadas españolas han experimentado una profunda transformación en las últimas décadas para adaptarse a la realidad democrática del país y las demandas de la comunidad internacional»*⁶³. Consecuentemente, la estructura de las FAS españolas obedece a una doctrina común dimanada de las misiones encomendadas en la LODN, y sus recursos humanos, armamento, material y equipo, se diseñan, seleccionan, instruyen y adiestran en función de la misma.

La estructura orgánica de las FAS está compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Su objeto responde a la preparación de la Fuerza, y a posibilitar la generación de la estructura operativa, se establece mediante criterios funcionales y de forma homogénea. A su vez, la organización de los ejércitos se basa en tres núcleos:

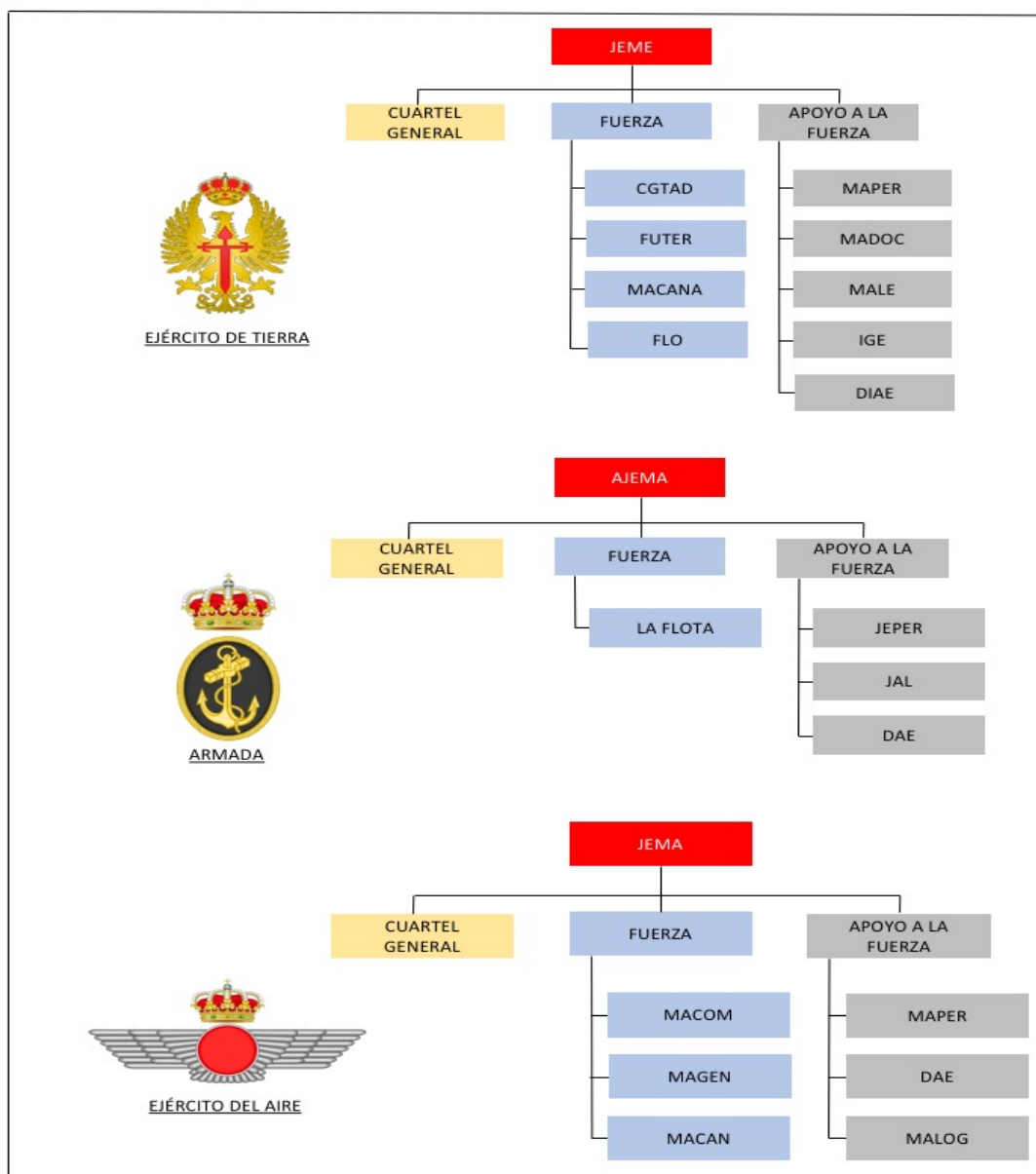
1. El Cuartel General, que encuadra los recursos humanos y materiales, que necesitan los Jefes de Estado Mayor para el ejercicio del mando de sus respectivos ejércitos.

62. Vid. FRÍAS SÁNCHEZ, C.J., «El sistema internacional y las Fuerzas Armadas en el horizonte 2050», I.E.E.E, Ministerio de Defensa, Madrid, núm. 106/2017, pág. 497.

63. MARINO LAMAMIE DE CLAIRAC, op. cit., pág. 58.

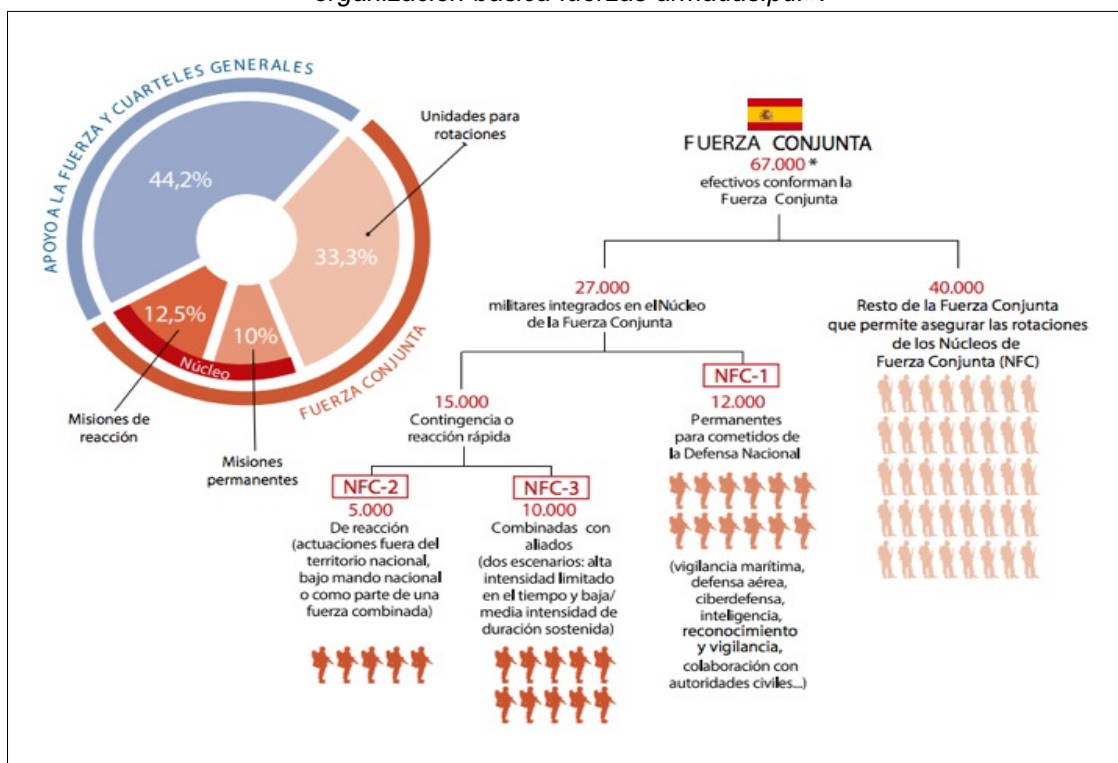
2. La Fuerza, conjunto de recursos humanos y materiales que se agrupan y organizan, con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones militares; y,
3. El Apoyo a la Fuerza, conjunto de órganos responsables de la dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los respectivos ejércitos.

Gráfico 2. Estructura orgánica FAS. Elaboración propia. Fuente EMAD
 «<http://www.emad.mde.es/Galerias/EMAD/novemad/multimedia/Documentos/150514-organizacion-basica-fuerzas-armadas.pdf>»



La estructura operativa se establece para el desarrollo de la acción conjunta combinada, empleando la fuerza en aquellas misiones que se le asignen. Se organiza con arreglo al principio de unidad de mando y a los criterios necesarios para conseguir la máxima capacidad operativa. La doctrina militar, atribuye esta competencia al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y establece el empleo de la fuerza, de conformidad con las normas que dictamine⁶⁴. Según Sepúlveda Muñoz, la creación de la figura del JEMAD se constituía como «principal colaborador del ministro de Defensa en los aspectos operativos de la política militar y dependiente del ministro tanto orgánicamente como el ejercicio de todas sus funciones»⁶⁵. El mando militar de cada ejército se ejerce, – bajo la autoridad y dependencia del ministro –, por los respectivos Jefes de Estado Mayor.

Gráfico 3. Estructura operativa FAS. Fuente EMAD
«<http://www.emad.mde.es/Galerías/EMAD/novemad/multimedia/Documentos/150514-organizacion-basica-fuerzas-armadas.pdf>».



64. Vid. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., «Nueva organización básica de las FAS», *Revista Española de Defensa*, núm. 311, 2014, pág. 18.

65. SEPÚLVEDA MUÑOZ., op.cit., pág. 84

No obstante, y mediante la publicación del RD 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las FAS, se han revisado las estructuras orgánicas y operativas, con la finalidad de abordar dos objetivos:

- Regular su organización, simplificando estructuras y adoptando una terminología común.
- Eliminar la dispersión normativa, mediante la derogación de aquellos reglamentos que, hasta la publicación de éste, rigieran esta materia.

De esta organización se desprende que las estructuras en las que se divide cada ejército tienen una doble dependencia. Por un lado, la estructura orgánica depende de cada uno de los Jefes de Estado Mayor de los respectivos Ejércitos. Y por otro, la estructura operativa queda al mando del JEMAD, lo que le permite la conducción estratégica de las operaciones militares. En relación con la investigación se observa que las actividades de I/A están íntimamente conectadas con la estructura orgánica de los ejércitos, subordinadas a sus respectivos Jefes de Estado Mayor.

2.2. La organización del Ejército de Tierra

Se considera necesario profundizar sobre la organización del Ejército de Tierra, a fin de conocer cómo se inserta la estructura de la gestión preventiva en su seno. Las normas de organización del Ejército, se rigen por la Instrucción 7/2016, de 27 de septiembre, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra⁶⁶. Como se ha indicado, bajo la autoridad del JEME, las Unidades se

66. La Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra, complementa a la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la organización básica de las FAS y permite que el JEME pueda desarrollar su propia organización, modificada por la Orden DEF/1362/2018, de 20 de diciembre,

encuadran en tres núcleos: el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. Garcés Bonet, explica que estos núcleos no son independientes y que gozan de una relación orgánica de mando, a través del Sistema de Mando y Dirección del Ejército, cuyo objeto es *«normalizar el funcionamiento del Ejército y dirigir la actuación de órganos de diferentes cadenas orgánicas que realizan funciones similares»*⁶⁷. A continuación, se desarrollan sus cometidos principales:

- El Cuartel General, encuadra los recursos humanos y materiales que necesita el JEME para el ejercicio del mando del Ejército. De los órganos que lo componen, se destaca el Estado Mayor del Ejército, por ser el principal órgano de apoyo. Es responsable de proporcionarle los elementos necesarios de juicio para fundamentar sus decisiones. En relación con la prevención de riesgos laborales, dentro de su estructura la misma es asumida por la División de Logística, excepto en lo relacionado con las actividades propias de la preparación y empleo de las Unidades, también denominadas de I/A, que se asignan a la División de Operaciones⁶⁸.
- La Fuerza es el conjunto de recursos humanos y materiales que se agrupan y organizan, con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones militares. Su personal militar ejecuta las

debido a la detección de ciertas disfunciones que se consideró necesario corregir, así como algunas mejoras que se deben acometer en el ámbito de la organización, para asegurar que el JEME cumple con sus responsabilidades con eficacia y eficiencia.

67. Vid. GARCÉS BONET, E., *La prevención de riesgos laborales en el Ejército de Tierra*, Bosch Editor, Barcelona, 2017, pág. 72.

68. Las actividades propias de la preparación y empleo de las Unidades, también denominadas de I/A, se le asignan a la División de Operaciones. Vid. Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra. «Sexto. *La División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. 1. La División de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento, coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las Unidades del Ejército de Tierra*».

actividades de I/A, en función de su misión principal: la preparación para el cumplimiento de las misiones que se le asignen. La Fuerza forma parte de los contingentes militares que se constituyen para la ejecución de operaciones en territorio nacional o extranjero.

- El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Ejército. Para la dirección, gestión, administración, coordinación y control en materias relacionadas con las infraestructuras y aquellas otras que se determinen relacionadas con la vida y funcionamiento de las Unidades, se le adscribe, de los distintos órganos en los que se articula, a la Inspección General del Ejército (IGE). En su estructura, se incardina a la Dirección de Acuartelamiento (DIACU), como responsable de la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos contemplados en la normativa correspondiente. Su personal militar y civil realiza las actividades, denominadas comunes, sujetas a la legislación preventiva.

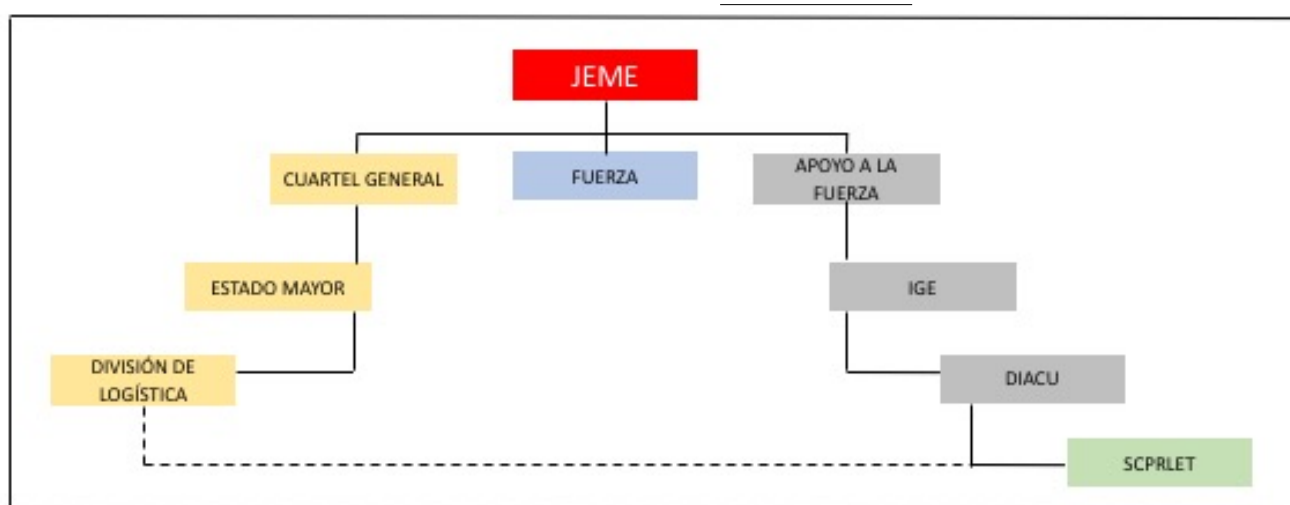
Estos tres núcleos generan entre ellos diferentes dependencias múltiples, Garcés Bonet expone la definición de las distintas relaciones⁶⁹:

- Relaciones de mando: las que las autoridades del Ejército de Tierra establecen con aquellas de las que dependen directamente o sean directamente subordinadas de ellas por la cadena orgánica.

69. GARCÉS BONET, op.cit., págs. 73 y 74.

- Relaciones funcionales: todas aquellas relaciones que las autoridades de los diversos sistemas del Ejército de Tierra, entre las que no hay una relación de mando, establecen tanto con aquellas de las que dependen directa y funcionalmente, como con las que de ellas dependen en esas mismas condiciones.
- Relaciones de coordinación: son todas aquellas que las autoridades del Ejército de Tierra establecen con aquellas otras con las que no tienen una relación de dependencia orgánica o funcional, a efectos de facilitar el funcionamiento de los órganos de ellas dependientes o el desarrollo de actividades que les afectan.

Gráfico 4. Organización del Ejército de Tierra en relación con la PRL. Fuente elaboración propia.



Cadena de relación de Mando: _____
 Cadena de relación Funcional:

En los tres núcleos citados, en los que se estructura el Ejército de Tierra, se desarrollan tanto actividades comunes, como actividades de I/A y Operativas. Si bien es cierto que en la Fuerza recae el mayor número de las tareas que se encuadran en las actividades excluidas.

3. Normativa que afecta a los empleados públicos civiles del Ministerio de Defensa

Como es sabido el legislador, en la regulación primitiva de la PRL no contempló al personal militar; sin embargo, no olvidó a aquellos empleados públicos civiles que desarrollan sus competencias en un entorno de trabajo peculiar. Sujetos a un régimen de trabajo particular, por las exigencias de la defensa nacional, en los centros y establecimientos militares, pertenecientes al Ministerio de Defensa y estructurados en BAE. Así se estableció en el art. 3.3 de la LPRL, y se ordenó su desarrollo en la disposición adicional novena. Correlativamente, se aprobó el RD 1932/1998, de 11 de septiembre⁷⁰. Por ende, la adaptación de las normas de los capítulos III y V de la LPRL al ámbito militar, realizada por el citado real decreto, afecta en el caso específico de exposición a un riesgo grave e inminente. Para Sánchez Trigueros este dato, «[...] merece una valoración muy positiva al haber dejado intacto el conjunto de garantías individuales a favor de quienes prestan su actividad»⁷¹. A su vez, el art. 2, obliga al Jefe del establecimiento militar, como responsable del personal civil destinado en los centros y establecimientos militares, a informar, adoptar medidas y disponer lo necesario en caso de peligro grave.

En las FAS, el mando y dirección de un establecimiento militar lo ostenta el personal militar designado y no pudiendo recaer nunca sobre personal civil. Esta responsabilidad, que a simple vista puede parecer un hecho irrelevante,

70. Modificado por RD 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. BOE, núm. 37, de 10 de febrero de 2018.

71. Vid. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., «La adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los establecimientos militares y el RD 1932/1998, de 11 de septiembre.». *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 5, 1999, pág. 440.

pone de manifiesto una evidencia. Pues tal y como se ha mencionado, en la fecha de publicación del RD, el personal militar quedaba excluido del ámbito de aplicación de la LPRL y lógicamente de su normativa de desarrollo. Resulta paradójico, pues, que el Jefe del establecimiento deba proteger al personal civil, a pesar de no estar él protegido por la legislación preventiva en su publicación inicial.

Independientemente de lo anterior, conviene matizar algunas cuestiones. Por ejemplo, la adaptación del art. 21 de la LPRL a los empleados públicos civiles, aún siendo aplicable en el caso de riesgo grave o inminente, pues es clara la preocupación del legislador por preservar sus derechos⁷², ya que es consciente de la importancia de los cometidos que desempeñan en el ámbito militar, e incluye una excepción explícita en el apartado b) del punto 1 del art. 2 del RD 1932/1998, de 11 de septiembre. En la misma, a pesar de persistir el derecho del personal civil a no reanudar sus actividades mientras persista el peligro, éste se restringe o elimina en función de los intereses o seguridad de la Defensa. Para García Ninet, este hecho singular sopesa la tipología de los riesgos de este personal, que a pesar de su carácter civil está sujeto a los riesgos inherentes a su peculiar actividad laboral⁷³. En general, el ejercicio de este derecho de autodefensa, por parte del trabajador que se niega a prestar su

72. EL art. 21 de la LPRL expone: «El empresario estará obligado, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».

73. Vid. GARCÍA NINET, J.I., «La prevención de riesgos laborales en la Administración civil y militar», GÁRATE CASTRO, F.J., (Coord.), en *Las relaciones laborales en las administraciones locales, Fundación Democracia y Gobierno Local*, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2004, Madrid, pág. 243.

trabajo en el citado caso, no puede suponerle ningún tipo de repercusión negativa, ya sea sanción o despido⁷⁴. Sin embargo, para el personal civil dependiente de la Administración militar, la negativa sólo puede ejercitarse en condiciones más limitadas que las de los empleados públicos de otros departamentos ministeriales⁷⁵.

La adaptación, por tanto, crea una diferencia singular que recae sobre los empleados públicos civiles de la Administración militar, en función de su destino. Para López Rubia, *«las limitaciones que se recogen en el Real Decreto 1932/1998 “en función del interés y seguridad de la Defensa”, constituyen una cortapisa importante al libre ejercicio de los derechos de participación del personal civil en materia preventiva, dado que el concepto de defensa nacional es muy abstracto y puede dar cabida a demasiadas situaciones»*⁷⁶. Y es en lo que se basa el legislador para justificar las razones de seguridad que instan al personal civil en los centros y establecimientos militares, a reanudar o no abandonar su puesto de trabajo, aunque el riesgo se materialice en un nivel de gravedad o inminencia.

Por ende, resulta paradójico que el mismo espíritu que utiliza el legislador para excluir al personal militar de la aplicación de la seguridad y salud, la salvaguarda de la defensa nacional, sea utilizado para obligar al personal civil a reanudar o continuar sus actividades en estos casos. Sin que, por ello, en el resto de su actividad en los centros y establecimientos militares, deje de estar

74. Cfr. GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas.», *Temas Laborales*, núm. 72, 2003, pág. 21.

75. Conviene aclarar que, el derecho del trabajador enunciado puede ser aplicado por empleados públicos de la Administración militar que no estén destinados en centros y establecimientos militares.

76. Vid. LÓPEZ RUBIA, M.E., «El Real Decreto 1932 ¿Adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los centros y establecimientos militares?», *Revista Aranzadi Social*, núm. 5, 1999, pág. 476.

protegido y amparado en la legislación preventiva, lo que no ocurre con el personal militar. Esta contradicción será alegada más adelante, en el recurso de incumplimiento de la Comisión ante el TJUE, para argumentar el derecho del personal militar a estar bajo la cobertura preventiva.

Para Garcés Bonet, el RD 1932/1998 supuso por primera vez una alusión clara a la presencia de la PRL en el Ministerio de Defensa, *«como algo para aplicar únicamente al personal civil, y que su criterio es que el personal militar no debe tener esta cobertura legal»*⁷⁷. Esta situación de desigualdad, será corregida posteriormente con la modificación de la LPRL.

4. Normativa que afecta a los empleados públicos militares del Ministerio de Defensa

La singularidad específica del militar profesional en el ámbito de la seguridad y salud laboral, se observa incluso antes de la publicación de la LPRL. En el RD 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar, ya se hacía alusión a la prevención de accidentes y seguridad e higiene de los militares de reemplazo. Así, en su art. 58 se exponía de manera concluyente: *«En las bases, buques y acuartelamientos, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias de la actividad militar, se adoptarán medidas específicas de seguridad e higiene acordes, en lo posible, con lo que sobre esta materia dispone la legislación general en vigor»*⁷⁸.

77. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 86.

78. La figura «militar de reemplazo», se define en el art. 4, como «Los españoles que se incorporan a las Fuerzas Armadas para realizar el servicio militar adquirirán la condición militar y recibirán la denominación de militares de reemplazo». Esta figura, desaparece el 31 de diciembre de 2001, fecha acordada por el Consejo de ministros, de la suspensión de la prestación del servicio militar, publicada por RD 247/2001, 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar.

De lo expuesto, se extrae lo siguiente: los empleados públicos civiles de la Administración militar, los militares de reemplazo y los militares profesionales, que realizan sus actividades en un mismo centro o establecimiento militar, son titulares de diferentes derechos y obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Ya que los empleados públicos hasta la publicación primitiva de la LPRL estaban amparados por la OGSHT y los militares de reemplazo se rigen por la obligatoriedad del cumplimiento del Servicio militar por el RD 1410/1994, de 25 de junio. Sin embargo, a los militares profesionales no se les contemplaba derecho alguno en materia de PRL.

Después de la promulgación de la primitiva LPRL, se regula la adaptación de las normas de los capítulos III y V de esta Ley, sobre derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de consulta y participación de los empleados públicos en los centros y establecimientos militares, a través del RD 1932/1998, de 11 de septiembre. Estos trabajadores, por ende, consolidan algunos de sus derechos en materia preventiva, cuando cumplan sus competencias en estos peculiares lugares de trabajo. Se mantienen los citados derechos de los militares de reemplazo y se continúa sin hacer alusión alguna a los militares profesionales. Si bien, en el art. 3.3 de la LPRL se expone que en centros y establecimientos militares les será de aplicación lo dispuesto en la Ley con las particularidades previstas en su normativa específica. Parece interpretarse que se acoge a todos los miembros que trabajan en los mismos, pues no se hace matización subjetiva alguna sobre el carácter de este personal, ya sea civil o militar. Sin embargo, el RD 1932/1998, aclara el ámbito subjetivo

de aplicación, excluye al personal militar, y se refiere solamente al personal civil dependiente de la Administración militar⁷⁹.

A pesar de lo anterior, entre otros autores, Rodríguez Ten y Carnicer Escusol, consideran que no existía una despreocupación por parte de la Administración militar hacia la PRL del personal militar hasta la publicación del RDPRLFAS⁸⁰. Esta aseveración, se justifica con la publicación de numerosas disposiciones internas, aunque de escaso rango normativo, por parte de los ejércitos, destinadas a la seguridad del personal militar. En buena medida, podrían considerarse como un modelo preventivo, aunque fragmentado. Conviene no olvidar que la idiosincrasia de las FAS y las distintas orgánicas de sus ejércitos, hicieron que sus peculiaridades generales fueran aún mayores, vistas desde el prisma específico de sus funciones y cometidos, respecto al ámbito de la seguridad y salud de sus miembros. Por ello, se constata que hasta la promulgación de la legislación específica de PRL para el personal militar, se gozaba de un modelo preventivo, compuesto por orientaciones, instrucciones y normas internas de escaso rango normativo.

Las FAS elaboraron una normativa de funcionamiento interna y diferenciadora del resto por sus características inherentes. Por ello, resulta fundamental analizar por ejércitos la normativa fragmentada publicada internamente, hasta la promulgación del RDPRLFAS.

79. Cfr. SALAS FRANCO, T., *El Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 347.

80. Vid. RODRÍGUEZ TEN, J., Y CARNICER ESCUSOL, E., «Normativa sobre PRL en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos de Seguridad», *Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, núm. 32, 2006, pág. 49.

Normativa interna del Ejército de Tierra

El Ejército de Tierra aprobó cinco años antes de la promulgación del RDPRLFAS, la publicación militar OR7-020 orientaciones de prevención de riesgos y medidas de seguridad en la Fuerza⁸¹. Con la intención de orientar a los Cuadros de Mando sobre las acciones idóneas, que proporcionen la oportuna protección de la Fuerza, bajo su mando en cualquier circunstancia y lugar contra todo tipo de riesgos distintos de los originados por el empeño en combate directo con el enemigo⁸². En ella, se divide la protección de la Fuerza en tres finalidades: la seguridad de protección, la seguridad funcional y la salud. De las tres, la más aproximada a la definición de prevención dada por la LPRL en su art. 4.1, es la de seguridad funcional, definida como aquella que *«pretende proteger a las tropas, los empleados civiles, material y equipo contra los riesgos producidos por utilizar procedimientos inadecuados o derivados de la propia actividad militar»*. Esta seguridad alcanza su consecución, fundamentalmente, mediante la instrucción y la prevención de accidentes.

La seguridad funcional, depende de un programa cuya elaboración requiere un proceso de investigación en el conjunto del Ejército de Tierra, condicionado por la diversidad de factores que intervienen y la multiplicidad de actividades que contempla. Esta seguridad se subordinó a los planes generales de I/A, olvidando su fuente de inspiración, la LPRL y, por ende, los principios de la acción preventiva.

81. El capítulo 4 de la publicación militar desarrolla el concepto de seguridad funcional, adaptando la LPRL y la normativa de desarrollo al ámbito castrense, creando una pseudo-normativa preventiva que no despeja las dudas de las actividades que recoge la propia seguridad funcional ni diferencia, las realizadas por el personal militar y el civil. Vid. MADOC, DIDOM, *Orientaciones. Prevención de riesgos y medidas de seguridad en la Fuerza (OR7-020)*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, pág. 1- 2.

82. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define «fuerza» en su sexta acepción, como «Grueso o parte principal, mayor y más fuerte de un todo. La fuerza del ejército». [Consulta: 25/03/2019], «<https://dle.rae.es/?id=IYwPBb3>».

Normativa interna de la Armada

En la Armada se acuña el término seguridad operativa, que se remonta al año 1990 con la elaboración del plan de seguridad en buques⁸³. Más tarde, se creó la normativa de seguridad operativa, siguiendo el modelo del «*Navy safety and occupational health program manual*», de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica⁸⁴.

A raíz de la promulgación de la LPRL, cuyo ámbito de aplicación no afectaba al personal militar, se publicó en el año 2001 la normativa de seguridad operativa en instalaciones y, más tarde se creó el centro de seguridad operativa de la Armada con la finalidad de aproximarse a los principios generales de la acción preventiva dimanados de la LPRL.

Se observa, por tanto, la preocupación de la Armada por la seguridad y protección durante la realización de actividades en buques e instalaciones, influenciada en un principio por la normativa utilizada en otros ejércitos no nacionales y posteriormente por la normativa desarrollada por la LPRL, pero subordinando los principios preventivos en función de la operatividad de su flota.

Normativa interna del Ejército del Aire

En el Ejército del Aire, aparecen dos conceptos diferenciados: la seguridad y defensa del personal, medios e instalaciones, (posteriormente denominada seguridad y protección de la Fuerza) y la seguridad de vuelo.

83. La seguridad operativa en buques (SEGOPBU), abarca cinco planes de seguridad: PSB-01 (A), plan de seguridad en buques. PSB-03, precauciones de seguridad en buques. PSB-04 (B) vol. I, guía para pasar revistas e inspecciones de seguridad operativa en buques. PSB-04 vol. II (A), guía para pasar revistas e inspecciones en submarinos. PSB-05, investigación de accidentes en buques.

84. El manual de los programas de seguridad y salud laboral de la Armada norteamericana es el «*Navy safety and occupational health program manual*». Publicado por la OPNAVINST 5100.23G. del «*Office of the Chief Naval Operation Special Assitant for safety matters (OPNAV (N09F))*».

La primera es definida como el conjunto de medidas y medios de prevención que tienen por objeto minimizar la vulnerabilidad del personal, instalaciones, material, operaciones y actividades de las Unidades de la Fuerza Aérea ante las amenazas que puedan surgir, preservando su libertad de acción y contribuyendo al éxito de la misión que tienen asignada⁸⁵. Y la segunda, como aquella seguridad que tiene por finalidad evitar pérdidas de vidas y material, preservando al máximo la capacidad operativa de las Unidades aéreas; la misma está basada en un eficiente programa de prevención de accidentes aéreos, que abarca las actividades de vuelo y las de apoyo al mismo⁸⁶. Estos dos conceptos de seguridad, no se rigen por los principios de la actividad preventiva enunciados en la LPRL, sin embargo, se aproximan. Aunque como en el caso anterior, de forma subordinada a la operatividad de las actividades del Ejército del Aire.

De lo expuesto anteriormente se observa el esfuerzo y preocupación que tienen los respectivos ejércitos por proporcionar protección, seguridad y salud a sus miembros y la existencia de una normativa preventiva interna, alguna en concordancia con la legislación preventiva a pesar de estar, en esos momentos, el personal militar excluido de su ámbito de aplicación⁸⁷.

El proceso unificador que supuso la creación del Ministerio de Defensa en el año 1977 necesitaba de una regulación singular, que permitiera la elaboración de una normativa unificadora de PRL en las FAS. La existente en ese momento,

85. Instrucción núm. 109/2007, de 26 de julio, del JEMA, por la que se crea la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza.

86. Orden 68/1994, de 28 de junio, sobre organización y actualización de la Seguridad de Vuelo en los accidentes de Aeronaves Militares Españolas.

87. La normativa interna, relativa a la protección, seguridad y salud del personal militar y civil del Ejército de Tierra se desarrolla en la publicación militar OR7-020. En la Armada, en las publicaciones SEGOP de carácter general, SEGOPBU, para buques, SEGOPIM, de Infantería de Marina, SEGOPINST, para instalaciones y SEGVU, para vuelo. Y en el Ejército del Aire, en las instrucciones normas internas sobre protección y seguridad de la Fuerza y la seguridad de vuelo.

creada en el seno de cada ejército, era fragmentaria y potencialmente discriminatoria, e incluso en algunos aspectos ignoraba los riesgos contemplados en la legislación de desarrollo de la LPRL⁸⁸.

Tras todo lo expuesto es evidente la necesidad de una regulación concreta, capaz de adaptar la legislación preventiva vigente a las peculiaridades específicas de este personal. La homogeneización de la normativa interna no llegó hasta la publicación del RDPRLFAS, que diferenció las actividades militares que realizan los ejércitos en dos grandes grupos, las sujetas al amparo de la LPRL y aquellas que se regirían por sus propias normas de seguridad. Con un periodo de carencia de casi dos años desde la STJUE de 12 enero de 2006, que provocó la modificación de la LPRL para incluir al personal militar, se promulgó el RDPRLFAS. Aunque para Labajos Fernández, esta publicación supuso *«un claro avance en la regulación de la seguridad y salud laboral de este colectivo, su operatividad y eficacia son, hasta ahora, dudosas y bastante limitadas»*⁸⁹. Este autor basa esta opinión, en que la normativa promulgó una solución aplazada en diversos aspectos, a lo que añade las constantes inconcreciones y ausencias de regulación en aspectos de enorme transcendencia, que por un lado dificultan y por otro impiden su aplicación. Esto hace que la normativa específica quede condicionada a un desarrollo mediante orden ministerial, al que no se indican unos criterios mínimos inspiradores.

88. La normativa interna del Ejército de Tierra se considera discriminatoria pues excluía al personal militar de los riesgos a los que estaban expuestos, ya que no se hacía referencia alguna a los contemplados en la legislación preventiva, como las disposiciones mínimas de seguridad y salud: en los lugares de trabajo (RD 486/1997), manipulación manual de cargas (RD 487/1997), en el manejo de pantallas de visualización de datos (RD 488/1997), protección de los trabajadores expuestos a riesgos biológicos (RD 664/1997), riesgos de exposición a agentes cancerígenos (RD 665/1997), utilización de equipos de protección individual (RD 773/1997), utilización de equipos de trabajo (RD 1215/97), exposición a riesgos relacionados con agentes químicos (RD 374/2001), exposición al riesgo eléctrico (RD 614/2001), exposición riesgos por atmósferas explosivas (RD 681/2003), exposición a vibraciones mecánicas (RD 1311/2005), exposición al ruido (RD 286/2006), riesgos de exposición al amianto (396/2006).

89. LABAJOS FERNÁNDEZ, op.cit., pág.31.

La normativa en materia de PRL resultante que deriva de la LPRL, es debida a la adaptación de las vicisitudes del personal militar en armonía con las del personal civil, sin que se pierda su finalidad: la protección de las personas, con independencia de su condición de empleado público civil o militar, durante el desarrollo de sus actividades en los lugares de trabajo pertenecientes al Ministerio de Defensa. El ámbito de aplicación del RDPRLFAS se dividió en tres campos:

- El del personal: en cuyo ámbito subjetivo se debe aunar en la AGE el personal civil destinado en el Ministerio de Defensa, las FAS donde se encuadra el personal militar y el CGC, cuando su personal militar preste servicios en el ámbito del departamento ministerial de Defensa.
- El de las actividades: que comprende las que se realizan en el Ministerio de Defensa, aquellas propias de las FAS y las actividades militares del CGC.
- El espacial: en el que se engloba a todas las UCO del ámbito del Ministerio de Defensa, así como los organismos autónomos a él adscritos⁹⁰.

En adecuación y consonancia con el art. 3.2 de la LPRL, en el RD se especifican las actividades cuyas particularidades impiden la aplicación de la LPRL. Siendo éstas las de I/A y Operativas, en las que se prescinde de los principios de la acción preventiva dimanados de la LPRL⁹¹. En estos aspectos,

90. Como organismos autónomos, se citan el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), aprobado por RD 1080/2017, de 29 de diciembre. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), aprobado por RD 925/2015, de 16 de octubre. El Instituto Social de las FAS, aprobado por RDL 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

91. El art. 6.4 del RD 1755/2007, de 28 de diciembre, especifica las actividades excluidas de la LPRL.

su seguridad se rige por sus normas propias de seguridad y operación, que constituyen su propio plan de PRL pero al margen de la legislación preventiva. De igual forma, también para las actividades de vuelo y aquellas que esté directamente relacionadas, se establece que se rigen por su normativa específica. La exclusión de estas actividades se recalca en la normativa interna preventiva de los ejércitos⁹².

Las particularidades que impiden la aplicación de la LPRL en las actividades de I/A, el RDPRLFAS las define y justifica por estar recogidas en los planes generales de I/A y, por su finalidad, la preparación del militar para el cumplimiento de las misiones que le encomienden. Del mismo modo, para las actividades Operativas, las justifica por estar recogidas en un plan de operaciones y ejecutarse en territorio nacional o extranjero.

En el RDPRLFAS se reconoce el derecho del personal acogido a su ámbito de aplicación, a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, relacionada con las actividades que desarrollan en el ejercicio de sus funciones y con las medidas de protección establecidas, ya sean colectivas o individuales, con la finalidad de eliminar o reducir aquellos riesgos que, una vez evaluados, no se hayan podido evitar. El derecho de los trabajadores a la información de los riesgos para su seguridad y salud, también queda regulado, debe ser

92. La Directiva 02/11, de 18 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de Prevención de Riesgos Laborales en el Ejército de Tierra, en el punto 3 expresa: «Esta Directiva es de aplicación al conjunto del ET, en todas las actividades que realizan las Unidades, Centros y Organismos (UCO) en las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAE.), salvo las de instrucción, adiestramiento y Operativas (art. 6.4 RD 1755/2007), que se regirán por sus propias normas de seguridad.». De igual forma se expresa en la Instrucción Permanente Logística 02/2010, de 17 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se regula la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad Operativa en la Armada. Armada, Madrid, 2010, «3. Ámbito. Las actividades de instrucción, adiestramiento y Operativas, conforme a lo previsto en el artículo 6.4 del RD 1755/2007», y en la Directiva 11 /2011, de 28 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire por la que se regula el proceso de creación de la estructura de Prevención de Riesgos Laborales en el Ejército del Aire. Ejército del Aire, Madrid, 2011, «3. Ámbito. para las actividades de instrucción, adiestramiento y Operativas, las Fuerzas Armadas aplicarán sus normas propias de seguridad y operación, cuyo conjunto constituirá el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades de instrucción, adiestramiento y Operativas».

proporcionado, de forma que no se perjudique la eficacia de la misión, ni se quebranten las normas de seguridad de la información. El personal militar también podrá ejercerlo, a través de propuestas de actividades preventivas que estimen oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo de forma individual. Bien a la Jefatura de las UCO, bien dirigiéndolas directamente al Órgano de prevención de la UCO, o bien por cualquier otro canal de participación que se habilite en la UCO⁹³. Garcés Bonet, explica *«que el derecho de participación debe ejercerlo a través de la cadena orgánica o recurriendo directamente al órgano de prevención del que dependa»*⁹⁴.

También se garantiza la formación de riesgos laborales a través de la inclusión de esta materia en los diferentes niveles de la enseñanza militar, por los cursos que se impartan en relación con el puesto de trabajo y por el uso de los diferentes materiales y equipos⁹⁵. No obstante, Garcés Bonet expresa sobre la formación del personal no integrado en la estructura de PRL que, *«no se ha conseguido implantar de una forma sistemática, homogénea y complementaria para todos los niveles profesionales, que a la vez sea adecuada a los cometidos que se pueden desarrollar en ellos»*⁹⁶. En su opinión, la titulación del personal técnico en funciones de PRL, debería ir pareja a las escalas: oficiales técnicos superiores, suboficiales técnicos intermedios y tropa técnico básico⁹⁷.

93. Con respecto a los empleados públicos de condición militar, no se produce cambio alguno, pues sus derechos de representación y participación ya estaban limitados, de manera inexorable, a causa de la excepción literal que realiza el art. 28.1 de la CE. Además de lo expuesto, el RDPRLFAS, para el personal militar perteneciente a las FAS, se reduce a efectuar propuestas de actividades preventivas, que se estimen oportunas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. De igual modo, explica el RDPRLCGC, el personal militar perteneciente al CGC, realizará por cauces distintos a las organizaciones sindicales, su participación en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

94. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 435.

95. En el art. 43.2, Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se define: *«La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de formación, la enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa nacional»*.

96. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 434.

97. En la Instrucción Técnica del IGE 20/2011, al objeto de asegurar la aplicación de la normativa de PRL, se asigna el cometido de auxiliar al Jefe de BAE/UCO en materia preventiva a un oficial por BAE y a un suboficial por cada UCO alojada en la misma. Asimismo, se indica que este personal corresponda con Técnicos Intermedios y Básicos, en cualquier caso, tendrá dependencia funcional del Jefe de Servicio PRL al que esté adscrita su Unidad y no tendrá dedicación exclusiva para cometidos de prevención. Lo que evidencia de la exclusión del personal de tropa a estos cometidos.

Con respecto a la vigilancia de la salud, recogida en el art. 14 del RDPRLFAS, se establece el derecho del personal a los reconocimientos médicos oportunos en relación con los riesgos que se deriven del puesto de trabajo que desempeñen, siendo previamente evaluados. Asimismo, se considera obligatorio en los supuestos en que el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del personal o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para el mismo, o para el resto del personal o terceras personas relacionadas con las UCO. La obligatoriedad de estos reconocimientos, se contradice con lo expuesto en el art. 22.1 de la LPRL, pues expresa que se llevaran a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento y restringe a los supuestos tasados en el mismo la posibilidad de realizar reconocimientos médicos obligatorios.

Por otro lado, estos reconocimientos médicos son contratados a SVPRL ajenos, al no asumir el Ministerio de Defensa y, por ende, los ejércitos, dentro de su SVPRL la especialidad preventiva de medicina del trabajo. De los contratos publicados, diferentes para personal civil y militar, se desprende una clara desproporción presupuestaria entre ambos⁹⁸. Mientras que a la totalidad del personal civil se le respeta este derecho, al personal militar se le selecciona, según riesgos específicos del puesto de trabajo, y pasan el reconocimiento en

98. Según la plantilla de efectivos del personal civil y militar del Ministerio de Defensa, 20.861 corresponden al personal civil y 143.022 al personal militar (no se contempla al personal en reserva). El anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Reconocimientos médicos específicos para el personal funcionario, laboral y estatutario que presta su servicio en el Ministerio de Defensa. Expediente: 2017/SP01010020/00000220, publicado en el BOE, núm. 264, de fecha 31/10/2017, ofrece un valor estimado del contrato de 500.000 €. El anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos específicos para el personal militar que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa durante el año 2018. Expediente: 2017/SP01010020/00000233, publicado en el BOE, núm. 253, de fecha 20/10/2017, ofrece un valor estimado del contrato de 150.000 €.

aquellos casos en que sea imprescindible la aptitud para el desempeño de la actividad que desarrollen.

Correlativamente, en el art. 14.4 del RDPRLFAS, el legislador no contempla el derecho al reconocimiento médico del personal militar que realiza las actividades de I/A, en contradicción con el personal militar que participa en actividades Operativas. Como se puede observar el art. 14.4 señala que *«el personal que participe en operaciones excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto, tendrá derecho asimismo a una adecuada vigilancia de la salud»*. A nuestro juicio, la inclusión de este derecho en la normativa citada contribuiría y beneficiaría a una correcta protección de la salud, que redundaría en la mejor ejecución de la operación⁹⁹.

También hace referencia el reglamento en su art. 16 a las medidas de protección del personal con insuficiencias psicofísicas. La aptitud, no aptitud, o las limitaciones de aptitud del militar profesional para continuar en servicio activo, según el RD 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, debe ser valorada por un órgano competente del ámbito o Jefatura del ejército correspondiente, y siempre a la luz de los informes médicos periciales. Sólo éstos serán tenidos en cuenta, al incoarse el preceptivo expediente de

99. En la Instrucción Técnica del MAPER ET 18/08 *Protocolos unificados para los reconocimientos médicos en el Ejército de Tierra*, en su punto 4 Situación, expone *«El personal militar destinado en el Ejército de Tierra(E.T.) puede tener que pasar varios reconocimientos médicos en poco tiempo por motivos distintos: realización de Pruebas de Aptitud de Educación Física (PAEF), reconocimientos de inicio y fin de misión, etc.»*, en este sentido no aparece referencia a protocolos específicos direccionados a los riesgos en evaluados en cada uno de los respectivos puestos de trabajo. Por otro lado el RD 944/2001 , de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, en su art. 4 establece protocolos generales y periodicidad para los miembros de las Fuerzas Armadas, siendo esta para los militares de carrera y los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter permanente, en función de la edad en intervalos de siete, cinco y tres años, y para los militares de complemento y de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal, antes de la firma de un nuevo compromiso. De nuevo se observa el carácter general de estos reconocimientos, no enfocados específicamente a los puestos de trabajo.

insuficiencia de condiciones psicofísicas, como instrumentos que aportan datos objetivos y esenciales para dictar la resolución que en cada caso corresponda. Por lo tanto, a diferencia de los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, que en virtud del art. 22 de la LPRL se efectúan por los SVPRL ajenos contratados por el Ministerio de Defensa, las no aptitudes o limitaciones de la aptitud que revelen los reconocimientos psicofísicos del personal militar, no serán vinculantes para la determinación de la limitación para ocupar determinados destinos, solo servirán como informes médicos periciales, que pueden, o no, motivar la oportuna incoación por un órgano competente del ejército de un expediente de insuficiencia psicofísica, que, en su caso, posteriormente adaptará el puesto de trabajo del militar.

Asimismo, se hace especial referencia en el precepto reglamentario a la protección de la maternidad, aspecto importante a tener en cuenta, pues transcurren hasta el momento de la promulgación del RDPRLFAS veinte años desde la incorporación de la mujer a las FAS¹⁰⁰. Durante este periodo, se ha producido una evolución positiva en los ejércitos, encaminada a facilitar la adaptación de la mujer a un ámbito que hasta entonces le era ajeno. En este sentido, el art. 15 explica el protocolo a seguir ante la existencia en las UCO de embarazadas y madres en periodo de lactancia. El mismo, se basa en la evaluación de riesgos laborales de las actividades que desarrollan, que sirva para determinar procedimientos, condiciones de trabajo y exposiciones que

100. Vid. AAVV., *I Jornadas La incorporación de la Mujer en las Fuerzas Armadas Españolas*, Universidad Nebrija, 2013, [Consulta: 23/07/2017], «<https://vimeo.com/79770361>», según Blanca Palacián de Inza, analista del Instituto español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Centro Superior de Estudios de la defensa nacional (CESEDEN): «fue en septiembre de 1988, cuando la mujer española pudo acceder a las Fuerzas Armadas como personal militar, "sin que exista más diferencia que su condición fisiológica para la provisión de determinados destinos"».

pueden influir negativamente en su salud y en la del feto o en la de los hijos lactantes.

Las obligaciones que la LPRL asigna al empresario en su art. 3, en el ámbito de los empleados públicos, se entiende que recaen en la Administración pública para la que se prestan servicios. En el Ministerio de Defensa, conviene aclarar que, según el art. 18 del RDPRLFAS, estas obligaciones son asumidas por el propio departamento ministerial. Sin perjuicio de otras obligaciones, que son atribuidas a los órganos administrativos comprendidos en su ámbito de aplicación, los cuales adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en la medida en que sea razonablemente viable, la seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos.

No obstante, surgen interpretaciones sobre la asunción de las obligaciones y, por ende, las responsabilidades atribuidas en la LPRL al empresario, en el seno de las BAE y UCO de los respectivos ejércitos. La ambigüedad del término empresario, asumida en este caso por una Administración con personalidad jurídica propia, colisiona con la admisión de responsabilidades por parte de una persona física¹⁰¹. Ello obliga al Ministerio de Defensa a despejar toda interpretación o duda al respecto. Así el informe de la Asesoría Jurídica de la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa afirma que, en el ámbito militar la figura del empresario corresponde a la Jefatura del centro u organismo. Profundiza, además, sobre el concepto de

101. Según García de Enterría, las singularidades de los distintos entes que conforman la Administración pública se encuentran con frecuencia en el denominado «*abuso de la personalidad jurídica*», que obliga, más que en el *Derecho Privado*, a «*levantar el velo*» para localizar a las *Administraciones titulares reales*». Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E., «El concepto de personalidad jurídica en el Derecho Público», *Revista de administración pública*, núm. 129, 1992, pág. 203.

empresario y le imprime una naturaleza más amplia que la de departamento ministerial¹⁰². Según Garcés Bonet, *«la responsabilidad de la prevención alcanza a todos los militares, independientemente de su empleo»*¹⁰³ Pero, a sensu contrario, la interpretación expuesta por el informe no se corresponde con las responsabilidades del militar cuando ejerce el mando como Jefe de unidad, centro y establecimiento militar reflejadas en los arts. 78 y 79 de las Reales Ordenanzas para las FAS¹⁰⁴. Se constata que, en ninguno de ellos se invoca a la responsabilidad sobre el personal civil destinado en Unidades, Centros y Establecimientos militares y, por ende, a asumir las obligaciones de la LPRL cuando ejerce como Jefe responsable de estas Unidades¹⁰⁵. Además, Labajos Fernández añade que el concepto de establecimiento militar, es *«excesivamente amplio si se tiene en cuenta la finalidad para la que se usa: establecer singularidades en el ámbito preventivo debido a las características organizativas del centro y a la implicación del interés de la defensa nacional»*¹⁰⁶. Para el autor existen Unidades, Centros y Establecimientos militares que no encajan en la definición de establecimiento militar y podrían albergarse ciertas dudas en la aplicación de la normativa preventiva. No obstante, en el RDPRLFAS se reflejan las obligaciones del personal afectado por el mismo, tales como velar, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean

102. En el informe de la Asesoría Jurídica de la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa, de referencia 432/AJ/G, de fecha 02/01/2007, asunto «Memorando 3/2007 sobre responsabilidad en materia de seguridad y salud», se ampliaba la aclaración sobre el concepto -Jefatura de Establecimiento-, pues en el ámbito referido, se consideraban incluidos en el, a todos los integrantes del escalón de mando, desde el Jefe de UCO, pasando por los mandos superiores o intermedios, hasta los mandos subordinados. Todo ellos considerados, como eslabones de una cadena de mando que debe encargarse de velar por la seguridad y por la aplicación de la normativa vigente

103. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 429.

104. Así se refleja en el art. 78 del mando de unidad y en el art. 79 del comandante o jefe de unidad, buque o aeronave, del RD 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las FAS.

105. Es necesario señalar que a lo largo del articulado de las Reales Ordenanzas se emplea el término «unidad» con carácter genérico debiendo entenderse que puede hacer referencia tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento. De la misma forma el RD 2205/1980, de 13 de junio, establece como «" Establecimiento militar" a los Centros, Unidades, Dependencias y Organismos análogos de la Administración Militar» y como «" Jefe de Establecimiento" a quién con esa denominación o las de Director, Presidente u otra similar, se encuentre al frente del mismo».

106. LABAJOS FERNANDEZ, op.cit., pág. 31.

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el desempeño de sus funciones, además de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, de conformidad con la formación y las instrucciones recibidas.

El capítulo III del RDPRLFAS y último, desarrolla los órganos de prevención asesoramiento y control, constituyéndose en el Ministerio de Defensa el SVPRL de la Defensa. El mismo, se define como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud del personal acogido a su ámbito de aplicación. El modelo de gestión preventiva adoptado, de los cuatro determinados por el art. 14 del RSP, es el de SVPRL propio. Esta modalidad resulta obligatoria por tratarse de una empresa, se recuerda que este término es asumido por la Administración pública, que cuenta con más 500 trabajadores.

La publicación de la Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa, como desarrollo de los arts. 22 y 24 del RDPRLFAS, definió la estructura de la PRL en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y en las UCO ajenas a la estructura de los ejércitos. Para su coordinación se creó la UCSVPRL, esta unidad dependiente de la Subsecretaría de Defensa, de la cual dependen funcionalmente todos los SVPRL del Ministerio de Defensa, determinó el desarrollo de la estructura adecuada de sus SVPRL, proporcionando unos criterios generales que facilitaran la homogeneidad de la

estructura general y que permitiera el desarrollo adecuado en cada ejército¹⁰⁷. Más tarde, la implantación de los SVPRL de los respectivos ejércitos sería ordenada por sus respectivos Jefes de Estado de Mayor y difundida a través de su normativa interna¹⁰⁸.

Por último, se destaca la importancia que asume la Subsecretaría de Defensa, como instrumento de control para emitir requerimientos a los órganos subordinados, en el caso de detectar incumplimientos o irregularidades en materia de riesgos laborales. Además de la posibilidad de ordenar la incoación de auditorías, para el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales¹⁰⁹.

En resumen, la publicación del RDPRLFAS supuso la adaptación de la LPRL al personal militar de las FAS, y la organización de los SVPRL del Ministerio de Defensa. Sin prescindir de la normativa que hasta ese momento se aplicaba a los empleados públicos civiles del departamento ministerial. La creación de una estructura hasta entonces inexistente, provocó unos ajustes en las plantillas orgánicas de las FAS sin incremento de las mismas, lo que supuso un aumento de las competencias de sus miembros. Por todo lo anterior, se puede resaltar el gran esfuerzo realizado en tan poco espacio de tiempo desde la

107. En la STS de 13 de julio, núm. de recurso 42/2008, se anuló el apartado segundo del art. 2.a) del RDPRLFAS, al entender el alto Tribunal que, dado que el precepto aludido prevé que en los centros de trabajo donde convivan personal militar y personal civil existirá un único servicio de prevención, las organizaciones sindicales debían haber sido puntualmente oídas a través del correspondiente trámite de audiencia. Añadiéndose al texto original *«Las funciones de dicho servicio de prevención podrán ser desempeñadas indistintamente por personal militar, funcionario, laboral o estatutario.»*

108. En el Ejército de Tierra se implanta la PRL en su seno a través de la Directiva del JEME 02/11, de PRL en el Ejército de Tierra, de 18 de febrero, en la Armada el AJEMA ordenar su regulación por la Instrucción Permanente de Logística núm. 01/2010, de 17 de marzo de 2010, y en el Ejército del Aire, a través de la Directiva del JEMA 11/2011, de 28 de febrero. El desarrollo y su estructura de la PRL en los respectivos ejércitos se expuso en el capítulo anterior.

109. En el art. 25 del RDPRLFAS, se regula la potestad de la Subsecretaría de Defensa de ordenar auditorías en materia preventiva.

modificación de la LPRL, a tenor de la STJUE de 12 de enero de 2006, se expande la PRL a todos los ámbitos profesionales del Ministerio de Defensa.

5. Clasificación de los empleados públicos en el Ministerio de Defensa

En este epígrafe, se analiza la amplia panoplia de relaciones insertas en el ámbito de las Administraciones públicas que cumplen sus funciones en el Ministerio de Defensa. Se alude, tanto a aquellos que mantienen su condición civil, como aquellos pertenecientes a las FAS y al CGC, denominados personal militar.

Es necesario perfilar el concepto del personal cuya condición tanto civil como militar, es objeto de estudio en el ámbito del departamento ministerial. Al respecto, se considera oportuno comenzar realizando la delimitación subjetiva correspondiente al ámbito del EBEP, fijando éste como punto de partida para la determinación de las competencias del personal civil. Para posteriormente, profundizar sobre la legislación específica del personal militar.

Desde tiempo atrás hasta la actualidad, distintos colectivos convergieron y convergen al servicio de la Administración militar, también llamada Administración de Defensa, manteniendo su condición civil o militar. Sin embargo, y a pesar de esta separación en dos grupos, se considera útil para su comprensión realizar su estudio con profusión, desgajando uno a uno los distintos componentes que conforman estos grupos, sin perder de vista el objetivo general de esta investigación, enmarcada en la seguridad y salud del personal militar. Para Garcés Bonet, no hay que cometer el error de interpretar

que en el Ministerio de Defensa solo trabaja personal militar, como de igual manera en otros ministerios, cítese el de Sanidad, no todos los destinados son médicos¹¹⁰. No obstante, los roles desempeñados por cada colectivo (civil y militar), no son intercambiables, *«mientras los civiles se limitan a tareas administrativas o relacionadas con las instalaciones, los militares desempeñan cometidos directamente relacionados con el combate o con su preparación»*¹¹¹. A pesar de lo anterior, se observa la existencia de puestos de trabajo que solo son desempeñados por militares, y de otros que no son ejercidos sólo por civiles¹¹²

En este sentido, cabe recordar la definición del concepto - empleado público -, que el EBEP, en su art. 8 precisa como *«[...]quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales»*. Esta definición juega un papel crucial en el ordenamiento jurídico español, al incorporarse por primera vez un concepto jurídico y determinado, que pone fin a las dualidades existentes hasta el momento. Si bien, para algún sector doctrinal, el término debe entenderse en una acepción más amplia, *«en la medida en que el empleador contratante u ordenante aparece diversificado en sus formas jurídicas, justificadas por la conveniencia de mejor gestión de la prestación del servicio público»*¹¹³. El propio concepto de empleado público a nuestro juicio, constituye una redefinición jurídica novedosa, que establece sin ambages la figura del personal que desempeña sus cometidos en

110. Loc.cit, pág. 93.

111. Ibid.

112. Ibid.

113. Vid. VALLECILLO ORELLANA, A., «Capítulo XIX. Evolución normativa y jurisprudencial en la consideración del empleado público. Especial referencia al empleado público laboral», SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., y GARRIDO PÉREZ, E. (Dir.), en *El Derecho del trabajo y la Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral*, Ediciones Laborum, Murcia, 2015, pág. 273.

las Administraciones públicas. Según destaca Vida Fernández, el EBEP regula conjuntamente, con independencia de su régimen jurídico, al personal funcionario y laboral, como empleados públicos, consideración que lleva a entender que, en aquellos preceptos de la norma en los que se haga mención al término, se aplicará su contenido sin diferenciación alguna de su naturaleza¹¹⁴.

En el nuevo modelo creado por el legislador, los empleados públicos se clasifican en cuatro grupos diferentes: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y por último el personal eventual. Sin olvidar, al personal estatutario, al cual hace referencia en su art. 2.3. Y por último al personal, con legislación específica propia.

Se debe hacer especial mención a los cuerpos reflejados en el art. 4.d y e del EBEP, al personal militar de las FAS y al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respectivamente. Este último se refiere a los miembros del CGC, por su condición militar y por contemplarse la prestación de sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, además de en el Ministerio del Interior. El artículo citado establece que el EBEP solo se aplicará directamente a este personal, cuando así lo disponga su legislación específica, lo que en palabras de Garcés Bonet expresa que el propio EBEP reconoce la existencia de varios grupos de personal en las FAS, *«y si uno de ellos es el de los militares, por contraposición el otro debe ser el de los no- militares, o sea, los civiles»*¹¹⁵. Un

114. Vid. VIDA FERNÁNDEZ, R., *Las relaciones laborales en las Administraciones públicas*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada – Facultad de Derecho, Granada, 2016, pág. 103.

115. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 83.

dato más que matiza la existencia de diferentes colectivos en un mismo Ministerio.

5.1. Los empleados públicos de carácter civil

En el Ministerio de Defensa los empleados públicos con carácter civil pueden estar destinados en el órgano central y en las FAS. Así pues, se estima necesario conocer sus cometidos y su relación en el departamento ministerial.

Los funcionarios de carrera son definidos en el art. 9.1 del EBEP como aquellos que en virtud de nombramiento legal y vinculados a una Administración pública, en base a una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo, desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. El aspecto diferenciador de este empleado público con respecto al resto según Javato Martín, *«es su incorporación a la Administración en régimen de Derecho público y de manera permanente, voluntaria y profesional»*¹¹⁶. Por lo que a este estudio refiere, estos funcionarios son los que ingresan en los respectivos Cuerpos y Escalas mediante convocatoria pública, a través de los sistemas de oposición, concurso oposición o concurso libre¹¹⁷. Parada Vázquez señala una característica que para este personal no se refleja en el EBEP: la adquisición de su condición mediante pruebas competitivas¹¹⁸. Ferradans Caramés señala como rasgos de los funcionarios su imparcialidad e independencia, *«[...]debido en gran medida a la inamovilidad de su condición, lo que les permite sustraerse de los vaivenes políticos, sujetándolos*

116. Vid. JAVATO MARTÍN, A.M., «El concepto de funcionario y autoridad a efectos penales», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 2, 2011, pág. 152.

117. El acceso a la función pública se regula por lo establecido en los arts. 3 y 4 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE.

118. Vid. PARADA VÁZQUEZ, R., *Derecho Administrativo I*, 2ª ed., OPEN Ediciones Universitarias, Madrid, 2014, pág. 507.

exclusivamente al imperio de la Ley en el seguimiento de las instrucciones jerárquicas que les sean encomendadas»¹¹⁹.

El desarrollo de sus servicios profesionales está vinculado al Ministerio de Defensa, como departamento de la AGE, ocupando sus puestos de trabajo en los Servicios centrales de este Ministerio, en establecimientos militares perteneciente a las FAS, además de en organismos públicos tales como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

A su vez, a los funcionarios en el EBEP se les encomienda un papel esencial, que la diferencia de otro personal *«[...]el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas [...]»¹²⁰*. Para cumplir con esta función, los funcionarios de carrera pertenecientes a los distintos Cuerpos y Escalas, se clasifican en virtud de la titulación exigida para el acceso a los mismos en grupos¹²¹.

119. Vid. FERRADANS CARAMÉS, C., «La reordenación del sector público tras las crisis: algunos efectos jurídicos laborales», *Revista española derecho del Trabajo*, núm. 155, 2012, págs. 101 a 123.

120. Así se dispone en el art. 9 del EBEP.

121. Los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, se establecen en el art. 76 del EBEP. «Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior. Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. C1: título de bachiller o técnico. C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria».

Otra de las características que impregnan a este personal es su movilidad, implicando el traslado, ya sea voluntario o de manera motivada por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades e incluso a otras Administraciones Públicas, distintos a los de su destino¹²². El número máximo de este personal para el Ministerio de Defensa se establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, para el año 2018 se asignan al departamento ministerial un total de 5.794 efectivos, y 1.329 efectivos para los organismos autónomos¹²³.

Los funcionarios interinos, son un tipo de personal cuya creación surge a consecuencia de una situación de necesidad y urgencia, por razones expresamente justificadas. De la misma manera que se justifica su creación, por parte del EBEP también se prevé su cese, produciéndose éste cuando finalice el motivo o causa que dio lugar a su contratación o nombramiento; además les serán de aplicación las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, previstas en el art. 63. A consecuencia de algunas sentencias del TJUE, el EBEP ha eliminado, aunque no todos, los agravios comparativos de los regímenes jurídicos de estos funcionarios interinos con los de carrera, dado que constituían una potencial transgresión contra lo establecido en la normativa comunitaria¹²⁴. Los puestos de trabajo previstos para este personal en el Ministerio de Defensa, son, por lo tanto, aquellos definidos para los funcionarios

122. La movilidad de los funcionarios se refleja en los arts. 81 y 84 del EBEP.

123. Datos extraídos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

124. La transposición de la Directiva 1999/70/CE, ha promovido en ocasiones que su interpretación no haya sido ajustada a Derecho por ser irregular y discriminatoria con el régimen jurídico de los funcionarios interinos, dictándose varias sentencias del TJUE. Vid. STJUE (Sala Segunda), de 13 de septiembre de 2007. Asunto C-307/05. STJUE (Gran Sala), de 15 de abril de 2008. Asunto C-268/06. STJUE (Sala Tercera), de 23 de abril de 2009. Asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07.

de carrera, puesto que cuando sustituyen a estos, asumen directa o indirectamente sus funciones¹²⁵.

En cuanto al personal laboral, el mismo se caracteriza por su diferente temporalidad al servicio de las Administraciones Públicas, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Su relación se formaliza en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal prevista en la legislación laboral para prestar servicios retribuidos para las Administraciones públicas¹²⁶. A pesar de que los puestos de trabajo definidos para este personal, pueden coincidir con los del personal funcionario, en los Servicios centrales del Ministerio de Defensa, en los establecimientos militares perteneciente a las FAS y en los organismos públicos, este personal no podrá desempeñar cometidos que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas, que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos¹²⁷. Según Ferradans Caramés, «[...] la delimitación de los entre los puestos de trabajo que han de ser desarrollados por los funcionarios y los que puedan serlo por el personal laboral, no está exenta de problemas jurídicos y dificultades prácticas»¹²⁸, la autora señala la dificultad de diferenciar entre el ejercicio de las funciones y las tareas de auxilio o colaboración a las mismas por otros empleados.

125. En este sentido se destaca, no sólo la sustitución de funciones, sino además el ejercicio de autoridad, comparándolo, para no llevar a extrañeza con el «ejercicio de funciones más sagradas, como las judiciales, en buena medida en mano de jueces interinos». PARADA VÁZQUEZ, J.R., op.cit., pág. 509.

126. En el art. 11 del EBEP, se define al personal laboral.

127. El art. 9,2 refleja esta característica diferenciadora de los funcionarios respecto al resto de los empleados públicos.

128. FERRADANS CARAMÉS, op.cit., pág. 119.

Este hecho es remarcado en la disposición transitoria segunda del EBEP, en la que se refleja la existencia de personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estaba desempeñando funciones o puestos clasificados como propios del personal funcionario, y es sólo a este personal al que se le reconoce el derecho a cumplir con los mismo cometidos del personal funcionario antes citados; negándosele al restante que no cumpliera las mismas condiciones o que se incorporara *a posteriori* de la publicación de la citada Ley.

Para la Comisión de expertos, en el Informe para el estudio y preparación del EBEP, la potestad incardinada a los funcionarios, diferenciadora del personal laboral, es indicativa del núcleo esencial de la función pública de carrera¹²⁹. En la misma línea, Campos Daroca considera que este precepto codifica el principio general recogido con anterioridad por la doctrina constitucional¹³⁰. Por lo tanto, resulta necesario asignar al personal funcionario el ejercicio directo de las potestades administrativas o funciones de autoridad que conlleven la salvaguarda de los intereses generales del Estado¹³¹. El número máximo de personal laboral en el Ministerio de Defensa se estableció en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, asignándosele al departamento ministerial un total de 12.3340 efectivos como personal laboral fijo; 360 como personal laboral eventual; y 918 efectivos como personal laboral fijo y 151 como personal laboral eventual, para los organismos autónomos¹³².

129. Vid. Informe de la Comisión de expertos, del EBEP, de abril de 2005, pág. 52.

130. Vid. CAMPOS DAROCA, J.M., *Empleo público laboral. Puestos de trabajo, clases de empleados públicos laborales y extinción de la relación laboral*, Editorial Fundación Asesores locales, Málaga, 2011, pág. 42.

131. Vid. SEMPERE NAVARRO, AV., Y QUINTANILLA NAVARRO, Y., «El personal laboral al servicio de las Corporaciones Locales», en PALOMAR OLMEDA, A., (Coord.), *El Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia en el ámbito local*, CEMCI, Granada, 2007, págs. 536 a 537.

132. Datos extraídos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Asimismo, el personal eventual de confianza, considerado por el Estatuto en su art. 12, es aquel que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Se les aplica, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. En el Ministerio de Defensa, este personal es nombrado por los altos cargos, por delegación de competencias del ministro de Defensa, en virtud de la Orden DEF/232/2014, de 28 de noviembre. Obviamente, el desempeño de sus cometidos finalizará cuando la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento cese. A pesar de lo anterior, la legislación no concreta en qué consisten sus cometidos específicos, ya que se definen de modo escueto los rasgos de este personal. Este hecho ha sido objeto de una abundante jurisprudencia, en los Tribunales de Justicia Superiores y el Tribunal Supremo¹³³. Para Fernández Ramos, la caracterización de este personal está más vinculada personal y fiduciariamente a las personas que ostentan el poder de decisión que a la propia Administración, lo que provoca una diferencia sustancial con el empleado público¹³⁴. El número máximo de este personal para el Ministerio de Defensa se estableció en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, catalogando como personal eventual gabinetes, un total de 16 efectivos¹³⁵.

Finalmente, hay que mencionar al personal estatutario de los Servicios de Salud en la Red Hospitalaria de la Defensa, históricamente el personal sanitario

133. Vid. GARRIDO CUENCA, N.M., y DELGADO PIQUERAS, F., «Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia». *Revista catalana de dret públic*, núm. 51, 2015, pág. 3.

134. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., «Los falsos empleados públicos: el personal eventual», *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 34, 2013, pág. 36.

135. Datos extraídos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

y aquellos colectivos que forman parte de los servicios de salud en centros e instituciones militares sanitarias, han gozado de una regulación específica, siendo identificados habitualmente como personal estatutario. Su clasificación atiende a tres criterios definidos: la función desarrollada, el nivel de estudios exigido para el ingreso y el tipo de nombramiento. De esta forma, nos encontramos con personal estatutario sanitario, personal estatutario de gestión y servicios, personal estatutario fijo y personal estatutario temporal¹³⁶.

En el ámbito de aplicación del EBEP, se establece que cada vez que en el mismo se haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. Este grado de afinidad puede dar a entender su similitud con este personal. Sin embargo, Rodríguez Vigil señala para este personal, *«[...]que se ha creado una situación en cierto modo caótica, injusta y disfuncional [...]»*, provocada por sus distintos procedimientos de acceso¹³⁷. Para el tema que se trata, este personal rige su relación contractual con la Administración pública mediante un estatuto o normativa propia, el EBEP, y con respecto al Ministerio de Defensa su cobertura se expresa en plazas en la Red Hospitalaria de la Defensa.

No obstante, el personal militar perteneciente a la Red Hospitalaria de la Defensa, fue excluido del ámbito estatutario, en virtud del apartado 1 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Y con respecto al personal laboral fijo, se procedió a regular su integración, de forma voluntaria,

136. En el capítulo II de la Ley, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece la clasificación del personal estatutario.

137. Vid. RODRÍGUEZ-VIGIL RUBIO, J.L., *Integración o desmoronamiento. Crisis alternativas del Sistema Nacional de Salud Español*, Civitas, Cizur Menor, 2008, pág. 318.

como personal estatutario de la Red Hospitalaria de Defensa¹³⁸. El legislador justificó esta integración, por considerar que el modelo estatutario es el más adecuado para regular las específicas relaciones jurídicas del personal, que presta sus servicios en los centros sanitarios de esta Red, con sus propias peculiaridades organizativas. Actualmente este proceso se encuentra ya finalizado.

5.2. Los empleados públicos de carácter militar

Este personal, por su carácter militar, cuenta con una legislación específica propia. En palabras de Gómez Martínez, *«La profesión militar aún mantiene una cierta tendencia a llenar la vida del profesional, de modo que el término “condición” militar quizás sea más omnicomprendivo que el de “profesión”»*¹³⁹. El personal militar pertenecientes a los Institutos armados, está sujeto a las disposiciones del EBEP, cuando así esté dispuesto en su legislación específica¹⁴⁰. Según Garcés Bonet, este personal es *«considerado como un grupo más entre los funcionarios por algunos y como una categoría aparte de empleados públicos por otros»*¹⁴¹. Peñarrubia Iza aporta un doble sentido a la función militar, entendiendo desde el punto de vista objetivo que su fin es prestar servicios al Estado para la defensa nacional y desde el punto de vista subjetivo, un conjunto de personas sujetas a la disciplina militar, encuadradas en la organización militar en la que prestan sus servicios¹⁴². Obviamente este

138. En los arts., 1 y 2 del RD 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa, se establece el procedimiento y las condiciones para la integración voluntaria en la condición de personal estatutario de los servicios de salud del personal comprendido en el ámbito subjetivo de aplicación.

139. GÓMEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 369.

140. Los arts. 28.1, 29.2, de la CE, expresan el carácter de Institución cuando se refiere a las FAS y a la CGC Civil *«[...]Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar [...]»*; *«[...]Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar [...]»*.

141. GARCÉS BONET, op. cit., pág. 81.

142. Vid. PEÑARRUBIA IZA, J.M., *Presupuestos constitucionales de la Función militar en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, págs. 50 a 51.

personal, debido a su idiosincrasia, goza de un régimen jurídico diferente al resto de empleados públicos.

Según López Bénitez, *«las misiones del Artículo 8.1 CE configuran la base sustentadora del estatus del militar, aunque su indudable vertiente de Administración Pública, obligará a que las Fuerzas Armadas amolden su actividad a los principios generales que rigen en esta. De manera que mientras que algunos de estos resultan de difícil aplicación, otros como la jerarquía, lo serán más intensamente y el binomio fines-principios (Artículos 8.1 y 103.1 CE) perfilará el alcance de los derechos fundamentales de los militares»*¹⁴³. La diferencia clave entre el personal civil y militar, se basa en las funciones que cumple el personal en la Administración, ya que el personal militar se integra como recurso personal de la Administración y en forma primaria al servicio de la defensa nacional¹⁴⁴.

Sin embargo, actualmente la doctrina jurídica se muestra más partidaria de tratar a las FAS y al CGC como integrantes de la Administración, reivindicándose el carácter administrativo de este personal¹⁴⁵. Según López de Gea, las FAS y el CGC tienen una configuración de naturaleza administrativa con connotaciones institucionales¹⁴⁶.

143. Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, M., *Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones de sujeción especial*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba. Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1994, págs. 497 a 498.

144. Vid. MUÑOZ ALONSO, J.M., *Derecho Administrativo Militar*, Vol. II, Autor-editor, Madrid, 1989, pág. 82.

145. Entre otros Vid. JIMÉNEZ VILLAREJO, J., «Derechos y deberes del militar profesional en la constitución española», *Revista española de Derecho Militar*, núm. 77, 2001, pág. 448, expresa «[...]la situación de los militares no se diferencia demasiado de la del resto de los funcionarios de la Administración Pública[...]». LÓPEZ RAMÓN, F., «Principios de Ordenación Constitucional de las Fuerzas Armadas», MARTIN-RETORTILLO BAQUER, S.B., (Coord.), en *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*, Vol. 3. La Corona. Las Cortes. Del Gobierno y la Administración pública, Civitas, Madrid, 1991, pág. 2568, opina «[...]no parece posible, en efecto, reducir el significado de la Administración militar a las estructuras ministeriales de la Administración del Estado, es decir, en la actualidad, al Ministerio de Defensa [...]». SUÁREZ PETIERRA, G., «Regulación jurídico constitucional de las Fuerzas Armadas», en *Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, Volumen IV*, Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 1988, pág. 2375, en la que asiente, «la progresiva administrativización de las Fuerzas Armadas».

146. Vid. LÓPEZ DE GEA, J., «El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas», *Revista de Derecho UNED*, núm. 12, 2013, pág. 391. Puede consultarse el análisis que realiza el autor.

Para Parada Vázquez, la condición militar se expresa, independientemente del Ejército o Cuerpo al que pertenezca el militar, mediante la confluencia de dos campos diferenciados por la naturaleza de su contenido. El primer campo, aglutina los principios éticos, las relaciones de jerarquía y las reglas en las que se sustentan. El segundo, corresponde al *status militar* de los miembros de las FAS en el ejercicio de la función pública, aspecto que se trata a continuación ¹⁴⁷.

El *status* militar en ejercicio de la función pública se regula para el personal militar perteneciente a las FAS por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Asimismo, el régimen del personal militar del CGC se rige por lo previsto en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Ambas normativas son consideradas fundamentales, para conocer la vinculación jurídica de este personal. En su articulado, se hace clara referencia a los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la AGE, establecidos en el EBEP. Los mismos incorporados al régimen del personal militar profesional, siempre que no contradigan su legislación específica¹⁴⁸. Según Garcés Bonet, y en relación con el objeto del estudio, llama la atención el hecho de que en la Ley 39/2007 no se realice mención alguna a la seguridad laboral del personal militar pertenecientes a las FAS, *«El hecho de que no hace ninguna mención a la seguridad laboral de la persona es curioso, principalmente porque esta ley es posterior a la ya estudiada sentencia contra España del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea»*¹⁴⁹. Más aún señala el autor,

147. Vid. PARADA VÁZQUEZ, J.R., op.cit., pág. 534.

148. Así se establece en los arts. 5 y 2.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, respectivamente.

149. GARCÉS BONET, op.cit, pág.110.

resulta llamativa la coexistencia de esta norma con la posterior publicación del RDPRLFAS.

A su vez, la norma establece que la vinculación de los españoles, como militares profesionales a las FAS puede adquirirse de tres formas: como militar de carrera, como militar de tropa y marinería, y como militar de complemento¹⁵⁰. La relación jurídico-pública de estos militares, se establece con distinto carácter. Así, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, define a los militares de carrera, como aquellos que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente y a los militares de tropa y marinería y de complemento, como aquellos cuya relación de servicios profesionales se establece mediante compromisos de carácter temporal. Es conveniente también, no olvidar a aquellos militares, alumnos de centros docentes militares y reservistas voluntarios, obligatorios y de especial disponibilidad, ya que su vinculación, aunque no sea de servicios profesionales, también adquiere la condición militar.

Los cargos y destinos que puede ocupar el personal militar de las FAS, se contemplan en el art. 99 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y se regulan por el RD 456/2011, de 1 de abril, siendo de aplicación a las situaciones administrativas de servicio activo y de reserva. Los destinos de este personal, serán en las UCO del Ministerio de Defensa, incluidos sus órganos directivos. En su caso, también podrán ocupar cargos y destinos en la Presidencia del Gobierno, y también en aquellos puestos orgánicos relacionados con la

150. El art. 3.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, además de la vinculación a la que se hace referencia, la propia Ley añade la posibilidad de vinculación a las Fuerzas Armadas de los extranjeros en situación de residencia legal con una relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal como militares de tropa y marinería en los casos y por los procedimientos regulados en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y como militares de complemento de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

seguridad y defensa, en organizaciones internacionales o en otros departamentos ministeriales ¹⁵¹. Por último, el personal militar podrá ocupar cargos y destinos en la Casa de Su Majestad el Rey y en las UCO de la Guardia Civil¹⁵².

En las directrices para el desarrollo de la política de Defensa, reflejadas en la Directiva de defensa nacional, de 30 de diciembre de 2004, en su punto 7 dentro del apartado b, en el ámbito nacional, se regula la transformación de las FAS y la reforma de la carrera militar, adoptando una estructura de cuerpos y escalas renovada. El objetivo perseguido es incentivar la dedicación y el esfuerzo profesional, a través de un sistema de ascensos y promoción.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, acomete esta renovación de forma innovadora. Por un lado, integra o adscribe en cuerpos y escalas a los militares profesionales de carrera y de tropa y marinería o de complemento respectivamente. Para ello, crea la escala de Tropa y Marinería en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, inexistente en anteriores normativas. Por otro, impulsa una nueva regulación del régimen y cometidos de los Cuerpos de Ingenieros. Y por último, observa una nueva regulación en el Cuerpo Militar de Sanidad.

En el art. 26 de la citada Ley también se definen los diferentes cuerpos militares que existen en las FAS. Es de destacar que la creación, extinción o

151. El art. 8.1.f de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, cita el régimen jurídico al que está vinculado su personal *«El régimen de derechos y deberes que conjugará el de la función pública y el del personal sujeto a disciplina militar»*.

152. La disposición adicional segunda. Destinos de militares de carrera de las Fuerzas Armadas. Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, regula la posibilidad de ocupar destinos en la Guardia Civil por el personal militar de las Fuerzas Armadas. *«De acuerdo con lo previsto en el artículo 99.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera militar, los militares de carrera de las Fuerzas Armadas podrán ocupar determinados destinos en la Guardia Civil, en función de los cometidos y facultades del Cuerpo y escala a que pertenezcan»*.

integración de cuerpos y escalas se efectuará por Ley¹⁵³. De igual forma el art. 25 establece con respecto a los cuerpos, que los militares profesionales se agrupan en las escalas de Oficiales, Suboficiales y de Tropa o de Marinería, en correspondencia con las diferentes categorías militares, facultades profesionales y requisitos educativos exigidos para la incorporación a ellas. Se regulan, por lo tanto, las diferentes escalas y sus empleos, en función del cuerpo al que pertenezcan.

Los aspectos diferenciales de las categorías militares constituyen un requisito esencial en las FAS. En este sentido los Oficiales Generales ejercen la acción de mando en la estructura orgánica y operativa de las FAS y la alta dirección y gestión de sus recursos humanos, materiales y financieros; mientras que los Oficiales desarrollan acciones directivas, especialmente de mando, y de gestión en la estructura orgánica y operativa de las FAS. Asimismo, desempeñan tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones militares, y las relacionadas con funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes. Son considerados los Suboficiales un eslabón fundamental en la estructura orgánica y operativa de las FAS, además de estrechos colaboradores de los Oficiales y líderes de sus subordinados, los militares de la categoría de Tropa y Marinería, considerados la base de la estructura orgánica y operativa de las FAS. Definidas las categorías, los militares profesionales son ordenados por empleos. Este constituye un requisito esencial en la organización jerarquizada de las FAS,

153. Los Cuerpos específicos del Ejército de Tierra son: Cuerpo general del Ejército de Tierra. Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Cuerpos específicos de la Armada: Cuerpo General de la Armada. Cuerpo de Infantería de Marina. Cuerpo de Intendencia de la Armada. Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Cuerpos específicos del Ejército del Aire: Cuerpo General del Ejército del Aire. Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire. Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas: Cuerpo Jurídico Militar. Cuerpo Militar de Intervención, Cuerpo Militar de Sanidad y Cuerpo de Músicas Militares.

pues sus aspectos diferenciales les hacen necesarios para su funcionamiento¹⁵⁴.

El número máximo de este personal para el Ministerio de Defensa se estableció en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, asignándosele al Ministerio de Defensa, catalogado como –funcionarios militares –, un total de 136.855 efectivos de los que 14.031 corresponden a Cuadro de Mando y Tropa profesional en reserva¹⁵⁵.

Se hace mención a la condición de militares de los miembros del CGC y la naturaleza militar del Instituto armado queda patente en la similitud de las funciones genéricas que ejercen en cada uno de los empleos. A pesar de lo anterior, conviene aclarar, que el CGC no está integrado en la estructura orgánica de las FAS, y que en la CE no existe mención explícita alguna a este cuerpo. Esta omisión expresa por parte del legislador, no se interpreta como que se tenga vedada por la CE la «naturaleza militar» al citado Cuerpo. Sino, por el contrario, como el reconocimiento de un ámbito de disponibilidad del legislador, en orden a la definición y configuración del CGC¹⁵⁶. Razones de peso

154. El art. 21 de la Ley 39/2007 establece los empleos militares dentro de las diferentes categorías en: «*Oficiales Generales: Capitán General. General de Ejército, Almirante General o General del Aire. Teniente General o Almirante. General de División o Vicealmirante. General de Brigada o Contralmirante. Oficiales: Coronel o Capitán de Navío. Teniente Coronel o Capitán de Fragata. Comandante o Capitán de Corbeta. Capitán o Teniente de navío. Teniente o Alférez de Navío. Alférez o Alférez de Fragata. Suboficiales: Suboficial Mayor. Subteniente. Brigada. Sargento Primero. Sargento. Tropa y marinería: Cabo Mayor. Cabo primero. Cabo. Soldado o Marinero.*».

155. Datos extraídos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

156. En los fundamentos jurídicos de la STC 194/1989, de 16 de noviembre, recurso de amparo 1340-1987, 612-1988, Contra Resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil recaídas en expedientes disciplinarios, así como contra Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sevilla que en diligencias indeterminadas declararon que no había lugar a tramitar la petición de "habeas corpus" por ser incompetente dicho Juzgado. Se expresa inequívocamente: «*La Constitución no define, ni tan siquiera menciona, a la Guardia Civil, y es claro que el silencio siempre es más permisivo que cualquier definición. Ni en el art. 8.1, dedicado a las Fuerzas Armadas, ni en el 104, referido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se incluye a la Guardia Civil. La mención expresa de la Guardia Civil en el art. 8.1 hubiera significado una opción del constituyente restrictiva del margen de disposición del legislador postconstitucional, pero de la no mención no se sigue que el legislador tenga vedado por la Constitución atribuir «naturaleza militar» al citado Instituto, sino, por el contrario, el reconocimiento de un ámbito de disponibilidad del legislador en orden a la definición y configuración de la Guardia Civil. Por otra parte, no puede decirse que la Constitución establezca, como dos bloques institucionales rígidos e incommunicables, los incluidos en los arts. 8 y 104, pues el propio texto constitucional prevé y permite (arts. 28.1 y 29.2) la existencia de Institutos armados y de Cuerpos sometidos a disciplina militar distintos a las Fuerzas Armadas, reconociendo así un tertium genus o una «figura intermedia» entre aquéllas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sometidas a disciplina militar. No tenemos que pronunciarnos, obviamente, sobre si el legislador pudo o podrá considerar abierta la enumeración del art. 8.1, ni sobre si pudo o podrá considerar a la Guardia Civil de igual naturaleza a todos los efectos que las otras Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, ni tampoco sobre si pudo o podrá integrar dentro del Ejército de Tierra a la Guardia Civil (opción frustrada en el iter legislativo al sustituirse el proyectado art. 35 de la L.O. 6/1980, de 1 de julio; por el art. 38 finalmente aprobado), puesto que el legislador ha elegido una vía distinta consistente en incluir a la Guardia Civil entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero con un régimen estatutario peculiar derivado de su definición como «Instituto armado de naturaleza militar» [arts. 9 b), 13 y 15 de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo]. Respecto a esta definición*».

fundamentan su naturaleza militar: la integración del CGC en la estructura del Ejército de Tierra durante la formación de los oficiales¹⁵⁷, la consideración de militares independientemente del empleo de todos sus miembros y la normativa reguladora que le afecta que lo ratifica con claridad meridiana¹⁵⁸. El carácter militar o naturaleza militar, no se circunscribe solamente a las FAS, sino a todos los cometidos y funciones que se les asignen a los miembros del CGC. De ahí se desprende la similitud de sus empleos¹⁵⁹.

legal, que es la vigente y de cuya constitucionalidad tampoco el recurrente parece albergar dudas, hay que decir en principio, y sin que ello nos exima de ulteriores precisiones sobre su alcance, que se trata de una opción, entre otras posibles, dejada por el constituyente a la libre disponibilidad del legislador postconstitucional. El legislador no es un mero ejecutor de la Constitución (STC 209/1987, fundamento jurídico 3.º), sino que actúa con libertad dentro de los márgenes que ésta le ofrece, y siendo la ley expresión de la voluntad popular, este Tribunal debe ejercer sus competencias, como hemos dicho en varias ocasiones, «de forma tal que no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas» (STC 108/1986, fundamento jurídico 18), pues «la labor de interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes imponiendo autoritariamente una de ellas» (STC 11/1981, fundamento jurídico 7.º). En un Estado democrático y pluralista como el nuestro (art. 1.1 C.E.) caben diversas opciones igualmente legítimas acerca de Instituciones como la que nos ocupa, esto es, cuando la Constitución ha dejado varias posibilidades abiertas al legislador orgánico u ordinario para configurarlas».

157. Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos de enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del CGC, efectuarán su presentación en el lugar y fecha indicados para los propuestos para ingresar como alumnos de enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo General del Ejército de Tierra. Así se establece en la Resolución 452/38116/2017, de 23 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.
158. La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrolló el mandato constitucional señalando, además de sus misiones, que el régimen estatutario de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, será el establecido en dicha ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar. La LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, para el caso de la Guardia Civil, adquieren mayor singularidad por su condición de Instituto Armado de naturaleza militar. La LO 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la propia justificación del régimen disciplinario de una organización armada y jerarquizada como es la Guardia Civil, caracterizada por su naturaleza militar. La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, lo define Cuerpo de Seguridad del estado de naturaleza militar.
159. Cfr. MARTÍN DELPÓN, J.L., «Naturaleza y carácter militar de los miembros de la Guardia Civil: comentario a la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2012», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 34, 2014, págs. 1 a 21.

Tabla 3. Efectivos del personal civil y militar del Ministerio de Defensa. Elaboración propia.
Fuente Presupuestos del Ministerio de Defensa, año 2018.

TIPO DE PERSONAL	GRUPO	MDEF EFFECTIVOS	OA EFFECTIVOS
ALTOS CARGOS		17	1
PERSONAL EVENTUAL GABINETES		16	0
TITULADOS UNIVERSITARIOS DE GRADO	A1/A	11	0
TITULADOS UNIVERSITARIOS DE GRADO	A2/B	0	0
TITULADOS BACHILLER O SIMILAR	C1/C	2	0
GRADUADOS ESCOLAR O SIMILAR	C2/D	3	0
FUNCIONARIOS MILITARES		136.855	508
Cuadros de Mando y Tropa Profesional en actividad		122.824	508
TTE GENERAL a TENIENTE	A1/A	15.560	302
ALFÉREZ A SARGENTO	A2/B	28.407	205
TROPA PROFESIONAL PERMANENTE	C1/C	11.238	1
TROPA PROFESIONAL NO PERMANENTE	C2/D	67.619	0
Cuadros de Mando y Tropa Profesional en reserva		14.031	0
FUNCIONARIOS CIVILES		5.794	1.329
TITULADOS UNIVERSITARIOS DE GRADO	A1/A	739	503
TITULADOS UNIVERSITARIOS DE GRADO	A2/B	1.038	251
TITULADOS BACHILLER O SIMILAR	C1/C	1.606	359
GRADUADO ESCOLAR O SIMILAR	C2/D	2.212	215
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD	E	199	1
PERSONAL LABORAL		12.700	1.069
Laboral Fijo		12.340	918
GRUPO 1	1	528	82
GRUPO 2	2	370	53
GRUPO 3	3	6.243	420
GRUPO 4	4	2.579	234
GRUPO 5	5	2.620	129
Laboral Eventual		360	151
GRUPO 1	1	32	120
GRUPO 2	2	28	15
GRUPO 3	3	26	15
GRUPO 4	4	22	1
GRUPO 5	5	252	0
Subtotal personal civil		18.527	2.399
Subtotal personal militar		136.855	508
TOTAL		155.382	2.907

MDEF: Ministerio de Defensa, OA: Organismos Autónomos (INTA, INVIED, ISFAS)

CAPÍTULO II

LA AFECTACIÓN PARTICULAR DE LA PRL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

1. El carácter de Administración pública de la Administración militar

Es importante aclarar el carácter de Administración pública que puede, o no, tener la Administración militar; definición que nos permitirá adentrarnos en su relación con la normativa en PRL. García de Enterría y Ramón Fernández explican la consideración de persona jurídica que tiene la Administración pública para el Derecho administrativo, *«Este de la personificación es el único factor que permanece siempre, que no cambia como cambian los órganos y las funciones, y por él se hace posible el Derecho administrativo»*¹⁶⁰. Calonge Velázquez destaca la característica principal de la Administración pública, que no es otra que, satisfacer necesidades de interés general¹⁶¹. Por lo tanto, en una acepción más amplia, queda definida como el conjunto de recursos humanos y materiales que ejercen funciones y competencias establecidas por la CE y el resto del acervo jurídico, encomendadas a los poderes públicos. Parada Vázquez, resume el concepto de Administración pública como aquellas *«que se encuadran dentro del poder ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al poder legislativo y al poder judicial»*¹⁶². No obstante, para García de Enterría y Ramón Fernández, no hay que percibir al Estado como un conjunto

160. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E., Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T., *Curso de Derecho administrativo I*, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, pág. 56. Por otro lado, Entrena Cuesta aborda el concepto de Administración pública desde dos perspectivas: la primera en un sentido subjetivo, como un conjunto de órganos. La segunda, desde un punto de vista objetivo, en una actividad. Vid. ENTRENA CUESTA, R., «El concepto de administración pública en la doctrina y el derecho positivo españoles», *Revista de Administración pública*, núm. 32, 1960, pág. 57.

161. Vid. CALONGE VELÁZQUEZ, A., El concepto de Administración pública en la Unión Europea: Administración pública nacional y Administración pública comunitaria», *Revista de Derecho de la Unión Europea*, núm. 19, 2º semestre, 2010, pág. 28.

162. Vid. PARADA VÁZQUEZ, P., *Concepto y fuentes del derecho administrativo*, Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 14.

de Poderes individualizados «[...] sino como una persona jurídica única que realiza múltiples funciones, una de las cuales sería, la de administrar»¹⁶³.

Así la CE encomienda al poder ejecutivo, en su art. 97, dirigir la Administración civil y militar. Según García de Enterría y Ramón Fernández, «De este modo, a través de este «desdoblamiento funcional», se instrumenta el fenómeno de «apropiación del poder» en que consiste el ejercicio de la soberanía, puesto que tales órganos superiores, en su condición de órganos constitucionales, son, con unas u otras técnicas, en todos los sistemas políticos y, por supuesto, en el nuestro, comisionados del soberano»¹⁶⁴. Sin embargo, la propia CE, según su art. 103, prescinde de diferenciación civil o militar alguna, y se refiere a ambas administraciones con único término, el de Administración pública. Este hecho se constata al observar la organización territorial del Estado. En ella se distinguen las Administraciones públicas territoriales, determinadas por la propia organización del Estado; y dentro de las denominadas territoriales o típicas se encuentra la AGE, que bajo la dirección y/o autoridad del Gobierno, se organiza en Ministerios, y entre ellos el de Defensa.

Tal y como se expresó en el capítulo anterior, las FAS, constituidas por recursos humanos y materiales de carácter militar, están integrados en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa. Así pues, se puede considerar a

163. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, Y RAMÓN FERNÁNDEZ, op.cit., pág. 55.

164. Loc.cit., pág. 412. Por otro lado, Guaita Martorell divide el concepto de Administración en dos ramas, la civil y la militar obedeciendo a su inequívoca finalidad. Mientras que la civil persigue la satisfacción de las necesidades colectivas y la consecución de los servicios e intereses públicos; la militar, coopera a lograr esa satisfacción, mediante la defensa del Estado de las amenazas interiores y exteriores. Vid. GUAITA MARTORELL, A., «La Administración militar», *Revista de Administración Pública*, n° 7, 1952, pág. 106. Cabe añadir la posibilidad de que el personal militar esté destinado en la Administración civil, antes entonces inédita, esta posibilidad se observa en el art. 29 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que modificó la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, incorporando una nueva situación administrativa, "Servicio en la Administración civil", en la que serán declarados los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en la Administración civil.

la Administración militar como pública, por el simple hecho de pertenecer a la organización territorial del Estado y estar bajo la jurisdicción del departamento ministerial. No obstante, existe una objeción, que suscita la duda en la afirmación anterior. Ya que el art. 25.3 de la CE impide a la Administración civil, la imposición de sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. *A sensu contrario*, el régimen disciplinario para las FAS permite a la Administración militar la imposición de sanciones que lleven aparejada la privación de libertad¹⁶⁵.

Esta contradicción, impediría considerar como Administración pública a la militar. En consecuencia, el departamento ministerial al que pertenece debería escindir lo público de lo estrictamente militar. Un hecho absurdo, para López Ramón, pues «[...] si la “Administración militar” queda reducida a la estructura ministerial sin incluir a las Fuerzas Armadas, tendrá que explicarse la profunda diferenciación que, en tal caso, afectaría únicamente al personal burocrático del Ministerio y no precisamente al personal militar»¹⁶⁶. Con más convicción si cabe, dado que no existe explicación que justifique la separación de las FAS del departamento ministerial.

Por otro lado, las necesidades de personal militar profesional de las FAS son cubiertas por militares de carrera, militares de tropa y marinería y, en determinados supuestos, por militares de complemento. Su concepción administrativa, para Jiménez Villarejo, «[...] no se diferencia demasiado de la del

165. En el art. 16, LO 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las FAS, se contempla el arresto por falta grave y muy grave, que consiste en la privación de libertad del sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar.

166. Vid. LÓPEZ RAMÓN, F. *La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pág. 377.

resto de los funcionarios de la Administración Pública»¹⁶⁷. Y ello porque la relación jurídico-pública equipara a los militares de carrera con los funcionarios de carrera, y a los militares de complemento y de tropa y marinería, con el personal laboral temporal, e igualmente se les incorporan los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la AGE, establecidos en el EBEP, siempre que no contradigan su legislación específica¹⁶⁸. Esta apreciación se manifiesta en Autos del TS, en los que se desestima la condición de funcionarios de carrera a los militares de tropa y marinería, y, por ende, a los militares de complemento, que mantienen una relación servicios de carácter temporal¹⁶⁹.

Hay que resaltar que en otros sectores de la AGE se recurre a tratamientos singularizados y especialidades que tienen cabida dentro del régimen administrativo¹⁷⁰. De igual manera ocurre en la Administración militar, como integrante del Ministerio de Defensa, pues la naturaleza de la función militar es considerada como una actividad de interés público, subordinada al bien común y sujeta al control de los poderes del Estado, exigiéndosele, como Administración, la transparencia en la gestión de sus recursos.

167. Vid. JIMÉNEZ VILLAREJO, J., «Derechos y deberes del militar profesional en la Constitución española», *Revista Española de Derecho Militar*, núm. 77, Madrid, Ministerio de Defensa (Secretaría General Técnica), 2001, pág. 448.

168. Los militares de complemento y los de tropa y marinería establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal y podrán adquirir la condición de militar de carrera.

169. En el razonamiento jurídico segundo del ATS (Sala de lo Contencioso), de 18 de julio de 2013, recurso 3188/2012, se enuncia la condición del militar: «La Ley 17/1999, ha sido derogada por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Esta Ley distingue los militares de carrera, de tropa y marinería y de complemento. Los de carrera, oficiales y suboficiales, mantienen una relación de servicios de carácter permanente; los de tropa y marinería, cuyo régimen está regulado en la Ley 8/2006, de 24 de abril, podrán adquirir la condición de militares de carrera cuando accedan a una relación de servicios de carácter permanente (situación en la que no se encuentra el hoy recurrente). Conforme al razonamiento expresado nos encontramos ante una cuestión de personal que no afecta al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, categoría esta a la que es ajena la condición de militar profesional de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas». De igual forma, en el razonamiento jurídico del ATS (Sala de lo Contencioso), de 12 de noviembre de 2015, recurso 3774/2014, manifiesta: «Pues bien, se evidencia que la Ley 39/2007 introduce, en relación con el personal militar de tropa y marinería, un cambio sustancial en lo que al acceso al recurso de casación se refiere. Y así, mientras que las cuestiones referidas a la adquisición de la condición de militar de tropa y marinería y firma del compromiso inicial, a las sucesivas renovaciones hasta los seis años y a los compromisos de larga duración hasta los cuarenta y cinco años siguen excluidas del recurso de casación, al igual que pasaba con la Ley 17/1999, por tratarse de vicisitudes de la carrera militar de dicho personal de tropa y marinería que no afectan al nacimiento o extinción de la condición de militar de carrera, las controversias que, por el contrario, surjan en relación con la adquisición o pérdida de la condición de permanente, al estar en juego el nacimiento o la extinción de la condición de militar de carrera, constituyen supuestos cuyo acceso a la casación viene autorizado por el artículo 86.2.a) de la Ley de esta Jurisdicción».

170. Vid. Art. 2, ámbito subjetivo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En consecuencia, la Administración militar, a pesar de las particularidades e idiosincrasia inherentes al personal castrense, que la hace diferenciarse de la Administración civil, se caracteriza como Administración pública. Ya que constituye una estructura orgánica al servicio de la comunidad, con la finalidad de ejecutar unos objetivos específicos, relacionados con la salvaguarda de la defensa nacional, bajo la absoluta dependencia del Gobierno¹⁷¹.

2. Normativa de PRL que afecta al personal de las Administraciones públicas

2.1. Antecedentes

Actualmente la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971 (OGSHT), está prácticamente derogada por la LPRL y por la normativa posterior de desarrollo¹⁷². No obstante, se considera significativa su mención en este capítulo, por su relevancia en la seguridad y salud. Ello es así, porque la OGSHT ha sido impulsora de un gran avance en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en la España preconstitucional. Una normativa de corte paternalista, que supuso un gran avance cualitativo legal, pues garantizaba a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y el derecho a la asistencia en los casos de accidentes de trabajo¹⁷³. Su publicación se justificó por la ingente necesidad de actualizar la normativa en vigor en su momento¹⁷⁴. A la cual derogó, para ordenar las

171. JIMÉNEZ VILLAREJO, op.cit., pág. 379.

172. En la actualidad la OGSHT, no está derogada, pero como se muestra a continuación, poco queda de ella. En virtud de las siguientes disposiciones, se han derogado: lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del Título II, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, los Títulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.

173. Así se denota en el art. 28, Decreto 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de la Leyes Fundamentales del Reino.

174. La normativa vigente en ese momento databa del año 1940. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 31 de enero de 1940.

competencias y funciones de los órganos de la Administración en esta materia¹⁷⁵. De esta manera, con la OGSHT, se instauraba un nuevo humanismo en el trabajo, pues se establecieron normas singulares para determinados grupos de actividades y sectores.

Su ámbito de aplicación, enunciado en su art. 1, se ajustaba a la protección mínima de las personas comprendidas en el Sistema de la Seguridad Social. Estos sujetos protegidos eran definidos en el art. 7, del Decreto 907/1966, de 21 de abril, como «[...] todos los españoles, cualesquiera que sean su sexo, estado civil y profesión, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio nacional [...]»¹⁷⁶. Sin embargo, no les sería de aplicación la OGSHT, de conformidad con lo establecido en su art. 1.2 a los funcionarios públicos civiles y militares por regirse por Ley o Leyes especiales, que se dictarán a tal efecto.

Sin ánimo de profundizar más en la OGSHT, se destaca únicamente sus características esenciales. Según Palomeque López, la OGSHT definió y filtró el concepto de «seguridad e higiene», que hasta ese momento se utilizaba de forma indefinida y que aglutinaba situaciones de distinta naturaleza¹⁷⁷. A partir de su publicación se determinó como la base legislativa, sobre la que se establecen las condiciones en las que debe prestarse un trabajo. Así como las

175. Así lo confirman Monereo Pérez y Molina Navarrete, «Además de evidenciar su razón de ser fáctica en un incremento relevante de la siniestralidad laboral "registrada" - accidentes de trabajo y enfermedades profesionales -, puso de manifiesto su enfoque eminentemente "reactivo - sancionador", al orientarse sobre todo a "ordenar para su debido ejercicio las potestades, funciones y facultades de los órganos de la Administración Pública que han de dirigir o proveer cuanto fuere necesario para lograr una plena efectividad de tales medidas y exigir las responsabilidades de carácter administrativo a que hubiere lugar por incumplimiento o inobservancia de las mismas"». Vid. MONEREO PÉREZ, J.L., y MOLINA NAVARRETE, C., «La caracterización general de la prevención de los riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídicos-críticos del «nuevo» modelo de acción preventiva», MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE C. (Dirs.), y OLARTE ENCABO S., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. (Coords.), en *Tratado de Prevención de Riesgos Laborales. Teoría y Práctica*, Editorial Tecnos (Grupo Anaya), Madrid, 2015, pág. 17.

176. El art. 7 del Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, definía la extensión del campo de aplicación.

177. Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., «La ordenación jurídica de la seguridad e higiene en el trabajo, durante el primer y segundo franquismo, de la Guerra Civil a la Ordenanza General, 1393-1971», APARICIO TOVAR, J., y SARACÍBAR SAUTÚA, A. (Coords.), en *Historia de la prevención de riesgos laborales en España, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo*, España, 2007, pág. 131.

características del edificio donde se realiza, añadiendo las responsabilidades en las que incurran los infractores. La Ordenanza dirigió la seguridad en el trabajo al ámbito jurídico-público, desplazándose del ámbito jurídico privado, en el que se había situado hasta ese momento y fomentando la creación de instituciones estatales frente al mutualismo de los trabajadores. Finalmente, permitió un desarrollo técnico posterior, pues hasta entonces no existían medidas técnicas que acompañaran la mejora de las condiciones de trabajo¹⁷⁸.

Se puede concluir que la OGSHT fue precursora de un giro radical hacia una política de PRL enmarcada bajo la denominación «*seguridad e higiene*». En los últimos años del régimen franquista, se promovió esta orientación, elaborando no sólo una legislación dirigida a las acciones preventivas, sino también a la disposición de los medios humanos, técnicos y materiales al servicio de la PRL.

Desde la adopción de la OGSHT, en 1971, hasta la proclamación de la CE transcurren siete años. El art. 40.2 CE encomendó a los poderes públicos la obligación/deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo¹⁷⁹. El mandato constitucional se cumple con la publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, definida como el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores, frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz¹⁸⁰. Fruto, asimismo, de la

178. BORNACHEA FERNÁNDEZ, J.I., «Seguridad e higiene en trabajo: por principio», *El País*, 29 de diciembre de 1987. [Consulta: 11/02/2018], «https://elpais.com/diario/1987/12/29/economia/567730803_850215.html.»

179. De los principios rectores de la política social y económica, art. 40.2 CE.

180. Así se dispone en el Preámbulo del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

trasposición de la DM que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria¹⁸¹.

Entre los sujetos protegidos por la LPRL por primera vez aparece una clara referencia al personal civil al servicio de las Administraciones públicas, ya esté vinculado a las mismas con una relación de carácter administrativo o estatutario. Si bien se señala que deberán atenderse sus peculiaridades. La inclusión del personal civil al servicio de la Administración pública en el ámbito de aplicación de la LPRL, provoca la adopción de una normativa de desarrollo, de adaptación de la legislación de PRL a la AGE.

Eso sí, que la publicación de la LPRL llevó aparejada, de forma no acorde a la DM, la exclusión de unos colectivos que no gozaron de la protección y seguridad de sus componentes, ante los riesgos de las actividades que desarrollaban. Por un lado, el personal militar pertenecientes a las FAS y al CGC, y por otro lado las actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública¹⁸².

La Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración pública (Instrucción), supuso un primer intento de adaptar la LPRL a la AGE¹⁸³. En ella, se procuraba abarcar a todos los empleados públicos

181. Este aspecto se refleja en el Punto 1 de la Exposición de motivos, LPRL. Asimismo, respecto a la transposición de las directivas de la UE Muñoz Ruiz expresa como requisito *sine qua non* la intervención estatal, hasta el momento en que no se aprueba la norma nacional, que traspone su contenido al ordenamiento jurídico de cada Estado. Vid. MUÑOZ RUIZ, A.B., *El sistema normativo de Prevención de Riesgos Laborales*, Lex Nova, Madrid, 2009, págs. 95 a 96.

182. A pesar de ser excluida la actividad de «Policía», el personal funcionario perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía fue excluido en la totalidad de sus funciones hasta su modificación, publicándose, como consecuencia de ello el RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

183. La Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la aplicación de la LPRL en la Administración del Estado, manifiesta la coexistencia de los órganos de representación fijados por la Ley

pertenecientes a esta Administración, sin hacer distinción del régimen jurídico que relacionara su relación profesional con la Administración pública. Para Labajos Fernández, *«La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de sus normas de desarrollo en el ámbito de las Administraciones Públicas es una cuestión problemática que presenta perfiles particulares»*, lo que ha requerido una continua modificación normativa a fin de adaptarla correctamente ¹⁸⁴.

No obstante, el limitado alcance de la Instrucción, debido a su rango normativo, necesitó de una ampliación que evitara ambigüedades y cumpliera fielmente su objetivo. Y así, se publicó posteriormente el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, que de igual forma exponía en su preámbulo la vocación de universalidad e integración de la LPRL y sus disposiciones de desarrollo respecto al ámbito de las Administraciones Públicas ¹⁸⁵.

Esta adaptación supuso, por un lado, la adaptación de la LPRL al personal civil perteneciente a la AGE y, por ende, a los empleados públicos pertenecientes al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta sus características y peculiaridades. Y por otro, sentó las bases para la constitución de los Servicios

9/1987, como son las Mesas sectoriales de negociación y las Juntas de Personal, con los ámbitos descentralizados de negociación contemplados en el Acuerdo Administración-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, hace necesario elaborar las siguientes instrucciones de carácter general para la adecuación de los Capítulos IV y V de la LPRL, a la Administración del Estado. Posteriormente se publicaría el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE.

184. Vid. LABAJOS FERNÁNDEZ, A., «La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas», en MATAMOROS MARTÍNEZ, R. (Dir.), en *Jurisdicción militar, riesgos laborales y operaciones militares internacionales. Una aproximación técnico-jurídica*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, pág. 27.

185. El RD 1488/1998, de 10 de julio, actualmente derogado por el RD 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, fue modificado por el Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modificó el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado y se dictó conformidad con la Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la PRL en la AGE.

de Prevención en esta Administración, sin olvidar su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados, tal y como señala el art. 31 de la LPRL.

2.2. Reglamentación jurídica vigente de adaptación de la LPRL a la AGE y a la Administración militar

El tiempo transcurrido desde la publicación del RD 1488/1998, de 10 de julio, y las diversas e importantes modificaciones en la normativa relativa a la PRL, han provocado la necesidad de acometer la reforma de la adaptación de la LPRL y del RSP a la AGE, para mejorar la actuación de esta en materia de PRL¹⁸⁶. Y ello, sin olvidar que el principal obstáculo que tiene la Administración pública es la adaptación de la regulación de la PRL de origen laboral, a las distintas peculiaridades del personal que la Administración integra. Más aún si éstas no fueron contempladas en la anterior adaptación, a causa de la exclusión de algunos colectivos, por ejemplo, el militar. Por ello, el principio generalista que imprime la LPRL, dimanado del principio de universalidad de la propia DM, hace que vaya más allá de la aplicación a las relaciones laborales y aborde las relaciones administrativas y estatutarias, sin discriminación de la caracterización o condición de su personal¹⁸⁷.

186. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, cuyo objeto, expuesto en el punto IV del texto, es la reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales y el reforzamiento de la función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fruto del Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales, entre el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, obligó la reforma los apartados 1 y 2 del art. 3 de la LPRL, eliminando la referencia de "personal civil al servicio de las Administraciones Públicas" por la de "personal al servicio de las Administraciones Públicas", al mismo tiempo se matiza en el apartado segundo los colectivos incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la LPRL, tales como las FAS y el CGC. RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de coordinación de actividades empresariales. RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modificaba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

187. Vid. MERCARDER UGUINA, J.R., y TOLOSA TRIBIÑO, C., «Las "especialidades" de la responsabilidad de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales: ¿del buen uso de la lentitud?», *Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica*, núm. 2, 2002, pág. 1088. Vid. BLASCO LAHOZ, J.F., «La adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la administración general del estado consecuencia del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero», *CEF Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social*, núm. 328, 2010, págs. 140. Vid. FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., *Régimen Jurídico de la prevención de riesgos laborales en las Administraciones públicas*, Comares, Granada, 2009, pág. 25.

El objetivo principal de esta nueva adaptación, expuesto en su texto, *in fine*, fue la corrección de las deficiencias observadas en la anterior normativa y consecuentemente la mejora de la eficacia de la actuación preventiva de la AGE. Y en este sentido se aprobó el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, que derogaba al anterior. A pesar del impulso y finalidad de esta adaptación, en su texto se destacan carencias en la integración de la prevención, en el régimen interno de funcionamiento de los departamentos ministeriales y de sus organismos. Lo que, a nuestro juicio, aún requiere el desarrollo de una normativa de PRL que complemente e impulse la cultura preventiva.

Por otro lado, se destaca la inclinación a mantener el Servicio de Prevención propio, como prioritario para la gestión de la PRL dentro de la AGE. Sin menoscabo de la potenciación de los Servicios de Prevención mancomunados y, a su vez, de reafirmar el carácter complementario de los Servicios de Prevención Ajenos contratados por la Administración pública¹⁸⁸.

Además, la normativa no prevé un control externo de las auditorías del sistema de gestión de la PRL, siendo éstas realizadas por los propios departamentos ministeriales¹⁸⁹. Ello no garantiza un grado de objetividad

188. Según la memoria 2016, «Informe-resumen sobre recursos y actividades, desarrolladas por la AGE, durante el año 2016 en materia de PRL, de la Dirección General de la Función Pública». En su punto 2.1.1, expone que la modalidad de SVPRP propio, más de la mitad, se encuentran agrupados en sólo tres departamentos: Defensa, Fomento y Hacienda y Función Pública. Por lo que se refiere a los SVPRP mancomunados, la mayoría pertenecen al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

189. Conviene aclarar a este respecto, que el art. 10 de RD 67/2010, de 29 de enero, se establece que cada sistema de prevención deberá someterse a un control periódico, mediante auditorías o evaluaciones externas (auditoría reglamentaria, acorde a los arts. 29, 0 1 y 1 bis del RD 9/1997, de 17 de enero). La AGE, a pesar de no concertar la gestión preventiva, con un SVPRP ajeno, por adoptar la modalidad de SVPRP propio, encomienda su realización a un organismo de la propia Administración, al INSST. Lo que no deja de interpretarse como una auditoría interna de la propia Administración.

necesario, que permita la detección de deficiencias evidentes en el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Parecer que la normativa siguió la recomendación del Comité Consultivo de la UE, que señaló como una de las condiciones básicas para que el sistema de gestión de la seguridad y salud sea eficaz, que los procedimientos de evaluación no requieran de auditorías externas obligatorias¹⁹⁰. No obstante, en la Administración pública se encuentra un caso único y aislado, la Comunidad Autónoma de Aragón. Su sistema de prevención se somete a controles de eficacia, que se llevan a cabo a través de auditoría externas¹⁹¹.

Ahora bien, en poco tiempo se producen modificaciones que intentan paliar las lagunas normativas que quedaron descubiertas. En efecto, la modificación del RD 67/2010, de 29 de enero, vino promovida por los cambios introducidos en base al Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE, celebrada el 29 de octubre de 2012, sobre la asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación, con especial referencia a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud¹⁹². En concreto, se justifica esta necesidad de adaptación y mejora permanente para aumentar la protección de la seguridad y salud de los empleados públicos, respondiéndose de esta forma al principio preventivo de mejora continua¹⁹³.

190. Vid. Documento 0135/4/99, del Comité Consultivo de la UE, titulado «*European guidelines on the successful organisation of safety and health protection for workers at work (Safety and health managements systems)*».

191. Vid. IGLESIAS MARTÍNEZ, V., «Organización y gestión de la prevención de riesgos laborales», GONZÁLEZ ORTEGA, S., Y CARRERO DOMÍNGUEZ, C. (Dirs.), en *Manual de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas*, INAP, Madrid, 2012, pág. 198.

192. Las modificaciones, afectan expresamente a seis artículos y a seis disposiciones del RD 67/2010, de 29 de enero, añadiendo, además, cinco nuevas disposiciones adicionales.

193. Esta normativa fue recurrida por parte de la federación estatal de trabajadores de la administración pública de la C.G.T., que solicitaba la nulidad y subsidiariamente la anulabilidad del RD 1084/2014, de 19 de diciembre, por vulnerar el procedimiento de elaboración de los reglamentos y, subsidiariamente, se solicitó la nulidad o anulabilidad del Anexo I del

2.3. Modelo de sistema de gestión de PRL para la AGE

En esta cuestión cabe mencionar brevemente lo expuesto en el apartado Segundo de la Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración pública. En misma se instaba a los Departamentos y Organismos Públicos de la AGE, en el plazo de seis meses a contar desde su promulgación, a establecer y mantener un Sistema de Gestión de la PRL, un Manual de la PRL, y un conjunto de procedimientos para la gestión de la PRL.

En el ámbito de la Administración militar corresponde esta responsabilidad al Ministerio de Defensa. Consecuentemente, la obligatoriedad expuesta, por un lado, en el apartado 2 del art. 14 de la LPRL, de garantizar la seguridad y la salud a los empleados públicos pertenecientes a la AGE, en los aspectos relacionados con las competencias de sus respectivos trabajos, se dirige a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para conseguir la protección de su seguridad y salud y, de conformidad con en el art. 16 LPRL, a la integración de la PRL en el Sistema de General de Gestión de la AGE, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, mediante la implantación y aplicación de un Plan de PRL.

En concordancia con lo previsto en los arts. 1 y 2 del RSP y lo establecido en el RD 67/2010, de 29 de enero, el Plan de Prevención es el instrumento fundamental para la integración de la actividad preventiva de los departamentos

real decreto antes citado. El recurso fue desestimado por el TS, que dictó, que por el solo hecho de determinar en qué órganos de la AGE y en qué organismos, entidades y entes dependientes o vinculados a la misma, existirá un centro de trabajo a los efectos previstos en el art. 10 de la LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en la propia LPRL, no se infringe la libertad sindical en su vertiente de auto tutela de los intereses colectivos, pues no se producen limitaciones a la hora de designar delegados sindicales según el citado precepto. Consecuentemente, el anexo citado no infringe los arts. 7, 14 y 28 de la CE, ni el art. 10 de la LOLS y, por ende, al no estar afectado un derecho fundamental, no se vulnera el principio de reserva de Ley. Vid. STS de 23 de diciembre, núm. de recurso 42/2015.

u organismos públicos pertenecientes a la AGE en su sistema general de gestión. Y es plasmado en un documento que deberá estar a disposición de las autoridades competentes y de los representantes de los empleados públicos. Además, su estructura deberá ser acorde a lo expuesto en el art. 3.3 del RD 67/2010, de 29 de enero, respecto a la amplitud adecuada, a la dimensión y características de cada departamento u organismo público y los elementos que debe contener.

La posibilidad de la aplicación adecuada del Sistema de Gestión de Prevención, lleva consigo el cumplimiento de dos condiciones básicas:

- La primera versará sobre la definición e implantación de los instrumentos de gestión adecuados. Se fijan los objetivos y compromisos que se pretenden adquirir, la asignación de responsabilidades Operativas, el establecimiento de los procedimientos de gestión y la articulación de los mecanismos de participación y consulta. Con esta finalidad, se aprobó en primera instancia, por Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, con carácter de modelo a tomar en referencia por los departamentos y organismos, el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado. Este sistema fue actualizado posteriormente, por Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública¹⁹⁴.

194. Las modificaciones normativas, que, en esta materia, se han producido, tales como la aprobación de un nuevo RD de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE, (RD 67/2010, de 29 de enero). La obligatoriedad, de una coordinación de actividades empresariales específica, en materia preventiva, (RD 171/2004, de 30 de enero). La publicación de una nueva Norma Básica de Autoprotección, (RD 393/2007, de 23 de marzo). Las modificaciones que afectan a la notificación de accidentes y enfermedades, en el ámbito del mutualismo administrativo, (Orden APU 3554/2005, de 7 de noviembre). Las modificaciones, sobre los criterios básicos sobre organización de recursos, para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención (RD 843/2011, de 17 de junio). Debido a los esfuerzos

- La segunda, plasmará un calendario en el que se indiquen las diferentes fases de su elaboración e implantación, imponiendo el punto Tercero de la mencionada Resolución un plazo máximo de seis meses a todas aquellas Subsecretarías de los departamentos y las Direcciones Generales de los organismos públicos de la AGE, en el caso de no haber completado aun la implantación del Sistema.

Los documentos que lo integran, por los que deberán regirse y actualizarse los departamentos y organismos públicos de la AGE, son plasmados en el anexo de la citada Resolución: el Manual de prevención y los Procedimientos del Sistema¹⁹⁵. El primero, es el documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención adoptado. Y el segundo, recoge las actuaciones previstas en el sistema de gestión, descritos en sus correspondientes procedimientos. Premisa fundamental a destacar es que ambos, deben ser documentados. Esto hace, por un lado, que el manual sirva de guía para la correcta elaboración de los procedimientos. Por otro, que se enumeren los procedimientos necesarios, que permitan establecer de manera correcta la forma de realizar determinadas tareas, y el control de su eficacia. El Sistema de Gestión de Prevención, será elaborado y actualizado, y contendrá los elementos esenciales que le permitan la adecuada gestión¹⁹⁶.

para la implantación efectiva del sistema, aun pendiente de completarse y las modificaciones normativas, que pretenden mejorar la eficiencia y calidad de los servicios en la AGE, motivaron la publicación de una nueva Resolución. Al objeto de mejorar, de forma continua, la salud y la seguridad de los empleados públicos, y por ende, facilitar a que todos los implicados asuman las responsabilidades que, en esta materia, les corresponden.

195. Durante el año 2016, han sido aprobados y/o revisados un total de 162 procedimientos, que vienen a añadirse a los 1.493 procedimientos implantados en los años anteriores, en el conjunto de departamentos y Organismos de la AGE. «Informe-resumen sobre recursos y actividades, desarrolladas por la AGE, durante el año 2016 en materia de PRL, de la Dirección General de la Función Pública». Punto 3.1.

196. Vid. IGLESIAS MARTÍNEZ, op.cit., pág. 192. Este autor define y enumera los elementos fundamentales de un Sistema de Gestión de la Prevención en la AGE.

El Sistema de Gestión, correctamente implantado, permite controlar los riesgos y accidentes a los que estén sometidos los empleados públicos. Su implementación, no debe motivarse sólo por razones éticas, morales u obligadas por el cumplimiento de la legislación preventiva. Sino por el contrario, debe integrarse en el seno de las Instituciones públicas, para mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la PRL, lo que permitirá prestar el mismo servicio con igual o mejor calidad, pero sin incremento de coste¹⁹⁷. Por lo general, se aprecia en los departamentos y organismos de la AGE una evolución positiva y a su vez paulatina de la implantación del Sistema de Gestión. Sin embargo, se observa, y a pesar del tiempo transcurrido desde su establecimiento, una aún insuficiente concienciación preventiva¹⁹⁸.

3. La adaptación de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa a la gestión de la PRL

Tras la publicación de la LPRL, en su articulado se hacía referencia a la afectación, entre otros, del personal civil al servicio de las Administraciones públicas. No se debe olvidar que en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa se encuentra incluido además de este personal, el personal militar, no siéndole a este último de aplicación en un primer momento el contenido de esta Ley. No obstante, la LPRL provocó adaptaciones en la estructura orgánica del departamento ministerial, causadas por la necesidad de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones públicas, lo establecido en su art.

197. Vid. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. INSST. *Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020*, INSST, Madrid, 2015, pág. 20.

198. Vid. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, «Informe-resumen sobre recursos y actividades, desarrolladas por la AGE, durante el año 2016 en materia de PRL, de la Dirección General de la Función Pública», pág. 24. [Consulta 25/03/2019], «http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Relaciones_Laborales_y_Dialogo_Social/Prevencion_riesgos_laborales/Memorias/MEMORIA_PRL_2016_ANEXOS.pdf».

31.1. Como es sabido, en el mismo se expone que, para el establecimiento de los servicios de prevención propios o ajenos, en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

Por último, es importante señalar lo dispuesto para el ámbito de las Administraciones públicas en el art. 35.4 LPRL. El mismo se refiere a la posibilidad de establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los delegados de prevención, sin olvidar que las competencias que la LPRL atribuye a éstos, puedan ser ejercidas por órganos específicos. A su vez, la disposición adicional cuarta del RSP, confirmó y consolidó lo anteriormente expuesto en la Ley.

A tenor de lo expuesto y en cumplimiento del mandato existente para la AGE, se publica el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE. En los centros y establecimientos militares, a los efectos exclusivos del personal civil que estuviera destinado en estos lugares, les sería de aplicación lo dispuesto en el art. 3.3 de la LPRL, y en la normativa prevista en la disposición adicional novena de la citada Ley. Y a su vez estos preceptos se desarrollaron por el RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. Relativos a los derechos y obligaciones en materia de seguridad y

salud en el trabajo y de consulta y participación de los trabajadores; para su aplicación, en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y funcionarial civil, que presta sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración militar.

La implantación y adaptación de la LPRL a la AGE, en su inicio, no provoca cambio alguno en la estructura del Ministerio de Defensa¹⁹⁹. Sin embargo, a continuación la Dirección General de Personal, órgano directivo dependiente de la Subsecretaría de Defensa al que corresponde el planeamiento de la política de personal del departamento y la programación y desarrollo de esa política en lo que se refiere a los militares de carrera, los militares de complemento y el personal civil, funcionario y laboral al servicio del Ministerio de Defensa, se le asignan, entre otras funciones, la gestión y planificación la PRL aplicable al personal civil del departamento, conforme a la normativa y acuerdos vigentes en el marco de la AGE. Se trata de la primera ocasión en la que se refleja una función explícita, en materia de PRL para el personal civil perteneciente al Ministerio de Defensa.

Seguidamente, años más tarde, se aprobó el RDPRLFAS para aplicar y adaptar la normativa de PRL a los miembros de carácter militar, y excluir únicamente aquellas actividades de las FAS, cuyas peculiaridades lo impidan. Correlativamente, en el mismo año se publicó la Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de prevención

199. No se observa referencia alguna al respecto, en publicaciones posteriores, ya sea en el RD 76/2000, de 21 de enero, por el que se modifica el RD 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, como en el RD 64/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el RD 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el RD 76/2000, de 21 de enero.

de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa. En ella, se establece que la estructura de los servicios de prevención, será coordinada por una unidad dependiente de la Subsecretaría de Defensa, y de la cual dependerán funcionalmente los órganos de los servicios de prevención de los ejércitos y de las UCO ajenas a los mismos²⁰⁰. Esta Orden, estableció la estructura de los SVPRL en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y en las UCO ajenos a la estructura de los Ejércitos y creó la UCSVPRL, constituida siguiendo el modelo del SVPRL propio, y proporcionando criterios para organizarlos. Por consiguiente, las Unidades que coordinarían los SVPRL en cada uno de los ejércitos se denominarían secciones de prevención, con dependencia funcional de la UCSVPRL.

La adopción de la modalidad de SVPRL propio, no es una decisión particular de la Administración militar, sino que por el contrario es una obligación impuesta por el art. 14 del RSP, a raíz de las dos premisas previstas por el mismo. La primera, relativa al aspecto cuantitativo, pues supera el número mínimo de trabajadores (más de 500). La segunda, atañe a la faceta cualitativa, el desarrollo por parte de sus miembros de alguna de las actividades que se exponen en el Anexo I²⁰¹. El resultado obtenido es invariable, en el caso de

200. La expresión UCO ajenas, se refiere a todas aquellas UCO que no están integradas en la estructura orgánica de los Ejércitos, tales como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Guardia Real, la UME, la Subdirección General Régimen Interior, las Delegaciones de Defensa de Madrid, Badajoz, Islas Baleares, Islas Canarias, Barcelona, Burgos, Ceuta, Ceuta, La Coruña, Melilla, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, y Zaragoza, el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" y el Hospital General de la Defensa Zaragoza.

201. En el Anexo I.g del RSP se recogen entre otras las actividades en inmersión bajo el agua, en este sentido cabe señalar que los Batallones de Intervención de la UME, disponen en su estructura de unidades de rescate acuático. Al respecto, conviene recordar el accidente sufrido por un Suboficial de esta Unidad durante las prácticas del curso de socorrista de rescate acuático, en el que el Juzgado de Instrucción núm. 3 de León, incoó, diligencias previas núm. 3812/2009, por un presunto delito contra la seguridad y salud en el trabajo, al estimarse que el accidentado, al lanzarse al agua desde la embarcación, resultó lesionado por la hélice que carecía de protección. A pesar de estar involucrado el personal militar en una actividad militar para la preparación de una Unidad militar, el Tribunal Supremo falló en STS 3/2011, de 14 de abril, núm. de recurso 6/2010, resolviendo el presente conflicto negativo de jurisdicción a favor de la jurisdicción ordinaria y atribuyendo el conocimiento de las actuaciones, como competente para ello, al Juzgado de Instrucción n.º 3 de León en las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 0003812/2009-E que por el mismo se siguen dejando sin efecto a la jurisdicción militar.

aplicar una u otra premisa. A pesar de lo anterior, existe la posibilidad de asunción parcial de ciertas actividades por un SVPRL ajeno. Esta opción se manifiesta en la licitación a SVPRL ajenos de la realización de los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, al no poder ser asumidos por parte del departamento ministerial, por carencia de personal sanitario civil y militar con la especialidad preventiva de medicina del trabajo²⁰².

La publicación posterior de la Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los ejércitos, modificó la estructura orgánica de los ejércitos. Correlativamente, se incluyó en la nueva estructura de la Inspección General del Ejército, la Sección de Prevención de Riesgos (SCPRLET) encuadrada en la Dirección de Acuartelamiento como responsable directa de su gestión²⁰³.

En el año 2010, tras la aprobación del RD 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, entre otras modificaciones, se establece la asunción por parte de la Subsecretaría de Defensa de las funciones relativas a la PRL, que antes eran solo asumidas por la Dirección General de Personal como órgano dependiente de ella. Por este motivo, la Subsecretaría de Defensa asume funciones tales

202. Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Reconocimientos médicos específicos para el personal funcionario, laboral y estatutario que presta su servicio en el Ministerio de Defensa. Expediente: 2017/SP01010020/ 00000220. BOE, núm. 264, de 31 de octubre de 2017.

203. La Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa, establece que las Unidades que coordinan los servicios de prevención en cada uno de los ejércitos se denominarán Secciones de Prevención.

como la dirección y coordinación de los SVPRL del departamento, conforme a la normativa vigente.

Otro hecho de especial relevancia, tuvo lugar como consecuencia de modificaciones en la normativa general de PRL, que necesariamente han de ser trasladadas a las especialidades de la Administración. Como las concernientes a los órganos de representación, recogidas en su momento por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En este contexto se aprobó el RD 67/2010, de 10 de febrero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la AGE. El objeto, expuesto en el art.1, no varía, pero la diferenciación se observa en su art.2, relativo a su ámbito de aplicación, que con un carácter más amplio, recoge a todo el personal funcionario o estatutario y al personal laboral, sin distinción de su condición civil o militar.

Por lo tanto, en el art. 22 del RDPRLFAS, se estableció la estructura de los SVPRL y se ordenó que ésta sería coordinada por una unidad dependiente de la Subsecretaría de Defensa. Es decir, con las características que se recogían en el art. 24 del mismo Real Decreto, se dispone que dependerían de la misma, funcionalmente, los órganos de los SVPRL de los Ejércitos y de las UCO ajenas a los mismos.

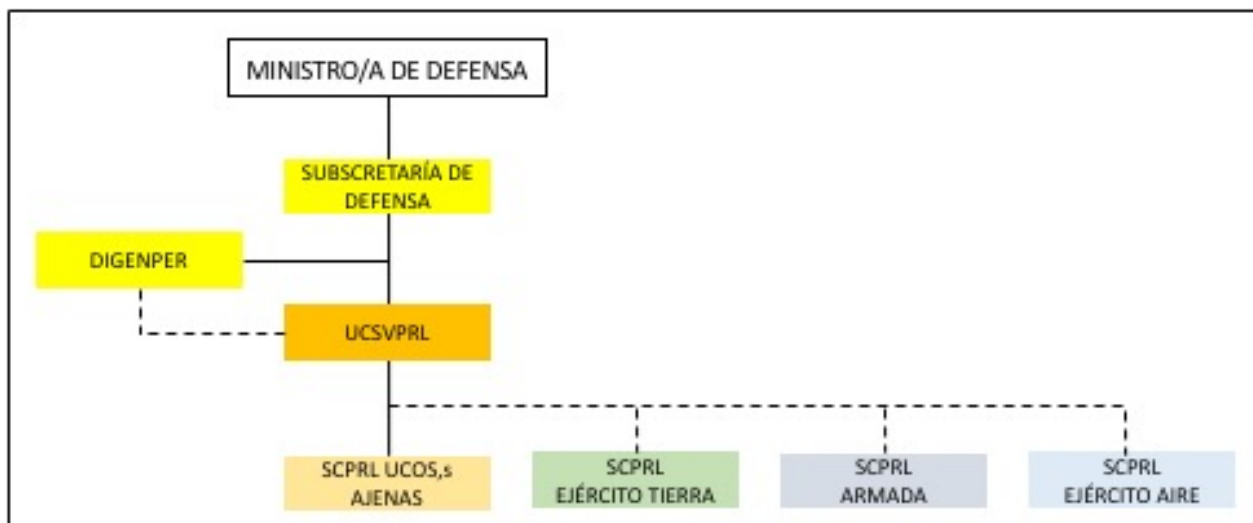
La Subsecretaría de Defensa, como timón de la gestión de la PRL en el Ministerio de Defensa, es el órgano directivo del departamento al que le corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de personal, de

reclutamiento, de enseñanza y sanitaria. Además de las competencias a las que se refiere el art. 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, en particular, y con respecto a la PRL, le corresponde dirigir y coordinar los SVPRL de cada uno de los Ejércitos.

Asimismo, depende orgánicamente de ella la Dirección General de Personal, cuyos cometidos, respecto a la gestión de la PRL, quedaron posteriormente derogados con la publicación de sucesivas normativas. Sin embargo, por Instrucción comunicada núm. 016/2009, de 5 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan normas sobre la UCSVPRL del Ministerio de Defensa, y se aprueba su plantilla orgánica, la Dirección General de Personal asume de nuevo competencias en la gestión de la PRL en el Ministerio de Defensa, al quedar integrada bajo la dependencia administrativa de su Órgano de Dirección, la UCSVPRL. Transcurridos diez años desde su creación, en los que ha quedado demostrado su suficiente solidez y eficacia, se resuelve la delegación de la competencia del Subsecretario de Defensa en materia de dirección y coordinación de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Jefe de la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales²⁰⁴.

204. La delegación de competencias en materia de PRL, se comunican en la Resolución 430/38077/2018, de 16 de abril, de la Subsecretaría de Defensa.

Gráfico 5. Organigrama gestión PRL Ministerio de Defensa. Elaboración propia. Fuente Orden DEF/3573/2008.



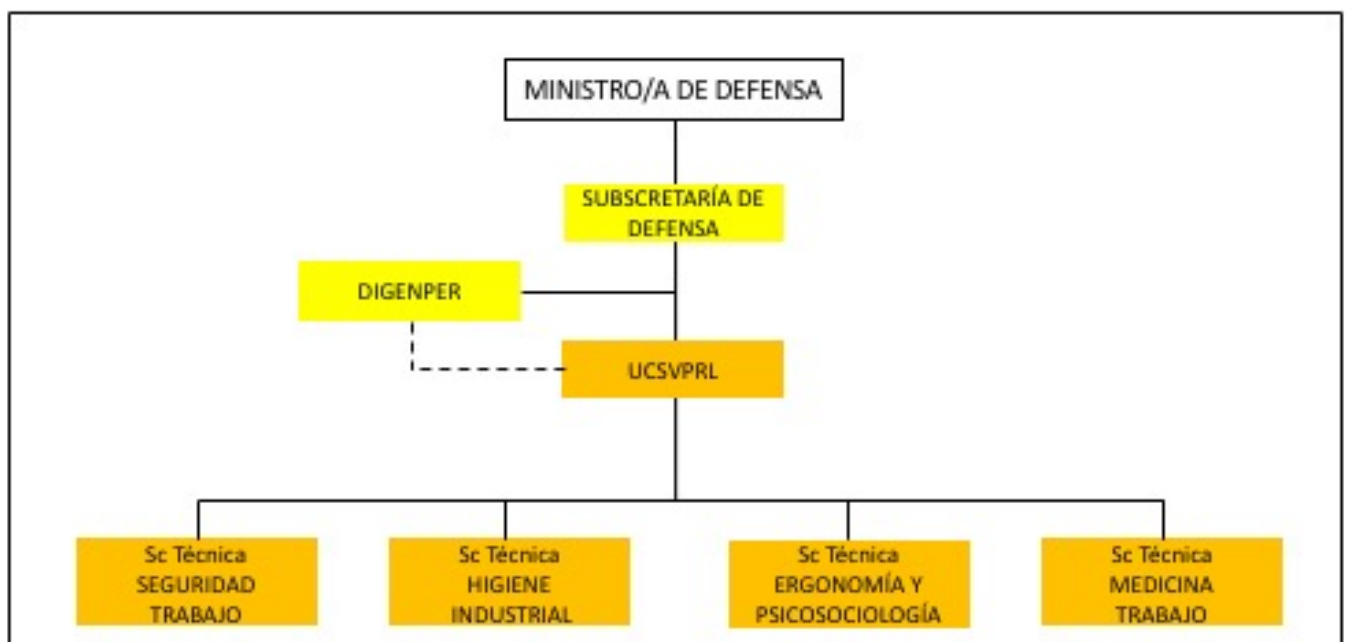
Cadena de relación Orgánica: _____
 Cadena de relación Funcional:

La citada UCSVPRL, se estructura por Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, en cuatro Unidades Técnicas de: Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y Medicina del trabajo, y tendrá como funciones:

- Determinar los criterios y directrices que deban aplicarse por las distintas estructuras que conforman el SVPRL de la Defensa.
- Implantar un sistema de gestión de riesgos laborales, aprobado por la Subsecretaría de Defensa, así como sus correspondientes procedimientos.
- Coordinar las Secciones de Prevención de los Ejércitos y las de las UCO ajenas a los mismos, en cuanto a sus cometidos y competencias.

- Prestar asesoramiento técnico a las Secciones de Prevención respecto a la configuración de los SVPRL, y en cuanto al contenido propio de las especialidades.
- Efectuar el seguimiento de las actividades preventivas respecto al cumplimiento de los programas, planes y objetivos marcados por la Subsecretaría de Defensa.
- Realizar las auditorías internas o las inspecciones técnicas de riesgos laborales que ordene la Subsecretaría de Defensa.
- Planificar la acción formativa de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.
- Actuar como interlocutor ante otros organismos públicos ajenos al Ministerio de Defensa en materia de PRL.

Gráfico 6. Organigrama estructura UCSVPRL Ministerio de Defensa. Elaboración propia.
Fuente Orden DEF/3573/2008.



La Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, estableció la estructura de los SVPRL en el Ministerio de Defensa y los Ejércitos desarrollaron lo expuesto en su texto. Para Martínez Pagán, *«esta estructura ha propiciado un enfoque de la prevención dedicado a la seguridad en las instalaciones y no a las actividades»*²⁰⁵. Hecho que se repetirá en la estructura preventiva orgánica del Ejército.

3.1. La estructura orgánica de la gestión de la PRL en el Ejército de Tierra

De conformidad con lo establecido en el punto cuarto de la Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, el JEME, a través de la Directiva 02/11, de PRL en el Ejército de Tierra, de 18 de febrero, establece los criterios y el desarrollo de forma general de la estructura y de los procedimientos del SVPRL en el Ejército de Tierra, su organización y los cometidos de los órganos que participan en él, así como las relaciones entre ellos. Asimismo, expone su ámbito de aplicación, que comprende todas las actividades que realicen las UCO y las BAE del conjunto del Ejército de Tierra, con excepción de aquéllas denominadas como de I/A y Operativas.

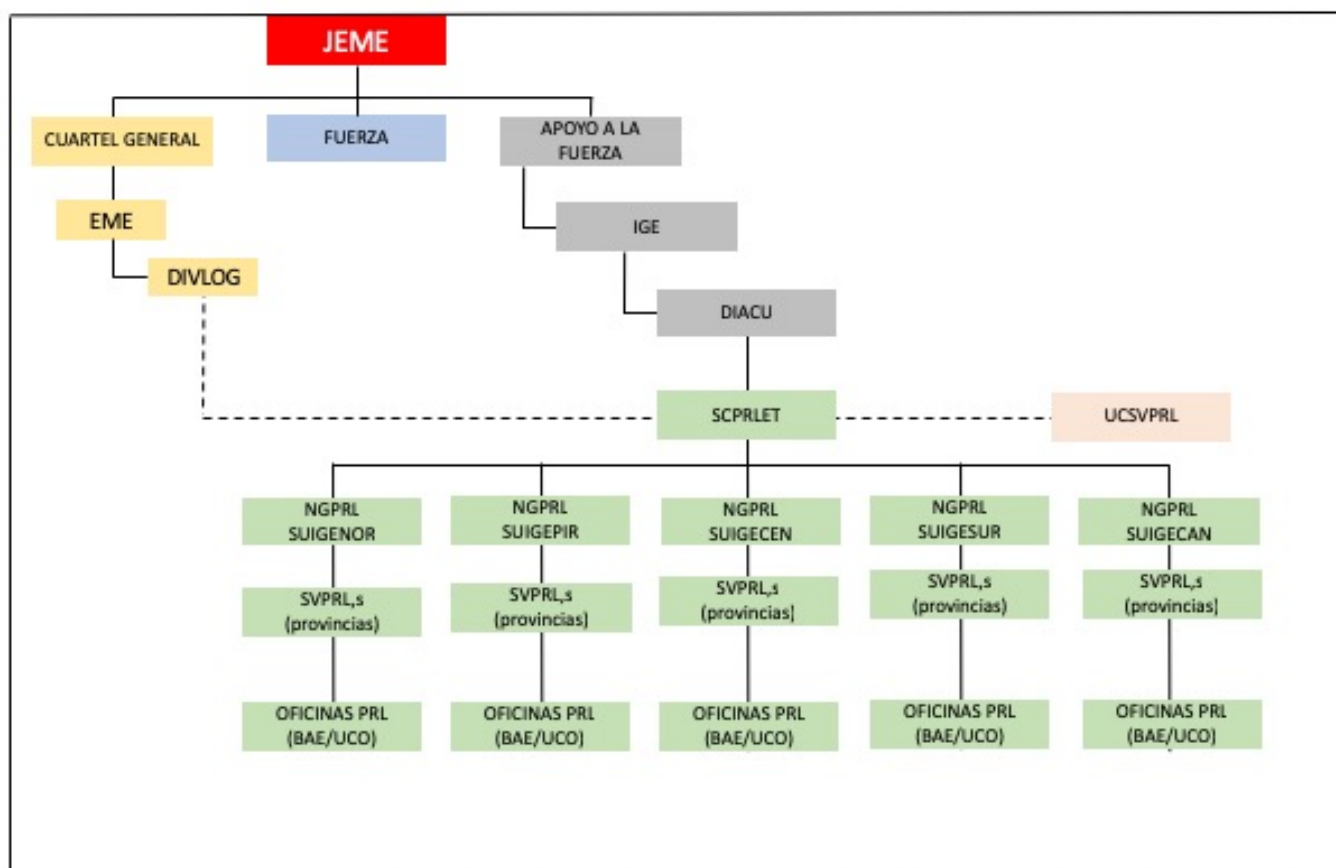
Correlativamente desarrolla la estructura del SVPRLET, de los tres núcleos que constituyen la organización del Ejército de Tierra (Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza), el JEME asigna distintas responsabilidades en materia preventiva al Cuartel General y al Apoyo a la Fuerza, basado en el Sistema de Acuartelamiento. Para ello, la Sección de Acuartelamiento e Infraestructura de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército

205. Vid. MARTÍNEZ PAGÁN, C., *Aspectos diferenciales de la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las actividades de Instrucción, Adiestramiento y Operativas*, Monografías CEMFAS, CESEDEN, Ministerio de Defensa, Madrid, 2017, pág. 14.

(DIVLOG) órgano perteneciente al Cuartel General, asume la responsabilidad del planeamiento, control y asesoramiento en materia preventiva al JEME, como elemento de apoyo a la decisión. A su vez, el JEME encomienda a la cadena de Mando de la IGE, como órgano del Apoyo a la Fuerza, la responsabilidad en el ámbito del Ejército de Tierra y en el marco del Sistema de Acuartelamiento, de la dirección, gestión, administración y control de la PRL, y esta a delega en su órgano subordinado la DIACU, responsable del SVPRP del Ejército de Tierra en la que se ubica la SCPRLET, con una doble dependencia: orgánica por su cadena de Mando y funcional de la DIVLOG y de la UCSVPRL del Ministerio de Defensa. La estructura del SVPRLET se organiza en:

- Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra (SCPRLET).
 - Ubicada en la DIACU.
- Negociados de Prevención de Riesgos Laborales (NGPRL).
 - Ubicados en las Subinspecciones Generales del Ejército.
- Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SVPRP).
 - Ubicados en las BAE y en las localidades que se determinen por la IGE.

Gráfico 7. Organigrama estructura SVPRL del Ejército de Tierra. Elaboración propia.
Fuente Directiva 02/2011.



Cadena de relación Orgánica: _____
Cadena de relación Funcional:

Se considera, asimismo, de interés exponer brevemente la estructura para la implantación de la PRL en los restantes ejércitos componentes de las FAS. La Armada adaptó su doctrina y procedimientos de seguridad a la legislación de riesgos laborales, a través de la Seguridad Operativa (SEGOP). La doctrina de la SEGOP está dirigida a asegurar la operatividad de la Armada, preservando sus medios humanos y materiales al más alto nivel de eficacia posible para cumplir sus misiones, esta aporta nuevos elementos para preservar la seguridad y salud del personal de la Armada, ya sea civil o militar. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), instó regular la PRL y la SEGOP en la Armada a través de la Instrucción Permanente de Logística núm. 01/2010, de 17

de marzo de 2010. La misma, establece las directrices necesarias para la organización e implantación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Armada a través de la Sección de PRL, y unifica ésta con la SEGOP en una misma orgánica (SCPRL/SEGOP). Según Martínez Pagán, *«Una de las características singulares de la Armada es la operación en la mar. Por parte de la Sección PRL/SEGOP se tiene muy en cuenta este factor y realizar las inspecciones y evaluaciones en la flota del mismo modo que se hace en instalaciones fijas»*, característica particular que la diferencia de los demás Ejércitos y del propio Ministerio de Defensa²⁰⁶. Otro matiz que distingue esta estructura de la del Ejército de Tierra es su encuadramiento, la SCPRL/SEGOP de la Armada se encuentra encuadrada en su núcleo del Cuartel General, en la cadena de Mando de la DIVLOG de su Estado Mayor, con dependencia funcional de la UCSVPRL del Ministerio de Defensa. Como se observa prescinde de los órganos de los núcleos de la Fuerza y de Apoyo a la Fuerza para responsabilidades y cometidos en materia preventiva.

El Ejército del Aire reguló el proceso de creación de su estructura de PRL diferenciando una actividad más que no se regiría por la normativa preventiva, pues el ámbito de aplicación de la seguridad de vuelo se regulará de acuerdo con su normativa específica. El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), a través de la Directiva 11/2011, de 28 de febrero, definió su estructura e implantación de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, crea la SCPRL del Ejército del Aire encuadrada en el núcleo del Cuartel General, en la cadena de Mando de la División de Operaciones (DIVOPE) de su Estado

206. MARTÍNEZ PAGÁN, loc.cit., pág. 16.

Mayor, con dependencia funcional de la UCSVPRL del Ministerio de Defensa. De igual forma que la Armada prescinde de los órganos de los núcleos de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza, por considerarse que desde ese encuadramiento se coordina mejor con otras Secciones, como la de Seguridad de Vuelo y Protección de la Fuerza.

En resumen, tres Ejércitos con un objetivo común, la implantación de la PRL en su organización, pero con estructuras diferentes. Como se observa el Ejército de Tierra es el único que imprime un carácter a su SVPRL basado en las instalaciones de sus BAE. Para Garcés Bonet, la protección del personal militar en ningún caso debe vincularse a una instalación, *«ya que esta no tiene nada ver con las personas ni con sus actividades salvo el simple hecho de darles un marco espacial»*²⁰⁷. Correlativamente, se manifiesta el rechazo a la estructura preventiva del Ejército de Tierra, al incardinar a un órgano cuya responsabilidad se basa en la infraestructura más que en el personal. De hecho, el autor plasma *«El motivo inicial para la implantación de la estructura es el imperativo legal, [...], hace que su existencia parezca el mero cumplimiento formal de una orden más que la muestra de una auténtica preocupación por el bienestar de los subordinados»*²⁰⁸. Según Martínez Pagán, esta estructura va dirigida a los procesos de trabajo existentes en las instalaciones, de esta manera las medidas preventivas en I/A y Operativas quedan desligadas de ella²⁰⁹.

207. GARCÉS BONET, op. cit., pág. 426.

208. Loc.cit., pág. 427.

209. MARTÍNEZ PAGÁN, op.cit., pág. 15.

Por lo tanto, la estructura preventiva del Ejército de Tierra deslinda la protección dirigida a las actividades comunes de las excluidas, y está basada fundamentalmente en la infraestructura de sus instalaciones, sin tener en cuenta que éstas van más allá de los límites perimétricos de las BAE. En este sentido Martínez Pagán, opina que si la estructura preventiva del Ejército de Tierra estuviera encuadrada en un organismo relacionado con la seguridad o realización de actividades más que con las instalaciones como es la DIACU, se conseguiría una mejor conexión y asesoramiento de la PRL en actividades de I/A y Operativas²¹⁰. En palabras de Garcés Bonet, *«La estructura prevencionista del Ejército de Tierra se ha diseñado de manera que implique al mínimo imprescindible de personal, y con eso la carga de trabajo ya casi puede considerarse excesiva»*²¹¹. Esta afirmación se constata al tener que atender los SVPRL a todas las UCO alojadas en BAE de un área geográfica provincial, con un solo Técnico Superior en PRL, incrementando su carga de trabajo muy por encima de sus posibilidades.

4. La labor de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros y establecimientos militares

Los antecedentes normativos indican que el régimen de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en los establecimientos militares se halla contenido en el RD 2205/1980, de 13 de junio. En el art.9 de la LPRL, se atribuye a la ITSS la función de vigilancia y control de la normativa de PRL. Para el cumplimiento de la misión encomendada, se le asignan una serie de funciones, de la que se destaca en relación con este punto, la expresada en el apartado

210. Loc.cit., pág. 16.

211. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 434.

«f»: «Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores». Al respecto, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, expone en su art. 19.2 la excepción de la actuación de la ITSS, siempre que, su vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos de las administraciones públicas regidos por su normativa específica. No obstante, sin perjuicio de la competencia de la ITSS en las materias no afectadas por la misma. En esta excepción se encuentran los establecimientos y centros militares, tal y como se refleja en el art. 2.2 del reglamento de organización y funcionamiento de la ITSS²¹².

Con ello, parece acreditarse que mientras exista un interés mayor que la eliminación de los riesgos para la vida e integridad física del propio trabajador, éste prevalecerá, pues en caso contrario conllevaría un perjuicio al resto de ciudadanos. En palabras de Monereo Pérez, «[...] la garantía del servicio de seguridad ciudadana supone un sacrificio del derecho a una prevención eficaz del obligado a realizarla»²¹³. Sobre este aspecto, se observa la inaplicación de la función de vigilancia y control de la ITSS sobre los empleados públicos civiles en los casos de existencia de riesgo grave e inminente por realizar sus competencias en centros y establecimientos militares²¹⁴.

212. Las excepciones del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se reflejan en el RD 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

213. Vid. MONEREO PÉREZ, J.L., «Objeto, ámbito de aplicación y definiciones», MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M.A., (Dir.), *Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios*, Comares, Granada, 2004, pág. 42.

214. Los art. 2.3 y 6.1 del RD 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la AGE manifiestan que en el caso de existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud del personal queda excluida la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros y establecimientos militares y las actividades a que se refiere el artículo 3.2 de la LPRL.

Se añade, además, que en antecedentes normativos vigentes se encuentra que para el personal civil no funcionario destinado en estos centros y establecimientos militares, la función de la vigilancia y control de la normativa sobre PRL se le encomienda a la Sección Laboral de los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire²¹⁵. A esta se le asigna la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de condiciones de trabajo, Higiene y Seguridad. De esta forma, se constata la desvinculación de la ITSS y la administración Militar.

No obstante, y a pesar de lo anterior, existen empresas ajenas a la AGE y, por ende, al departamento ministerial que, mediante contrato de suministro, concesión o de cualquier otra clase, están dedicadas, total o parcialmente a la producción de material o a la realización de obras o ejecución de servicios para la Administración militar. Sobre ella, la ITSS sí ejercerá sus funciones, por encontrarse éstas bajo su ámbito funcional de actuación, a pesar de ubicarse en centros y establecimientos militares. Con la única salvedad de que, debido a las restricciones de acceso a estos lugares de trabajo, la ITSS deberá avisar con una antelación mínima de veinticuatro horas al Jefe del Establecimiento, al objeto de informarle de la actuación inspectora²¹⁶. A pesar de ello, si la actuación de la ITSS sobre estas empresas pudiera perjudicar el interés de la Defensa y Seguridad Nacional, el Jefe del Establecimiento, con carácter excepcional, podrá no autorizarla, o autorizarla condicionada a algún requisito o limitada a algún

215. En el art. 75.4, del RD 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos militares, se establecen las competencias de la Sección laboral de los Cuarteles Generales de los ejércitos.

216. La Orden PRE/2457/2003, de 29 de agosto, aprueba la Instrucción sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militares.

lugar. De nuevo, se observan las peculiaridades inherentes a la Administración militar, que la diferencian y limitan la actuación de otros organismos.

CAPÍTULO III

TRANSPOSICIÓN DE LA DM EN EL ACERVO JURÍDICO DE OTROS PAÍSES DE LA UE. LA IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS FAS

1. La DM y el inicio de la armonización en materia de seguridad y salud en el trabajo en los países de la UE

El Diario Oficial de las Comunidades Europeas (actual Diario Oficial de la Unión Europea DOUE), en su núm. 189, de fecha 29 de junio de 1989, promulgaba una nueva Directiva, que incrementaba su acervo comunitario, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Esta publicación constituye la base sobre la que se asienta la normativa comunitaria de seguridad y salud en el trabajo, es la denominada DM²¹⁷.

Se pretendía con ella la armonización de la política social de los países miembros en esta materia. Situación que se antojaba complicada, pues no hay que olvidar que la UE en sus inicios, tuvo un marcado interés económico y que posteriormente evolucionaría hacia otros aspectos más sociales²¹⁸. Por lo tanto, hasta ese momento cada Estado había desarrollado su propia normativa en seguridad y salud en el trabajo y la armonización pretendida podría provocar situaciones desiguales y distorsiones entre sus miembros.

217. Vid. CASTELLÁ LÓPEZ, J.L., *La Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de integración de la Unión Europea*, OIT, Lima, 1996, pág.13.

218. Loc.cit., pág. 2. El camino hacia la integración económica se desarrolló fundamentalmente en tres fases: en la primera, que comenzó con el Tratado de la Comunidad Económica Europea (1957), se buscó la consecución del denominado Mercado Común: en la segunda, a raíz del Tratado del Acta Única Europea (1986), la del Mercado Interior: en la tercera y última, a partir del Tratado de la Unión Europea (1992), se buscó el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria que llevó a la adopción de una moneda única: el «euro».

La Directiva pretendía conseguir, como objetivo principal, una convergencia real hacia una política social que suscitara una estrecha colaboración entre los Estados miembros, en cuestiones relacionadas con el empleo, las condiciones de trabajo, la formación y el perfeccionamiento profesionales, la seguridad social, la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, la higiene en el trabajo y el derecho de sindicación y la conclusión de convenios colectivos entre trabajadores y empresarios.

En este capítulo se aborda un análisis comparativo de los aspectos diferenciales, sobre la interpretación del ámbito de aplicación de la DM y el desarrollo de la normativa de PRL que afecta al personal de carácter militar, en tres países pertenecientes a la UE: Francia, Italia y Portugal²¹⁹. La elección de Francia, viene justificada por la consideración de que en materia de seguridad y salud en el trabajo, este país aporta una experiencia dilatada y normalizada²²⁰. En el caso de Italia, por la carencia en sus FAS de una normativa específica en esta materia, que le obliga a seguir la normativa general del Estado. Por último, se ha elegido Portugal, por tener unas características históricas, políticas y sociales altamente comparables a las de España y, además, por desprenderse del estudio de su normativa, una exclusión reiterada del personal militar en su legislación interna, a pesar de haber transpuesto en dos ocasiones la DM²²¹.

El análisis se ha dividido en dos fases: la primera versa sobre la interpretación que realizaron los países citados, al incluir o excluir al personal de

219. Las fuentes bibliográficas y textos normativos en otros idiomas, están traducidas por el doctorando.

220. Vid. COBOS SANCHÍS, D., «Los estudios universitarios de los profesionales de la salud ocupacional en Francia, Portugal y Reino Unido: aproximación comparada.», *Revista Fuentes*, núm. 9, 2009, pág. 215.

221. Ibid.

condición militar en el ámbito de aplicación de su normativa de transposición de la DM. Este primer análisis se basa en los principios de generalidad y uniformidad, emanados del art. 2 de la DM²²². La segunda fase se centra en un estudio comparativo sobre la implementación de la normativa de PRL estatal aplicada al personal militar perteneciente a las FAS en Francia, Italia, Portugal y España.

Esta metodología, permite analizar desde una visión de conjunto, el tratamiento que ha recibido el personal militar en estos Estados, en relación con la seguridad y salud en el trabajo.

2. El ámbito de aplicación de la DM

El cambio sustantivo que pretendía la DM, era constituir un marco normativo de aplicación general en relación a la protección de los riesgos laborales del personal recogido en su ámbito de aplicación, quedaba delimitado con su adopción. Y ello suscitó diversos problemas, ya fueran por la exclusión o por la modulación, en razón de la actividad desarrollada por algunos colectivos de trabajadores o por el alcance del riesgo.

El art. 2.1 de la DM determina taxativamente, en un sentido generalista, ya sean los sectores a los que se aplica la Directiva. Estos son todos los sectores de actividades, públicas o privadas. Sin embargo, en el párrafo primero del segundo apartado limita este ámbito de aplicación cuando se opongan a ello de

222. En la transposición promulgada en los respectivos Estados de la DM, se produjeron diversos incumplimientos, al no contemplarse dichos principios en que se debe considerar a todos aquellos que realicen un trabajo de forma subordinada, ya sea en el sector público o privado. Vid. CARDENAL CARRO, M., «La prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado», *Revista Aranzadi Social*, núm. 5, 1998, pág. 115.

manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, las desarrolladas por las FAS o la Policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios de Protección Civil. Para estos casos, será preciso velar para que la seguridad y salud de los trabajadores quede asegurada, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los objetivos de la presente Directiva.

En los Estados miembros, la interpretación del alcance y contenido de la excepción referida en el apartado segundo, dependiendo de su visión desde una perspectiva amplia o limitada, ha generado distintas dudas en su correcta aplicación. Lo que ha provocado que a colectivos completos de la función pública, entre otros al militar, se les haya privado de la protección de la seguridad y salud en el trabajo, por el mero hecho de prevalecer una actividad particular sobre el resto. En estos casos, la intervención de la jurisprudencia comunitaria ha servido de guía para establecer un patrón y unas normas del procedimiento a seguir para la correcta interpretación de la inaplicación de la Directiva.

En varias sentencias, el TJUE ha expresado el objeto fundamental que inspira a la DM, que no es otro que promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores²²³. Según lo expuesto en su art. 2 apartado primero, cabe entender que el ámbito de aplicación ha de ser interpretado de manera extensiva y que las limitaciones o excepciones de su aplicación, expuestas en su apartado segundo, deben ser aplicadas de forma restrictiva, y

223. El objeto fundamental que inspira a la DM se observan en las siguientes sentencia del TJUE: STJUE, de 3 de octubre de 2000, asunto C-303/98; STJUE (Sala Sexta), de 3 de julio de 2001, asunto C-241/99; STJUE (Gran Sala), de 5 de octubre de 2004, asunto C-132/04, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01; ATJUE (Sala Segunda), de 14 de julio de 2005, asunto C-52/04; ATJUE (Sala Sexta), de 3 de julio de 2001, asunto C-241/99; STJUE (Sala Segunda), de 12 de enero de 2006, asunto C-132/04.

nunca de manera generalista, pues ello provocaría la exclusión de sectores globales de trabajadores. Es decir, con una interpretación distinta se vulneraría el mandato comunitario, que en virtud de lo dispuesto en el art. 118A del TCCE persigue como objeto fundamental promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo²²⁴.

Se determina, por lo tanto, que toda exclusión debe estar justificada, siguiendo el criterio de indispensabilidad y excepcionalidad de la actividad en cuestión²²⁵. Y en el caso de aplicarse, cabe entender que no desaparece la protección al trabajador, sino que quedaría reducida o sustituida por otras normas particulares de seguridad que avalen su protección. Por lo tanto, no se justificaría la exclusión absoluta de un sector de trabajadores por razón de su actividad, como es el caso de las FAS, basándolo en la protección de la salvaguarda de la defensa nacional²²⁶.

En este sentido el TJUE, en el Auto de 14 de junio de 2004, ya expresó que de conformidad con el tenor literal del art. 2, apartado 2, párrafo primero de la DM, no se excluye del ámbito de aplicación de ésta más que determinadas actividades concretas, ya sea en la función pública o en otras, por oponerse de manera concluyente a la aplicación de la citada Directiva las particularidades

224. El art. 118 A, del TCCE, en su apartado primero tercero, establece que los Estados miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio de trabajo para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y en su apartado tercero añade, que las disposiciones establecidas en virtud del presente artículo no serán obstáculo para el mantenimiento y la adopción por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección de las condiciones de trabajo, compatibles con el presente Tratado.

225. Vid. MUÑOZ RUIZ, A.B., *El sistema normativo de prevención de riesgos laborales*, Lex Nova, Valladolid, 2009, pág. 89.

226. En el párrafo 24 de la STJUE, de 12 de enero de 2006, asunto C-132/04, se procede recordar que el criterio utilizado por el legislador comunitario para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva 89/391 no está fundado en la pertenencia de los trabajadores a los distintos sectores de actividades contemplados en el art. 2, apartado 2, párrafo primero, de dicha Directiva, considerados globalmente, como las fuerzas armadas, la policía y el servicio de protección civil, sino exclusivamente en la naturaleza específica de ciertos cometidos especiales desempeñados por los trabajadores dentro de dichos sectores, que justifica una excepción a las normas dictadas por la citada Directiva, en razón de la absoluta necesidad de garantizar una protección eficaz de la colectividad (auto Personalrat der Feuerwehr Hamburg, antes citado, apartado 51).

inherentes a estas actividades²²⁷. De esta forma, no puede justificarse que un Estado miembro considere cubierta por dicha excepción, en términos generales, todas las actividades ejercidas en el seno del sector excluido.

2.1. Interpretación en relación al personal militar. Transposición de la legislación en algunos países de la UE

La transposición de Directivas europeas en materia de seguridad y salud laboral en los países miembros, ha generado una normativa que altera, en ocasiones, el panorama o la forma de abordar las cuestiones relativas a la PRL²²⁸. Los veintiocho países que actualmente conforman la UE, de manera explícita o implícita, contemplan en sus legislaciones internas en esta materia al personal militar. Unas en su origen, y otras a consecuencia de los procedimientos generados por la Comisión Europea, a causa de los incumplimientos detectados. En particular, la interpretación del art. 2 de la DM afectó de diferente manera al personal militar perteneciente a los tres países seleccionados.

En Francia la fuente esencial en materia de SST en el acervo jurídico francés, emana de la DM. Su regulación no se basa en un texto normativo único y exclusivo, sino que se encuentra incluida en el Código de Trabajo, concretamente en su Parte Cuarta: Seguridad y Salud en el Trabajo. Este texto normativo, regulador de las condiciones laborales en Francia, establece las responsabilidades y derechos de los trabajadores y empresarios. Fue modificado en profundidad en el año 2016, a raíz de la nueva ley laboral, promulgada en agosto del mismo año²²⁹. No obstante, esta modificación no tuvo repercusión

227. Cfr. ATJUE (Sala Segunda), de 14 de junio de 2004, asunto C-52/04.

228. Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, S., op.cit., pág. 14.

229. Vid. *Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels*, conocida como «loi El Khomri».

alguna en la Parte Cuarta, dado que ésta fue modificada anteriormente por la Ley 91-1414, de 31 de diciembre²³⁰. Esta última Ley, significó un cambio en el contenido del Código de Trabajo y en el de Salud Pública, para cumplir las exigencias de la UE, consolidándose como normas de transposición de la DM en la legislación francesa²³¹.

El ámbito de aplicación de la seguridad y salud en el trabajo, se define en el art. L4111-1, del Código del Trabajo francés, donde se establece, de forma general, su aplicación a empresarios y trabajadores²³². A excepción de las actividades empresariales en minas y canteras, que deberán ser completadas con la normativa específica del sector²³³. En su art. L4111-2, se establece que para las instituciones y grupos las disposiciones de la Parte Cuarta pueden estar sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta sus características específicas²³⁴.

De igual forma, también son de aplicación a las instituciones públicas de carácter industrial y comercial, a las instituciones administrativas públicas cuando contrata a personal en términos de derecho privado, y en los centros de salud, sociales y médico-sociales mencionados en el art. 2 de la Ley núm. 86-33, de 9 de enero de 1986, sobre las disposiciones legales relativas a los hospitales públicos. Así como a las agrupaciones de cooperación sanitaria de

230. Vid. *Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail. Version consolidée au 21 avril 2017.*

231. Vid. *Code de la santé publique. Version consolidée au 17 avril 2017.*

232. El texto literal expresa «[...] les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ain si qu'aux travailleurs.», «Derecho Privado», haciendo alusión a la relación entre particulares, en defensa de sus intereses.

233. Vid. Art. L4111-4, Code du Travail.

234. Vid. Art. L4111-1, Code du Travail. 1. En público industrial y comercial; 2. En las instituciones administrativas públicas cuando el empleo de personal en términos de derecho privado; 3. En los centros de salud, sociales y médico-sociales mencionados en el art. 2 de la Ley N° 86-33 de 9 de enero de 1986 las disposiciones legales relativas a los hospitales públicos, así como las agrupaciones de cooperación sanitaria de derecho público mencionado en 1° del art. L. 6133-3 del Código de la Salud Pública.

derecho público mencionadas en el primer punto del art. L. 6133-3 del Código de la Salud pública.

Tras una primera lectura, se suscita alguna duda con respecto a la inclusión del personal militar, pues no se hace referencia explícita alguna. Ahora bien, en el Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo, de la salud y la seguridad en el Ministerio de Defensa, en su art. 6, se establece que, con sujeción a las disposiciones de este Decreto, el personal militar que lleva a cabo las mismas actividades que a las asignadas al personal civil perteneciente al departamento ministerial, se rige por las normas técnicas de los Libros I a V de la Parte Cuarta del Código del Trabajo y por los Decretos desarrollados a tenor de su promulgación. Por lo tanto, queda corroborada la afectación del personal de carácter militar, perteneciente a los distintos Cuerpos pertenecientes al Ministerio de Defensa francés, al sistema de seguridad y salud en el trabajo regulado en el ámbito de forma estatal. Aunque con las limitaciones restrictivas vinculadas a aquellas actividades militares que así lo determinen.

En Italia, a diferencia de otros Estados miembros que aglutinaron junto con la DM otras Directivas específicas en una misma normativa, se optó por la aprobación de la Ley marco de seguridad y salud en el trabajo: el Decreto Legislativo núm. 626, de 19 de septiembre de 1994, como transposición directa de la DM²³⁵. A partir de ella, se incorporaron las Directivas específicas²³⁶, a tenor

235. Vid. *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.*

236. Directivas específicas 89/654 / CEE, 89/655 / CEE, 89/656 / CEE, 90/269 / CEE, 90/270 / CEE, 90/394 / CEE, 90/679 / CEE, 93/88 / CEE, 95/63 / CE, 97/42 / CE, 98/24 / CE, 99/38 / CE, 99/92 / CE, 2001/45 / CE, 2003/10 / CE, 2003/18 / CE y 2004/40 / CE.

de las modificaciones realizadas mediante el Decreto Legislativo núm. 242, de 19 de marzo de 1996.

Actualmente el Decreto Legislativo núm. 626, de 19 de septiembre de 1994, está derogado en aplicación del art. 1 de la Ley número 123, de 3 de agosto de 2007, relativa a la protección de la salud y seguridad en el trabajo. En dicho Decreto Legislativo, se concedía al Gobierno la autorización para adoptar uno o más Decretos Legislativos, para la reorganización y reforma de las disposiciones vigentes en esta materia. Y conforme a ello, se promulgó el Decreto Legislativo número 81, de 9 de abril de 2008, en el cual se centrará el estudio del ámbito de aplicación. Es destacable la precisión con la que perfila esta normativa su alcance. En su art. 3, define de forma diáfana su aplicación a todos los sectores de actividad, ya sean privados o públicos, y a todo tipo de riesgos que en ellos se contemplen. En este sentido, Di Spilimbergo destaca este derecho a la luz de las disposiciones constitucionales reflejadas en el art. 32²³⁷. No obstante, en su punto dos especifica las actividades que deberán regirse de forma particular, por la promulgación de Decretos de los correspondientes Ministerios, pero en concordancia con lo expuestos en la normativa expresada²³⁸. En este caso se encuentran, entre otros sectores: las FAS, el Arma de Carabineros y la Guarda de Finanza, a los que se aplican las disposiciones del presente Decreto Legislativo. Sin olvidar las necesidades reales particulares,

237. DI SPILIMBERGO, I., «I volontari», PERSIANI, M., Y LEPORE, M. (Dirs.), en *Il nuovo Diritto della sicurezza sul lavoro*, UTET Giuridica, Torino (Italia), 2012, pág. 48.

238. «Respecto a las Fuerzas Armadas y Policía, el departamento de bomberos, asistencia pública y defensa civil, de servicios de protección civil, en el ámbito de las estructuras judiciales, penitenciarias, de los destinados a la finalidad instituciones a las actividades de los organismos con funciones en el ámbito de la Orden público y seguridad, universidades, institutos de Educación universitaria, instituciones de educación superior Instituciones artísticas y coreográficas, educativas y educativas de cada orden y grado, de las organizaciones voluntarias mencionadas en Ley 1 de agosto de 1991, n. 266, y los medios de transporte aéreo y gente de mar, las disposiciones de este decreto legislativo les serán de aplicación teniendo en cuenta las necesidades particulares reales al servicio realizado o a las particularidades organizativas identificadas». Vid. Art. 3.2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

relacionadas con el servicio o sus peculiaridades organizativas, y la seguridad durante las operaciones y actividades llevadas a cabo. Según Marando, desde un ángulo de tipo sustancial, es fácil ponerse de acuerdo sobre la admisibilidad de ciertas restricciones para la actividad militar en materia de seguridad y salud, cuando éstas afecten a la seguridad del Estado²³⁹.

En Portugal, la DM se transpuso a su ordenamiento jurídico a través de la publicación del Decreto Ley núm, 441/91, de 14 de noviembre, que establece el marco legal, de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Esta normativa supuso la implantación de un marco normativo completo para la seguridad y salud en el trabajo en Portugal²⁴⁰. En su exposición de motivos señala que el objeto de esta normativa es cubrir la necesidad de adaptar el ordenamiento interno a la DM. Esta norma, aún inspirada en el principio de universalidad, no se aplicó a todos los sectores. En este sentido y respecto al personal militar señala, en su art. 2 punto 4, que no será de aplicación a aquellas actividades de servicio público, tales como FAS o Policía y las actividades específicas en los Servicios de Protección Civil. Sin perjuicio de adoptar medidas para garantizar la seguridad y la salud de sus empleados.

A pesar de lo anterior, el legislador adoptó, ocho años más tarde, el Decreto Ley núm. 488/99, de 17 de noviembre, en el que se definen las formas de aplicación del régimen jurídico de la seguridad, higiene y salud en el trabajo para

239. Vid. MARANDO, G., *Il sistema vigente del Diritto della sicurezza del lavoro*, Giuffrè editore, Milano, 2006, pág. 366.

240. Posteriormente fue modificada por el Decreto Ley núm. 133/99, de 21 de abril, en su preámbulo advierte que teniendo en cuenta que algunas reglas de la Directiva (89/391/CEE) no fueron adecuadamente transpuestas, se procede a algunas alteraciones en la referida norma, con el fin de asegurar el respeto a las prescripciones de la Directiva en el ámbito de las relaciones de trabajo de derecho privado, «*Tendo em consideração que algumas regras da directiva não foram adequadas no âmbito das relações de trabalho de direito privado.*». Se desarrolla por el Decreto Ley núm. 26/94, de 1 de febrero, en el que se dispone el régimen de organización y funcionamiento de las actividades y servicios de seguridad, higiene y salud en el trabajo establecido en el art. 13 del Decreto Ley 441/91, de 14 de noviembre.

la Administración Pública. De igual manera, en su art. 3 punto 2, excluye, entre otros colectivos, a las FAS, y aquellas actividades que en el ejercicio de sus competencias deban de depender de criterios de seguridad o de emergencia, sin perjuicio de la adopción de medidas para garantizar la seguridad y la salud de este personal. En ambas normativas, se cumplía de forma literal lo expuesto en la DM, y existía la referencia a la inclusión del personal militar, exceptuando actividades que lo impedían.

Este Decreto Ley y toda la normativa diversa en materia de seguridad y salud en el trabajo, fue derogada por la promulgación de la Ley núm. 102/2009, de 10 de septiembre, marco legal para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo²⁴¹. Su publicación, surgió como desarrollo del art. 284 de la Ley núm. 7/2009, de 12 de febrero, del Código de Trabajo, que estableció que la prevención sería regulada por legislación específica en esta materia. Esta novedosa normativa, establece un nuevo régimen en materia de seguridad y salud en el trabajo e incorpora en su texto la DM y otras Directivas Comunitarias específicas. Sin embargo, y a tenor de lo expuesto en su art. 3, su ámbito de aplicación contempla sólo a los sectores corporativos y privados, y excluye a la función pública. Este hecho constituía un gran paso atrás, pues si en la normativa derogada aparecía de una forma implícita la inclusión del personal militar, en la actual quedaba apartado del ámbito de aplicación subjetivo.

241. La Ley núm. 102/2009, de 10 de septiembre, ha sufrido hasta la fecha distintas modificaciones, pero ninguna de ellas hace referencia a la seguridad y salud del personal militar. (Lei n.º 28/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Lei n.º 146/2015 - Diário da República n.º 176/2015, Decreto-Lei n.º 88/2015 - Diário da República n.º 103/2015, Declaração de Retificação n.º 20/2014 - Diário da República n.º 61/2014, Lei n.º 3/2014 - Diário da República n.º 19/2014, Lei n.º 42/2012 - Diário da República n.º 166/2012).

En este sentido, es necesario aclarar si esta incidencia se puede resolver acudiendo a la primacía del Derecho Comunitario, o al principio de interpretación conforme a la Directiva de la UE²⁴². De hecho, la normativa también colisiona directamente con lo expuesto en el art. 4.1.i, del Anexo de la Ley núm. 35/2014, de 20 de junio, Ley general del empleo en funciones públicas, pues con sujeción a las disposiciones del Código del Trabajo y la respectiva legislación complementaria, debe promover la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la prevención. Por lo tanto, parece que se produce una contradicción entre estas dos normas²⁴³. Y a consecuencia de ello, se observa que existe un vacío jurídico, no hay normativa en esta materia que afecte al personal militar. De ello se deduce un posible incumplimiento de la transposición de la DM, que curiosamente con la normativa derogada no se producía.

En resumen, la interpretación del art. 2 de la DM, realizada en las respectivas transposiciones, en origen, de los países miembros seleccionados, contemplaron, a diferencia de España, la afectación del personal civil y militar, sin olvidar las características específicas y particulares que impidieron la aplicación de los preceptos dimanados de la DM. Aunque en alguno, como Portugal, la promulgación de una nueva normativa, creó un vacío jurídico que desampara entre otros, al personal militar. Sin embargo, España fue el único Estado de la UE, condenado por incumplimiento en la transposición de la DM²⁴⁴.

242. Cfr. DE OLIVEIRA PAIS, S., «Algumas reflexões sobre o princípio da interpretação conforme no contexto da 'transposição judicial' das directivas», *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, ano VII, 2010 (especial), pág. 489.

243. El art. 4.1.i del Anexo de la *Lei 35/2014, de 20 de junho, Geral do Trabalho em Funções Públicas*, expone que «es aplicable al vínculo de empleo público, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley y con las necesarias adaptaciones, las disposiciones del Código del Trabajo y respectiva legislación complementaria con las excepciones legalmente previstas, en particular en materia de: fomento de la seguridad y la salud en el trabajo, incluida la prevención». No obstante, el art. 3, de la *Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho*, excluye a todos los empleados públicos y, por ende, a los miembros de las FAS, a los militares de la Guardia Nacional y al personal con funciones de policía de la Policía Seguridad Pública.

244. Arufe Varela detalla en su artículo los distintos incumplimientos de los países miembros de la UE, al transponer la DM. Vid. ARUFE VARELA, A., «La jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas sobre incumplimientos por los estados miembros de sus deberes de transposición y "específicas" en materias de seguridad y salud laboral», *Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral*, núm. 221, 2009, págs. 8 a 13.

3. Desarrollo de la normativa de PRL que afecta al personal militar en algunos países de la UE

Se expone a continuación, el análisis comparado del desarrollo de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo que afecta al personal militar que desarrolla sus cometidos en los respectivos Ministerios de Defensa de Francia, Italia y Portugal. La selección de estos países no ha sido al azar, además de las razones esgrimidas en el primer epígrafe, el denominador común ha girado en torno al carácter militar de sus componentes, unos encuadrados en las FAS y otros en distintos departamentos ministeriales relacionados con la condición militar. A diferencia del resto de los Estados de la UE, estos países cuentan en su estructura gubernamental, con cuerpos policiales de naturaleza militar, concretamente la Gendarmería Francesa, los Carabineros y la Guardia de Finanza de Italia y la Guardia Nacional Republicana y la Policía Marítima de Portugal. De la misma forma que España cuenta con el Cuerpo de la Guardia Civil²⁴⁵. Matiz, justificativo, para una elección idónea que permita comparar su normativa legal en seguridad y salud en el trabajo con la española.

En primer lugar, se abordará la normativa vigente sobre la seguridad y salud en el trabajo en los respectivos Ministerios de Defensa de cada país. En ella se describen las particularidades diferenciadoras y sus aspectos comunes con la normativa española. En segundo lugar, se describirá la estructura orgánica para la gestión de la PRL en el departamento ministerial. Y en tercer y

245. Vid. GARCÍA FRAILE-GASCÓN, A., «Apuntes sobre política contra la criminalidad», *Revista Cuadernos de la Guardia Civil*, núm.7, 1992, págs. 129 a 141.

último lugar, se detalla la organización y gestión de la PRL en el Ejército de Tierra de cada respectivo país.

Tabla 4. Comparativa personal militar FAS, FFCCSE y SSEE. Fuente: Elaboración propia.

	ESPAÑA 	FRANCIA 	ITALIA 	PORTUGAL 
FAS	Ejército de Tierra	<i>Armée de Terre</i>	<i>Esercito Italiano</i>	<i>Exército Português</i>
	Armada	<i>Marine Nationale</i>	<i>Marina Militare</i>	<i>Marinha de Portugal</i>
	Ejército del Aire	<i>Armée de L'air</i>	<i>Aeronautica Militare</i>	<i>Força Aérea Portuguesa</i>
			<i>Arma dei Carabinieri</i>	
FFCCSE	Guardia Civil	<i>Gendarmerie Nationale</i>	<i>Guardia di Finanza</i>	<i>Guarda Nacional Republicana</i>
				<i>Polícia Marítima</i>
SSEE		<i>Sapeurs-Pompiers Paris</i>		
		<i>Sapeurs-Pompiers Marseille</i>		

FAS: Fuerzas Armadas; FFCCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; SSEE: Servicios de Emergencia

3.1. Normativa vigente

Francia

La PRL en el Ministerio de Defensa francés se rige por lo dispuesto en el Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo, de la salud y la seguridad en el Ministerio de Defensa, «*Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense*»²⁴⁶. Este Decreto deriva de la DM y se desarrolla a tenor de lo dispuesto en el art. R.3231-10 del Código de Defensa²⁴⁷, y en concordancia con la normativa que le afecta²⁴⁸.

246. Este Decreto derogó al Decreto número 85-755 de 19 de julio de 1985, según enmienda relativa a la higiene, la seguridad y la prevención en el Ministerio de Defensa.

247. El art. R3231-10 modificado por el Decreto núm. 2015-211, de 25 de febrero de 2015, art. 10.1, expone «*La formación administrativa es el elemento básico de la administración dentro de las fuerzas armadas. Bajo la autoridad de una formación administrativa el comandante, administra activos confiados, dentro de los límites de las delegaciones de facultades que se conceden y personal asignado. Las formaciones administrativas son los Cuerpos de Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Gendarmería y las organizaciones administradas como tal. Otros organismos o su formación pueden estar relacionados con su administración. II. - Jefes de Estado Mayor y el Director General de la Gendarmería Nacional establecido por decreto la lista de la formación administrativa bajo su autoridad.*».

248. Vid. Código del Trabajo. Arts. L. 1333-18 y R. 1333-102 del Código de la salud pública. El Código de la Seguridad Social, art. 16 de la Ley núm. 84-16, de 11 de enero de 1984, relativa a las disposiciones legales relativas a la función pública del Estado. Arts. 2-1 y 79, del Decreto núm. 82-453 de 28 de mayo 1982, de la higiene y seguridad en el trabajo, así como la prevención médica en el servicio público. Art. 9, del Decreto núm. 2009-1179, de 5 de octubre, 2009, modificada, estableciendo las funciones y organización de la Secretaría General de Administración del Ministerio de Defensa. Art. 1,

En él se establecen las normas en materia de seguridad y salud que afectan al personal civil y militar, que desarrolla sus cometidos en los servicios, establecimientos y Unidades pertenecientes al departamento ministerial. De igual manera, abarca las funciones que realiza la Gendarmería Nacional²⁴⁹ y el Cuerpo de Bomberos de las ciudades de París y Marsella, ambos de naturaleza militar²⁵⁰.

El citado Decreto se adopta de conformidad con el art. 79 del Decreto núm. 82-453, de 28 de mayo de 1982, sobre la seguridad y la higiene industrial, así como la prevención médica en la función pública²⁵¹. En el mismo, se establecen las disposiciones especiales para los servicios del Ministerio de Defensa y, a su vez, se deroga al anterior Decreto núm. 85-755, de 19 de julio de 1985, relativo a la higiene, la seguridad y la prevención del Ministerio de Defensa. Se estructura en cinco Títulos y cincuenta y un artículos:

- El Título primero: General, consta de cinco artículos (1 al 5), en los que se establece y define el ámbito de aplicación. Correspondiendo el ámbito subjetivo, al personal civil y militar (por este orden), perteneciente al Ministerio de Defensa. Y el ámbito objetivo, a los servicios, establecimientos y unidades del Ministerio de Defensa. Con respecto a

del Decreto núm. 2010-974, de 26 de agosto 2010 en la salud y la seguridad, así como la prevención médica del personal militar de la Gendarmería. Decreto núm. 2011-184, de 15 de febrero 2011, en relación con los comités técnicos en el gobierno y las instituciones públicas del Estado. Dictamen emitido por el Comité Central del 8 de prevención, de septiembre de 2011. Dictamen emitido por el Comité Conjunto de Prevención, de 12 de septiembre del 2011. Dictamen emitido por el Consejo de la oficina militar, de 9 de diciembre de 2011.

249. La Gendarmería «*La Gendarmerie*», es una Fuerza de Seguridad Nacional francesa, de naturaleza militar, que pertenece a las FAS, responsable de mantener la seguridad ciudadana en zonas rurales, zonas urbanas o periurbanas. En España se corresponde con el CGC.

250. El Cuerpo de bomberos de las ciudades de París y Marsella, son los únicos del territorio francés con carácter de naturaleza militar. *Sapeurs-pompiers militaires: Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris*, (Un Cuerpo militar perteneciente al Ministerio de Defensa y bajo dependencia del prefecto de la policía de París). *Sapeurs-Pompiers de la ville de Marseille* (Un Cuerpo militar perteneciente al Ministerio de Defensa y bajo dependencia del prefecto de la policía de Marsella).

251. El art. 79, fue creado por la modificación del art. 28 de Decreto núm. 82-453, de 28 de mayo de 1982, por el Decreto núm. 2011-774, de 28 de junio de 2011.

las actividades se desarrollan en los siguientes Títulos, diferenciando las actividades comunes para el personal civil y militar, de aquellas otras que son específicamente para el personal militar.

- El Título segundo: consta de tres capítulos y 29 arts. (del 6 al 34). Se establece la prevención en beneficio del personal civil y militar, cuando éste último participa en las mismas actividades que el personal civil. El personal militar se rige por las normas técnicas de los Títulos I al V de la Parte Cuarta del Código del Trabajo, los decretos de aplicación a ellas y por el artículo L. 717-79, del Código rural de la pesca marítima. Este Título regula de las responsabilidades generales de los Jefes de los respectivos organismos y de los principios de la acción preventiva, redacta las instrucciones para el personal civil y militar, cuando éste último participa en actividades similares a las del personal civil, tales como el derecho de desistimiento ante una causa razonable en los casos de peligro grave e inminente, y fija la estructura de los órganos de consulta y participación que son diferentes, para el personal civil y el militar.

- El Título tercero: consta sólo de dos arts. (35 y 36), y trata de la prevención en beneficio del personal militar durante circunstancias locales o en el entorno operativo. En él se reitera la obligación del personal militar de estar sujeto a las disposiciones legales según su propia idiosincrasia, así como a los requisitos establecido en el Código de Defensa, y se adoptan las normas técnicas del Título IV del Código del Trabajo, adaptándolas al entorno operativo.

- El Título cuarto: consta de once arts. (del 37 al 47), recoge la vigilancia de la salud del personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto, así como su organización y funcionamiento.
- El Título cinco: consta de cuatro arts. (del 48 al 51), relativo, a disposiciones que hacen referencia a las organizaciones del Ministerio de Defensa ubicadas en el extranjero, a la derogación del anterior Decreto y a la responsabilidad de la ejecución del Decreto por parte de los distintos Ministerios y unidades competentes.

Los principios generales de la prevención de riesgos laborales, están definidos en el art. L4121-2, del Código del Trabajo, y constituyen la piedra angular del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Ministerio de Defensa francés. Por ende, estos principios están incluidos en el art. 9 del Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo. De estos principios, se desprenden las medidas que el departamento ministerial debe adoptar, con la finalidad de evitar y disminuir los riesgos derivados de las actividades que desarrolle tanto el personal civil como el militar²⁵².

Italia

A diferencia del caso francés, el Ministerio de Defensa italiano carece de normativa específica que regule la PRL y, por ende, sus FAS. Por ello, debe seguir la normativa general en esta materia del Estado. Para Cui, en Italia, la competencia general de la supervisión de la seguridad laboral, la prevención de accidentes y la higiene laboral se basa en un sistema complejo con una

252. Cfr. Circulaire N° 310041/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/RSSF, du 28 janvier 2016, Bulletin Officiel des Armées.

pluralidad de órganos y niveles²⁵³. No por ello, la normativa general no deja de prestar gran atención a la protección de la integridad física y mental de sus recursos humanos, considerando la seguridad y salud en el trabajo un elemento esencial para asegurar su eficiencia y eficacia operativa.

El acatamiento de la normativa estatal, de las normas y reglamentos relativos a la seguridad del personal, se recoge explícitamente en el art. 725, apartado 2, letra f) de los reglamentos militares, (Libro IV - Título VIII - Capítulo I - Sección II Deberes de los superiores)²⁵⁴. Y aunque las disposiciones legislativas, han reconocido en repetidas ocasiones la existencia de peculiaridades en las actividades realizadas por las FAS, se establece un principio de aplicación compatible con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo estatal. Este principio responde a la formulación explícita del art. 3.2, del texto consolidado de seguridad y salud. En este contexto, la simplificación de la normativa, no olvida la singularidad de las actividades que realizan las FAS, en las que pueden surgir situaciones excepcionales que no sean compatibles con las normas generales relativas a la seguridad en el lugar de trabajo.

Correlativamente, el art. 184, párrafo 1, del Código Militar, declara que la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, establecida en el Decreto Legislativo núm. 81, de 9 de abril de 2008, se aplica a las FAS en consonancia con las tareas especiales y actividades llevadas a cabo por estos²⁵⁵.

253. Vid. Cui, S., *Il Diritto penale del lavoro*, Halley Editrice, Matelica MC (Italia), 2007, pág. 143.

254. Vid. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 90. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

255. Vid. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 66. Codice dell'Ordinamento militare "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare.

Adicionalmente, define en su segundo párrafo los límites de compatibilidad con las tareas institucionales y las necesidades especiales relacionadas con el uso de los instrumentos militares.

En particular, la materia de seguridad y salud en el trabajo de las FAS, como parte integrante de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, se establece en el Título IV, Capítulo I, del Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010. Concretamente, en su articulado se regula la organización y actividades de la gestión, destinadas a garantizar la protección de la salud y seguridad del personal militar y civil, en el lugar de trabajo y durante la realización de actividades para la Defensa²⁵⁶. Asimismo, se expresan las limitaciones de la aplicación del Decreto Legislativo núm. 81, de 9 de abril de 2008, en concordancia con lo expresado en su art. 3.2, de tal forma que se identifican las peculiaridades organizativas de las FAS y las necesidades derivadas de la ejecución de tareas específicas militares, con el fin de preservar la funcionalidad de toda la estructura militar. De ello depende el potencial operacional de las fuerzas, en actividades como:

- El Mando y Control.
- La capacidad y disposición para el uso de la fuerza militar y su formación en territorio nacional y en el extranjero.
- La protección de la información en lo relativo a asuntos de seguridad nacional y la construcción de armas, munición y explosivos.

256. Vid. Arts. 244 a 264 del *Decreto del Presidente della Repubblica* 15 marzo 2010, n° 90. *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Dentro de la actividad de prevención, se identifican cinco tipos de sujetos, con responsabilidades y obligaciones distintas:

- Los empleadores²⁵⁷.
- Los gerentes y supervisores²⁵⁸.
- El servicio de prevención y protección, con su responsable y personal²⁵⁹.
- El médico competente, a cargo del servicio médico, cuando sea requerido por la Ley²⁶⁰.
- El representante de los trabajadores para el personal civil y militar perteneciente al Ministerio de Defensa²⁶¹.

La normativa también contempla las comunicaciones, denuncias y quejas, relativas a la protección de la seguridad y salud del personal militar, incluyendo los accidentes laborales acaecidos, que deben ser transmitidos a los organismos

257. Cfr. Art. 246, Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010, «*Individuazione del datore di lavoro*», considera –empleador–, a los Jefes de UCO, con autonomía de gestión y gasto. Sus principales responsabilidades son: designar al responsable del servicio de prevención y protección de riesgos e instaurar dicho servicio. Designar al médico responsable de realizar la vigilancia sanitaria, en los casos previstos por la ley. Llevar a cabo la valoración de los riesgos presentes en su organismo y elaborar el documento previsto en la ley en colaboración con el responsable del servicio de prevención y, en los casos previstos, con el médico a cargo.

258. Cfr. Art. 247, Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010, «*Individuazione dei dirigenti e preposti*», los –gerentes–, personal militar o civil de la Administración de Defensa, implementa directivas para la organización de las actividades de trabajo y vela por su cumplimiento. Los *supervisores*, personal militar o civil de la Administración de Defensa, supervisan directamente las actividades realizadas por el personal, aseguran la aplicación de las directivas y su correcta ejecución.

259. Cfr. Art. 249, Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010, «*Servizio di prevenzione e protezione*», –el servicio de prevención y protección–, es un conjunto de personas, sistemas y medios destinados a la prevención y protección de los riesgos laborales del personal civil y militar, su organización depende del Jefe de la UCO. Este personal debe estar cualificado con las acreditaciones correspondientes en materia de prevención de riesgos laborales, a tenor de los dispuesto en el art. 32. Decreto Legislativo número 81, de 9 de abril de 2008.

260. Cfr. Art. 257, Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010, «*Funzioni di medico competente*», –el médico competente–, designado por el Jefe de UCO, es el responsable de la vigilancia de la salud, de todo el personal civil y militar, identificado en la evaluación de riesgos laborales. Para el adecuado cumplimiento de esta función los médicos deben satisfacer los requisitos establecidos en el art. 38.1, del Decreto Legislativo número 81, de 9 de abril de 2008.

261. Cfr. Art. 250, Decreto del Presidente de la Republica, nº 90, de 15 marzo de 2010, «*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*», –el representante de la seguridad de los trabajadores–, es una persona elegida para representar a los trabajadores en todo lo relativo a la SST. Los representantes del personal civil, son elegidos en la forma establecida en los arts. 47 y siguientes del Decreto Legislativo número 81, de 9 de abril de 2008, mientras que los representantes del personal militar son designados por el Jefe de UCO, atendiendo al criterio cuantitativo, debe haber un representante militar en una UCO hasta 200 militares, dos desde 201 hasta 1000 y tres para más de 1000. La designación se establece para un periodo de tres años, o pudiendo rechazarse, salvo por causa grave justificada.

competentes del Ministerio de Defensa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Estado Mayor de la Defensa²⁶².

Y no olvida la información, la capacitación y la formación suficiente y adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, incardinando como responsables de su ejecución: al Secretario de Defensa, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a los Jefes de Estado Mayor de los respectivos Ejércitos, al Comandante General de los Carabinieri y de la Guardia Costera, así como a las Direcciones Generales relacionadas en esta materia²⁶³.

La evaluación de riesgos, definida por el Decreto Legislativo núm. 81, de 9 de abril de 2008, como: *«la evaluación global y documentada de los riesgos a la salud y la seguridad de los empleados de la organización en la que prestan su actividad, cuyo objetivo es identificar las medidas de prevención y protección adecuadas y elaborar el programa de medidas para la mejora de los niveles de seguridad y salud»*, la asume el Jefe de BAE/UCO, y debe cubrir todos los riesgos para la seguridad y salud del personal²⁶⁴. Sin olvidar las limitaciones particulares de algunas actividades que realizan las FAS, en las que no pueden aplicarse los principios de la acción preventiva²⁶⁵.

Una vez realizada la evaluación de riesgos, se procederá a elaborar el «documento de valoración de riesgos», cuyo contenido se articula de la siguiente manera:

262. Cfr. Art. 248, Decreto del Presidente de la Republica, nº 90, de 15 marzo de 2010, *«Comunicazioni, denunce e segnalazioni»*, las comunicaciones denuncias y quejas, se realizarán, siguiendo los procedimientos marcados por el Estado Mayor de la Defensa al INAIL (*Istituto Nazionale per le Assicurazioni i controglia Infortuni sul Lavoro*).

263. Cfr. Art. 251, Decreto del Presidente de la Republica, nº 90, de 15 marzo de 2010, *«Formazione, informazione e addestramento»*.

264. Cfr. Art. 255, Decreto del Presidente de la Republica, nº 90, de 15 marzo de 2010, *«Valutazione dei rischi»*.

265. Cfr. Necesidades específicas previstas en el art. 245 y las normas de protección técnicos-militares a tener en cuenta en el art. 253 del Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010

- Identificación de las posibles fuentes de riesgo.
- Identificación de los riesgos para la salud y la seguridad.
- Estimación del riesgo (probabilidad).
- Identificación de las medidas de prevención y protección.
- Programa de implementación de las medidas de prevención y protección.
- Procedimientos para la aplicación de medidas preventivas y de protección.

Por último, y no menos importante, se regulan las competencias y estructura del Servicio de Prevención y Protección²⁶⁶. El mismo es definido, como el conjunto de personas, sistemas y herramientas encaminadas a la prevención y protección de riesgos laborales, organizadas por el Jefe de UCO. La plantilla del personal que forma parte del Servicio, debe tener un número adecuado a la ubicación, el alcance funcional y características de los organismos correspondientes. Este personal deberá cumplir los requisitos profesionales establecidos en el art. 32 del Decreto del Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010. Las competencias principales del Servicio de PRL son:

- La identificación de factores de riesgo, evaluación de riesgos y la identificación de medidas para la seguridad y salud del medio ambiente de trabajo, en cumplimiento de la normativa vigente sobre la base de conocimientos específicos de la organización.
- La ejecución de las medidas de prevención y protección y sus sistemas de control.

266. Cfr. Art. 249 Decreto del Presidente de la Republica, nº 90, de 15 marzo de 2010, «*Servizio di prevenzione e protezione*».

- El desarrollo de procedimientos de seguridad para las diversas actividades.
- Elevar propuestas de información y formación de los trabajadores.
- La consulta sobre la protección de la salud y seguridad en el trabajo, así como la reunión ordinaria a que se refiere el art. 35 del Decreto del Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010.
- Información de los riesgos laborales a los trabajadores, a tenor del art. 36 del Decreto del Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010.

Portugal

Tras el análisis de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo portuguesa, se observa que no existe una legislación específica, aplicable al personal militar²⁶⁷. Al respecto, De Oliveiras Pais sostiene la opinión sobre la posibilidad de solucionar el problema del incumplimiento en la transposición de la DM, por la vía de la interpretación conforme al Derecho de la Unión Europea. Dado que, de la lectura de la exclusión contenida en el art. 3, del Anexo según el art.2, de la Ley núm. 35/2014, en consonancia con art. 2 de la DM, se desprende que es *contra legem*, y por ello podría proponerse la aplicación directa de la DM²⁶⁸. Mientras que Carvalho apela al «efecto directo vertical de la DM», una vez agotado el plazo de la transposición como la solución del incumplimiento citado. Ambas interpretaciones conducen a la misma conclusión, el reconocimiento de la exclusión del colectivo militar, sin motivo

267. Vid. MARQUES, R., *Organização da SHST nas Forças Armadas. Caracterização e contributos. Estudo realizado no âmbito da Unidade Científico-Pedagógica de Ciências e Tecnologias, no Instituto Superior de Educação e Ciências*. Lisboa, 2011, pág. 10.

268. Cfr. DE OLIVEIRAS PAIS, op.cit., págs. 489 a 517.

aparente que lo justifique, y más aún cuando la anterior legislación, ya derogada, lo contemplaba. Y el correlativo incumplimiento a la aplicación de la DM.

No obstante, resulta necesario el estudio de la normativa aplicada al personal militar pertenecientes a las FAS portuguesas, como trata la exposición de sus miembros a los riesgos intrínsecamente ligados a la profesión militar. Así como, a la prevención de daños durante el desarrollo de su actividad.

La normativa que regula el régimen jurídico del personal militar perteneciente a las FAS, se engloba en el Estatuto de la condición militar, promulgado por la Ley núm. 11/89, de 1 de junio, en la que se establecen las bases generales que rigen el ejercicio de derechos y deberes del personal militar. Y por el Estatuto de las FAS, publicado por Decreto Ley núm. 236/99, de 25 de junio²⁶⁹.

Con respecto al Estatuto de la condición militar, se precisan en su art. 2, apartado b y c, las características de la condición militar que, entre otras, quedan excluidas de la aplicación de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, *«por la disponibilidad permanente para luchar en defensa del país, si es necesario con el sacrificio de la vida misma»* y, *«por estar sujeto a los riesgos inherentes a la realización de misiones militares, a la formación, instrucción y capacitación que requieren, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra»*. Resulta evidente, que los riesgos mencionados, no pueden ser evitados sin

269. Al igual que ocurre en las FAS españolas, las portuguesas están constituidas, por este orden de antigüedad, por la Marina, Ejército y Fuerza Aérea, además dependiente del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en los casos previstos en la Ley de defensa nacional, se encuentra la Guardia Nacional Republicana, cuyo personal de carácter militar, se le encomienda, además de las funciones en Seguridad Pública, aquellas determinadas en los estados de sitio y emergencia. También y sin dependencia alguna de las Fuerzas Armadas, encuadrada como Fuerzas de Seguridad, se enmarca la Policía Marítima, su personal policial es considerado personal militar, con dependencia de la Autoridad Marítima Nacional, constituye una fuerza de policía con la misión de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en aguas territoriales, zonas portuarias y zonas de baño.

perjudicar al deber constitucional que tienen encomendadas las FAS, pues su inhibición causaría un grave perjuicio a la defensa nacional²⁷⁰. No obstante, no se recoge en su articulado ninguna referencia a la protección del militar durante la ejecución de una misión determinada, su formación, instrucción y capacitación. Como tampoco, a la obligación de garantizar y proporcionar el equipo adecuado para la protección individual y colectiva e informar sobre los riesgos a lo que están expuestos.

Paralelamente, en el art. 12 del Estatuto de la condición militar, se establece que *«los militares tienen el derecho y el deber de recibir la capacitación y la educación cívica, científica, técnica y profesional inicial y continua, adecuada para el pleno ejercicio de las funciones y misiones que se les asigna»*. Se podría interpretar que esta «capacitación adecuada» va ligada estrechamente a las medidas de seguridad y salud, durante la realización de las actividades militares, pero la normativa no lo establece. *A sensu contrario*, sí se contempla la reparación de daños provocados por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, siendo reflejado en la misma normativa aplicada al personal civil.

El Estatuto de las FAS reitera el deber de aceptación por parte del personal militar, de los riesgos inherentes a su profesión, reflejado en el art. 15.d: *«aceptar con valentía los riesgos físicos y morales que surgen de sus misiones de servicio»*. Pero de igual manera que la normativa citada, no contempla referencia alguna a las medidas de protección y prevención de estos riesgos. Dada la amplitud con la que el legislador define todas las actividades realizadas

270. Este precepto se expresa en el art. 275 de la Constitución de la República Portuguesa, de 2 de abril de 1976.

por el personal de las FAS, sin distinción alguna entre ellas, sería de esperar que esta normativa contemplara entre las - misiones de servicio -, aquellas que pudieran acogerse a la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo el principio inspirador de la DM, por el que las limitaciones o excepciones de su aplicación deben ser aplicadas de forma restrictiva, y nunca de manera generalista. Sin embargo, no lo hace y origina el incumplimiento de la DM²⁷¹.

3.2. La estructura orgánica de la gestión de la PRL en los Ministerios de Defensa

Francia

El Ministerio de Defensa francés, estructura la organización de la gestión de la PRL en dos bloques diferenciados. Por un lado, el que afecta a las actividades que realiza el personal civil y militar en el Servicio de Infraestructuras de la Defensa (SID), durante el desarrollo de sus cometidos²⁷². Y, por otro, uno específico, aplicable al personal militar durante la ejecución de operaciones militares. Para Garcés Bonet, *«el Ministerio de Defensa francés determinará cuando sea necesario las normas particulares a aplicar cuando las condiciones específicas de organización y funcionamiento del Ministerio o las técnicas a aplicar lo impongan»*, en otras palabras, no se aplicará la normativa preventiva, cuando las circunstancias específicas de la actividad lo desaconsejen ²⁷³. Esta diferenciación viene justificada por la presencia de personal civil y militar en el departamento ministerial, destinado en la diversidad de organismos de su

271. El art. 11 Decreto Ley núm. 236/99, de 25 de junio, establece: *«constituye deber del militar velar por los intereses de sus subordinados y dar conocimiento, a través de la vía jerárquica, de los problemas de que tenga conocimiento y de aquellos que se refieren»*.

272. El Ministerio de Defensa Francés, denomina Servicio de Infraestructuras de la Defensa (SID), a las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAE), y a las Unidades, Centros y Organismos (UCO), alojados en ellos.

273. GARCÉS BONET, op. cit., 358.

organización y por una política de PRL, por un lado, común al personal civil y militar, para cuando éstos realizan actividades de la misma naturaleza que las encomendadas al personal civil y, por otra parte, para las actividades específicas de operaciones y combate, entrenamiento y actividades del personal militar ²⁷⁴.

La organización de la PRL del personal civil y militar durante el desarrollo de sus cometidos en el SID, se rige por lo dispuesto en la Instrucción núm. 5000186/DEF/SGA/SID, de 18 de enero de 2017, relativa a la organización de la PRL para la seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de personal civil y militar del SID. Su ámbito de aplicación recoge al personal civil y militar del Ministerio de Defensa francés. Según lo previsto en los arts. 6 y 7 del Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo de 2012, se establece una estructura de organización de la prevención dividida en dos niveles, uno central y otro local.

A nivel central, se encuentra la Dirección Central, responsable de la implantación y control de las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, bajo la infraestructura del Ministerio de Defensa, auxiliado por la Dirección Adjunta Central. A este mismo nivel, se encuentra y subordinado al anterior, la Coordinación Central Delegada de Prevención, que ejerce una función de asesoramiento sobre la normativa reguladora en materia de seguridad y salud en el trabajo; garantiza las auditorías que verifican el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo; y coordina la implantación de la PRL con las unidades subordinadas. A nivel local, se encuentra la Jefatura de Organización

274. La Circular núm. 310041/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/RSSF, de 28 de enero de 2016, es relativa a la difusión de la guía jurídica para la aplicación de las disposiciones del Decreto núm. 2012-422 de 29 de marzo de 2012 sobre la salud y seguridad en el Ministerio de Defensa y el decreto de 9 de agosto 2012 que se establecen detallada organización de la prevención de riesgos laborales para el Ministerio de Defensa francés, en su preámbulo justificaba la modificación del Decreto número 82-453, de 28 de mayo de 1982, en el que se creaba el art. 79.

de los SID, responsable de la PRL del personal civil militar en las Unidades de la Defensa y el Jefe de control de riesgos en las BAE, encargado de garantizar la coordinación general de las medidas preventivas adoptadas, para hacer frente a los riesgos derivados de las actividades que se ejecutan en las BAE.

La *Publication Interarmées* 4.0.2 (PIA), de 7 de enero de 2013, del Estado Mayor francés, relativa a la Instrucción de la prevención en beneficio del personal militar durante la ejecución de operaciones, tiene como objetivo asegurar la organización de la PRL en operaciones militares²⁷⁵. Para las FAS francesas, en toda operación militar la operatividad de las fuerzas debe ser preservada en cualquier circunstancia²⁷⁶. En este contexto, la responsabilidad de la prevención de los riesgos y de la salud del personal militar, recae sobre la máxima autoridad de cada uno de los ejércitos, que es garante del cumplimiento de la política de prevención ordenada por el Ministerio de Defensa. Sin perjuicio de lo anterior, el personal militar debe asumir las obligaciones de protección tanto a nivel individual, como aquellas que a nivel colectivo garantizan los mismos fines. Asimismo, preservar la integridad psicofísica del personal militar antes, durante y después de una operación militar, es primordial para garantizar la seguridad y salud de sus miembros. Su campo de aplicación abarca al personal militar que esté encuadrado en una operación militar, sea en territorio nacional o extranjero, aunque especifica las siguientes exclusiones de su ámbito de aplicación:

275. La *Publication Interarmées* (PIA), es una publicación oficial de carácter interno del Centro Conjunto para conceptos, doctrinas y experimentos del Estado mayor de las FAS francesas. Recoge las instrucciones sobre distintos dominios (Estado Mayor, Inteligencia, Operaciones marítimas, Operaciones terrestres, Operaciones aéreas, Prevención y gestión de crisis, Acciones conjuntas, Espacio y soberanía, Planificación, CIS y Preparación operativa, que afectan a sus FAS. Vid. PIA – 4.0.2, *Instruction relative à l'organisation de la prévention au profit du personnel militaire au sein des forces servant en opération*, núm. D-13-000156/DEF/EMA/SCSOUT/PPS/NP, du 07 janvier 2013.

276. Una «Operación» es un conjunto de acciones militares que realiza una fuerza militar del mismo país o conjunta con otros, desarrollada en un área geográfica denominada «Teatro de Operaciones», normalmente las Operaciones militares reciben un nombre que las identifica. Vid. PIA – 4.0.2.

- Personal militar en combate.
- Personal militar a bordo de buques de la Armada, durante la navegación, pues en este caso los elementos específicos para garantizar su seguridad y protección deben ser fijados por sus propios comandantes de buques.
- Personal civil de nacionalidad extranjera, contratado para servicios en los recintos militares ubicados en el extranjero. Este personal adoptará la normativa de seguridad y salud en el trabajo de su respectivo país.
- El personal de las instituciones públicas y empresas externas nacionales o extranjeras, que apoya en el Teatro de Operaciones²⁷⁷.
- El personal militar que participa en un ejercicio conjunto nacional o internacional y en tareas Operativas especiales, cuya regulación de la SST requerirá una normativa particular.

La PIA, regula las actividades durante la ejecución de una Operación militar, diferenciando dos grupos fundamentales:

- Aquéllas cuya naturaleza no se diferencia de las actividades del personal civil, pero que son desarrolladas por el personal militar, reguladas por lo expuesto en el Título IV del Código del Trabajo francés.

277. La expresión militar «Teatro de Operaciones», corresponde a un área geográfica delimitada donde se realiza la Operación militar.

- Las consideradas actividades militares específicas, ajustadas a las disposiciones adoptadas por el Estado Mayor.

Para un mayor rendimiento de la gestión de la PRL en operaciones, la estructura en seis apartados:

- El nivel de diseño, planificación y seguimiento. Es el encargado del desarrollo de la política general de seguridad y salud en el trabajo y medioambiente. Toma la iniciativa y contribuye al desarrollo del marco doctrinal y normativo interno de las FAS. Es necesario para mejorar la seguridad y protección psicofísica del personal militar que participa en la operación. En él, se encuentra la Sección de Prevención en materia de riesgos y medioambiente.
- El nivel de aplicación. Su misión consiste en garantizar la adecuada adaptación del anterior nivel a la operación en curso. Llegando incluso a realizar adaptaciones durante el transcurso de la misma, que faciliten el cumplimiento de los objetivos marcados en materia de seguridad y salud en el trabajo del personal involucrado en la operación.
- Los órganos de asesoramiento en higiene y seguridad de la operación. Examinan las cuestiones relativas a la prevención de riesgos, que afectan al personal militar que ejecuta sus acciones de combate en el Teatro de Operaciones, asesorando al comandante de la Operación.
- La coordinación con empresas externas. Durante el transcurso de una operación, pueden contemplarse situaciones en las que personal civil,

perteneciente a empresas externas a la operación y al Ministerio de Defensa, tenga que intervenir. En tal caso debe establecerse una coordinación de actividades, entre las empresas y las unidades que participen en la operación, lo que permitirá garantizar la seguridad y salud en el trabajo del personal civil y que ésta no afecte al desarrollo de la operación.

- Los organismos de Inspección, ajenos a la operación, pero pertenecientes a las FAS que participan en la operación, tienen como misión beneficiar el desarrollo de la misma, detectando evidencias en SST que puedan perjudicar gravemente la operación.
- Los procedimientos. Tratan sobre la difusión de la información en materia de seguridad y salud en el trabajo, la solicitud de recursos excepcionales que se consideren urgentes para la operación, y los expedientes psicofísicos que se originen a partir de lesiones y enfermedades que el personal militar sufra durante el desarrollo de la operación.

La PIA, concluye con una serie de anexos, que permiten y facilitan la organización de la prevención en beneficio del personal militar durante la ejecución de operaciones militares.

Italia

La estructura para la coordinación de las actividades, dirigidas a la prevención de accidentes y a la protección de la salud de los trabajadores de la Administración de Defensa, se encuentra recogida en el art. 252 del Decreto del

Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010. En el mismo, se crea la Oficina Central de Coordinación, «*Ufficio di Coordinamento Centrale de la Vigilanza*» (UCoCeV), encuadrada en la Secretaría General de Defensa²⁷⁸. Su objetivo es la coordinación central de las actividades dirigidas a la prevención de accidentes y a la salud del personal civil y militar destinado en las respectivas BAE/UCO de las FAS. Esta labor se realiza de forma independiente en cada uno de los ejércitos, mediante la creación de la adecuada estructura, dependiendo funcionalmente de la Oficina Central de Coordinación.

Sus competencias, funciones y estructura se desarrollan mediante la Directiva SGD-G-022²⁷⁹. De igual forma, se establecen los siguientes objetivos de prevención, que deberán cumplir las estructuras en los respectivos ejércitos: proporcionar directrices generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar la operatividad y la eficiencia de las FAS; promover la cualificación y reciclaje del personal; definir cualquier procedimiento general; y proporcionar asesoramiento directamente o con el apoyo de organismos especializados, incluyendo administraciones externas a la de Defensa.

El art. 245 del Decreto del Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010, relacionado con las peculiaridades de las FAS, desarrolla junto al art. 253, las reglas especiales de protección técnico-militar para la seguridad y salud del personal que se encuentre encuadrado en Unidades perteneciente a

278. Cfr. Art. 103.1.s, *Decreto del Presidente de la Republica, núm. 90, de 15 marzo de 2010, «emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni.»*

279. Vid. SGD-G-022 *Direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del ministero della difesa. Ministero della Difesa, Roma, 2010.*

un contingente de una operación militar, cuyo mando esté bajo la Administración de Defensa u organismo internacional²⁸⁰. Para Garcés Bonet, las denominadas actividades Operativas y de adiestramiento ejecutadas en territorio nacional por las FAS francesas, son las equivalentes a las actividades de I/A de las FAS españolas, si bien «*la forma de funcionamiento adoptada no es muy distinta a la implantada en España bajo el concepto de protección de la fuerza*»²⁸¹. Sin embargo, según el autor el enfoque empleado es mucho más sencillo que el desarrollado por la normativa española, al no diferenciar trabajadores públicos de privados, ya que todos están cubiertos por la legislación de manera idéntica, inaplicándose a aquellas actividades relacionadas con la salvaguarda de la defensa nacional que lo impida²⁸².

Portugal

Del estudio de la normativa anteriormente citada, se desprende que no existe desarrollo alguno de la estructura orgánica en el Ministerio de Defensa portugués, en materia de gestión de PRL que afecte al personal militar. En contraposición, se observa que la misma sí existe en el ámbito privado y público exigido por la normativa nacional al respecto. No obstante, se puede afirmar que de forma aislada y mediante normativa particular, los ejércitos han promovido la

280. Los procedimientos técnicos y operativos adoptados en el marco de los acuerdos comunes; aquellos de cooperación entre las fuerzas militares de los países pertenecientes a la OTAN o de otras organizaciones internacionales; las publicaciones tácticas, estratégicas y operacionales, emitidas por las autoridades competentes de las Fuerzas Armadas. Los términos de referencia emitidos por organizaciones internacionales como la ONU, la UE, la OSCE, la OTAN y los procedimientos técnicos y operativos emitidos por los comandantes de las FAS o Fuerzas multinacionales para llevar a cabo misiones militares. Los procedimientos de actuación definidos por los Jefes de Unidades en todos los niveles, para la ejecución de tareas o misiones específicas encomendadas relativas a la seguridad pública, incluso para la ejecución de tareas relacionadas con la protección del orden público y la seguridad o la lucha contra la delincuencia. Las especificaciones y las disposiciones de carácter técnico-operativa, identificadas sobre la base de las necesidades operacionales especiales, relativa a las características técnico-funcionales de vigilancia, mantenimiento y uso de la infraestructura, referidos a los programas de preparación, sistemas de defensa pasiva, equipos especiales, armas, sistemas de armas, material militar, municiones, equipos de seguridad, equipos de protección, almacenes, donde operen las FAS. Las disposiciones relativas a la prevención, la protección, la seguridad, la higiene en el trabajo, para la seguridad personal y la protección de la salud durante las operaciones y actividades llevada a cabo por las FAS fuera del territorio nacional. Para su aplicación se tienen en cuenta los requisitos de servicio específicos y las peculiaridades de la organización en la que se integra. Vid. arts. 245 y 253 del del Decreto del Presidente de la República núm. 90, de 15 de marzo de 2010.

281. GARCÉS BONET, op.cit., pág.352.

282. Ibid.

seguridad y salud de sus miembros²⁸³. Su pertenencia a la OTAN le ha obligado como miembro fundador a ratificar todos los STANAG que la Alianza ha publicado, entre ellos, el STANAG 2908/1981, de medidas preventivas para un programa de salud ocupacional, ratificado por Portugal en 1983²⁸⁴, sin embargo, no se ha producido cambio sustancial alguno en la normativa reguladora de esta materia en las FAS portuguesas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el legislador ha obviado el desarrollo normativo de seguridad y salud del personal de carácter militar. La causa de ello deriva principalmente del incumplimiento de la transposición de la DM en su acervo jurídico.

3.2. La implantación de la PRL en los respectivos Ejércitos de Tierra

Francia

La organización e implantación de la estructura orgánica de la PRL en el Ejército de Tierra francés (*Armée de Terre*), se rige por lo dispuesto en la Instrucción núm. 500072/DEF/EMAT/PS/BPMR/NP, de 15 de febrero de 2012, relativa al esquema director de la prevención en materia de riesgos del Ejército de Tierra.

283. Vid. MARQUES, R., op. cit., pág. 14. En el caso de la Marina, como ejemplo, algunas medidas establecidas procedimientos se derivan de la adopción de la «Royal Navy (Reino Unido)», absorbida durante la formación operativa de los buques en el Reino Unido, y no de la detección y evaluación de riesgos para la metodología institucionalizada y sistemática. Sin embargo, muchos de los procedimientos se dirigen a las situaciones de emergencia de potencial (es decir, incendios, explosiones e inundaciones), donde el riesgo, la gravedad es fácilmente percibido, aún tímidas iniciativas para la prevención de las enfermedades profesionales y los accidentes de fabricación. Al igual que en el Ejército, pero también señala que la Fuerza Aérea ha creado una estructura prevención ejecutiva de accidentes y enfermedades profesionales en base a los delegados del SST. El documento RFA 330-1 de octubre de 1999, en vigor desde enero de 2000, relativo a la seguridad y la prevención de accidentes, desarrolla las áreas de seguridad de vuelo, seguridad en tierra, seguridad en el armamento y misiles y seguridad en el Medio Ambiente.

284. El acrónimo STANAG, proviene de *Standardization Agreement*, en castellano Acuerdo de Normalización. En la OTAN se utiliza para definir procesos, procedimientos, términos y condiciones de equipamiento o procedimientos y técnicas militares comunes entre los países miembros de la Alianza y que posteriormente serán ratificados e implementados a sus FAS.

En él, se incardina a la Oficina de Prevención y Control de Riesgos, responsable de la dirección del sistema de prevención de riesgos²⁸⁵. Su misión es velar por la preservación del potencial humano y material, incluyendo la infraestructura y los equipamientos del Ejército, con la finalidad de contribuir a mantener su capacidad operativa.

Con el objetivo de eliminar y/o disminuir los riesgos, a los que se encuentra sujeto el personal militar del *Armée de Terre*, se procura la sinergia de las siguientes acciones:

- Analizar los riesgos presentes y potenciales (evaluación).
- Priorizar en función de su gravedad (clasificación).
- Reducir su probabilidad mediante un conjunto de medidas técnicas, organizativas y de información (prevención).
- Reducir el impacto o las consecuencias de los siniestros posibles mediante otras medidas (protección).
- Organizar y aplicar los planes de socorro (previsión).

La Oficina de Prevención y Control de Riesgos depende del segundo Jefe de Estado Mayor del *Armée de Terre*. Su misión es el desarrollo de las políticas de prevención y control de riesgos en el *Armée de Terre*, de acuerdo con las directrices generales emitidas por el Secretario General para la Administración y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa²⁸⁶. Ello permite garantizar la relación entre el Estado Mayor del *Armée de Terre* y el Estado Mayor Conjunto, así como con

285. Sus siglas en francés «BPMR», corresponden a «Bureau de Prévention et Maîtrise de Risques».

286. Vid. Article 6.9 Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre, version consolidée au 11 avril 2017.

los otros Ejércitos y el resto de direcciones y servicios del *Armée de Terre* en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La Oficina de Prevención y Control de Riesgos está organizada en cuatro Secciones:

- La Sección Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo²⁸⁷.
- Sección de Protección Contra incendios²⁸⁸.
- Sección de Riesgos Tecnológicos²⁸⁹.
- Sección de Prevención Vial²⁹⁰.

En todas las Planas Mayores de Mando de las UCO del *Armée de Terre* existe, al menos, un miembro encargado de difundir, poner en práctica y controlar el cumplimiento de directivas y normas que en materia de seguridad y salud en el trabajo emite la Oficina.

Italia

La implantación de la estructura orgánica del Ejército de Tierra italiano (*Esercito italiano*), se regula a partir de lo expuesto en la guía sobre las obligaciones de los comandantes de los Cuerpos, Destacamentos,

287. Sus siglas en francés «HSCT», corresponden a «*Hygiène Sécurité Conditions Travail*». Es la que determina y coordina las directivas en materia de Higiene y Seguridad. A su vez, asiste y participa en las reuniones de la comisión central de prevención y en la comisión conjunta de prevención del Ministerio de Defensa, coopera en el análisis de proyectos de textos reglamentarios y asegura la relación con otros organismos del Ejército, tanto conjuntos como ministeriales.

288. Sus siglas en francés «PCI», corresponden a «*Protection Contre l'incendie*». Es la que determina y coordina las directivas en materia de protección contra incendios. Colabora en la redacción de textos ministeriales sobre la prevención contra incendios. Forma parte del comité de expertos y asegura la relación con otros organismos del Ejército, tanto conjuntos como ministeriales.

289. Sus siglas en francés «SRT», corresponden a «*Section des Risques Technologiques*». Es la encargada de difundir las orientaciones definidas en esta materia, determina y coordina las directivas en materia de reducción del riesgo tecnológico. Cooperar en el seguimiento del plan de acción de medioambiente y en la difusión de la directiva de preparación operativa y medioambiente. Asegura la relación con el grupo de inspecciones especializadas del Estado Mayor Conjunto. Por último, participa en el análisis de proyectos de textos reglamentarios.

290. Sus siglas en francés «SPR», corresponden a «*Section de la Prévention Routière*». Es la que determina y coordina las directivas en materia de seguridad vial. Realiza el seguimiento y análisis de los indicadores y publica las estadísticas en materia de seguridad vial.

departamentos y Controles, sobre la seguridad y salud laboral en los lugares de trabajo, emitida por el Mando Logístico del Ejército.

A nivel *Esercito italiano*, se crea la Dirección para la Coordinación Central de los Servicios de Vigilancia, Prevención y Protección, «*Indirizzo per la Centrale di Coordinamento dei Servizi di Sorveglianza, Prevenzione e Protezione*», que depende orgánicamente del Segundo Jefe de Estado Mayor del *Esercito italiano* y funcionalmente de la Oficina Central de Coordinación, ubicada en la Secretaría General de Defensa.

Esta Dirección, a su vez, se divide en la Oficina para la Coordinación de los Servicios de Vigilancia de Área, «*Unità di Coordinamento della Vigilanza d'Area*», (UCoSeVA); y en la oficina de Prevención de Accidentes, Medicina del Trabajo, Tutela Medioambiental e Infraestructura, «*Antinfortunistica, Medicina del Lavoro, Tutela Ambientale e Infraestructura*», (AMeLTAI).

A la UCoSeVA, dependiente orgánicamente de la Dirección para la Coordinación Central de los Servicios de Vigilancia, Prevención y Protección, se le asigna el cometido de controlar la aplicación de la normativa del sector en los lugares de trabajo del *Esercito italiano*, para lo que lleva a cabo actividades específicas de inspección. Para facilitar su objetivo se divide en dos Servicios de Vigilancia de Área, Norte y Sur. Cada uno de ellos articulado en tres Núcleos de Inspección, de los que el más antiguo ejerce las funciones de Jefe de Área. La plantilla de cada Núcleo de Inspección, para realizar adecuadamente sus funciones, se compone de dos oficiales, pertenecientes a la Policía Judicial (un

coronel jefe y un teniente coronel o comandante), un suboficial y uno de tropa. Aunque a efectos prácticos, están organizados territorialmente y actúan fundamentalmente en su zona, estos Núcleos tienen jurisdicción en todo el territorio nacional y pueden ser empleados allá donde se les necesite. Las actividades de estos Núcleos, pueden venir marcadas por la programación de inspecciones, emanada de la UCoSeVA, o bien bajo la dirección de la Magistratura, en el caso de que se les ordene investigar un incidente.

La AMeLTAI, tiene una doble dependencia, por un lado, funcional de la Dirección para la Coordinación Central de los Servicios de Vigilancia, Prevención y Protección y, por otro orgánica del departamento Técnico del Mando Logístico del *Esercito italiano*. Esta oficina central, es el órgano consultivo en materia de prevención de los accidentes laborales para todas las UCO,s del *Esercito italiano*. Es responsable del seguimiento de la normativa jurídica y técnica del sector, participando en grupos de trabajo tanto nacionales como internacionales y contribuyendo a la redacción de normas y Decretos en el ámbito del Ministerio de Defensa. Para el desarrollo de su función informativa cuenta con un portal informático en su intranet, donde se puede encontrar la normativa vigente, documentos relacionados, guías sobre temas específicos y noticias del sector. En su estructura orgánica, cuenta con dos Centros, uno en cada Mando Logístico Regional (Norte y Sur), de los que dependen funcionalmente los responsables de los Servicios de Prevención y Protección.

Portugal

El *Exército* (Ejército de Tierra portugués), en un principio, no disponían de un procedimiento sistematizado de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de sus miembros. No obstante, en una de sus Grandes Unidades, la Brigada de Reacción Rápida, existía un Gabinete de Prevención de Accidentes. Esta Gran Unidad formada en su mayoría por miembros con la especialidad de paracaidistas procedentes de la Fuerza Aérea y han mantenido en su doctrina y estructura la prevención de accidentes. A pesar de lo anterior la SST se constituye como una preocupación central en el que Jefe de Estado Mayor del *Exército* busca asegurar la existencia de ambientes laborales que acarreen daños a la salud de sus miembros o incidentes que puedan generar lesiones que los incapaciten e impidan el ejercicio de sus actividades.

Esta preocupación por la prevención de accidentes, provocó que en la Inspección General del *Exército*, a pesar de no ser una de sus atribuciones, se promoviera el estudio de la prevención de accidentes para su implantación²⁹¹. Para ello, se creó un grupo de trabajo, por orden del Jefe de Estado Mayor del *Exército*, mediante la Directiva núm. 90/CEME/07, de 27 de marzo, con la finalidad de crear un gabinete de prevención de accidentes, aplicable a todo el *Exército*. Una vez finalizado el estudio, se afirma explícitamente la necesidad de una reestructuración del *Exército*, que debe tener en cuenta la mejora de las medidas y procedimientos para prevenir los accidentes en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y de la protección ambiental. Consecuencia que determinó el perfeccionamiento de las medidas y procedimientos de prevención

291. Vid. Decreto Regulamentar 69/2007, de 28 de Junho. Estabelece as atribuições, organização e competências da Inspeção-Geral do Exército.

de accidentes en el marco de la seguridad e higiene en el trabajo y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del *Exército* (SGSSTE), publicándose el *Manual do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do Exército*²⁹². Este manual es un subsistema del sistema global de gestión del *Exército*, que interactúa y es compatible con los demás subsistemas y, que posibilita la gestión de los riesgos en las actividades del *Exército* en el ámbito de la SST con la finalidad de:

- Aplicar las leyes y reglamentos en materia de SST adoptada como referencia, con la salvaguardia de la especificidad de la misión del *Exército*.²⁹³
- Reducir el absentismo por enfermedad y accidente.
- Reducir los daños materiales debidos a incidentes.
- Mejorar la motivación del personal civil y militar.
- Mejorar la imagen del Ejército.

El *Exército* garantiza la organización y el funcionamiento de los servicios de SSST para cubrir al personal militar y civil destinados en todas las Unidades, Establecimientos y Órganos, mediante las siguientes medidas:

- Crear Servicios de PRL propios o internos.

292. Ministério da Defesa Nacional, *Exército português, PDE 1-23-00 Manual do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do Exército*, Março de 2012.

293. Tal y como se ha expuesto en puntos anteriores el legislador ha obviado el desarrollo normativo de seguridad y salud del personal de carácter militar, de ahí que el Manual, de forma particular, adopte, las referencias normativas que sirvieron de base para su elaboración, los términos y definiciones considerados, los procedimientos de elaboración, aprobación, revisión y edición de la documentación que le sirven de soporte y la forma como proceder en relación con su distribución. No obstante, según el Manual, la normativa nacional sobre SST, es aplicable al Ejército, partiendo desde el principio de que no puede haber perjuicio de la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad y salud de los militares y funcionarios civiles, sin embargo, induce a su consideración caso por caso de modo que, se garantice el cumplimiento de las misiones específicas del Ejército. Las referencias utilizadas han sido: la NP 4397:2008 una adaptación de la norma Occupational Health and Safety Management Systems (OSHAS) 18001:2007 do OSHAS Project Group da Organização Internacional do Trabalho (OIT); la norma ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines; la norma ISO Guide 73:2009, Risk management vocabulary y el STANAG 2908 (Edição N.º 2) de Setembro de 1981 - Doutrina Comum da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sobre Medidas Preventivas para um Programa de Saúde Ocupacional, cujo objetivo visa a normalização do controlo dos riscos de saúde do pessoal das forças da OTAN expostos a substâncias tóxicas e/ou agentes físicos.

- Garantizar el mando, el control e información y los procedimientos de seguridad, según el concepto de seguridad integrada y gestión centralizada.
- Designar a al personal militar y civil para el ejercicio de las actividades técnicas de SST.
- Proveer la formación de técnicos superiores o técnicos de SST, de conformidad con la garantía mínima de funcionamiento del SST.
- Disponer las instalaciones adecuadas para el ejercicio de las actividades de SST por los respectivos técnicos.
- En cuanto al servicio de salud, la prestación del servicio de medicina del trabajo durante el número de horas necesario para la realización de los actos médicos, de rutina o de emergencia y de otros trabajos que deba coordinar.

La estructura de SST del *Exército* se basa en el Gabinete de Seguridad y Salud en el Trabajo del *Exército*, bajo la directa dependencia del Teniente General Inspector General del *Exército*, en las Oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Órgano Central de Administración y Dirección, en el Comando de Fuerzas Terrestres, en la Academia Militar, en la zona militar de las Azores, en la Brigada de Intervención, en la Brigada Mecanizada y en la Brigada de reacción rápida, y en los Gabinete de Seguridad y Salud en el Trabajo o Delegados de SST de las Unidades, Establecimientos y Órganos. Esta estructura tiene por objeto definir qué recursos humanos están involucrados en la gestión de la SST y, definir sus funciones, responsabilidades y autoridad.

4. Análisis comparativo de los aspectos diferenciales

En los puntos anteriores se han desgranado meticulosamente las fases en las que se ha dividido el análisis y en este, se valoran y comparan con España los aspectos diferenciales de la normativa de seguridad y salud en el trabajo encontrados con los tres países seleccionados en virtud de determinadas razones específicas, tales como la experiencia dilatada y normalizada en materia de seguridad y salud en el trabajo de Francia, la carencia de normativa específica para las FAS en Italia y la inaplicación de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo de Portugal al personal militar. Además de lo anterior, se observa que estos países al igual que España, cuentan con Cuerpos policiales de naturaleza militar, razón de peso diferenciadora con otros países de la UE en los que su carácter es civil.

Aspectos valorados de la primera fase

En la primera fase se revela que la transposición realizada de la DM por los tres países, ha sido en un principio fiel a la interpretación literal del art. 2 de la DM. Al abarcar a todos los sectores tanto públicos (personal civil y militar), como privados y al excluir a aquellas actividades que por sus peculiaridades lo impiden. Aunque como se ha expresado, Portugal actualmente no contempla al personal militar en su legislación preventiva, por lo que parece que incumple la DM.

En Francia, la transposición no se realiza mediante un texto jurídico único y exclusivo, como en el caso de España, sino se que utiliza la Parte Cuarta del

Código de Trabajo, dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Concretamente en su art. L4111-1, establece su ámbito de aplicación, a empresarios y trabajadores, manteniendo el carácter universal impuesto en el art. 2.1 de la DM. De igual forma, hace referencia en su art. L4111-2, a las modificaciones de las disposiciones de la citada Parte Cuarta, habida cuenta de las características específicas de ciertas instituciones y grupos. Lo que constituye un claro reflejo de la posibilidad de inaplicar la normativa de seguridad y salud a actividades específicas anunciada en el art. 2.2 de la DM. Sin embargo, de su lectura no se desprende alusión directa al personal militar, aspecto diferenciador de la LPRL española, que en su art. 3.1 extiende su ámbito de aplicación a todos los trabajadores y empresarios, precisando su inaplicación a las actividades cuyas particularidades lo impidan, entre otras, las realizadas por las FAS y actividades militares de la Guardia Civil. El Estado francés, no obstante, adopta el Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo, de la salud y la seguridad en el Ministerio de Defensa, donde define la afectación a las actividades del personal militar de las disposiciones de la Parte Cuarta, siempre que sean similares a las asignadas al personal civil perteneciente al Ministerio. Aunque su art. 6, no define las actividades excluidas, la interpretación parece implícita, al considerar todas aquellas que no puedan ser desarrolladas por el personal civil del departamento ministerial.

Italia al igual que España, optó por la transposición directa de la DM, en una sola normativa, y promulgó el Decreto Legislativo núm. 626, de 19 de septiembre de 1994, como Ley marco de seguridad y salud en el trabajo, actualmente derogado por el Decreto Legislativo número 81, de 9 de abril de

2008. En su art. 3, cumple taxativamente con lo expuesto en el art. 2 de la DM, tanto en al ámbito de aplicación, a todos los sectores ya sean privados o públicos, y a las actividades cuya aplicación deberán regirse de forma particular, haciendo alusión, entre otras a las realizadas por las FAS, al Arma de Carabineros y a la Guarda de Finanza. La integración del art. 2 de la DM se realiza de forma fiel, al igual que actualmente en España.

El principio de universalidad dimanado del art. 2 de la DM, aplicado a todos los sectores, se ha mantenido fiel en las transposiciones de Francia, Italia y España, a lo largo de las distintas modificaciones y derogaciones de la normativa inicial, siendo, sin embargo, inexplicablemente vulnerado en el caso de Portugal. Como se ha expuesto, en la legislación vigente portuguesa en materia de seguridad y salud en el trabajo y de régimen jurídico de la función pública, se excluye al personal militar que integra tanto sus FAS, como la Guardia Nacional Republicana y la Policía Marítima. *A sensu contrario*, España, a diferencia de Portugal, modificó la LPRL inicial, al excluir, de manera injustificada, y constatada por STJUE 12 de enero de 2006, al personal militar de su ámbito de aplicación. De lo anterior se deduce que un Estado miembro cercano geográfica e históricamente, plasma en su legislación una vulneración tangible de los derechos del personal militar. Por ello, dado que no se contempla en su acervo normativo protección alguna en materia de seguridad y salud en el trabajo para este colectivo, en un futuro pudiera tener razones de peso fundamentadas la Comisión Comunitaria para promover un recurso por incumplimiento²⁹⁴. El Estado portugués, de no modificar su actual normativa, es

294. Vid. RIBEIRO COSTA, A.C., «Segurança e saúde no trabalho – particularidades e problemas no âmbito da Administração Pública», en LEITE, J. (Dir.), REIS, J. (Coord.), *Escritos Jurídico-Laborais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, pág. 208.

sujeto de un potencial incumplimiento de la DM, por no respetar en su legislación de PRL, los principios de la prevención de riesgos emanados de dicha Directiva, al no incluir bajo su ámbito subjetivo al personal militar, miembros de las FAS, de la Guardia Nacional Republicana y de la Policía Marítima.

Aspectos valorados de la segunda fase

Respecto a la segunda fase, el análisis comparativo se efectúa en relación al desarrollo normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, incidiendo en tres aspectos de la implementación de la PRL en los respectivos Ministerios de Defensa de los citados países, y comparándolos con España. En primer lugar, se analiza la normativa preventiva que afecta a la seguridad y salud del personal militar. En segundo lugar, la normativa que afecta a la implantación y estructura de la PRL en los Ministerios de Defensa de cada país. Y tercero y último lugar, a la organización y gestión de la PRL en los respectivos Ejércitos de Tierra.

Con respecto a los dos primeros aspectos, se aprecia en la normativa adoptada por Francia, Decreto núm. 2012-422, de 29 de marzo, un parecido razonable con el RDPRLFAS, publicado por España. No obstante, se pueden encontrar diferencias significativas, ya que el legislador español plasmó en el texto algunas cuestiones, para evitar posibles ambigüedades e interpretaciones y, sin embargo, el francés las obvió, tales como la definición expresan de las actividades de I/A y Operativas, denominadas como actividades de carácter operativo y entrenamiento de combate. En el caso de Italia, se observa que carece de una normativa específica que regule la protección en materia de seguridad y salud para los miembros de sus FAS, pues se aplica la normativa

estatal, que refleja la regulación de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa. De esta forma, la legislación italiana trata a los trabajadores públicos, civiles o militares, de forma igualitaria, excluyendo aquellas actividades cuyas peculiaridades lo impidan, denominadas como técnico-Operativas y Operativas. Esta exclusión basada en las actividades y no en colectivos es la misma empleada por España, y para despejar dudas el legislador italiano las define. Las técnico-Operativas se corresponden con lo que en la normativa española se recoge como actividades de I/A, ejecutada en territorio nacional, no existiendo una diferencia palpable sobre los procedimientos utilizados por las FAS, encaminados a la protección de la Fuerza. Con respecto a las actividades denominadas Operativas, de forma similar a la normativa preventiva española, la diferencia se origina según su localización geográfica, en territorio nacional o extranjero. En el caso de ejecutarse en territorio nacional, se aplica la norma preventiva estatal. Sin embargo, para las desarrolladas en el extranjero, además de la norma estatal, se tienen en cuenta las normas, los procedimientos internacionales y las características inherentes a la misión. Por último, las FAS portuguesas carecen de normativa estatal y, por ende, específica, para el Ministerio de Defensa portugués. Esta carencia provoca la publicación de normas internas que no se regulan según el rigor normativo estatal, alimentando un libre albedrío jurídico para paliar cada caso.

Sobre el tercer aspecto, la estructura orgánica de el *Armée de Terre*, en materia de PRL dispone de la *Bureau de Prévention et Maîtrise de Risques* (Oficina de Prevención y Control de Riesgos), responsable de la dirección del sistema de prevención de riesgos en el Ejército. Con la misma finalidad, se constituye en el *Esercito italiano*, la *Indirizzo per la Centrale di Coordinamento*

dei Servizi di Sorveglianza, Prevenzione e Protezione (Dirección para la Coordinación Central de los Servicios de Vigilancia, Prevención y Protección). Igualmente, el Ejército de Tierra español dispone de la SCPRLET con la misma finalidad. Aunque con diferenciales sustanciales ya que, en comparación con el *Armée de Terre*, ésta no cuenta en su orgánica con las Secciones de protección contraincendios, de riesgos tecnológicos y prevención vial, pues son asignadas a otros órganos del Ejército de Tierra. Y con respecto al *Esercito italiano*, divide sus cometidos en dos áreas principales, una dedicada a la vigilancia técnico-funcional de la gestión de la prevención y otra dedicada a la Prevención de Accidentes, Medicina del Trabajo, Tutela Medioambiental e Infraestructura. En el caso del *Exército português*, dispone, sin amparo normativo estatal, de una estructura orgánica de procedimientos sistematizados para la gestión de la PRL de sus miembros basados en la adopción y adaptación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001²⁹⁵, se observa que su estructura, de igual manera que el Ejército de Tierra español, incardina la responsabilidad de la PRL al Inspector General del Ejército, aunque al contrario de la española, su estructura esta descentralizada, creándose la propia y adecuada en Unidades, Establecimientos y Órganos.

Finalmente se concluye, que Francia e Italia, al igual que España, en términos generales han adoptado e implementado una legislación en materia preventiva que afecta tanto al personal civil como al militar. Inaplicándola en aquellas actividades inherentes a la profesión militar, con unas características particulares, denominadas de distinta forma, pero con una clara similitud:

295. Actualmente con motivo de la publicación de la norma ISO 45001, el *Manual do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do Exército*, se encuentra en fase de adaptación a la nueva norma.

Instrucción, Adiestramiento y Operativas, carácter operativo y entrenamiento de combate, técnicos-Operativas y Operativas. Para la implantación de la PRL, se ha creado una estructura que afecta a las FAS y, por ende, a los respectivos Ejércitos de Tierra. De manera diferenciada, Portugal carece de normativa estatal y específica en materia preventiva que afecte al personal militar. En este sentido, se destaca la necesidad de implantar por parte de los ejércitos de implementar medidas en materia de seguridad y salud para su personal de carácter militar, que en base a normativa interna le han permitido la creación de estructuras y la sistematización de procedimientos encaminados a aumentar su protección y seguridad, A su vez, estos cambios coadyuvarán a disminuir los accidentes laborales e incrementen la operatividad. La incertidumbre, el vacío normativo de carácter estatal específico al personal militar, repercutirán negativamente sobre el personal militar portugués, vulnerándose sus derechos al no garantizarse su seguridad y salud en su actividad profesional, más aún en aquellas actividades en las que sus peculiaridades no impidan la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

CAPÍTULO IV

INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I/A DEL EJÉRCITO DE TIERRA, EN SU SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL

1. La siniestralidad laboral del personal militar durante las actividades de I/A

El estudio realizado no tendría sentido si el personal militar estuviera exento de riesgos durante el desarrollo de las actividades de I/A. Sin embargo, la materialización de los riesgos, mediante los accidentes, es evidente. La LPRL, define en su art. 4.2 el riesgo laboral como *«la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo»*. La calificación de un riesgo, para Acale Sánchez, *«desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo»*²⁹⁶. Lo que, llevado al ámbito castrense, permite constatar que existen tareas englobadas en las actividades de I/A que presentan una mayor probabilidad de que se produzca el daño, pues existen algunos de estos en las que la severidad del riesgo es mayor, por ejemplo en los ejercicios tácticos en los que se realizan acciones de fuego real y movimiento, la gravedad del riesgo prevenido aumentará. Por lo tanto, probabilidad y severidad son dos parámetros a tener en cuenta a la hora de la calificación de un riesgo, de lo que se desprende la existencia de tareas dentro de las actividades de I/A que deberían diferenciarse en función de los mismos, aplicándoseles además de las normas propias de seguridad, las de prevención de riesgos laborales y

296. Vid. TERRADILLOS BASOCO, J.M., ACALE SÁNCHEZ, M., GALLARDO GARCÍA, R.M., *Siniestralidad laboral. Un análisis criminológico y jurisprudencial*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005, pág. 26.

garantizándoseles un cumplimiento escrupuloso que evite la materialización del riesgo²⁹⁷.

Para Gallardo García, *«el alto índice de siniestralidad origina una preocupación social creciente y muy importante, que se encuentra fundamentada en un sentimiento de desprotección ante situaciones de riesgo en el trabajo»*²⁹⁸. De ahí que la siniestralidad laboral constituya uno de las mayores preocupaciones sociales en la sociedad y, por ende, de cualquier empresa o Administración pública. Ambas, como sujetos obligados de la normativa preventiva y, deben esforzarse en aplicar todas aquellas medidas encaminadas a la protección de los riesgos derivados de su actividad profesional. Ya sea mediante una labor de concienciación colectiva e individual, o utilizando instrumentos que permitan evaluar los riesgos inherentes a los puestos y lugares de trabajo que permitan evitarlos, minimizarlos o eliminarlos en su origen. De hecho, para Díaz Vázquez *«El principio fundamental de la seguridad es la prevención en las etapas tempranas»*²⁹⁹. Para Pérez Guerrero, *«la prevención de los daños se requiere el análisis y correcto conocimiento de los riesgos de los puestos de Trabajo»*³⁰⁰. Sin embargo, a pesar de ello, se producen accidentes laborales que merman y afectan la capacidad productiva y profesional de los

297. Para Acale Sánchez, *«el sector de la construcción es considerado como una actividad peligrosa en términos objetivos, esto es, sin necesidad de que concurra ninguna situación especial»*. No obstante, esta actividad está regulada por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. En él se establecen medidas de seguridad y salud para determinados trabajos que requieren procedimientos ajustados en función de la probabilidad y severidad de producirse el daño. «Ello determina que el cumplimiento escrupuloso de las normas de prevención de riesgos laborales ha de ser escrupuloso, sino se quiere actualizar el daño prevenido». *Ibíd.*

298. TERRADILLOS BASOCO., ACALE SÁNCHEZ., Y GALLARDO GARCÍA., *op.cit.*, pág. 56.

299. *Vid.* DÍAZ VÁZQUEZ, J.E., GEREZ MIRAS, J., «Sinergia entre la Gestión de la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales», *IV Congreso de Ingeniería y Organización*, Sevilla, 2001, pág. 2.

300. PÉREZ GUERRERO, *op.cit.* «La aplicación del acuerdo nacional de negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales», pág. 4.

trabajadores y empleados públicos, causando daños físicos, psicológicos y económicos³⁰¹.

1.1. Mirada cuantitativa de la siniestralidad laboral del personal militar

A continuación, se exponen datos extraídos de los informes publicados por la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa, obtenidos de la División del Servicio de Apoyo al Personal. Estos datos son referidos a la siniestralidad que ha sufrido el personal militar, como consecuencia de los accidentes acaecidos durante el desarrollo de las actividades de I/A, denominados por los informes como de «carácter militar». Los mismos son definidos como sucesos que ocurren durante el servicio, como consecuencia del mismo, o cuando se realicen actividades contempladas específicamente en el PGIA, Órdenes de Operaciones o similares, que se han producido durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018³⁰².

De hecho, tal y como muestra la siguiente tabla, desde la implantación en el año 2011 de la PRL en el Ejército de Tierra hasta los publicados en actualmente, se observan una serie de siniestros relacionados con la I/A. Entre ellos se destacan los siguientes: prácticas deportivas, otros accidentes durante el servicio, accidentes paracaidistas, accidentes con vehículos terrestres y accidentes con armas y explosivos.

301. Ibid. Los autores señalan la afectación del accidente laboral tanto en el trabajador como en la empresa, siendo el primero el principal afectado. Aunque este hecho dañificará a la empresa pues tendrá que asumir las sanciones correspondientes derivadas de una alta siniestralidad. Ahí radica la importancia de llevar a cabo una buena gestión en PRL, al disminuir la siniestralidad aumenta la seguridad de los trabajadores y, por ende, la rentabilidad de la empresa. TERRADILLOS BASOCO., ACALE SÁNCHEZ., Y GALLARDO GARCÍA., op.cit., pág. 56.

302. Vid. Ministerio de Defensa, *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, (años 2011, 2012, 201, 2014, 2015, 2016 y 2017). Se observa que no se ha publicado hasta la fecha de finalización de la tesis la correspondiente al año 2018.

Tabla 5. Estadística de accidentes en el Ejército de Tierra, por tipo de accidente. Elaboración propia. Fuente Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, años 2011 a 2018.

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		PROMEDIO		% SNT PMA
	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	SNT	PMA	
PRÁCTICAS DEPORTIVAS	1233		1439		1929		1088		459		945		996		959		1131		1,47
OTROS ACCIDENTES DURANTE EL SERVICIO	991		936		1258		654		303		575		562		592		733,88		0,95
PARACAIDISTA	122	80803	82	79121	87	77253	80	77428	43	77327	15	76118	17	74263	11	74156	57,13	77059	0,07
VEHÍCULO TERRESTRE	55		47		36		38		18		22		26		25		33,38		0,04
ARMAS Y EXPLOSIVOS	24		10		7		10		13		2		13		11		11,25		0,01
TOTAL	2425		2514		3317		1870		836		1559		1614		1598		1966,63		2,55

SNT: Siniestros. PMA: Personal Militar en Activo.

Para el análisis de los datos, se ha tomado el promedio (media aritmética) de los siniestros acaecidos durante el periodo señalado y del personal militar en activo (PMA) en el Ejército de Tierra³⁰³, extrayéndose un dato porcentual clarificador al compararlos lo que nos permite exponer las siguientes consideraciones:

- a) Los accidentes acaecidos durante las prácticas deportivas exceden numéricamente al resto de siniestros, en la comparación del porcentaje total de accidentes (2,55 %), más de la mitad (1,47 %) se producen por esta causa. La instrucción físico-militar constituye una parte fundamental en la preparación del militar, el militar profesional debe renovarla anualmente a través de unas pruebas físicas evaluables que caso de no superarse condicionarán sus futuras expectativas profesionales,

303. Datos extraídos del documento *Informe de la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa*, correspondientes a los años comprendidos entre 2011 y el 2018. Vid. Ministerio de Defensa, *Estadísticas del personal militar*. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

ascensos, destinos, misiones y cursos. Por ello, puede deducirse que el interés del militar por alcanzar los requisitos exigidos le obligue a efectuar un entrenamiento periódico que en ocasiones derive en lesiones provocadas por accidentes fortuitos, tales como esguinces y luxaciones.

- b) Los denominados «otros accidentes durante el servicio» son los que ocupan el segundo lugar. En ellos, se aglutinan las tareas de maniobras e instrucción diaria incluidas en las actividades de I/A. Aunque su porcentaje (0,95) indica una baja tasa de siniestralidad por estas tareas, no son nada despreciables si tenemos en cuenta que son fruto del desarrollo de las actividades de I/A, sus lesiones y secuelas, por lo tanto, son mucho más graves que las anteriores al estar relacionados con los riesgos durante los ejercicios tácticos.
- c) Con respecto a los accidentes ocurridos durante saltos paracaidistas su resultado arroja un 0,07 % que afecta al total de la plantilla del personal militar en activo, pero conviene que recordar que esta actividad de I/A sólo la realiza aquel militar que ostente el curso paracaidista y a su vez, esté destinado en las Unidades militares que los ejecutan, como por ejemplo la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas y el Mando de Operaciones Especiales, (2.000 militares profesionales). Ello evidencia que su resultado es significativo y pase de afectar del 0,07 % de la plantilla de personal militar en activo al 2,86 % de la plantilla de personal militar en activo con la aptitud paracaidista, lo que eleva de forma cualitativa su tasa de siniestralidad singular.

- d) Los accidentes ocasionados por vehículos terrestres militares arrojan un resultado del 0,04 %, la mayoría producidos por imprudencia en la conducción e inestabilidad del terreno de los campos de maniobras por donde circulan.
- e) Con respecto a los siniestros observados por armas y explosivos, aunque su tasa es afortunadamente la más baja (0,01 %), son los más letales y en caso negativo sus secuelas suelen ser irreversibles.

A nuestro juicio, muchos de los accidentes reflejados en el informe de estadística podrían haberse evitado con una evaluación previa de los riesgos laborales que les afectan o, a posteriori, con una oportuna investigación de accidentes laborales regida por los principios preventivos. Y es que la concepción meramente curativa que se mantenía del accidente laboral, hasta la publicación de la DM y de las posteriores Directivas europeas relacionadas con la PRL, ha evolucionado en la dirección de la detección y prevención de los factores de riesgo que constituyan un daño para la salud del trabajador³⁰⁴. De ahí la pretensión de incorporar los principios preventivos a la investigación de este tipo de accidentes.

1.2. Mirada cualitativa de la siniestralidad laboral del personal militar

Un análisis cuantitativo impide apreciar diferentes factores asociados al riesgo laboral. De ahí la necesidad de incluir un estudio que nos acerque al problema y nos permita obtener una dimensión diferente. En este sentido, cabe

304. Cfr. AA.VV., «El concepto de daño laboral en España y su comparativo internacional: revisión legislativa española, hispano-americana y europea», op.cit., pág. 91.

citar la STS 76/2018 (Sala de lo militar), de 30 de julio, en la que se reflejan, las secuelas irreversibles que sufrió un miembro perteneciente al Batallón de Intervención de Emergencias I (BIEM I) de la UME, a consecuencia de un siniestro ocurrido durante la ejecución del ejercicio de I/A *«Técnicas de rescate en superficie. Búsqueda rescate de víctimas en aguas rápidas»*, realizado el 17 de marzo de 2010³⁰⁵. Este ejercicio, en virtud del RDPRLFAS, se rige por sus normas propias de seguridad, y por lo tanto al mismo no es de aplicación el acervo normativo de PRL. No obstante, a nuestro juicio, la aplicación de la normativa preventiva no hubiera perjudicado el desarrollo de la actividad y probablemente habría evitado el accidente, por lo que procede efectuar un análisis del mismo y de los potenciales beneficios derivados de haber aplicado la citada normativa.

La actividad, *«Técnicas de rescate en superficie. Búsqueda rescate de víctimas en aguas rápidas»*, está incluida en el programa de I/A de la Compañía de Intervención de Emergencias Naturales. Sus normas propias de seguridad son desarrolladas en el Manual Básico de Emergencias ME2-301 doctrina BE 07. Esta norma regula, entre otras previsiones: *«No ates jamás el extremo de la cuerda»*, advirtiéndole de *«tener cuidado para evitar enredarnos en la cuerda si la corriente nos voltea»*, e incluso de que *«si se produjera un enredo o trabamiento estando atada la otra punta de la cuerda de rescate, la víctima podría sufrir daños o morir...»*, ya que *«los objetos atados tienden a pegarse al fondo»*. El Equipo de protección individual (EPI) básico, obligatorio para este tipo de ejercicios consta de los siguientes elementos: traje isotérmico, chaleco, casco, escaupines o

305. Vid. STS 76/2018, de 30 de julio, recurso núm. 14/2017, sobre un delito contra la eficacia del servicio por imprudencia simple.

botines, guantes, aletas, gafas y otros materiales como navaja corta-cabos, luz flash para localización, linterna subacuática y silbato. Se reconoce como responsable de la ejecución del ejercicio al suboficial Jefe accidental de la Sección, perteneciente a la citada Compañía.

El siniestro se produjo, según la sentencia, como consecuencia de dos factores transcendentales: por un lado, la corriente del río arrastraba gran fuerza, superior a las de otras ocasiones en las que la Unidad se había desplazado al lugar y por otro, la ausencia de las medidas preventivas pues el miembro de la UME que resultó gravemente afectado, no disponía de chaleco y decidió montar «la línea de vida», para lo que tuvo que atravesar el cauce del río con una cuerda colocada sobre el pecho de forma atravesada. La sentencia describe el desarrollo de los hechos con exactitud: *«el suboficial, dejó solo al miembro de la UME siniestrado, se dirigió más abajo (a una distancia no determinada pero entre 50 y 100 metros), comenzando el siniestrado a cruzar el río hacia la orilla izquierda, donde ató un extremo de la cuerda a un árbol, lanzándose de nuevo al agua para cruzar a la otra orilla, debiendo enredarse la misma con alguna rama oculta por la corriente, lo que motivó que quedara atrapado bajo el agua por un tiempo aproximado, pero cercano e incluso superior a los diez minutos hasta que fue rescatado»*. A pesar de ser rescatado, el siniestrado quedó tetrapléjico. Lo que nos lleva a plantear dos preguntas: con respecto al primer factor ¿era previsible y/o habitual la fuerza de la corriente del río? Y con respecto al segundo ¿la ausencia de las medidas preventivas estaba justificadas? Se procede, a continuación, al análisis de los hechos desde una óptica preventiva.

La NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento, del INSST³⁰⁶, como guía de buenas prácticas, sirve como referencia a seguir. Así una vez extraídos los datos de la sentencia, se pasa al análisis causal, que permite estudiar la posible existencia e incidencia de los distintos factores concurrentes. El estudio de los factores se realizará identificando los ámbitos en los que es posible intervenir: el ambiente y el lugar de trabajo, personales, la organización del trabajo y la gestión de la prevención.

- De los factores relativos al ambiente y lugar de trabajo:
 - **La dificultad de acceso al puesto de trabajo, pavimento deficiente y vías de evacuación insuficientes o no practicables:** pues según se manifiesta³⁰⁷: *«Al salir de la localidad de Ocentejo, el convoy tomó un camino de tierras denominado "Camino del molino", iniciando un recorrido descendente por una pista forestal y pedregosa y en mal estado, hasta llegar a una pequeña explanada donde quedaron aparcados los vehículos, habiendo recorrido un total de 2.8 kilómetros desde la citada localidad»*. A nuestro juicio, la complejidad del camino de acceso aumentó el riesgo pues en caso de evacuación ésta se vería limitada.
 - **El ambiente de trabajo:** se destaca el incremento del riesgo³⁰⁸, *«la corriente del río, corriente que arrastraba gran fuerza, superior a la de*

306. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), pasó denominarse por RD 703/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el RD 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en su art. 2.5 actualiza la denominación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el fin de adaptarla a la demanda de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente con la seguridad y salud en el trabajo como parte fundamental del bienestar social, pasando a denominarse Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A., M.P., (INSST). Posteriormente por RD 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en su Disposición adicional décima. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.1. El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A., M.P. pasa a denominarse Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.2. Las referencias que en normas legales o reglamentarias se realicen al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A., M.P. se entenderán efectuadas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., (INSST).

307. Vid. Pág. 4 de la STS 76/2018, de 30 de julio, recurso núm. 14/2017.

308. Ibid.

otras ocasiones en que la Unidad se había desplazado al lugar». Las condiciones de ejecución de estas prácticas deberían haber aumentado las medidas preventivas.

- De los factores personales:

- **Del comportamiento del responsable:** se evidencia la imprudencia en el incumplimiento de las órdenes recibidas, desarrolladas en el ME2-301 doctrina BE 07. El suboficial responsable deja solo al siniestrado durante el montaje de la línea de vida³⁰⁹, *«el suboficial, dejó solo al miembro de la UME siniestrado, se dirigió más abajo (a una distancia no determinada pero entre 50 y 100 metros), comenzando el siniestrado a cruzar el río hacia la orilla izquierda, donde ató un extremo de la cuerda a un árbol, lanzándose de nuevo al agua para cruzar a la otra orilla, debiendo enredarse la misma con alguna rama oculta por la corriente, lo que motivó que quedara atrapado bajo el agua por un tiempo aproximado, pero cercano e incluso superior a los diez minutos hasta que fue rescatado»*. Resulta de interés añadir lo expuesto en el art. 156.5.a del RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. *«No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: la imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. En este sentido, el fallo de la STS destaca *«el comportamiento culposo procedente de la víctima»*³¹⁰. Por otro lado,

309. Loc.cit., pág. 5.

310. Loc.cit., pág. 27. A su vez, cabe citar al respecto la sentencia de la Sala Cuarta del TS, de 22 de julio de 2010, rec. núm. 3516/2009, en el que cita la ruptura del nexo causal entre la omisión por la empresa de la medida de seguridad señalada y el resultado dañoso para el trabajador solo podría producirlo la imprudencia temeraria de éste, la cual se caracteriza por una voluntaria y consciente asunción del riesgo. El mismo criterio prevalece en la sentencia de Sala Cuarta del TS, de 2

se hace referencia a la figura del recurso preventivo en este caso asumida por suboficial responsable, el cual no disponía de la evaluación inicial de los riesgos en los que se identificaran su agravamiento o modificación³¹¹.

- De los factores relativos a la organización del trabajo y gestión de la prevención:

▪ **La falta de corrección en los riesgos detectados** según se expresa³¹²:

«Para el desarrollo de los ejercicios de instrucción o adiestramiento de las distintas Compañías, se habían elaborado unas fichas de la zona donde aquellos iban a tener lugar, fichas en las que se marcaban las características de la zona, con reconocimiento in situ de personal especializado de la Cía., posibles vías de evacuación, cobertura telefónica para caso de necesidad y centros hospitalarios cercanos a la zona para una posible evacuación». La ficha correspondiente al ejercicio había sido elaborada en el año 2008 y presentaba ciertos déficits, tales como las condiciones de caudal y corriente del río en las distintas estaciones y las condiciones de accesibilidad entre otras.

de noviembre de 2011, rec. núm.1157/11, en la que existe el comportamiento culposos en aquellos supuestos en que el trabajador accidentado contraría las órdenes del empresario o las más elementales normas de precaución y cautela exigibles a toda persona normal. Como razona la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 septiembre 2007, rec. núm. 3750/2006 es aquel tipo de imprudencia en la que el autor *«asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas; en otras palabras, puede concebirse como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible».*

311. En el art. 32 bis 1.a de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, expone *«Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo».* Para la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social el recurso preventivo es una medida preventiva complementaria, criterio justificado por lo expuesto en la exposición de motivos de la Ley 54/2003, *«La LPRL no se refiere, por tanto, a cualesquiera supuestos de concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, sino solamente a aquellos que, además, hacen preciso un control específico de cómo se aplican los métodos de trabajo, dado que una aplicación inadecuada de tales métodos podría dar lugar a ese agravamiento o modificación del riesgo. Ello se pretende realizar a través de la presencia de los recursos preventivos, que servirán para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo».* Por ello, se considera preceptiva la evaluación de los riesgos laborales, que identifique aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas. Vid. Criterio técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo, Ministerio de Trabajo, 2010, [consulta: 19/06/2019], http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_83-2010.pdf.

312. Loc.cit., pág. 2.

- **La carencia de equipos de protección individual**, como se expone³¹³:
«repartiéndose entre ellos mismos los cascos y los chalecos de rescate que llevaban pues no había para todos». Otro dato relevante es que los chalecos no estaban homologados, *«En otras palabras, no había chalecos para todos y los que había no cumplían la homologación correspondiente, aunque sólo sea porque no tenían el corta cabos, la linterna ni los silbatos»*³¹⁴.

Finalizada el análisis, se procede a la determinación de las causas del siniestro y para ello se recurre a la NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas del INSST. Este método, en palabras de Navarro, *«refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones existentes sobre ellos, lo que facilita bastante la detección de causas que pueden permanecer ocultas, y que la aplicación de esta metodología puede llegar a descubrir»*³¹⁵. En la nota al pie se desarrolla el método aplicado al siniestro que se trata³¹⁶.

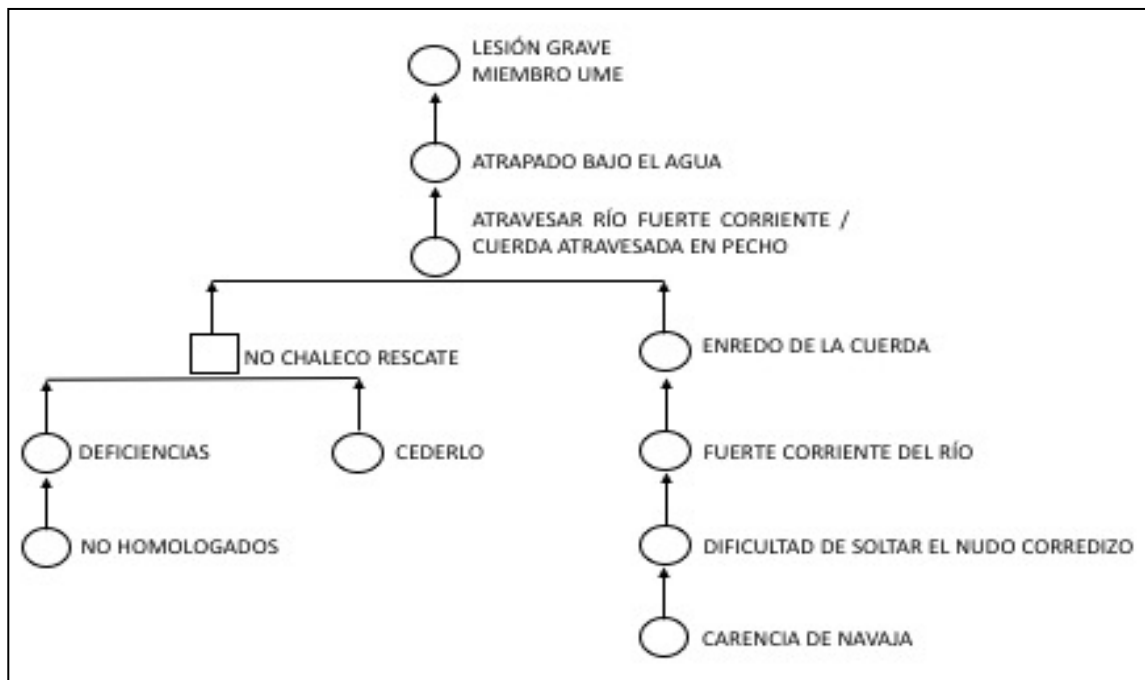
313. Loc.cit., pág. 4.

314. Loc.cit., pág. 26. Conviene recordar al respecto que el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual (EPI), por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo, en su art.3.1.a define los EPI como *«equipos diseñados y fabricados para ser llevados, puestos o ser sostenidos por una persona para protegerse contra uno o varios riesgos para su salud o seguridad»*. A su vez, el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, en su art. 4 dispone: *«Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo»*.

315. Vid. NAVARRO, F., «El Árbol de Causas y la Investigación de Accidentes Laborales», Revista digital INESEM, 2014, [consulta: 05/08/2018], [«https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/el-arbol-de-causas-y-la-investigacion-de-accidentes-laborales-i/»](https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/el-arbol-de-causas-y-la-investigacion-de-accidentes-laborales-i/).

316. Se parte como punto de inicio desde la lesión grave del miembro de la UME: 1.- ¿Qué fue necesario para que se produjese la lesión grave? - Quedar atrapado bajo el agua del cauce del río. 2.- ¿Qué fue necesario para quedar atrapado bajo el agua? - Atravesar el cauce del río con fuerte corriente y con una cuerda colocada sobre el pecho de forma atravesada. 3.- ¿Fue necesario algo más? a.- No disponer de chaleco de rescate. b.- Enredo de la cuerda. 4a.- ¿Qué fue necesario para no disponer de chaleco de rescate? - Los que disponían en dotación, fueron retirados por deficiencias encontradas por la empresa distribuidora. - Los adquiridos de forma particular por la Jefatura del BIEM I, no cubría las necesidades de todo el personal y no estaban homologados por carencias en su composición (silbato, linterna y navaja). 5a.- ¿Qué hecho motivó no disponer de chaleco de rescate durante la colocación de la línea de vida? Ceder el chaleco del siniestrado a otro miembro menos experimentado. 6a.- ¿Ha sido necesario otro hecho? No. 4b.- ¿Qué fue necesario para que la cuerda de la línea de vida aprisionara? Que la cuerda se enredara con alguna rama oculta. 5b.- ¿Fue necesario algo más? La fuerte corriente del río 6b.- ¿Qué fue necesario para quedar bajo el agua? La dificultad de soltar el nudo corredizo. 7b.- ¿Fue necesario algo más? No disponer de navaja para cortar la cuerda. 8b.- ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Vid. *Investigación de accidentes por el método del árbol de causas*, 2ª edición, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2012.

Gráfico 8. Diagrama árbol de causas. Elaboración propia.



Del análisis de los resultados, se deduce que la causa principal que pudo evitar el siniestro fue la carencia de chalecos de rescate, y que los disponibles no cumplían las exigencias normativas. Un EPI de dotación básica para este tipo de ejercicios, es el elemento fundamental para garantizar la seguridad del personal, y sin él no debería haberse llevado a cabo. Se es consciente, de que el hecho de quedar enredado no lo podría evitar el chaleco, pero en su caso tendría acceso a la navaja y a cortar la cuerda que lo aprisionaba.

No se desprecian otros factores como la falta de planificación previa actualizada, pues se constata, según la sentencia, que en otras ocasiones la unidad se había desplazado al lugar donde se produjo el siniestro. Por lo tanto, se considera que era conocido, pero se desconocía la situación concreta. La inexistente valoración del riesgo en el momento de la ejecución del ejercicio, pues tal y como se describe la corriente del río arrastraba gran fuerza, superior

a otras ocasiones; el abuso de la confianza del siniestrado, derivada de su experiencia en estos ejercicios, y por último, la permisividad y la pasividad del responsable del ejercicio, al minusvalorar los riesgos a los que se exponía el personal subordinado, ordenando su ejecución. Si se hubieran aplicado los mecanismos de la normativa preventiva, mediante la oportuna evaluación inicial de riesgos antes del ejercicio, éste no se hubiera ejecutado, hasta subsanar todas las deficiencias detectadas, y probablemente se hubieran aminorado los riesgos existentes evitando el fatal desenlace.

Queda, por último, exponer las medidas propuestas para que un accidente de las mismas características o parecidas no vuelva a producirse:

- La obligatoriedad de realizar un reconocimiento previo de los riesgos en la zona donde se proceda a realizar el ejercicio, con un tiempo de antelación no superior a quince días.
- La consulta a través del portal de la agencia estatal de meteorología, de la previsión del tiempo para la fecha elegida del ejercicio³¹⁷.
- La comprobación de los equipos de emergencia y rescate, y en caso de carencia de los EPI correspondientes, o de algunos de sus componentes, la anulación del ejercicio.
- Evaluación de riesgos en la zona.
- Contactar previamente con unidades de emergencia y evacuación, así como con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

317. Portal de la Agencia española de meteorología, «<http://www.aemet.es/es/portada>».

A nuestro parecer, las medidas propuestas contribuirán sustancialmente a evitar la materialización de un riesgo y, por ende, sus graves consecuencias.

2. Las actividades excluidas de la LPRL

Las razones por las que el legislador decide excluir del ámbito de aplicación de la LPRL a aquellas actividades que, por sus particularidades inherentes a la función pública, como las de las FAS entre otras, lo impidan, queda sujeto a cierta incógnita hasta su desarrollo normativo posterior. De afectación al personal militar de las FAS se publicó el RDPRLFAS, norma de referencia en materia preventiva para este personal y de adaptación de la LPRL³¹⁸, y aunque en su ámbito de aplicación existe cierta certidumbre sobre las actividades afectadas, su lectura detenida nos hace dudar. Ello es así, porque el art. 2.b del citado RD, precisa estrictamente que *«su ámbito de aplicación comprende las actividades que se realizan en el ámbito del Ministerio de Defensa»*. De ello, en primera instancia, puede deducirse que la normativa preventiva abarca a todas las actividades que realiza el personal militar. No obstante, se constata que el legislador no olvida la existencia de actividades que, a consecuencia de acontecimientos excepcionales, quedarán al margen de la normativa preventiva reguladora. Por ello, invoca el ámbito de aplicación establecido en el art. 3 de la LPRL y, aunque no las define, contempla las funciones públicas en las que se observaran actividades que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la normativa preventiva³¹⁹.

318. Para Moreno Márquez, la adaptación de la LPRL al personal militar no se contempla en la DM, ya que sólo se hace referencia a las particularidades de las actividades sin que mencione el criterio del lugar. Vid. MORENO MÁRQUEZ, A.M., «Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.», GONZÁLEZ ORTEGA, S., Y CARRERO DOMÍNGUEZ, C. (Dirs.), en *Manual de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas*, INAP, Madrid, 2012, pág. 73.

319. Cfr. Loc.cit., pág. 71.

En consecuencia, no cabe duda de que en el articulado del RDPRLFAS debe aparecer alguna alusión a la exclusión de actividades. El art. 6 del RD, relativo a la integración de la PRL, el plan de prevención, la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva, en su punto 1 establece que, *«La prevención de los riesgos laborales en el ámbito del Ministerio de Defensa deberá integrarse en el conjunto de sus actividades a través de la implantación y aplicación del correspondiente plan de prevención de riesgos laborales»*. No obstante, en su punto 4 inhibe de esta integración a las actividades de I/A y Operativas, a las que se les aplicarán sus normas propias de seguridad y operación. El conjunto de estas normas *per se*, constituirán el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades referidas ³²⁰.

De lo expuesto anteriormente, se suscitan cuestiones que el legislador no aclara, tales como la existencia de principios limitadores que justifican de forma objetiva la exclusión de estas actividades o la denominación de «plan de prevención de riesgos laborales», al conjunto de las normas propias de seguridad y operación; o la aglutinación, a pesar de los aspectos diferenciales, en un mismo conjunto, de las actividades de I/A y las actividades Operativas.

En palabras de Garcés Bonet, la normativa española en relación a la seguridad y salud en el trabajo, debe modificarse para que se integre con rigor en todas las actividades de las FAS. Según este autor debe matizarse su exclusión, puesto que las actividades cubiertas y no cubiertas basadas en su consideración como actividades de I/A y Operativas, son demasiado amplias y

320. Aunque en el mismo artículo, se excluyen las actividades de vuelo, no se profundiza al respecto, por no ser el objeto de la investigación.

permiten que en determinadas circunstancias no exista una garantía adecuada de la seguridad y salud del personal militar. En su opinión, la LPRL debe inaplicarse en situaciones de combate, o en determinadas actividades relativas a su preparación; y su aplicación continua, debe supeditarse al cumplimiento de la misión y a los medios y posibilidades existentes³²¹. Por lo tanto, la existencia de principios limitadores en la aplicación, requieren de un estudio y análisis particularizado, que permita esclarecer o, en su caso, discernir sobre los argumentos utilizados.

3. Principios limitadores de la integración de las actividades excluidas

La naturaleza militar, condición elegida de forma voluntaria por los ciudadanos³²², nunca debe servir de pretexto para excluir de los principios rectores de la política social y económica que rige la actividad de los poderes públicos, para velar por la seguridad y salud en el trabajo³²³. Ruiz Rodríguez señala al respecto: *«Reconocida la relevancia de este concepto en la Constitución, la salud pública tiene un tratamiento transversal en todo el ordenamiento jurídico que, en el caso del Derecho penal, queda reducido a los casos más graves de atentado contra la misma bajo el principio de la mínima intervención y de subsidiariedad frente a otras ramas del ordenamiento»*³²⁴.

De igual forma, tampoco se debe confundir la resiliencia, definida como la capacidad de resistir, recuperarse, rehacerse y adaptarse del militar, a

321. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 425.

322. El art. 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece la facultad expedita de los ciudadanos españoles y extranjeros en situación de residencia legal, de vincularse profesionalmente a las FAS.

323. Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, a tenor de lo dispuesto en el art. 40.2 de la CE.

324. Vid. RUIZ RODRÍGUEZ, L.R., «La reforma penal de los delitos contra la salud pública como respuesta a las innovaciones científicas y tecnológicas», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 18, 2016, pág. 6. [Consulta: 14/07/2019], «<http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-19.pdf>».

circunstancias y situaciones adversas que por su profesión tienen que afrontar³²⁵, devenidas del cumplimiento de las misiones legalmente atribuidas, que les hacen asumir riesgos inevitables ³²⁶. Pues ello, conduciría a la banalización de la propia condición militar ³²⁷, al considerarse que la consagración del riesgo a perder la propia vida por su patria, e incluso tener que matar por ella, resulta trivial ³²⁸. Para Martínez Pagán, la aceptación del riesgo constituye una de las peculiaridades diferenciadoras del resto de los empleados públicos³²⁹. Ruiz Rodríguez puntualiza en el caso del cumplimiento del deber en el personal perteneciente al CGC como miembros las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: *«El cumplimiento de un deber se erige como la fuente principal de exención de responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su actividad profesional»*³³⁰.

Las misiones encomendadas a las FAS son asumidas por todos aquellos ciudadanos que ejercen o quieren ejercer su derecho y deber constitucional, reflejado en el art. 30.1 de la CE: *«Los españoles tienen el derecho y el deber*

325. Cfr. Para HAMEL Y VÄLIKANGAS, «The quest for resilience», *Harvard Business Review*, 2003, pág. 1, es la capacidad de adaptarse constantemente ante circunstancias adversas, manteniendo la esencia de la organización, pero con cambios de procesos y conductas. Miccuci, en, *Modelo Pró-ativo de Gerenciamento de Riscos da Cadeia de Suprimentos*, Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008, las organizaciones que piensan en resiliencia, además de los cuidados relacionados con la seguridad, observan atentamente otros factores, tales como, relaciones más colaborativas y fuertes y cultura corporativa más específica. Pero la acepción que más se aproxima a la citada en el texto es la definida por Sabbag en, *Resiliência: competência para enfrentar situações extraordinárias na sua vida profissional*, Elsevier Rio De Janeiro, 2012, la resiliencia es la capacidad de enfrentamiento de crisis, traumas, pérdidas, graves adversidades, transformaciones, rupturas y desafíos elaborando las situaciones y recuperándose de ella.

326. Vid. Art. 15 de la LODN.

327. De Blas Pombo define el término banalización como el rechazo consciente o inconsciente de la ética militar. Una ética que pasa por la entrega potencial de la vida en el momento del compromiso inicial. Vid. DE BLAS POMBO, A., «De la banalización de la condición militar. ¿Somos los militares realmente distintos?», *Revista Ejército de Tierra español*, núm. 828, 2010, pág. 17.

328. El art. 1.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, especifica de manera inequívoca que, para todos los miembros de las FAS, es requisito *sine que non*, el juramento o promesa ante la Bandera, momento en el que asumen la obligación de defender a España y de contribuir a preservar la paz y la seguridad. Para despejar cualquier duda o interpretación al respecto en su art. 7.2, se utiliza una fórmula para este juramento, que finaliza con la expresión *«[...] si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?»*, contestando los asistentes al acto *«¡Sí, lo hacemos!»*. Vid. ARRAZOLA MARTÍNEZ, A, *La banalización de la naturaleza militar en las Fuerzas Armadas*, Premios Defensa 2015. Trabajos seleccionados, Madrid, 2015, pág. 2.

329. MARTÍNEZ PAGÁN, op.cit., pág. 21.

330. Vid. RUIZ RODRÍGUEZ, L.R., «El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial uso de la fuerza y responsabilidad penal», *Nuevo Foro Penal*, núm. 83, 2014, págs. 62.

de defender a España». Por consiguiente, las misiones encomendadas al personal militar que conforman las FAS, garantes de la defensa nacional, no deben servir de justificación para negar una interpretación extensiva de la normativa comunitaria de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, que los excluya de su protección y seguridad durante el cumplimiento de aquellas actividades. Más aún, cuando parte de este personal incluso no pertenece al ámbito castrense y se incorpora a sus filas de una manera temporal. Para Zamora Navarro, cada vez existe más interés por parte de la ciudadanía en temas relativos a la defensa nacional y más ganas de acercarse y vincularse a las FAS, mediante la prestación del juramento a la Bandera o como reservistas voluntarios³³¹. Lo que puede traducirse en una paradoja, el personal civil al incorporarse a las FAS con carácter temporal, pierde sus derechos en seguridad y salud en el trabajo mientras permanezca en filas y no los recupera hasta su regreso a sus actividades en la vida civil.

La interpretación del TJUE en su sentencia de 12 de enero de 2006, que condenó al Reino de España, entendió que la transposición de la DM en España mediante la LPRL era contraria al texto y al espíritu de la propia Directiva, dado que excluía de su ámbito a determinados sectores, entre ellos a las FAS. La sentencia afirmó que el criterio utilizado por el legislador comunitario para determinar el ámbito de aplicación de la DM no está fundado en la pertenencia de los trabajadores a los distintos sectores de actividades, sino exclusivamente en la naturaleza específica de ciertos cometidos especiales, desempeñados por estos trabajadores públicos dentro de estos sectores. Correlativamente, la

331. Vid. ZAMORA NAVARRO, J.F., «El derecho y el deber de servir a España», *Revista Ejército*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2018, núm. 928, pág. 58.

legislación española no determinaba la naturaleza de las actividades específicas que se oponían a la aplicación de la DM, por lo que se concluyó por el TJUE, que las excepciones al ámbito de aplicación de la DM no se interpretaron restrictivamente.

La citada condena obligó a la modificación de la LPRL, para ello se suprimió de su texto el adjetivo «civil» del art. 3, y de esta forma el personal militar quedaba incluido; si bien la Ley seguía sin especificar las actividades que por sus particularidades quedaban excluidas. Las mismas fueron desarrolladas posteriormente por el RDPRLFAS, que en su art. 6.4 establece: *«Para las actividades de instrucción, adiestramiento y Operativas las Fuerzas Armadas, aplicarán sus normas propias de seguridad y operación cuyo conjunto constituirá el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades de instrucción, adiestramiento y Operativas [...]»*. Se puede deliberar, llegados a este punto, si realmente se han definido en el mencionado artículo, las particularidades inherentes a las actividades específicas de las FAS que son excluidas de la aplicación de la LPRL, o por el contrario se corre el riesgo de excluir tareas pertenecientes a esas actividades que pudieran beneficiarse de los principios preventivos.

Las actividades de I/A tienen por finalidad la preparación adecuada del personal militar para la ejecución de las operaciones militares. Se realizan de forma periódica en las Unidades militares y están recogidas dentro de sus Planes Generales de Instrucción y Adiestramiento (PGIA)³³², de lo que se desprende

332. Actualmente en el Ejército de Tierra, la denominación de «Plan General de Instrucción y Adiestramiento (PGIA)», se ha modificado por «Plan de Anual de Preparación (PAP)».

que no existe razón que ampare que deban ser consideradas como un acontecimiento excepcional que les impida acogerse a la aplicación de la DM. Ello se deduce de las apreciaciones de la sentencia del TJUE citada, que indica que las excepciones al cumplimiento de la DM deben ser interpretadas restrictivamente, debiendo prevalecer sólo de forma transitoria, en el caso de acontecimientos excepcionales que requieran la adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud, así como de la seguridad colectiva³³³. Esta afirmación requiere un estudio pormenorizado y exhaustivo que permita demostrar, o no, la idónea integración de estas actividades en la prevención de riesgos laborales. Y que, por ende, admitan incluir o no, además de sus propias normas de seguridad, los principios de la actividad preventiva³³⁴.

A nuestro modo de ver, es más probable que en las actividades de I/A, no se den las condiciones que eximan a las FAS de aplicar la DM por ejecutarse en condiciones ajenas a un ambiente hostil, mientras que en las actividades Operativas desarrolladas en escenarios bélicos, sí podrían darse. No obstante, estas circunstancias solamente se cumplirán, cuando de la operación dependa la seguridad e integridad de la colectividad³³⁵. Por ello, en los siguientes puntos se analizan los argumentos sobre los principios limitadores de la aplicación del

333. Vid. Párrafo 27, STJUE (Sala Segunda), de 12 de enero de 2006, asunto C-132/04.

334. En el art. 5 del RD 1755/2007, de 28 de diciembre, se fijan los principios por los que se establecerán y aplicarán las medidas que integran el deber general de prevención: a) Evitar los riesgos; b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar; c) Reducir los posibles riesgos; d) Combatir los riesgos en su origen; e) Adaptar el puesto de trabajo a la persona; f) Incorporar nuevas tecnologías; g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre los métodos y organización del trabajo, los medios tecnológicos y los factores ambientales en el trabajo; h) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; i) Impartir las debidas instrucciones al personal respecto de los riesgos laborales. Estos principios son los mismos que los establecidos en el art. 15 de la LPRL en los que se aplicarán las medidas que integran el deber general de prevención.

335. Vid. ARRAZOLA MARTÍNEZ, A., op.cit., pág. 5.

derecho a la prevención de riesgos laborales al personal militar en los que se sustenta la exclusión.

3.1. La salvaguarda de la defensa nacional, un derecho no exclusivo del personal militar

Circunscribir la salvaguarda de la defensa nacional, sólo y exclusivamente al ámbito militar, denota un desconocimiento absoluto del objetivo que se persigue con esta misión. Por lo tanto, no es conveniente emplear esta justificación, que podría ser discriminatoria, para excluir de forma absoluta al personal militar de la aplicación de los principios de la acción preventiva en materia de seguridad y salud laboral. A tenor de la STJUE, de 6 de enero de 2006, la restricción general de la PRL que se aplicaba a todas las actividades del personal militar, quedaba limitada a aquellas actividades establecidas por la normativa posterior de desarrollo. Estas actividades excluidas, se definieron en el art. 6.4 del RDPRLFAS, desarrollo de la LPRL para el personal militar del Ministerio de Defensa, siendo estas las de I/A y Operativas, y creándose de esta manera un vínculo inseparable entre las mismas y la defensa nacional.

Se deduce inequívocamente, que cuando el personal militar realice estas actividades, la salvaguarda de la defensa nacional está siendo garantizada y que de forma inexorable no podrán aplicarse principios preventivos de seguridad y salud, que no sean sus propias normas de seguridad. Sin embargo, esta afirmación queda vacía de argumento si antes no se analiza y comprueba el alcance de esta misión, su afectación particular al ámbito militar, los efectos que producirían su incumplimiento y qué consecuencias positivas y negativas traerían la aplicación de la regulación preventiva.

3.1.1. La defensa nacional: concepto y alcance

El concepto de la defensa nacional se encontraba en la LO 6/80³³⁶, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. Aunque esta LO está actualmente derogada, resulta de interés la definición expuesta en su art. 2, «[...] es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin [...]». Esta definición nos aporta dos elementos significativos, que pueden dar lugar a una reflexión sobre la decisión de inaplicación de los principios preventivos para evitar un perjuicio a la sociedad: «cualquier forma de agresión» y «todos los españoles». La agresión, siendo de cualquier forma, alcanza a todo el espectro sobre agresiones a las que pueda enfrentarse la nación, y no sólo a aquellas de naturaleza militar. El segundo elemento determina el alcance de la responsabilidad de la defensa, que abarca a todos los ciudadanos españoles, no fijando la Ley discriminación alguna sobre su naturaleza militar o civil. De esta manera se constata, que el carácter de la defensa nacional, no es una misión estrictamente militar, sino que afecta a todos los ámbitos del Estado³³⁷. Si bien es cierto que fundamentar la investigación en este punto sólo sobre normativa derogada, no constituiría un argumento válido o justificativo, bien sirve de inicio para el planteamiento contradictorio que posteriormente nos conducirá a la validez de las hipótesis planteadas y al planteamiento de las respectivas conclusiones.

336. La LO 6/80, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, fue derogada por la LODN.

337. Abad Ripoll reconoce que la defensa nacional no es solo la defensa puramente milita, que además de sus FAS, el Estado tiene otros "instrumentos" para hacer efectiva su respuesta a la agresión sea del tipo que sea. Vid. ABAD RIPOLL, E., «La defensa nacional, piedra angular de la Seguridad Nacional», *La Gaceta*, de 9 de mayo de 2017, [Consulta: 04/06/2017], «<http://gaceta.es/noticias/defensa-nacional-piedra-angular-seguridad-nacional-09052017-1955>».

Para Quero Rodiles, la defensa nacional es una actitud general de la nación, que no diferencia el carácter de los ciudadanos, *«efectuando para ello cuantas acciones ofensivas y defensivas resulten imprescindibles»*; estas acciones afectan a todos por igual, sin discriminación de su condición³³⁸. Labajos Fernández así lo confirma *«La defensa nacional es una función que asume el Estado, que implica a todos los ciudadanos y a los poderes públicos, a todos los recursos materiales y humanos de la nación»*³³⁹. Según Moreno Márquez, *«lo más importante es que la defensa nacional se presenta como una función distinta a cualquier otra que haya asumido el Estado, y, al mismo tiempo, prioritaria con respecto al resto de las funciones públicas»*³⁴⁰. Aunque pueda relacionarse de forma directa a las FAS con la defensa nacional, por la ejecución de acciones ofensivas y defensivas y deducir, por lo tanto, que este deber de protección sólo sea una misión encomendada al personal militar, la normativa vigente aparta este concepto erróneo.

A diferencia con la normativa predecesora derogada, que la definía³⁴¹, pero no concretaba la coordinación de los recursos de la nación para lograr los objetivos en la política de defensa³⁴², en la normativa vigente, aunque no se define de forma tan clara el concepto de defensa nacional, sino su objeto y finalidad (arts. 1 y 2 LODN 5/2005), sí se establece esta coordinación. En efecto, ello es así porque el Gobierno asume la responsabilidad de *«[...] establecer los*

338. Vid. QUERO RODILES, F., *Introducción a la Teoría de la Seguridad Nacional*, Madrid, Ediciones Ejército, 1989, pág. 29.

339. LABAJOS FERNÁNDEZ, loc.cit., pág. 38.

340. Vid. MORENO MÁRQUEZ, A.M., «La seguridad y salud laboral del personal militar: principios inspiradores», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, núm. 83, Sevilla, 2006, pág. 78.

341. En el art. 2 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, se define la defensa nacional como: *«la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin»*.

342. El art. 15.1 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, deja la coordinación de los recursos de la nación, necesarios para lograr los objetivos fijados en la política de defensa a los órganos superiores establecidos en su Título I, pero no los define de forma cualitativa o cuantitativa.

criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la defensa nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, teniendo en cuenta para su aplicación los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos». De nuevo se localiza otra expresión, y en una normativa vigente, que permite reforzar el criterio sobre la idea preconcebida de relacionar sólo al personal militar con la defensa nacional, pues abarca también «*recursos humanos y materiales no propiamente militares*». En palabras de García Arias, el concepto defensa nacional implica a la toda la nación: «*la Defensa nacional es una lucha contra todo lo que amenace desde el exterior o el interior, abiertamente o de manera latente, el espíritu o el alma de la nación*»³⁴³. No obstante, Ballesteros Martín es partidario de no hacer extensiva la defensa nacional y limitarla a aquellas acciones, de marcado carácter militar, que sirvan como medida preventiva para precaverse de peligros y amenazas, «*que afecten directa y claramente a la consecución de los intereses y objetivos nacionales*»³⁴⁴. Además, Ballesteros Martín separa la defensa nacional de la seguridad nacional, con una clara intención de no confundirlas por la finalidad por la que están creadas. Para él, existen acciones, tales como la seguridad interior del país, los riesgos y peligros procedentes de catástrofes naturales, las agresiones económicas, la inmigración masiva, que no cumplen los requisitos necesarios para considerarlas objeto de la defensa nacional, y quedan acogidas al concepto de seguridad nacional ³⁴⁵. En su definición sobre la defensa nacional, expone un concepto generalista, «*el diseño, desarrollo y ejecución de todas las*

343. Vid. GARCÍA ARIAS, L., *La guerra moderna y la organización internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, pág. 342.

344. Vid. BALLESTEROS MARTÍN, M.A., *En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, pág. 56.

345. Loc.cit., pág. 57.

*acciones y fuerzas morales y materiales para oponerse a los peligros y amenazas que se plantean contra los intereses nacionales», por lo que parece oportuno confirmar su carácter global y extensivo a toda la población*³⁴⁶.

Del matiz empleado por Ballesteros Martín, sobre el carácter militar de las acciones ofensivas y defensivas llevadas a cabo en la defensa nacional y su diferenciación de la seguridad nacional. Laborie Iglesias expone su propia definición de seguridad nacional *«la seguridad de los ciudadanos de un país está garantizada cuando la propia seguridad del Estado también lo está»*, implicando de manera bilateral ciudadanos y Estado, y creando una sinergia entre ambos³⁴⁷. Ballesteros Martín, se ratifica en la definición de seguridad nacional y la aparta de toda interpretación con la defensa nacional: *«Seguridad nacional es la situación en la que el normal desarrollo de la vida de la nación está protegido contra riesgos, peligros o amenazas exteriores o interiores y permite defender al país sus intereses nacionales, cumplir con sus compromisos internacionales de protección y contribuir a la paz y estabilidad internacional»*³⁴⁸. De hecho, la estrategia de seguridad nacional 2017 persigue entre sus objetivos la prioridad de promover en la sociedad una cultura de seguridad nacional, en la que se conciencie al ciudadano de su participación activa, como eje de actuación de la efectividad de esta política pública³⁴⁹. Según Del Valle Melendo, para alcanzar

346. Ibid.

347. Vid. LABORIE IGLESIAS, M., «La evolución del concepto de seguridad», *Documento marco 05/2011*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2011, págs. 1 y 2.

348. BALLESTEROS, op.cit, pág. 95.

349. Vid. Estrategia de seguridad nacional 2017. Presidencia del Gobierno. [Consulta 29/03/2019], «http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf».

este objetivo es necesario el conocimiento y el compromiso de la sociedad con la seguridad y defensa nacional³⁵⁰.

Con ello, se plasma el concepto holístico de seguridad y defensa nacional, que hace participativa a toda la sociedad. Ballesteros Martín concreta con acierto definiendo esta desigualdad: *«mientras la defensa es la forma de oponerse a un peligro o una amenaza, la seguridad es mucho más exigente y más difícil de alcanzar, tiene un carácter más preventivo y más utópico al tratar de mantener fuera de todo riesgo, peligro o amenaza a las personas y bienes objeto de la seguridad»*³⁵¹. Por lo tanto, parece lógico que en la estrategia de seguridad nacional, se encuentre incluida la defensa nacional, ya que las acciones ofensivas y defensivas de carácter militar, está inequívocamente ligadas a ella.

Llegados a este punto, cabe formular la cuestión sobre la relación de las FAS con ella y delimitar cuándo las actividades de I/A y Operativas contribuyen directamente a preservarla. Asignada la misión de la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa determinada por el Gobierno al Ministerio de Defensa, e integradas las FAS en el citado departamento ministerial³⁵², se define a las FAS como el elemento esencial de la defensa, pero no el único, cuya misión emana de lo dispuesto en el art. 8.1 de la CE: *«[...]garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»*. Esta misión dota de unas características singulares a las FAS, y la diferencia de otras instituciones en relación con la defensa nacional, pues el

350. Vid. DEL VALLE MELENDO, J., «Una cultura de seguridad y defensa para la España de principios del siglo XXI», *Boletín I.E.E.E.*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, pág. 624.

351. BALLESTEROS, op.cit, pág. 51.

352. Vid. Art. 9 de la LODN.

deber de preservar el territorio nacional y, por ende, a su sociedad, haciendo frente a todas aquellas agresiones que atenten contra la soberanía e independencia, les imprime un carácter bélico, de las que el uso de las armas parece ser inevitable.

Este concepto permite comprender el alcance de la salvaguarda, por un lado, de los elementos constitutivos del Estado, tales como la soberanía, el territorio y la población. Y por otro, los derechos y libertades de los ciudadanos, la forma del Estado, la del sistema político y la pervivencia del conjunto de las funciones públicas³⁵³. No obstante, la CE en su art. 30.1, confirma de una manera sólida el concepto amplio de la defensa nacional, cuya obtención abarca a todos los ciudadanos. Moret Millás afirma que la defensa nacional *«[...] es una obligación connatural a la propia existencia de sociedades políticamente organizadas. [...] Evidentemente, el deber de defender a España es un concepto más amplio que las posibles obligaciones militares que se puedan imponer a los ciudadanos por el Legislador. »*³⁵⁴. Además, Labajos Fernández expresa, *«la defensa nacional actúa como elemento modulador a partir del cual se establecen cambios con respecto al régimen general que se aplicaría al personal civil si no prestara servicios en el ámbito castrense, ya sea como personal laboral, o como funcionarios civiles»*³⁵⁵. Por lo tanto, la sinergia de todos los recursos, contribuirá de forma efectiva a alcanzar el objetivo de la defensa nacional, pero sólo la concienciación de todos los ciudadanos garantizará su éxito. Justificación más que adecuada, para implantar un sólido cimiento sobre el que se construya un

353. Cfr. BLANCO ANDE, J., *Defensa nacional y Fuerzas Armadas*, Dykinson, S.L., Madrid, 1987, pág. 177.

354. Vid. MORET MILLÁS, V., «Los deberes constitucionales en el ordenamiento jurídico español: el inestable binomio derechos-responsabilidades», *Anuario de Derecho parlamentario*, núm. 30, 2018, págs. 243 a 245.

355. LABAJOS FERNÁNDEZ, op.cit., pág. 40.

principio limitador que impida la aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral a todos los ciudadanos, con independencia de su naturaleza civil o militar, que de forma voluntaria u obligatoria realicen una prestación, cuando así lo exija el Gobierno para preservar la defensa nacional.

3.1.2. Fuerzas Armadas, Administración militar y defensa nacional

La evolución histórica de los ejércitos, actualmente denominados FAS, tienen su punto de inflexión a partir del liberalismo o revolución liberal. Pues se rompe con las misiones que hasta entonces tenían encomendadas los ejércitos, subyacentes a los intereses particulares del monarca³⁵⁶. Desde la revolución francesa y la división de poderes³⁵⁷, los ejércitos se subordinan al poder civil, y sus misiones se dirigen a la defensa general del Estado y a sus elementos materiales: instituciones, población y territorio, salvaguardándolas de las agresiones violentas de carácter interno o externo³⁵⁸. Se inicia así una comunión entre Estado y ejército, consagrando éste a un interés general, su defensa³⁵⁹.

Los ejércitos, o FAS, cualquiera que sea la denominación empleada, encaminados a preservar la defensa nacional, implicarán al personal de naturaleza militar que los constituye, con un régimen jurídico distinto al de cualquier otro funcionario público de diferente naturaleza, de una manera especial para alcanzar su misión. No obstante, el personal militar por sí solo no

356. Vid. GÓMEZ OCHOA, F., «El liberalismo conservador español del siglo XIX: la forja de una identidad política, 1810-1840 (1)», *Historia y Política*, Madrid, 2007, pág. 37. El liberalismo, como corriente política emergente, formulaba una ideología diferenciadora hasta el momento, tuvo lugar en España durante los años 1835 a 1840.

357. Vid. GARCÍA DEL MAZO, S., *El espíritu de las leyes por Montesquieu*, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1906, pág. 227. «En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.»

358. Cfr. COTINO HUESO, L., *El modelo constitucional de Fuerzas Armadas*, INAP, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 111.

359. Según Guaita Martorell, «[...] la defensa del Estado contra todos sus enemigos exteriores e interiores, y actuar de hecho contra unos y otros cuando la gravedad del caso lo requiera [...]». Vid. GUAITA MARTORELL, A., «La Administración militar», *Revista de Administración Pública*, n° 7, 1952, pág. 116.

será suficiente, el Estado necesitará de una organización singular, incardinada para preparar, desarrollar y ejecutar la política de defensa de las Administraciones que conforman el poder ejecutivo. Entre todas, la Administración militar será la elegida por el Gobierno.

La similitud semántica entre las palabras «FAS, ejércitos y defensa», puede inclinar a intuir que la Administración militar, solo esté constituida por personal militar. De ahí que de forma banal podamos excluir al personal civil de forma concluyente, cometiendo un craso error. No hay que olvidar que la denominación Administración militar, está atribuida a aquellos órganos de la AGE, vinculados a la función administrativa de defensa del Estado³⁶⁰. En este sentido, se afirma de manera inequívoca que las FAS están integradas en la Administración militar, y esta a su vez en la AGE. Por consiguiente, se niega taxativamente, que las FAS sean identificadas literalmente como Administración militar, pues *a sensu contrario*, forman parte de ella.

En el texto de la LODN, se hace alusión en dos ocasiones a la dirección de la Administración militar³⁶¹, correspondiendo al Ministro de Defensa, como miembro del Gobierno. La concomitancia entre Administración militar y el departamento ministerial, se consolida en el art. 1 del RD 454/2012, de 5 de marzo, *«1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración*

360. Matamoros Martínez expresa: «el artículo 97 de la CE -al que sigue el artículo 1.1 de la LG- parece dividir a la Administración en civil y militar, cuando determina que corresponde al Gobierno dirigir una y otra, además de la defensa del Estado. En realidad, se trata de una fórmula descriptiva; la AGE es sólo una, como deja claro la rúbrica del título IV de la propia CE («Del Gobierno y de la Administración») y, consecuentemente, proclama la LOFAGE en su artículo 2.2: "La Administración General del Estado, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única"». «También los artículos. 25.3 y 26 de la CE aluden a la «Administración Civil», con el propósito evidente de permitir que la «Administración Militar» pueda hacer lo que se en ellos se prohíbe (imponer sanciones privativas de libertad y constituir Tribunales de Honor)». Vid. MATAMOROS MARTÍNEZ, R., Y ORTIZ HERNÁNDEZ, J.M., «Las Administraciones Públicas», en *Introducción al estudio de las Administración Militar y los procedimientos administrativos*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, pág. 19.

361. Vid. Arts. 5 y 7.2.d, de la LODN.

General del Estado al que le corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa determinada por el Gobierno y la gestión de la administración militar». A ningún otro departamento le corresponde la citada dirección, y de forma rigurosa se puede precisar que la Administración militar la constituye el Ministerio de Defensa y los organismos autónomos a él adscritos³⁶². Esta Administración específica, en la que se encuentran integrados una miscelánea de recursos humanos y materiales, de naturaleza civil y militar, está creada para el cumplimiento de la defensa nacional es una Administración con características singulares, que la diferencian de otras, con peculiaridades que no la hacen apartarse de ser una Administración³⁶³, y estar reguladas por los mismos principios que para todas establece la CE³⁶⁴.

Llegados a este punto, la relación intrínseca entre FAS y defensa nacional parece ser inexorable, pero no excluyente a otros organismos. La integración de las FAS en el Ministerio de Defensa, como elemento esencial de la defensa, facilita al departamento adquirir la necesaria vertebración que le posibilita alcanzar su misión, de igual forma que otros organismos, no castrenses, también se integran con la misma finalidad ³⁶⁵. El personal militar, pertenece a la Institución armada y ésta a la Administración militar, de igual manera que el personal civil funcionario, laboral y estatutario, pertenece a los órganos administrativos de la Administración militar; ambos consolidan una sinergia, que contribuye eficazmente a cumplir los cometidos encomendados al Ministerio de

362. Vid. MATAMOROS MARTÍNEZ, R., y ORTIZ HERNÁNDEZ, J.M., op.cit. pág. 23.

363. Ibid. Pág. 23, para Matamoros Martínez, «la actuación de los distintos órganos del Ministerio de Defensa se rige por la LRJPAC. Sin perjuicio de ello, las relaciones entre militares destinados en el Ministerio o sus organismos autónomos deben acomodarse a las reglas establecidas en el precitado art. 4 de la LCM y en las Reales Ordenanzas para las FAS. Sin perjuicio de ello, las relaciones entre militares destinados en el Ministerio o sus organismos autónomos deben acomodarse a las reglas establecidas en el precitado art. 4 de la LCM y en las Reales Ordenanzas para las FAS».

364. Vid. Art. 103, de la CE.

365. Vid. Art. 3 del RD 454/2012, de 5 de marzo.

Defensa. Sin embargo, con un matiz que los diferencia, un régimen jurídico que vincula al personal militar a una sujeción especial³⁶⁶; con limitaciones constitucionales³⁶⁷, acordes a las características de las FAS de disciplina, jerarquía y unidad³⁶⁸. Y ello no se circunscribe sólo a su organización y estructura, sino que alcanza a limitar derechos del personal militar. Y a pesar de que ambos, personal civil y militar, son integrantes del Ministerio de Defensa y tienen encomendadas la misma función, la defensa nacional.

Las restricciones del personal militar, en virtud de su idiosincrasia, no son un argumento suficiente para la limitación de sus derechos de seguridad y salud laboral. Aún más si cabe, cuando con la misma finalidad se encuentra el personal civil de la misma Administración, al que no se le restringe o limita derecho alguno en materia preventiva. No obstante, para Moreno Márquez, la diferenciación del régimen jurídico del personal militar respecto al personal civil como empleado público, *«no se ciñe a los aspectos organizativos, sino que va más allá y se proyecta, desde el punto de vista sustantivo, en forma de limitaciones de los derechos del personal que tiene encomendada la función de Defensa»*³⁶⁹. Por este motivo, este personal, a diferencia del resto de los funcionarios, está

366. Señala Fernández García, «La CE 1978 reconoce —como veremos— distintos principios propios de la organización castrense como bienes constitucionalmente relevantes, a saber, la disciplina, la jerarquía, el principio de neutralidad política, etc. Ello va a determinar un mayor nivel de sujeción del ciudadano militar». Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, I., «La sujeción especial del militar tras la nueva Ley orgánica de derechos y deberes», *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 102, Madrid, pág. 133. El mismo autor cita en consonancia con lo expuesto «En este sentido, GARCÍA MACHO, R., *Las relaciones especiales de sujeción en la Constitución Española*, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 209». FERNÁNDEZ GARCÍA, I., op.cit. pág. 129. En el mismo sentido, LASAGABASTER HERRARTE, I., *Las relaciones de sujeción especial*, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1994, pág. 171. Asimismo, Pascua Mateo expone «Ya desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, la STC 132/2001, de 8 de junio, FJ 4, declara que «[e]s posible reconocer situaciones y relaciones jurídico-administrativas donde la propia Constitución o las leyes imponen límites en el disfrute de los derechos constitucionales, llámense tales relaciones de “especial sujeción”, “de poder especial”, o simplemente “especiales”. Lo importante ahora es armar que la categoría “relación especial de sujeción” no es una norma constitucional, sino la descripción de ciertas situaciones y relaciones administrativas donde la Constitución, o la ley de acuerdo con la Constitución, han modulado los derechos constitucionales de los ciudadanos». Vid. PASCUA MATEO, F., *Fuerzas Armadas y derechos políticos*, Colección Monografías, Congreso de los Diputados, Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, departamento de Publicaciones, Madrid, 2006, pág. 97.

367. Vid. Arts. 15, 28.1, 29.2 y 70.1.e, de la CE.

368. Vid. Art. 7. Características del comportamiento del militar, del RD 96/2009, de 6 de febrero.

369. MORENO MÁRQUEZ, op.cit., pág. 82.

limitado y sujeto a la función asignada y por ello, durante su cumplimiento se verán sometidos a restricciones específicas, pero no antes.

3.2. El cumplimiento inevitable de la misión: la inevitabilidad del riesgo

La doctrina del Ejército de Tierra define la «voluntad de vencer»³⁷⁰, uno de los principios fundamentales del arte militar, como «*el firme propósito del mando y de las tropas de imponerse al adversario y cumplir la misión en cualquier situación por desfavorable que esta sea*»³⁷¹. Por otro lado, el principio operativo, «iniciativa», incentiva la necesidad de instruir a los Cuadros de mando, en la capacidad de asumir riesgos para contribuir al cumplimiento de la misión. Los alienta a tomar decisiones que favorezcan este fin, limitándolas cuando estas aboquen al fracaso o comprometan a la misión de forma irremediable ³⁷². La responsabilidad del mando es una característica fundamental, que unida al principio operativo enunciado, permite la legitimación del combatiente en conflicto bélico. De esta sinergia, surge un vínculo indisoluble, de la propia función de mando y la implantación positiva del Derecho internacional humanitario³⁷³. Estos principios enunciados, revelan el imperativo legal de las misiones encomendadas a las FAS, en las que sin duda sus componentes se

370. La doctrina del Ejército de Tierra «es el conjunto de principios, conceptos y directrices fundamentales para el empleo de las fuerzas terrestres en operaciones militares». Vid. Ejército de Tierra, MADOC. PD1-001. Empleo de las Fuerzas Terrestres. Ministerio de Defensa, Granada, 2011, pág. 1-1. Hay que diferenciar esta doctrina, de la doctrina militar definida en el art. 7, del RD 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, «Doctrina militar. La doctrina militar, o doctrina para las operaciones, establecerá los principios directores que deben regir la actuación operativa de las Fuerzas Armadas españolas, proporcionando además un marco de referencia común para la actuación específica de los Ejércitos, una guía para la conducción de las operaciones militares, un marco de pensamiento y un catálogo de soluciones a los problemas en operaciones. La doctrina militar nacional será promulgada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y será compatible y estará armonizada con la doctrina militar internacional que España haya ratificado como miembro de las organizaciones internacionales o multinacionales de seguridad y defensa de las que es parte componente. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire desarrollarán y colaborarán en la definición de la doctrina militar en su ámbito específico».

371. Los principios fundamentales del arte militar son «conceptos básicos y generales que se apoyan en verdades confirmadas que rigen de una manera permanente las acciones victoriosas de los ejércitos, según se desprende del examen de la historia.». Los principios fundamentales, voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución, se aplican en todas fases y circunstancias del conflicto bélico y sirven como punto de apoyo que ponen de manifiesto las teorías y doctrinas, adecuándolas y ponderándolas a las circunstancias específicas de cualquier operación militar. Loc.cit., pág. 3-1.

372. Loc.cit., pág. 3-2. Los principios operativos, empapados por los principios fundamentales, dirigen la actuación de las fuerzas terrestres en las operaciones militares.

373. Cfr. CORN, G.S., «La verdadera naturaleza del concepto de "responsabilidad" en el mando responsable», *Revista Internacional de la Cruz Roja*, núm. 895/896, 2015, pág. 901.

enfrentaran a riesgos, que deben aceptar durante su transcurso, teniendo que renunciar a su seguridad individual en beneficio de la misión.

El espectro del conflicto bélico en el que se desarrollará la misión, muestra la dureza de las condiciones que este personal debe afrontar. En la misión la pérdida de la propia vida de los combatientes durante su transcurso, se asume como un riesgo permitido, previsible e inevitable. Lo que, unido a la consecución del éxito, por encima de cualquier obstáculo, contribuirá con gran trascendencia en los niveles estratégico, operacional y táctico a alcanzar su objetivo. En este sentido, cabe sin duda revestir a las misiones de un carácter excepcional, cuya prioridad es la protección del colectivo: el Estado español. Ello, a su vez, impedirá la asunción y aplicación de la legislación preventiva sobre el personal militar en ciertos casos, por ser inviable la posibilidad de eliminar riesgos contra la seguridad y salud del combatiente³⁷⁴.

Las misiones que se le encomiendan a las FAS, vienen establecidas a tenor de lo dispuesto en el art. 15 de la LODN. En cada una de ellas, el Estado justifica el uso de la fuerza por las FAS, amparadas bajo el techo del Derecho

374. Según Cruz Artico, «el derecho, como regulador de comportamientos, opta con acierto por no incurrir en la flagrante contradicción que significaría proscribir acciones que a la vez promueve, consiente y auspicia. Permite porque resulta imposible evitarlas y consiente en la medida en que los beneficios que generan son superiores a los perjuicios». El - riesgo permitido- de perder la vida, se asume en los conflictos bélicos como un hecho inevitable y probable. Vid. CRUZ ARTICO, J., «El riesgo permitido en el derecho penal: fundamentos y determinación», *Revista pensamiento penal*, 2015, pág. 8. [Consulta 11/01/2019], «<http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42070-riesgo-permitido-derecho-penal-fundamentos-y-determinacion>». No obstante, Gimbernat Ordeig señala que, «una acción que no aumenta el riesgo permitido, que no incrementa el peligro de producción del resultado, tiene que ser enjuiciada cuando causa un resultado, y según criterios de justicia, igual que un comportamiento no-prohibido». El conflicto bélico, por sí, no justifica el hecho probable de perder la vida. Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., «Teoría de la evitabilidad versus teoría del aumento del riesgo», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Tomo 68, Fasc/Mes 1, 2015, pág. 29. En la misma línea Garrocho Salcedo señala que, «atendiendo, por tanto, a la peligrosidad que las operaciones bélicas (estatales o paraestatales) pueden acarrear para ciertos bienes jurídicos, el jefe militar debe organizar las actividades de sus fuerzas de modo que estas no excedan el ámbito del riesgo permitido». Vid. GARROCHO SALCEDO, A.M., «Los delitos de omisión de los mandos militares y superiores civiles ante... la comisión de crímenes internacionales en el código penal español». *Revista de derecho penal y criminología*, 3.ª Época, n.º 17 (enero de 2017), pág.75.

internacional y el Derecho interno español³⁷⁵. Estas misiones se reducen a cuatro conceptos fundamentales:

- Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, (art. 8.1 de la CE).
- Contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales, así como al mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria.
- Preservar, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas³⁷⁶.
- Realizar misiones de evacuación de residentes españoles en el extranjero.

En el transcurso de estas diferentes misiones se considera la probabilidad de que el personal militar, incluso en tiempo de paz³⁷⁷, pueda, deba o tenga que

375. Cfr. MATAMOROS MARTÍNEZ, R., y ORTIZ HERNÁNDEZ, J.M., op.cit. pág. 19

376. Esta misión, se le encomienda a la Unidad Militar de Emergencia (UME). Esta Unidad es una fuerza conjunta y organizada con carácter permanente, creada por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 2005, con la finalidad de mejorar la respuesta del Estado a las situaciones de emergencia. Los componentes de esta Unidad, proceden de las FAS, y dependen orgánicamente del ministro de Defensa y operativamente del JEMAD.

377. Para Cuesta Rico, la expresión «tiempo de paz» aparece diferenciada de la expresión «tiempo de guerra», en los arts. 12 y 13 de la Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y el matiz diferenciador será vinculante para la aplicación en el personal de las Fuerzas Armadas españolas, sobre aquellas conductas delictivas aplicando el Código Penal Común o el Código Penal Militar, por otro lado la CE no define la expresión «tiempo de guerra», tan sólo menciona la palabra «guerra», en los arts. 15, 63.3 y 169, y de ellos se desprende que la CE dispone un concepto formal de guerra, y consecuentemente se afirma que «se está oficialmente en guerra sólo cuando así lo declaran las Cortes», aunque las Fuerzas Armadas pueden encontrarse en tiempo de paz, en escenarios de guerra no declarados formalmente, al participar en misiones. Cfr. CUESTA RICO, F., «Los parámetros constitucionales de la acción exterior de las Fuerzas Armadas españolas», Marrero Rocha, I. (Coord.), Liñán Noguera, D.J., y Roldán Barbero, J.

sacrificar su vida si la misión lo exige³⁷⁸. En la primera misión existen más riesgos que en el resto de las misiones, incluso se asume el riesgo de la pérdida de la vida del personal militar³⁷⁹. Esto es debido, a que la intervención de las FAS está sujetas a múltiples variables, que impiden la concreción de sus actuaciones. Por ello, el grado de implicación es diferente según el tipo de misión ejecutada, ya que la intensidad de las misiones se modulará en mayor o menor medida, en función de unos parámetros, tales como el uso de la fuerza, ya sea en legítima defensa³⁸⁰ o de manera coercitiva, o el entorno hostil en el que se desarrolle la misión³⁸¹.

Quizás esta consideración pueda parecer un mero planteamiento teórico. Sin embargo, el acto supremo de entregar la vida en defensa de España, cuando fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber que rige las reglas de comportamiento del militar³⁸².

Las bajas del personal militar durante el cumplimiento de las diferentes misiones, se han materializado de forma real, como así se reflejan en la tabla 6

(Edits.), en *El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior*, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2008, págs. 239 y 240.

378. Cfr. DE BLAS POMBO, A., «De la Banalización de la condición militar. ¿Somos los militares realmente distintos?», *Revista Ejército de Tierra español*, núm. 828, 2010, pág. 20.

379. Según Feliú Ortega, en la primera misión encomendada a las FAS, el mandato constitucional les exige la garantía y defensa de la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, ante agresiones o amenazas que, como consecuencia del fracaso de otros medios, distintos al uso de la fuerza, llevaría a desembocar en un conflicto armado obviamente el riesgo de perder la vida aumentaría. Cfr. FELIÚ ORTEGA, L., *Las Fuerzas Armadas y la defensa nacional*, Presentación en la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), Madrid, 2015, pág. 6.

380. Para Lorenzo Ponce de León, las Reglas de Enfrentamiento (ROE), son un recurso esencial utilizado desde las altas esferas políticas de una nación y dirigido a sus Mandos militares en forma de directivas o instrucciones en las que se definen las circunstancias, las condiciones, el grado y los procedimientos a seguir para el empleo de la fuerza, incluida la letal, en el curso de las operaciones militares. Vid. LORENZO PONCE DE LEÓN, R., «Las Reglas de enfrentamiento (ROE) como paradigma del Estado de derecho en operaciones militares», *Revista española de derecho militar*, núm. 99, 2012, pág. 47.

381. Cfr. ORTEGA SANTIAGO, C., *La dimensión constitucional de la guerra: Conflictos armados e intervenciones militares en el extranjero*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documento de Trabajo núm. 43/2004, Madrid, 2004, pág. 5.

382. Vid. Art. 6 de la LO 9/2011, de 27 de julio.

³⁸³. De esta forma se constata que, a pesar de conocer o prever el riesgo de la pérdida de la vida, el personal militar participante en las misiones encomendadas a las FAS debe cumplirlas inevitablemente³⁸⁴ y aunque no exista principio preventivo alguno, que pueda impedir en ocasiones la producción de un daño.

Tabla 6. Bajas de personal militar en cumplimiento de las misiones. Elaboración propia, fuente Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica.

MISIÓN	Periodo	Bajas personal militar
1.- Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional	1978 – 2018	0
2.- Mantenimiento Paz y Ayuda humanitaria	1987 – 2018	172 (FAS)
3.- Seguridad y Bienestar ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas	2005 – 2017	3 (UME)
4.- Misiones evacuación residentes españoles en el extranjero	2005 - 2018	0

En los datos expuestos el número de las bajas producidas en una de las misiones encomendadas a las FAS: la contribución militar a las operaciones de mantenimiento de paz, superan con creces al resto de las misiones. Estas operaciones se consideran elementos clave para alcanzar la paz y la seguridad en las diferentes partes del mundo, definidas por el Tribunal Internacional de

383. Los distintos periodos seleccionados para la elaboración de la tabla han seguido los siguientes criterios: para la misión 1, desde la promulgación de la CE hasta la actualidad; para la misión 2, desde la primera participación de las FAS hasta la actualidad; para la misión 3, desde la creación UME hasta la actualidad; para la misión 4, desde la promulgación de la LODN hasta la actualidad. Datos obtenidos del Ministerio de Defensa. España. *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas*. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid.

384. Para Ajangiz Sánchez, el problema al que se enfrentan los ejércitos son las bajas propias, que disgustan a la opinión pública. A pesar de exigir una acción por parte de la sociedad de sus respectivos países, para detener la violencia extrema, en países en conflicto bélico. Cfr. AJANGIZ SÁNCHEZ, R., «Intervenciones humanitarias y opinión pública: de la exigencia al desencanto», *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, núm. 60, 2002-2003, pág. 31.

Justicia de las Naciones Unidas como aquellas que persiguen sus objetivos constitucionales a través de las operaciones de paz. Según el exsecretario general de la ONU Boutros-Ghali las actividades de mantenimiento de la paz, con la participación de personal militar o policial de Naciones Unidas y frecuentemente personal civil, constituyen una técnica que aumenta las posibilidades de prevenir los conflictos y establecer la paz³⁸⁵. Estas operaciones no están exentas de riesgos para el personal militar y civil, pues se enfrentan a escenarios bélicos en los que son objeto de ataques armados directos y en ocasiones indiscriminados por el solo hecho de representar a las Naciones Unidas. A su vez, tienen que enfrentarse en los países donde se despliegan las fuerzas a accidentes provocados por la precariedad de la infraestructura y por la carencia de seguridad en las vías y medios de comunicación³⁸⁶.

3.3. La asunción del riesgo grave e inminente por el personal militar

El art. 4.4 de la LPRL precisa lo que se entiende por riesgo laboral grave e inminente y establece dos requisitos indispensables. La probabilidad racional de su materialización en un futuro inmediato o cercano, y que el daño sea calificado como grave para la salud de los trabajadores. A su vez, el requisito cronológico se modifica en función de la exposición de los trabajadores a agentes susceptibles de causar graves daños a su salud. Se pasa de un futuro inmediato, a un futuro indeterminado, al conocer el legislador la existencia de agentes que puedan revelar sus daños no de forma inmediata³⁸⁷.

385. BOUTROS GHALI, B., *Un programa de paz*, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, A/47/277, S/2411, 17 de junio de 1992, pág. 6, párr. 20.

386. Sesenta y dos militares españoles -40 del Ejército de Tierra, 21 del Ejército del Aire y un guardia civil- perdieron el 26 de mayo de 2003 la vida al estrellarse el avión que los traía de regreso a España tras cuatro meses de misión en Afganistán. Vid. MONSERRAT, C., Y GONZÁLEZ, M., «62 militares mueren al estrellarse el avión en el que volvían de cumplir su misión en Afganistán», *El País*, 27 de mayo de 2003. [Consulta:15/06/2019], «https://elpais.com/diario/2003/05/27/espana/1053986401_850215.html».

387. Vid. En el art. 2.b del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se definen aquellos trabajos que expongan a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud. En su Anexo II, establece una relación no exhaustiva de ellos, en los que se relacionan

Una vez detectada la exposición de los trabajadores a este tipo de riesgos, la propia LPRL, en su art. 21, establece las medidas obligatorias que debe adoptar el empresario. Entre las que se destaca la interrupción de la actividad y el abandono del lugar de trabajo, cuando el peligro sea grave, inminente e inevitable³⁸⁸. Esta medida no puede utilizarse de forma arbitraria, ni por el empresario ni por el trabajador, sino que está sujeta a evidencias claras que manifiesten y demuestren las consecuencias perjudiciales sobre los trabajadores en el caso de mantener la actividad. Este asunto, ha suscitado en numerosas ocasiones controversias, en las que se ha tenido que recurrir a los Tribunales³⁸⁹.

agentes que pueden mostrar sus daños no de forma inmediata, tales como la exposición a agentes químicos o biológicos, a radiaciones ionizantes, proximidad en líneas de altas tensión (campos electromagnéticos).

388. El término utilizado por el legislador «peligro» en lugar de «riesgo», adjetivándolo de grave, inminente e inevitable, lleva al error semántico de confundir ambos sustantivos como sinónimos. En cambio, las acepciones para ambos son diferentes. Para OSHAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001, riesgo es la combinación de la probabilidad y la/s consecuencia/s que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Sin embargo, peligro es la fuente, situación o acto con potencial para causar en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. La LPRL en su art. 2 define el riesgo laboral, como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. A pesar de utilizar términos como peligroso o peligrosidad, no los define.
389. Cfr. Sobre la naturaleza de “derecho” y no de “deber” de la facultad de interrumpir la actividad laboral, en STSJ de Cantabria (Sala de lo Social), 41/2003, de 23 de enero, núm. de recurso 630/2002, que expone *“Por el hecho de llevar el bidón rodando no incurría prima facie en una situación de riesgo grave e inminente que le permitiese interrumpir su actividad. Y, aunque así hubiese sido, la interrupción de actividad está configurada jurídicamente como un derecho del trabajador, no como un deber, si bien habría que valorar si el grado de probabilidad y gravedad del riesgo pudiera llegar al grado de imprudencia temeraria, a efectos de excluir la responsabilidad de la empresa respecto a iniciativas de los trabajadores en el ámbito productivo para el cumplimiento de sus funciones cuando éstas lleguen a tal nivel de temeridad [...]”*. Sobre la inadecuación y arbitrariedad de la decisión de interrumpir la actividad laboral, en STSJ de Navarra (Sala de lo Social), 353/2005, de 31 de octubre, expone, núm. de recurso 320/2005, *«Tanto en la demanda, desestimada en la instancia, como ahora en Suplicación, los trabajadores mantienen que su actuación fue ajustada a derecho, pues lo contrario hubiera conllevado la puesta en peligro de su salud y, además, un quebrantamiento de las previsiones del Real Decreto. Argumentos que no podemos compartir en cuanto el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es claro al respecto al establecer que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario “cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud”, y ninguna de tales circunstancias concurrían en el momento del paro al resultar obvio que la temperatura ambiental en el centro de trabajo no implicaba ninguno de los riesgos descritos, pudiendo calificarse su postura de unilateral, arbitraria y desproporcionada al disponer de otros cauces legales para conseguir que la empresa cumpliera con sus obligaciones en materia de salud ambiental. Por lo que, habiéndolo apreciado así el Magistrado de instancia no incurrió en ninguna de las infracciones denunciadas, debiendo desestimarse el recurso y confirmar la sentencia recurrida.»*. Sobre la categoría del tipo de falta, en STSJCV (Sala de lo Social), 93/2014, de 21 de enero, núm. de recurso 2694/2013, expone *«[...]Recordemos que la creación de una situación de riesgo no requiere la causación de un resultado, sino que basta la conducta en cuestión genere la posibilidad de que éste se produzca. Y para que la infracción pueda ser calificada de falta muy grave el riesgo ha de ser grave e inminente, es decir, de entidad y próximo, no remoto o meramente hipotético, calificativos los primeros que concurren en la conducta de la actora y que son fácilmente comprobables a la vista del percance que tuvo lugar, bien que, insistimos, no es necesaria la producción de un concreto resultado.»*. Sobre la evaluación de los riesgos, en AP de Vizcaya. (Sección 5), 216/2014, de 11 de diciembre, núm. de recurso 240/2014, expone *«[...]Si bien la empresa no evaluó los riesgos, lo que conduce a una gravedad del hecho, no por tal debió prever el trabajador accidentado las consecuencias del posible evento, pues el artículo 22.1 en relación con el 14. 31 ambos de la Ley de Prevención de Riesgos permiten al trabajador interrumpir su actividad en cuanto entrañaba un riesgo grave e inminente para su salud y seguridad, con lo que al no hacerlo, o efectuar el trabajo tal y como lo hacía entrañaba un riesgo en el que participó en forma pasiva.»*

Sin embargo, a pesar de impedir el riesgo grave e inminente la reanudación de la actividad a los trabajadores, en cuanto no haya desaparecido el peligro, se menciona una excepción, que deberá estar justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Esta excepción, para el personal laboral, estatutario y funcionarios civiles que prestan sus cometidos en las BAE/UCO de la Administración militar, está basada en función de los intereses o seguridad de la Defensa³⁹⁰. Así pues, nos encontramos con un desarrollo limitado de la interpretación sobre lo que marca la LPRL. Al efecto, Sánchez Trigueros expone que: *«[...]la Ley invoca al Reglamento para que adapte sus previsiones generales y, en nuestro caso, le pide que tome en cuenta las exigencias de la defensa nacional; pero, a su vez, llega el desarrollo Reglamentario y lo que hace es advertir que los intereses o seguridad de la Defensa pueden llevar a que el personal civil pueda ser obligado a reanudar su actividad aunque persista el peligro grave, inminente e inevitable»*³⁹¹. Puede parecer que la exigencia a la que este personal está sujeto, sea arbitraria o incluso inicua, al no delimitarse su extensión³⁹². Para Labajos Fernández, este derecho *«sólo puede ejercitarse en condiciones mucho más controladas de lo que está previsto en la LPRL para un trabajador por cuenta ajena, incluso de otra Administración Pública»*³⁹³. Esto a nuestro juicio, es debido a que se confronta con una serie de criterios muy jerarquizados, en los que se asienta el funcionamiento de un establecimiento militar.

390. Vid. Art. 2.1.b del RD 1932/1998, de 11 de septiembre.

391. Vid. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., La adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los establecimientos militares y el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre. *Revista Aranzadi Social*, núm. 5, 1999, pág. 441.

392. Cfr. LÓPEZ RUBIA, M.E., «El Real Decreto 1932/1998. ¿Adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los centros y establecimientos militares?», *Revista de Derecho Social*, núm. 5, 1999, pág. 211.

393. LABAJOS FERNÁNDEZ, op.cit., pág. 34.

Ahora bien, la conexión de la interpretación razonable con las imposiciones dimanadas de la LODN, conducen a que sólo pueda ser utilizada esta excepción cuando se trate de acciones conducentes a la finalidad de los intereses de la defensa nacional. Para evitar interpretaciones erróneas y especulativas del derecho a interrumpir la actividad, el mismo se condiciona a la obligación del personal civil, trabajadores de la Administración militar, de poner el riesgo en conocimiento inmediato de su superior jerárquico, controlándose de esta forma la eficacia operativa del establecimiento militar. Este superior jerárquico, cuya figura normalmente recaerá en un mando militar, como Jefe del establecimiento, tomará la decisión oportuna, sujeta a controles procedimentales, basada en valoraciones objetivas, despreciando aquellas apreciaciones subjetivas fundamentadas en meras suposiciones y no aplicándose el derecho citado, «[...]pese a todo, si están en juego los intereses o la seguridad de la defensa nacional»³⁹⁴. La figura del Jefe de establecimiento crece en importancia, poniéndose de manifiesto el principio de jerarquía, al ser el único en ejercer tal decisión³⁹⁵, pues no se contempla decisión unilateral alguna por parte de los trabajadores, de sus representantes o de sus delegados de prevención, en su capacidad de manifestar, adoptar o decidir sobre la paralización de la actividad³⁹⁶.

394. GONZÁLEZ ORTEGA, S., op.cit., pág. 21. Cfr. GARCÍA VALVERDE, M.D., «El esperado e imperioso RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.», *Actualidad Laboral*, núm. 1, 1999, págs. 285.

395. Cuando el personal civil esté o pueda estar expuesto a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el Jefe del centro o establecimiento militar estará obligado a adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, el personal civil pueda interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar inmediatamente su lugar de trabajo. Vid. Art. 2.b del RD 1932/1988, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. La figura de Jefe de centros y establecimientos militares recae siempre en un militar.

396. Cfr. RUBIO RUIZ, A., *Manual de derechos, obligaciones y responsabilidades en la prevención de riesgos laborales*, FC Editorial, Madrid, 2002, pág. 483.

Esta restricción, a diferencia de otros trabajadores civiles, ya sean por cuenta ajena o pertenecientes a otros departamentos de la Administración pública, condiciona y limita a los trabajadores civiles de la Administración militar, que prestan sus cometidos en establecimientos militares. Dado que, en el caso de producirse en su lugar de trabajo una situación de riesgo grave e inminente, no se les permitiría negarse a continuar o a reanudar su actividad, mientras exista el peligro, condicionándose su decisión a la comunicación y al sometimiento de controles más estrictos. Esta limitación, que sólo es aplicable en establecimientos militares³⁹⁷, impide dar pábulo a interpretaciones especulativas que permitan restringir la institución en otros establecimientos del Ministerio de Defensa, que no fueran afectos a la Defensa nacional, pues en tal caso se podría caer ante un vicio de ilegalidad³⁹⁸.

Consecuentemente, en los supuestos de riesgo grave e inminente, el personal militar destinado en establecimientos militares, adolece de derecho alguno a interrumpir su actividad, tal y como se recoge en el art. 18.3 del RDPRLFAS, *«[...] siempre que sea posible, el personal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención»*. La obligatoriedad impuesta en la LPRL al empresario y en el RD 1932/1998, de 11 de septiembre, al Jefe del establecimiento militar, desaparece, quedando condicionado a una mera posibilidad, y sólo de información y medidas a adoptar, nunca de interrupción o

397. La Disposición final séptima de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores permitió al Gobierno regular la prestación de trabajo del personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares, de forma que fuese compatible «con la debida salvaguarda de los intereses de la defensa nacional». Correlativamente, el RD 2205/1980, de 13 de junio, dictado en uso de esa habilitación legal, define en el art. 1 b), matizado por el 2. 1, el concepto de establecimiento militar, a los Centros, Cuerpos, Unidades, Dependencias y Organismos análogos de la Administración militar.

398. Cfr. STC 101/1991, de 13 de mayo, recurso de inconstitucionalidad 993-1985, promovido por el Defensor del Pueblo contra la Disposición adicional tercera de la L.O. 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

abandono de la actividad del personal militar³⁹⁹. De la lectura de este precepto, se interpreta que el personal militar, a diferencia del personal civil, destinado en un establecimiento militar, siempre tendrá que afrontar estas situaciones, independientemente de si están sujetas a los intereses de la defensa nacional o no. Esta cuestión deberá ser valorada por el Jefe del establecimiento, para ordenar la paralización o no de la actividad y el abandono del lugar del trabajo del personal civil, mientras que el personal militar permanecerá en su puesto de trabajo sin que se contemple objeción alguna⁴⁰⁰.

Con respecto a lo expuesto, se suscitan dudas sobre la correcta ejecución del procedimiento de actuación enunciado por la normativa preventiva que afecta al personal militar. Pues, parece oportuno recordar que las actividades excluidas del ámbito de aplicación de la LPRL, por sus particularidades específicas, son las de I/A y Operativas, unidas a la salvaguarda de los intereses de la defensa nacional. Consecuentemente, la aparición de un suceso calificado como de riesgo grave e inminente, puede ocurrir durante la ejecución de las actividades citadas, o del resto de actividades que se encuentran bajo el amparo de la normativa preventiva, denominadas comunes⁴⁰¹. En estos casos, el legislador no contempla discriminación alguna entre actividades excluidas e incluidas. No obstante, a diferencia del personal civil, cuando ocurre una situación de riesgo grave o inminente, se considera que todas las actividades desarrolladas por el personal militar en establecimientos militares, tienen que ser asumidas con

399. Según García González, «La formulación “siempre que sea posible” obedece a limitaciones que se derivan de la propia configuración de la actividad militar, que hace que en ocasiones la labor informativa devenga de imposible realización». Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, G., «Prevención de riesgos laborales y fuerzas armadas», *UNIR Revista*, [http://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/noticias/prevencion-de-riesgos-laborales-y-fuerzas-armadas-ii/549201447435/], 2012.

400. Cfr. DE LA IGLESIA MIRANDA, B., «La prevención de riesgos Laborales y la Guardia Civil», *Cuadernos de la Guardia Civil*, 2008, núm. 38, págs. 17 y 18.

401. Vid. Art. 6.4 del RDPRLFAS.

carácter obligatorio y, por lo tanto, el personal militar debe permanecer en su puesto de trabajo. De ello se desprende una clara contradicción, al oponerse de forma diametral a lo expresado en la normativa de prevención de riesgos laborales para el personal militar. Ya que al ser las actividades de I/A y Operativas excluidas, cabe la posibilidad de plantear si ante este tipo de situaciones podría considerarse que también estén excluidas las actividades comunes. Lo que conlleva a sopesar que la tipología de los riesgos, ya sean genéricos o específicos, a los que se puede enfrentar así el personal militar durante un supuesto de riesgo grave e inminente, no se tiene en cuenta el tipo de actividad que estuviera desarrollando, ya fuera una actividad común, de I/A u Operativa⁴⁰².

4. El plan de PRL del conjunto de las normas propias de seguridad y operación

La denominación de «plan de prevención de riesgos laborales» referida en el art. 6.4 del RDPRLFAS al conjunto de normas propias de seguridad y operación para las actividades de I/A y Operativas, no parece adecuada, pues induce a confusión. Tradicionalmente, las FAS han desarrollado normas internas de seguridad e higiene en el trabajo para estas actividades, pero no se rigen por los mismos parámetros que se señalan para las actividades comunes, dimanados de la transposición al régimen jurídico estatal de las Directivas de la UE⁴⁰³. En este sentido se corrobora en la doctrina del TJUE, que «la publicación

402. Cfr. GARCÍA NINET, J.I., «La prevención de riesgos laborales en la Administración civil y militar», GARATE CASTRO, F.J. (Coord.), en *Las relaciones laborales en las administraciones locales, Fundación Democracia y Gobierno Local*, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2004, Madrid, pág. 243.

403. Las Directivas específicas sobre seguridad y salud, que en la actualidad hay publicadas, se pueden consultar en: «<http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.4ad57ff5e71385ff212d8185060961ca/?vgnextoid=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=22acf38a58ef1110VgnVCM100000dc0ca8c0TAXC>».

oficial de la norma interna de transposición, es un requisito obligatorio para los Estados miembros, que viene exigido por una adecuada tutela del principio de seguridad jurídica. De modo que un Estado, no queda exento de responsabilidad por infracción, aun cuando ejecute la norma comunitaria por medio de circulares o instrucciones internas, incluso vinculantes para sus autoridades y funcionarios, en tanto no se publiquen en un diario oficial»⁴⁰⁴.

Sin embargo, las normas propias de seguridad y operación, se basan, en el caso de existir, en normativa interna de los ejércitos *ad hoc*, que no se rige por las Directivas comunitarias ni por la normativa legal estatal ⁴⁰⁵. Además, su difusión y publicación no se realiza por diario oficial español alguno⁴⁰⁶. Ello impide su armonización con otras normas parecidas de igual o superior rango⁴⁰⁷. Su validez, por lo tanto, es exclusiva del ámbito de cada ejército y, en su caso, de la Unidad u Operación militar a ejecutar.

A tenor de lo expuesto en la STJUE de 12 de enero de 2006, el Tribunal, en el párrafo 35, rebate la validez de las circulares e instrucciones, por ser meras

404. Vid. STJUE de 2 de diciembre de 1986, Comisión/Bélgica, asunto 239/85. STJUE de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia, asunto 168/85. STJUE, de 12 de enero de 2006, Comisión/España, asunto C-132/04. Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del incumplimiento del Derecho Comunitario, núm. E 2/2009, 2010, pág. 22.

405. En la Directiva del JEME 02/11, de 18 de febrero de 2001, «Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra», en su punto 8.4, se ordena que las normas y procedimientos, a los que hace referencia el RDPRLFAS, vienen recogidas en la PMET OR7-020 «Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza», en la que se establecen las pautas para la consecución del desarrollo del concepto Protección de la Fuerza, que incluyen las áreas de Seguridad de protección, Seguridad Funcional y Salud, que cubren los conceptos de la Prevención desde el punto de vista de las actividades reseñadas en el referido art. 6,4 del citado RD. Actualmente esta PMET, aprobada su publicación por Resolución 552/09019/02, de 20 de junio de 2002, ha sido derogada por estar obsoleta, sin sustitución alguna, lo que provoca una situación anómala ante la imposibilidad de aplicar una normativa de referencia correcta que cubra las pautas y el objeto antes citado, dejando al Plan de Riesgos Laborales de la BAE./UCO, sin referencia alguna para desarrollar la parte correspondiente al Plan de Instrucción, Adiestramiento y Operativos, específicos de cada UCO, para las actividades de Instrucción, Adiestramiento y Operativas.

406. La normativa interna de los Ejércitos, Directivas, Circulares, Instrucciones Técnicas, Normas Técnicas, Normas Operativas, Normas Internas de Funcionamiento, se difunde por canales oficiales a través de la estructura orgánica, mediante escritos oficiales, lo que provoca una difusión limitada a aquellas cadenas de mando que están afectadas. Por otro lado, en el Preámbulo del RDPRLFAS, en relación con las normas internas de seguridad e higiene en el trabajo, especifica con claridad meridiana, que estas se desarrollan en cada una de las misiones, dirigida al personal que las realiza. Una exclusividad de la que no goza el resto a menos que participe en la misión, aunque realice las mismas actividades de Instrucción y Adiestramiento.

407. Cfr. MONTERO DABOUZA, F.N., *La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas españolas*, Premios Defensa 2013. Trabajos seleccionados, premio José Francisco Querol y Lombardero, Madrid, 2013, págs. 5 y 6.

prácticas administrativas, de naturaleza modificable, a discreción de la Administración. Además, las mismas están desprovistas de una publicidad adecuada, y carecen de fuerza imperativa con la especificidad, precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica, para ser empleadas como válidas para la transposición de una Directiva de la UE. No obstante, es conocido que las normas propias de seguridad y operación no son, *per se*, normas transpuestas de Directivas comunitarias sobre seguridad y salud de los trabajadores, sino que se utilizan como argumento por el legislador, en el RD PRL FAS, para asegurar, en la medida de lo posible, la seguridad y la protección de la salud de los miembros de las FAS. Y ello porque para el legislador, de forma acorde a la DM, las peculiaridades de las misiones estrictamente castrenses no son incompatibles con la aplicación de medidas seguridad.

Por lo tanto, las normas propias de seguridad y operación, tienen unas características singulares, que las diferencia de las empleadas para las actividades comunes:

- No se atienen al cumplimiento estricto de normativa jurídica de rango superior, relativa a la seguridad y salud laboral.
- Se rigen por normas internas, algunas orientativas, carentes de convicción coercitiva, no reguladas por las normativas que transponen de las Directivas comunitarias de seguridad y salud laboral.
- Los riesgos de las actividades excluidas, no son evaluados inicialmente y, por ende, tampoco se elabora la posterior planificación

de la actividad preventiva. Consecuentemente, no se puede constatar que se eliminen o reduzcan eficazmente los riesgos específicos, sino que se eliminarán en la medida de lo posible.

Por todo lo anterior, no parece adecuada la denominación utilizada por el legislador, «plan de prevención de riesgos laborales»⁴⁰⁸, al conjunto de las normas propias de seguridad y operación para las actividades excluidas. Ya que los criterios utilizados para su elaboración, difieren de los utilizados en el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades comunes. Además, se considera que la acepción de «riesgo laboral», utilizada indiscriminadamente, tanto para actividades excluidas como para actividades comunes, no es correcta, por ser explícito el legislador en la aplicación de distintas normas que procuran asegurar la seguridad y salud de los miembros de las FAS⁴⁰⁹.

5. Aspectos diferenciales entre las actividades de I/A y las actividades Operativas

Esta cuestión versa sobre el criterio, en principio no justificado, que se utiliza para aglutinar en un mismo conjunto las actividades de I/A y las actividades Operativas. Esta combinación habilita al legislador para excluirlas de la normativa preventiva, por considerarlas a todas iguales, como acontecimientos excepcionales, en los que no pueden aplicarse los principios preventivos. Para Garcés Bonet, *«La distinción hecha por el RD 1755/2007 es correcta a nivel teórico, pero cuando la aplicamos al campo de las actividades*

408. En el art. 6.4 del RDPRLFAS se expresa, «Para las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas las Fuerzas Armadas, aplicarán sus normas propias de seguridad y operación cuyo conjunto constituirá el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas».

409. Vid. Texto del RDPRLFAS.

*reales adolece de “zonas oscuras” que quedan a la interpretación del afectado»*⁴¹⁰. De la sentencia del TJUE se desprende que el ámbito de la DM no es de aplicación a aquellas actividades militares que tengan como prioridad fundamental la protección colectiva, a las que por lo tanto no se les aplicaría la normativa preventiva⁴¹¹. Se suscita, por lo tanto, la cuestión sobre si las actividades de I/A, encajan perfectamente en el limitado ámbito de las actividades que deben quedar excluidas de la aplicación de la DM, ya que, aún estando íntimamente relacionadas con las actividades Operativas, sus objetivos son totalmente diferentes. Así está avalado por la definición empleada en el art. 3, del RDPRLFAS, que distingue con claridad meridiana la finalidad perseguida por ambas. Las primeras procuran la «preparación» para el cumplimiento de las misiones encomendadas a las FAS. Sin embargo, las segundas se basan en la «ejecución» de las misiones, siguiendo un plan de operaciones.

Asimismo, las actividades de I/A, basadas en la misión y orientadas a la ejecución, están limitadas por referencias permanentes a la seguridad y protección de la Fuerza, que servirán de instrumento modulador para que los Cuadros de mando y el personal de Tropa las tengan siempre presente. Sin desdeñar a ninguna, se destaca la importancia que los ejércitos dan a la seguridad del personal, materiales, instalaciones y medio ambiente, lo que es priorizado como primera finalidad de todos los participantes en estas actividades. Todo ello, no impide que las actividades de I/A y Operativas sean complementarias, dado que el desarrollo de las primeras permite el buen

410. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 189.

411. Cfr. RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., «La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas a la luz del Derecho de la Unión Europea», *Revista Trabajo y Derecho*, núm. 25, 2017, pág. 66.

resultado de las segundas. Díaz Fernández señala que las horas de preparación, entrenamiento y formación empleadas en la Instrucción y Adiestramiento *«alcanzan su verdadero significado en este tipo de misiones (actividades Operativas) en las que el profesional de la milicia ve cómo muchas de las cuestiones trabajadas y ensayadas son puestas en práctica»*⁴¹². Pero las actividades Operativas no se pueden englobar conjuntamente con las de I/A, sino que deben ser diferenciadas por una serie de razones:

a) La localización de su ejecución

Las actividades de I/A, se ejecutan en las zonas de las Bases o Acuartelamientos destinadas a tal fin, ubicadas en un entorno seguro, en tiempo de paz⁴¹³. Sin embargo, las actividades Operativas se desarrollan en un escenario hostil, en el que los combatientes entran en contacto con el enemigo, produciéndose bajas e incluso situaciones en las que no pueden ser atendidos de forma inmediata por personal facultativo, por quedar aislados. Constituyendo éstas un alto porcentaje de las muertes del personal militar durante su transcurso⁴¹⁴.

b) La capacidad de combate

Definida en la doctrina del Ejército, como *«la aptitud que posee una fuerza militar constituida al efecto para cumplir la misión*

412. Vid. DÍAZ FERNÁNDEZ, A.M., «Experiencias de la participación militar española en misiones internacionales (2000 – 2012)», *Revista española de ciencia política*, núm. 32, 2013, pág. 219.

413. Vid. Art. 7.5 de la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las Unidades e instalaciones del Ejército de Tierra.

414. Cfr. Preámbulo del RD 230/2017, de 10 de marzo, por el que se regulan las competencias y cometidos de apoyo a la atención sanitaria del personal militar no regulado por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el ámbito estrictamente militar.

*encomendada»*⁴¹⁵. De sus tres componentes, el moral, el intelectual y el físico, se expresa en este último la importancia de la ejecución de las actividades de I/A, como un proceso continuo y progresivo que, partiendo de la preparación general de la fuerza, culmine con un adiestramiento específico para la operación concreta que se va a desarrollar⁴¹⁶. Es este una de las principales misiones a cumplir por todo Jefe de Unidad en tiempo de paz, que le permite valorar los riesgos y adoptar soluciones para reducir accidentes durante su ejecución. Su punto culminante se alcanza cuando se realizan ejercicios tácticos de adiestramiento con fuego real, en los que se combina el fuego con el movimiento. A pesar del grave riesgo al que se expone el personal militar que ejecuta las actividades de I/A, requieren de una coordinación detallada y de ejecución precisa, que permita garantizar la seguridad. Si en algún momento peligrara la integridad física del personal militar, primaría ésta sobre el propio ejercicio, paralizando toda acción de fuego real, hasta recobrar la seguridad. Es obvio que una Unidad no debe emprender una actividad operativa, si no está suficientemente capacitada y, por ende, preparada para el combate. Pues en su caso, no podrá evitarse que el riesgo asumido sea mayor que el previsto para la Operación en sí misma, provocando un mayor desgaste de la Unidad. Por ello el factor decisivo del éxito de una Operación se basará en gran parte en el grado de I/A, para aumentar sus capacidades de combate. Pero con una gran diferencia, mientras la capacidad de combate se adquiere en tiempo de

415. Vid. Ejército de Tierra, MADOC. PD1-001. *Empleo de las Fuerzas Terrestres*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 3-7.

416. Loc.cit., pág. 3-8.

paz mediante las actividades de I/A, su puesta en práctica se ejecuta en un ambiente hostil en conflicto bélico, mediante las actividades Operativas.

c) Las bajas en combate

En la planificación de una Operación, entre otros factores se tiene en cuenta el cálculo de estimación de bajas previsibles durante su ejecución ⁴¹⁷. Ya sean producidas por las acciones del enemigo, de las Unidades colaterales o propias, o por el fuego propio⁴¹⁸, o por la dificultad intrínseca de su ejecución o probabilidad de error⁴¹⁹. Las bajas en combate, nunca deben implicar unos costes vitales desproporcionados, ya que, si se supera el número previsto, la misión fracasará o en caso de éxito, la Unidad quedará con un desgaste mayor, que le impedirá seguir combatiendo a menos que sea reforzada. Según Díaz Fernández las reglas de enfrentamiento impuesta al personal militar cuando se encuentra en actividades Operativas generan rechazo, pues causan *«en situaciones de máximo riesgo y en casos muy puntuales, una profunda sensación de vulnerabilidad e indefensión»*. Sin embargo, *«a pesar del puntual rechazo nadie se plantea la insumisión; al contrario, el arraigado valor de obediencia les ayuda a someterse a unos principios que pueden*

417. Según Beevor, en el planeamiento previo a la batalla de Normandía, Operación militar efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial que fue clave para la liberación de los territorios de Europa occidental ocupados por la Alemania nazi, al Capitán Scott-Bowden, Ingeniero zapador del Ejército Británico, se le encomendó el reconocimiento de la playa de Omaha, para comprobar que el terreno tenía firmeza suficiente para el movimiento de tanques. Su informe reveló que la propia playa ya representaba un adversario formidable y un desembarco en ella desencadenaría un gran número de bajas. A pesar de ello, el desembarco se produjo y los Aliados tuvieron que asumir 4720 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Vid. BEEVOR, A., *El día D. La batalla de Normandía*, Grupo Planeta Spain, Barcelona, 2015, pág. 14.

418. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. *Concepto Derivado 01/05. Bajas por fuego propio*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 3. Considera que se producen bajas por fuego propio, cuando una Unidad propia se ve afectada por el fuego procedente de otro elemento o Unidad propia y como consecuencia de lo cual se causan bajas entre su personal.

419. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. *MA1-001. Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 2-3.

*valorar restrictivos o inoperativos, si bien asumen sin peros»*⁴²⁰. En contraposición en las actividades de I/A no se contemplan estas reglas de enfrentamiento y, por ende, no se produce cálculo estimativo alguno de bajas reales del combate, el realismo de estas actividades se consigue con la simulación de estas bajas, para adiestrar a las Unidades en su reorganización, adaptación y utilización de las cadenas de evacuación sanitaria. En el caso de producirse alguna baja, esta probablemente sería producida por sucesos que ocurren fortuitamente cuando se realicen estas actividades⁴²¹.

d) El carácter excepcional de las actividades

Las actividades de I/A se rigen por un PGIA, en el que con una periodicidad anual cada ejército establece unos objetivos a alcanzar. Esto hace que estas actividades sean previsibles, rutinarias y en ocasiones repetitivas, para conseguir los objetivos marcados. Es evidente que unas actividades fijadas mediante un calendario de ejercicios no pueden ser consideradas extraordinarias, o que tengan un marcado carácter excepcional, por considerarse que su ejecución está prevista con la debida antelación.

e) La distinta responsabilidad en la ejecución de las actividades

Mientras que, a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, les corresponde, entre otras

420. DÍAZ FERNÁNDEZ, op.cit., pág. 219.

421. Vid. Ministerio de Defensa, *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2016. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, pág. V.

funciones, el planeamiento y dirección de la I/A de sus respectivos ejércitos⁴²². Las directrices en la orientación de la preparación de la Fuerza, persiguiendo la finalidad de asegurar la eficacia operativa de las FAS, recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)⁴²³, responsable del planeamiento, conducción operacional y del seguimiento de los planes operativos y operaciones militares del Mando de Operaciones (MOPS), como órgano de la estructura operativa, subordinado al JEMAD.

La diferente finalidad perseguida por las actividades de I/A con respecto a las Operativas, y la distinta responsabilidad incardinada a los Jefes de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, constatan la subordinación de las actividades de I/A, en beneficio de las Operativas. Las primeras son desarrolladas en el seno de los respectivos ejércitos, bajo los criterios y responsabilidad de sus respectivos Jefes, plasmados en el PGIA. Mientras que las segundas son ejecutadas, bajo la dirección del JEMAD, en el marco de una operación.

La diferente localización de su ejecución, unas en entornos seguros en tiempo de paz y otras en entornos hostiles e inseguros. La preparación constante de la Fuerza, mediante el desarrollo programado de la I/A, que proporcionará una mayor capacidad de combate durante el transcurso de una operación. La ausencia de bajas en combate, frente a las que se asumen en las actividades Operativas. La rutina programada frente el carácter excepcional. Asimismo, la

422. Vid. Art. 12 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. *BOE*, núm. 278, de 20 de noviembre de 2007
423. Vid. Art. 12 de la LODN

principal función del Mando en tiempo de paz será relegada a un segundo plano en tiempo de guerra, donde adquirirán primacía las actividades Operativas⁴²⁴. El conjunto de las razones expuestas, contribuyen a considerar que existen aspectos diferenciales significativos entre las actividades de I/A y las actividades Operativas. Por ende, el criterio empleado por el legislador para aglutinarlas en un mismo conjunto, se cree que no es el adecuado.

5.1. La adecuada exclusión de las actividades Operativas consideradas como acontecimiento excepcional

En el epígrafe anterior, se expusieron los aspectos diferenciales de las actividades de I/A y las Operativas. Una de las razones esgrimidas fue el carácter excepcional de las actividades Operativas. Se estima éste un aspecto que debe ser tratado con profundidad, por considerar que sólo las actividades Operativas son afectas a acontecimientos excepcionales. De ahí que se considere adecuada, sólo en este caso, la exclusión que el legislador realiza en el RDPRLFAS sobre la inaplicación de los preceptos contenidos en la LPRL.

De nuevo se recurre a la STJUE, de 12 enero de 2006. En las apreciaciones del Tribunal, párrafo 27, se alude a la necesidad de no poner en peligro las imperiosas exigencias de preservación de la seguridad y de la integridad de la colectividad. Y el correcto cumplimiento de este mandato se vería comprometido, si debieran observarse en el ámbito militar todas las normas contenidas en la DM.

424. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. MA1-001. *Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 1-2.

Esta apreciación se ve plasmada e identificada sólo y exclusivamente en las actividades Operativas, las cuales surgen del devenir del cumplimiento de las misiones encomendadas a las FAS, que persiguen el desarrollo de su contribución complementaria o subsidiaria del interés público y en aras de la protección de la seguridad colectiva. Estas actividades son definidas en el art. 3b del RDPRLFAS, *«como aquellas que se ejecutan en una Operación, en territorio nacional o extranjero, siguiendo las directrices recogidas en un plan de operaciones»*. A lo que se puede añadir la definición dada por el Ejército, *«como el conjunto de acciones militares, coordinadas en tiempo y propósito, encaminadas a alcanzar un objetivo militar en los niveles estratégico, operacional o táctico de acuerdo con lo establecido en una directiva, plan u orden»*⁴²⁵.

Estas actividades, se diferencian de las de I/A por su carácter imprevisible, y se encuadran dentro de los denominados acontecimientos excepcionales. Su ejecución requiere que suceda un evento imprevisto, que ponga en peligro la vida de la población de un Estado y de sus intereses, convirtiéndose en una actividad cuya particularidad, dentro del ámbito de las funciones públicas, impide la aplicación de la legislación preventiva⁴²⁶. De igual forma, se constata que los principios limitadores de aplicación de los mandatos preventivos, se plasman de forma inequívoca en ella. A pesar de lo anterior, Frías Sánchez divide las actividades Operativas en dos grupos: *«conflictos de elección de carácter opcional, pues tienen implicaciones internacionales, humanitarias o de seguridad*

425. Vid. Ejército de Tierra, MADOC. PD2-001. *Operaciones. Conceptos Generales.*, Ministerio de Defensa, Granada, 2013, pág. 6.

426. Vid. Art. 3.2 de la LPRL.

para el Estado implicado, pero cuyas consecuencias directas son limitadas para su seguridad nacional o, al menos, no inmediatas» y «conflictos de necesidad, que serían aquellos con impacto directo y consecuencias severas e inmediatas para la seguridad nacional»⁴²⁷. La diferencia fundamental se basa en el nivel de bajas que está dispuesto a asumir el Estado, mientras que en los primeros la exigencia de arriesgar sus vidas a los militares profesionales de las FAS gira en función de un riesgo muy reducido, en los segundos el umbral de bajas está supeditado al cumplimiento de la misión encomendada.

5.2. La Instrucción en la enseñanza de formación

La definición de las actividades de I/A es expuesta por el legislador en el art. 3.a del RDPRLFAS como, *«aquellas que están recogidas en los Planes Generales de Instrucción y Adiestramiento de cada ejército»*. Así pues, no se incluyen de la actividad de Instrucción en otros campos comunes a los ejércitos, como las otras actividades de la enseñanza militar.

La enseñanza militar está integrada en el sistema educativo español, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y tiene por objeto proporcionar a los miembros de las FAS la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades a fin de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las Unidades, y de su empleo en las operaciones. Para alcanzar la finalidad prevista, la enseñanza militar se divide en tres categorías:

427. FRIAS SÁNCHEZ, op. cit., pág. 500.

- a) La de formación.
- b) La de perfeccionamiento.
- c) La de altos estudios de la defensa nacional.

Corresponde a la primera, la formación integral y la capacitación específica del militar en su ámbito profesional. La segunda, tiene como finalidad preparar al militar profesional para la obtención de especialidades. Y la tercera y última, es la relacionada con la paz, la seguridad y la defensa y la política militar, constituyendo una instrucción orientada tanto a los profesionales de las FAS, como a los de otros ámbitos de las Administraciones públicas y de la sociedad.

La Instrucción se encuadra en la enseñanza de formación, y se imparte en los centros docentes militares. Corresponde a las Academias militares la capacitación de los futuros oficiales y suboficiales, y a los Centros de formación la de la tropa y marinería. La razón empleada por el legislador en el art. 3.º del RDPRLFAS al definir las actividades de I/A en un solo conjunto, puede generar interpretaciones controvertidas. Ello es así porque, por un lado, la actividad de Instrucción se encuentra recogida en los PGIA y ejecutada en el seno de las Unidades; y, por otro, la actividad de Instrucción es impartida en los centros docentes militares, encuadrada en la enseñanza de formación, dentro de los planes de estudios dirigidos a la capacitación del militar⁴²⁸. Esta última actividad,

428. Vid. Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Orden DEF/1668/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa. Orden Ministerial núm. 42/2000, de 28 de febrero, establece las directrices generales para la elaboración de los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación por los respectivos ejércitos, que permita la capacitación militar y profesional de los militares profesionales de tropa y marinería.

al no estar recogida en los PGIA, podría considerarse no excluida de la normativa preventiva, lo que podría ocasionar una disyuntiva que rayaría el absurdo. Esto es, dependiendo de su inclusión en un plan o en otro, la misma actividad quedaría sujeta a sus propias normas de seguridad, o a la normativa preventiva.

No obstante, la finalidad de la actividad de Instrucción, tanto si está incluido en un PGIA o en un plan de formación, como según su lugar de impartición, en Centros docentes militares de formación o en Unidades, persigue un mismo objeto, la capacitación militar del combatiente. Factor de cohesión que, con la actividad de Adiestramiento, constituirá una sinergia, que permitirá alcanzar a las Unidades la operatividad necesaria para cumplir con éxito las misiones encomendadas

Por todo lo anterior, se cree que la definición otorgada por el legislador, sobre las actividades de I/A, basada en la pertenencia al PGIA, es incompleta. El argumento empleado para excluir la actividad de Instrucción en función de su pertenencia a un plan, colisiona con lo expuesto en el art. 3.2 de la LPRL, ya que la actividad debe ser definida en función de sus particularidades específicas, para ser excluida o no de la aplicación de la legislación preventiva, y no por estar sujeta a un determinado plan.

6. Objeto y alcance de las actividades de I/A en el Ejército de Tierra

En el marco de los actos de régimen interior de las Unidades e Instalaciones del Ejército de Tierra, se recogen las actividades de preparación, que comprenden la Instrucción del personal y el Adiestramiento de las

Unidades⁴²⁹. La I/A, se considera un proceso continuo y progresivo que, partiendo de la preparación general de la fuerza, culmina con un adiestramiento específico para la operación concreta que se va a desarrollar⁴³⁰. Ambas actividades, aún con finalidades diferenciadas no pueden disgregarse⁴³¹. Su programación establecida por fases, constituye una sinergia que permite alcanzar los objetivos que se marquen en el Plan General de Preparación (PGPP), de sus respectivas Unidades orgánicas, aunque su objeto y alcance es distinto⁴³². La Instrucción del personal militar, se orientará fundamentalmente a la capacitación militar del combatiente, en sus aspectos táctico, técnico, moral y físico. Mientras que con el Adiestramiento, el objeto va dirigido fundamentalmente a las Unidades, para que estén en disposición de alcanzar la aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas o aquellas en las que esté previsto su empleo⁴³³.

429. Vid. Art. 48 de la OM 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban las normas sobre mando y régimen interior de las Unidades e instalaciones del Ejército de Tierra.

430. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. PD1-001. *Empleo de las Fuerzas Terrestres*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 3-8.

431. Aunque la doctrina de las FAS, diferencia la Instrucción del Adiestramiento, en el ámbito de la OTAN, se utiliza para ambas el término *Training*. No obstante, lo divide en dos categorías *Individual Training* y *Colective Training*, para diferenciar la instrucción del Adiestramiento.

432. El Plan General de Preparación (PGPP), sustituye al (PGIA). En él, se establecen los objetivos con carácter anual, marcados por el sector de preparación de I/A, previstos a alcanzar por el Ejército de Tierra. De él, dimanar los Programas Anuales de Preparación (PAP), que elaboran las respectivas UCO,s, en los que se establecen las directrices y órdenes para la programación, desarrollo y coordinación de las actividades orientadas a mantener las capacidades mínimas generales del personal destinado en las Unidades subordinadas dentro de su cadena orgánica.

433. Vid. COMAS ABAD, R., «La preparación de las Unidades de la Fuerza Terrestre como NRF/VJTF», *Revista Ejército*, núm. 898, 2016, pág. 107. «*El proceso de preparación basa su éxito en una adecuada instrucción del personal, lo cual es un requisito fundamental para conseguir Unidades perfectamente adiestradas y cohesionadas*». ESTEBAN LÓPEZ, A., «Guerra subterránea. “Si no puedo luchar en la tierra, lucharé bajo tierra”» *Revista Ejército*, núm. 900, 2016, pág. 39. «*La preparación es fundamental para el éxito de cualquier operación militar en un doble sentido: primero, instrucción y adiestramiento, y segundo, planeamiento*». BLASCO ROBLEDÓ, F.J., «La resiliencia como factor de la decisión», *Revista Ejército*, núm. 905, 2016, pág. 33. «*El grado de instrucción, experiencia o bisoñez y el adiestramiento de sus tropas, el tiempo que llevan sobre el teatro de combate, su moral y espíritu de lucha, así como el manejo de las posibilidades y el conocimiento que les ofrece su propio terreno pueden hacer muy difíciles, e incluso imposibles, algunos planeamientos que, a simple vista, podrían ser los más aconsejable*». ROMERO RODRÍGUEZ, D., «La plena operatividad de las Unidades de la Fuerza Terrestre para NRF/VJTF», *Revista Ejército*, núm. 907, 2016, pág. 35. «*Nadie pone en duda que el componente humano constituye el pilar central de cualquier organización, sin el cual el resto de piezas de la estructura pierden fuerza y sentido. Por ello, la instrucción de los miembros de las Unidades requiere una especial atención, sin descuidar ningún área, desde la formación física hasta la formación intelectual y, por supuesto, el refuerzo principalmente de la formación moral*». VAQUERIZO RODRÍGUEZ, F.D., «Afganistán. La evolución del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 908, 2016, pág. 22. «*Para afrontar la misión, sea esta cual fuere, la unidad habrá de abordar cada día las actividades de instrucción y adiestramiento incluidas en los programas con los materiales y el personal que nuestras plantillas orgánicas ya contemplan; después empezaremos a creer en el éxito*». GARCÍA-VAQUERO PRADAL, A., «La DIDOM: un factor clave en la preparación del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 879, 2014, pág. 73. «*La preparación es el resultado de relacionar la doctrina, orgánica, enseñanza, instrucción, adiestramiento e investigación de nuevos conceptos y materiales para el combate*».

La concienciación de la necesidad de preparación para el combate, se basa en el convencimiento de que la dureza de la Instrucción, favorece el desarrollo del combate⁴³⁴. De tal forma, se puede afirmar que, en el caso de integrar los principios preventivos de seguridad y salud en las tareas que se seleccionen de la actividad de Instrucción, estas repercutirán consecuentemente en la actividad de Adiestramiento.

Pero no se debe olvidar que el cumplimiento de las misiones encomendadas a las FAS, incorporan riesgos que pueden derivar en el detrimento de la seguridad y salud, incluso la muerte del combatiente. Por ello, no es comparable la Instrucción que recibe el personal militar, con la de otro personal civil, empleados públicos de distintas Administraciones Públicas, que no tiene que enfrentarse a ese riesgo⁴³⁵. La Instrucción del personal militar, no debe ser solo mecánica y procedimental; la exigencia de enfrentarse al riesgo, a la muerte, recibida o causada, no es natural ni instintivo. La capacidad mental y la férrea formación de la personalidad del combatiente, requieren de una preparación previa que aporten la solidez necesaria para afrontarla⁴³⁶.

El Ejército de Tierra, ante los últimos cambios que se están produciendo en todos los ámbitos que afectan a los diferentes tipos de conflictos en el terreno

434. Cfr. GONZÁLEZ VALLÉS, J., «Formación moral y preparación del cadete», *Revista Ejército de Tierra*, núm. 915, 2017, pág. 73.

435. No obstante, existen empleados públicos de carácter civil que son conscientes del riesgo de perder la vida en el desempeño de su profesión. Según Garriga «La policía no es una profesión más, ya que las condiciones laborales requieren una apropiación total del tiempo del trabajador. Por otro lado, el peligro que engloba el hacer laboral presenta a los uniformados como donantes generosos del bien más preciado, la integridad física y, en el peor de los casos, hasta la vida misma». Vid. GARRIGA ZUCAL, J.A. «Por el pancho y la coca. Apuntes sobre las representaciones del trabajo entre los policías de la provincia de Buenos Aires», *Revista Papeles de Trabajo*, núm. 8, 2014, pág. 37. Por otro lado, en el colectivo del cuerpo de bomberos pueden darse ocasiones en las que pueden perder su vida, no solo en el desarrollo de sus actividades sino también durante la ejecución de los ejercicios de capacitación, si bien estos accidentes mortales son producidos por no respetar un adecuado protocolo de medidas preventivas. Vid. NIOSH, «Prevención de muertes y lesiones de bomberos durante los ejercicios de capacitación», Publicación de DHHS (NIOSH) núm. 113, 2017. [Consulta: 21/10/2018], «https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/wp-solutions/2017-113_sp/default.html».

436. Cfr. SILVELA DIAZ-CRIADO, E., «La fuerza letal: esencia de la profesión militar», *Revista Ejército*, núm. 887, 2015, pág. 122.

militar, ha adoptado una aptitud prospectiva y sistémica que le permite evolucionar, para enfrentarse adecuadamente a la complejidad de futuros problemas, llevándole a diseñar un sistema integrado que interrelaciona los distintos elementos que conforman el proceso de Instrucción del personal militar y el Adiestramiento de las Unidades, con su correspondiente evaluación⁴³⁷. La sinergia entre los elementos que configuran la detección de los riesgos laborales, con sus correspondientes medidas correctivas y aquellos inherentes a la profesión militar, desarrollados en las actividades de I/A, consolidan una preparación adecuada, que se reviste en un beneficio óptimo para cumplir las misiones encomendadas con garantía de éxito.

6.1. Las actividades de I/A en el Sistema de Mando y Dirección del Ejército de Tierra

El Sistema de Mando y Dirección (SIMADE) está concebido como un conjunto de sistemas y subsistemas, que normalizan el funcionamiento del Ejército y coordinan la actuación de órganos de diferentes cadenas orgánicas, que realizan funciones similares. Este sistema complementa el mando que el JEME ejerce a través de la cadena orgánica⁴³⁸. Se divide, a su vez, en sistemas cuya dirección retiene el JEME, y otros en los que delega su dirección.

437. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. MA1-001. *Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. IX.

438. Cfr. Art. 107 de la Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra. Esta instrucción fue derogada por la disposición derogatoria única. Derogación normativa de la Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra. BOD núm., 13, de 21 de enero de 2016, a excepción de los dispuesto en la disposición transitoria primera. Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra, en cuanto no se dicten por la autoridad del JEME las nuevas Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra.

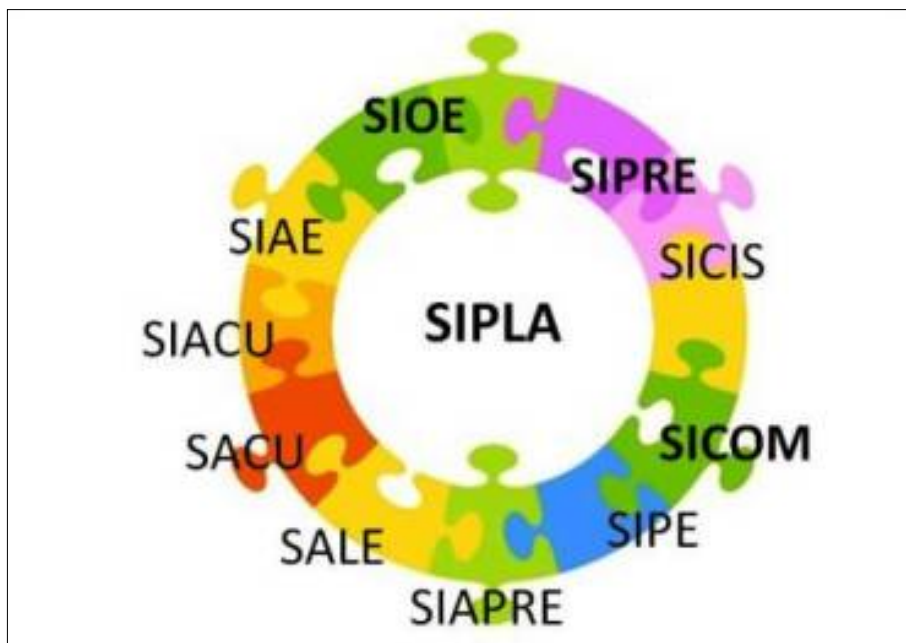
De los primeros y en relación con el tema que motiva este epígrafe, se destaca el Sistema de Planeamiento (SIPLA), por ser el elemento fundamental e integrador del SIMADE⁴³⁹. Este instrumento tiene como finalidad alcanzar los objetivos globales del Ejército, a través de la concurrencia e integración de todas las actividades desarrolladas por los diferentes sistemas⁴⁴⁰. Dentro de su estructura se encuentra el Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (SIAE), definido como el conjunto de personas, organización, doctrina, medios, métodos y procedimientos, implicados en el Sector Instrucción y Adiestramiento del Área de la Preparación⁴⁴¹. Para el SIAE, las actividades de I/A se clasifican en categorías, agrupadas en dos grandes bloques. El primer bloque reúne a todas las categorías que corresponden a la enseñanza de formación. En el segundo, se integran aquellas que corresponden a la I/A. Ambos bloques no son considerados por el SIAE independientes o aislados, sino todo lo contrario, la enseñanza de formación, base de los conocimientos sobre los que se asentarán la I/A, serán consolidados posteriormente en las Unidades, donde se llevará a cabo el sostenimiento de las capacidades adquiridas, adquiriendo el compromiso de continuar con la impartición de esas tareas, pero orientadas a la práctica.

439. Vid. Art. 112, instrucción 70/2011, de 27 de septiembre

440. Cfr. FONTANA DE GRASSA, F., «Sistema de Mando y Dirección del Ejército de Tierra», *Boletín de información CESEDEN*, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999, pág. 58.

441. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. MA1-001. *Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación*. Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. 1-1.

Gráfico 9. Esquema general del SIMADE. Fuente Ejército de Tierra
«<http://www.ejercito.mde.es/estructura/index.html>»



La impartición de la Instrucción, según las categorías establecidas por el SIAE en la enseñanza de formación, se corresponde con la Instrucción básica y la Instrucción específica. La primera se realiza durante la fase de formación general militar, en las Academias y Centros de Formación de Tropa, definida por las tareas individuales comunes de nivel I. La Instrucción básica es común a todos los ciudadanos que se incorporan al Ejército, sea cual sea el grado de la enseñanza (oficiales, suboficiales y tropa), para capacitarlos como soldados profesionales. La segunda, es exclusiva de los Centros de Formación de tropa y se imparte durante la fase específica de la formación de los militares de tropa, desarrollándose en el correspondiente módulo la especialidad operativa, definida por las tareas individuales específicas de nivel I. A su finalización, se les capacita como soldados profesionales integrados en una especialidad.

Además de la Instrucción básica existen otras variedades: la Instrucción Complementaria, la Instrucción de Aplicación y la Instrucción de mandos. Todas ellas son impartidas en las Unidades y programadas a través de los respectivos PAP, siendo su finalidad el refuerzo de la actitud y aptitud de los Cuadros de mando y del personal de tropa, para realizar las tareas correspondientes a sus respectivos puestos tácticos en las Unidades.

El Adiestramiento a diferencia de la Instrucción, es exclusivo de las Unidades, y es definido como: *«el conjunto de actividades cuya finalidad es proporcionar a las Unidades, la aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas o aquellas en las que esté previsto su empleo»*⁴⁴². Se divide en dos categorías, general y operativa. A la primera, la general, le corresponde el conjunto de actividades que pretenden que la Unidad alcance el grado de adiestramiento requerido, para que estén en disposición de cumplir las misiones en las que esté previsto su empleo. Se subdivide, a su vez en tres subcategorías, en función de la entidad de la Unidad: el Adiestramiento del Arma que se realiza en las pequeñas unidades, el Adiestramiento Interarmas ejecutado en las grandes unidades o agrupamientos tácticos y en determinados casos pequeñas unidades y el Adiestramiento Conjunto/Combinado en base a estructuras de fuerzas conjunto-combinadas. La segunda categoría, la operativa, es la que se realiza específicamente para preparar a una Unidad para la ejecución real de un Plan de Contingencia o una Orden de Operaciones.

442. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. MA1-001. *Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005, pág. B-3.

6.2. La Instrucción en el Ejército de Tierra

Laguna Sanquirico expone el concepto Instrucción en el ámbito castrense de manera diáfana: *«Por “instruir” ha de entenderse el paso del conocimiento a la ejecución, motivo por el que en el ámbito militar se habla de “instrucción individual” e “instrucción colectiva”. En este término por tanto han de incluirse tanto las destrezas y habilidades para la ejecución de una tarea, como el desarrollo del trabajo en equipo, la capacidad para inculcar disciplina y para actuar con disciplina, y el fomento de hábitos que facilitan el comportamiento adecuado.»*⁴⁴³. Este concepto se formaliza a través del SIAE, que define la Instrucción como el conjunto de actividades que tienen por finalidad proporcionar a los componentes del Ejército, la aptitud necesaria en los aspectos técnicos, morales y físicos para el desempeño de sus tareas, tanto de forma individual como colectiva. La Instrucción se inicia con la incorporación del ciudadano al Ejército y continúa durante toda su permanencia.

La Instrucción, ya sea de forma individual, colectiva, básica o específica, marca el inicio de la preparación de todo ejército. Su objetivo fundamental es conseguir la eficacia de todo el personal militar y contribuir a la eficacia de las Unidades en el combate⁴⁴⁴, lo que depende de una serie de factores decisivos, entre los que destaca el grado de preparación personal⁴⁴⁵. Por ello, la inversión en el recurso humano constituirá la pieza fundamental para el desarrollo de las capacidades militares del Ejército, considerándose elementos de excelencia: la

443. Vid. LAGUNA SANQUIRICO, F., «La cuestión del profesorado militar», *Revista Ejército*, núm. 876, 2014, pág. 47.

444. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. *M-0-3-3. Metodología de la Instrucción*, Madrid, 1979, pág. 17.

445. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. *MI-001. Tareas Individuales comunes. Nivel I*, Madrid, 2015, pág. IX.

Instrucción, la motivación del personal y el Adiestramiento de las Unidades, que marcarán una notable diferencia con los adversarios⁴⁴⁶.

No obstante, una parte fundamental de la Instrucción la constituye el «combate individual»⁴⁴⁷, por ser la base común a todas las Unidades, factor decisivo y necesario para la supervivencia en el campo de batalla, frente a acciones hostiles en ambiente bélico, sea cual sea el puesto táctico o la ubicación del combatiente⁴⁴⁸. La Instrucción, y sobre todo la individual o básica, es merecedora de una constante preocupación por parte de los Generales que han asumido el cargo de JEME, como así lo refleja el General Domínguez Buj, en su mensaje institucional como JEME: *«Pero además, para cumplir las misiones que tenemos asignadas, cada vez más variadas y complejas, tenemos que tener una instrucción individual esmerada y conseguir que nuestra unidad esté perfectamente adiestrada, y ello requiere esforzarse cada día en el puesto que ocupamos y en la integración de nuestra unidad, con exigencia y constancia, sin caer en la rutina, con iniciativa»*⁴⁴⁹.

Coll Bucher, en su documento «Visión del JEME 2025», refleja los puntos que serán claves en la constitución de la Institución militar en un futuro cercano, cuyo horizonte se establece en el año 2025⁴⁵⁰. Dentro de los mismos destaca el factor humano por considerarlo el elemento más complejo y más resolutivo, base de cualquier organización operativa. A pesar de los avances tecnológicos

446. Cfr. MARTÍN PÉREZ, M.A., «Capacidades futuras de las Fuerzas Armadas. Conclusiones», *Monografías Escuela Superior de las Fuerzas Armadas*, núm. 140, 2014, pág. 246.

447. El término «combate individual», es referido a la materialización de la «instrucción individual», en un escenario bélico real.

448. Cfr. Ejército de Tierra, MADOC. *MI-001. Tareas Individuales comunes. Nivel I*, Madrid, 2015, pág. IX.

449. Vid. DOMÍNGUEZ BUJ, J., «Mensaje institucional del Jefe de Estado Mayor del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 898, 2016, pág. 6.

450. Vid. COLL BUCHER, F., «Visión del JEME 2025», *Periódico Tierra, Boletín informativo del Ejército Español*, núm. 174, 2009, págs. 8 y 9.

actuales, sigue siendo un elemento insustituible por ningún sistema de armas. Por ese motivo, este General considera necesario mejorar su nivel de Instrucción, además de los conocimientos tácticos y técnicos. Otro aspecto fundamental, está relacionado directamente con la importancia de la Instrucción, es la responsabilidad del Mando. Al respecto, recae sobre los suboficiales la responsabilidad de la ejecución de la Instrucción individual del soldado. Además, del planeamiento y dirección de la Instrucción, como uno de los cometidos asignados al JEME, plasma la importancia que tiene la Instrucción en la operatividad del Ejército.

Tabla 7. Categorías de las actividades de I/A. Fuente Apéndice 1 del Anexo B del MA1-001. Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación., Ministerio de Defensa, Granada, 2011.

	ENSEÑANZA DE FORMACIÓN		INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO						
CATEGORÍAS	FORMACIÓN GENERAL MILITAR	FORMACIÓN ESPECÍFICA	INSTRUCCIÓN			ADIESTRAMIENTO GENERAL			ADIES. OPERATIVO
SUBCATEGORÍAS	INSTRUCCIÓN BÁSICA	INSTRUCCIÓN ESPECÍFICA	COMPLEMENTARIA	APLICACIÓN	MANDOS	ARMA (PU,s.)	INTERARMAS (GU,s.)	CONJUNTO / COMBINADO	
FINALIDAD	CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR LOS COMETIDOS COMO SOLDADO DE UNA ESPECIALIDAD		CAPACIDAD DESEMPEÑO DEL PUESTO TÁCTICO DE TROPA	CAPACIDAD DE ACTUACIÓN EN PELOTON/EQUIPO/ ESCUADRA/ TRIPULACIÓN/ PIEZA	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS MANDOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO TÁCTICO	CAPACIDAD DE LAS PU,s. DE LA ESPECIALIDAD PARA COMBATIR CON SUS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS	CAPACIDAD DE LAS AGT,s./GU,s. PARA COMBATIR DE FORMA INTEGRADA	CAPACIDAD DE COMBATIR EN EL MARCO DE ESTRUCTURAS DE FUERZA CONJUNTO/ COMBINADAS	CAPACIDAD PARA CUMPLIR UNA MISIÓN OPERATIVA
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN	MADOC.		JEFES DE COMPAÑÍA O UNIDAD SIMILAR (A PROPUESTA DEL SUBOFICIAL DESIGNADO EN LA COMPAÑÍA)	<ul style="list-style-type: none"> • MANDOS DE Cia.: JEFES DE Cia. • MANDOS BATALLON: JEFE Bón. • MANDOS PLM/EM: JEFE PLM/EM. 	<ul style="list-style-type: none"> • COMPAÑÍA / SECCIÓN : JEFES DE COMPAÑÍA • BATALLON: JEFE BATALLON 		JEFE GU,s. / MANDO	EME. / MANDOS	EME. / MANDOS

Como se puede observar en la tabla la denominación «Instrucción» la encontramos tanto en la Enseñanza de formación como en las actividades de I/A y sólo sus adjetivos: básica, específica, complementaria, de aplicación y mandos, las hacen diferentes por su finalidad. Sin embargo, tal y como se ha

expresado en epígrafes anteriores el legislador no los tiene en cuenta y las aglutina en una misma definición: aquellas que están recogidas en los PGIA de cada ejército, que como vemos en el Ejército de Tierra la Instrucción básica y complementaria no se integran en dichos planes generales.

7. La investigación de la siniestralidad laboral en el Ejército de Tierra

La LPRL, en su art. 16.3, obliga a *«investigar los hechos que hayan producido un daño para la salud en los trabajadores, a fin de detectar las causas de estos hechos»*. Un proceso determinante para la prevención de los accidentes laborales, se basará en la investigación y posterior identificación de las causas básicas⁴⁵¹. Según Díaz Vázquez *«La Seguridad nace como la necesidad social de reparar los daños personales ocasionados por las condiciones de trabajo, materializados en las consecuencias para el accidentado y su familia»*⁴⁵². Sin embargo, esta obligación no se acata en aquellas actividades que, por sus particularidades inherentes, quedan excluidas de la aplicación de la normativa preventiva. Por lo que los accidentes que acaezcan en el ámbito de las actividades de I/A y Operativas, que afecten al personal militar pertenecientes al Ejército de Tierra, no serán objeto de este tipo de investigación, instaurada bajo el manto de la prevención de riesgos laborales. Por ende, en el ámbito de este tipo de actividades, la investigación de accidentes se realiza bajo el parámetro de sus propias normas de seguridad; prescindiendo, por lo tanto, del nexo causa «efecto preventivo» y dirigiendo el análisis a la responsabilidad personal, procedimental y material.

451. Cfr. BARTOLOMÉ CONDE, S., «Siniestralidad laboral en Melilla. Quinquenio 2012-2016», *Revista Ejército*, núm. 918, 2017, págs. 26 a 31.

452. DÍAZ VÁZQUEZ, op.cit., pág. 2.

Las investigaciones de los siniestros acaecidos en el seno del Ejército de Tierra, durante la ejecución de sus competencias y cometidos, se clasifican en tres grupos diferenciados:

- Investigaciones que no analizan las causas del accidente, sino la determinación de si existe una contingencia común o profesional derivada de un accidente o enfermedad, basada en un procedimiento administrativo para la resolución, previo dictamen o informe médico, de las bajas temporales para el servicio.
- Investigaciones de los accidentes y daños ocasionados por acciones hostiles en su vertiente técnica, relacionada exclusivamente con el armamento, material y explosivos durante el desarrollo las actividades de I/A y Operativas.
- Investigaciones que analizan e identifican las causas del accidente acaecido durante el desempeño de las actividades comunes, de las que quedan excluidas las actividades de I/A y Operativas.

Con respecto al primer grupo se cita la investigación de insuficiencias psicofísicas temporales. La incoación del expediente se ordena por el Jefe de la UCO, en virtud del punto quinto de la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del personal militar, a fin de determinar con exactitud la contingencia acaecida con carácter temporal, que impide al militar realizar alguno de los cometidos o servicios propios de la UCO

en la que se encuentre destinado o en comisión de servicio. Ello permitirá resolver si la misma es motivada por una insuficiencia derivada del servicio o no. A pesar de analizar esta investigación una lesión o enfermedad para determinar si se trata de un accidente laboral o no⁴⁵³, se limita a seguir un procedimiento administrativo, para la resolución de la consideración del tipo de contingencia que concurre, común o profesional. A partir de esta delimitación, se realizará su seguimiento hasta el alta médica del afectado, o se incoará el oportuno expediente de determinación de su aptitud psicofísica por un Tribunal Médico Militar, obviando toda investigación sobre el origen de las causas que han provocado la insuficiencia temporal del militar⁴⁵⁴.

En el segundo grupo se cita la investigación de accidentes y daños ocasionados por acciones hostiles, en su vertiente técnica, relacionados con el armamento, material y explosivos. La Instrucción Técnica 03/12, de 30 de abril, del Mando de Apoyo Logístico al Ejército, determina la organización y cometidos, para establecer claramente las causas que provocaron el accidente en las UCO del Ejército de Tierra. Esta investigación se encuentra condicionada por la diversidad de materiales con los que cuentan las Unidades del Ejército, así como por su complejidad. Por ello, la investigación necesita la aplicación de procedimientos propios, que unidos al grado de especialización y dedicación de los miembros que realicen la investigación, les permitirá centrarse en la indagación de los factores que, desde los aspectos técnicos, encuentren los causantes de los accidentes e incidentes. El objetivo principal de esta

453. Vid. El art. 156.1 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social define el término accidente laboral como «[...] toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena».

454. Vid. RD 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

investigación es la determinación de los factores técnicos que provocaron los accidentes, así como localizar los factores causantes que permitan impedir su repetición, pero solo se podrá aplicar a los accidentes relacionados con el armamento, material, municiones o explosivos⁴⁵⁵. En estos casos, se analizan aquellos accidentes acontecidos durante las actividades de I/A y Operativas, en las que se ejecutan ejercicios de fuego real, excluyéndose las averías que sean consecuencia del empleo normal de los materiales, los accidentes de tráfico ocurridos en la red de carreteras españolas que no sean consecuencia de una avería del material y los accidentes de aeronaves tripuladas o no tripuladas del Ejército de Tierra, al estar amparadas por la normativa específica de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM). No obstante, a pesar de pretender un objetivo común con las investigaciones de accidentes laborales, su ámbito es restringido y eminentemente técnico, ignorando otros aspectos que pueden influir, tales como por ejemplo los riesgos psicosociales que pueden estar involucrados en el siniestro.

Con respecto al tercer grupo en el Ejército de Tierra se cumple el procedimiento ordenado en la NOP 2/16, de 22 de abril de 2016, de la Dirección de Acuartelamiento, de investigación de accidentes y siniestralidad laboral. Su objeto es desarrollar los procedimientos necesarios para analizar los daños a la salud del personal militar y civil destinado en las BAE/UCO del Ejército de Tierra⁴⁵⁶. Correlativamente, su finalidad es detectar las causas de los incidentes y

455. Se cita el accidente ocurrido el 24 de febrero de 2011, durante un ejercicio de I/A, en la Academia Militar de Ingenieros de Hoyo de Manzanares fallecieron cinco militares y otros tres resultaron heridos. Vid Nota de prensa Ministerio de Defensa. [Consulta: 07/01/2019], «http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2011/02/DGC_110224_hoyo_manzanares.html».

456. Afecta al personal perteneciente al CGC, destinado en BAE/UCO del Ministerio de Defensa, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del RDPRLFAS.

accidentes laborales, excluidos todos aquellos que se produzcan durante la ejecución de las actividades de I/A y Operativas para, posteriormente, permitir la adopción de medidas necesarias para evitar su repetición. De esta forma se cumple lo establecido en la LPRL⁴⁵⁷. Para ello el Jefe de BAE, a través del Jefe de la UCO afectada, debe identificar todas aquellas causas sobre las que sepa y pueda actuar y cuyo control, mediante la implantación de medidas correctoras, garantice lo máximo posible que el mismo accidente o similar no se repita. Cuando la gravedad del caso, o la imposibilidad de identificación de las causas del riesgo o su eficiente control, así lo aconsejen, se recabará la intervención del Técnico Superior del SVPRL asignado. Con este procedimiento, se establece una sistemática para la investigación de estos siniestros, quedando excluido el uso de la información recabada para fines que no sean acordes a la finalidad perseguida «la detección de los factores», y nunca para la indagación de culpabilidad o responsabilidad.

La opción de iniciar una investigación u otra, se basa en el esclarecimiento de los factores del accidente o incidente, en función del tipo de actividades en el que se haya producido, o para determinar si se trata de una contingencia común o profesional. Sin embargo, los procedimientos utilizados para la investigación en siniestros acaecidos durante las actividades de I/A, son notablemente técnicos y no se analizan desde la perspectiva preventiva. Se prescinde de los elementos directos relacionados con las condiciones y actos, de las causas indirectas, y de los fallos de las normas propias de seguridad por la que se rigen. Estas carencias pueden originar la existencia de siniestros, hechos o sucesos

457. Vid. Art. 16.3 LPRL.

contrastados, de los que más allá de profundizar en su investigación, sólo se informa con prontitud y oportunidad dada su trascendencia o gravedad, obviando los accidentes o siniestros leves.

A su vez, existen datos que evidencian que la normativa específica o particular de los diferentes Sistemas o Mandos del Ejército de Tierra, empleados en la investigación de los accidentes durante el desarrollo de las actividades de I/A, no son suficientemente eficaces. Por lo tanto, se hace necesario implementar estrategias que permitan facilitar su eliminación o reducción. Estrategias reactivas, que actualmente son empleadas en la gestión de prevención de riesgos laborales del Ejército, para las actividades comunes, distintas de las de I/A. Esto permitiría la investigación de los factores de los accidentes, sin desestimar ningún parámetro que enturbie su esclarecimiento. Para que una vez identificadas, se instituyan medidas correctivas inmediatas que las eliminen o minimicen, de forma que eviten su repetición y aumenten la operatividad y eficacia de las Unidades⁴⁵⁸.

8. La integración de las actividades de I/A en el sistema de gestión de la PRL del Ejército de Tierra

Este estudio pretende procurar una propuesta integrada sobre acciones preventivas que mejoren la seguridad y salud en el trabajo que desempeña el personal militar del Ejército de Tierra durante el desarrollo de las actividades de

458. En consulta de fecha 28 de mayo de 2019, con la Jefa de la UCSVPRL expone la conveniencia de la investigación de todos los accidentes sin diferenciar las actividades, *«es necesario que se investiguen todos los accidentes y que dicha investigación conlleve la adopción de medidas preventivas que eviten o reduzcan la posibilidad de que vuelvan a repetirse. En definitiva, pretendemos colaborar en la mejora de la seguridad y salud en todas las actividades que realiza el personal de las FAS, pero, por supuesto, sin interferir en los objetivos de sus misiones»*. No obstante, actualmente no existe un criterio a seguir en el Ejército de Tierra que se aplique a la investigación de los accidentes producidos durante el desarrollo de las actividades de I/A que esté inspirado en la LPRL.

I/A⁴⁵⁹. Para Garcés Bonet, la inclusión de referencias a la PRL en la legislación militar, *«aproxima de manera sensible la aplicación de la normativa preventiva en el seno de las fuerzas armadas a la existente en el resto de la sociedad»*⁴⁶⁰. Y también, la integración de las actividades de I/A en el sistema de gestión de PRL del Ejército de Tierra permitiría evitar o disminuir aquellas situaciones de riesgo o peligro durante el ejercicio de sus actividades, que no interfieran en el desarrollo de las misiones militares que se les puedan encomendar⁴⁶¹.

Enumerar, evaluar y demostrar de forma exhaustiva, todas las tareas que comprende cada una de las categorías encuadradas en las actividades de I/A, supone sobredimensionar este estudio y, por ende, desvirtuar su objetivo general. Además, las publicaciones militares que desarrollan el contenido de las actividades de I/A, en su mayor parte, están clasificadas por el Ejército de Tierra siguiendo lo preceptuado por la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, bajo ningún concepto se han utilizado en esta investigación fuentes definidas como materias clasificadas, materias objetos de reserva internas, o englobadas las anteriores bajo la denominación de información clasificada⁴⁶². Sólo se han reflejado aquellas fuentes documentales de información denominadas «no clasificadas», y dentro de esta clasificación aquellas recogidas como documentos de «uso oficial y de uso público»⁴⁶³.

459. Vid. Art. 27.2 de la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

460. GARCÉS BONET, op.cit. pág. 430.

461. Los autores instan a realizar un proceso en el que se identifiquen los peligros y evaluar los riesgos, de manera que se puedan eliminar o reducir. Además, destacan la necesidad de establecer medidas de protección del trabajador adecuadas en el caso de detectar riesgos inevitables. DÍAZ VÁZQUEZ, op.cit., pág.2.

462. Vid. Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa. Sexto. Clasificación de la información. 1. Conceptos generales.

463. Vid. Instrucción 51/2013, de 24 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos (SEGINFODOC). Capítulo III. Marcado de documentos.

Por ello, teniendo en cuenta que las medidas de prevención encaminadas a eliminar o reducir los riesgos son más efectivas si se realizan en el origen de la actividad/tarea, se ha considerado idónea, dentro de la Instrucción del futuro combatiente, la selección de las tareas comprendidas en el nivel I o primer nivel de la Instrucción ⁴⁶⁴. Se opta por estudiar la integración en la normativa preventiva de las denominadas «tareas individuales comunes», impartidas por la enseñanza de formación como Instrucción básica.

Y la elección se justifica por contener este nivel las tareas necesarias para convertir a un aspirante civil en soldado o combatiente elemental, tras recibir la formación impartida dentro de las Academias y Centros Militares de formación⁴⁶⁵. Además de ello, se consideran estas tareas esenciales e iniciales de todo aspirante a militar profesional, dado que su aprendizaje en su momento permitirá al combatiente luchar, sobrevivir y vencer en el combate de forma elemental. Ello significa que todo personal militar, independientemente de su empleo o especialidad, debe adquirirlas. Esta formación se perfecciona en el combate genérico, con las tareas establecidas en el segundo nivel o profesional, complemento del anterior, impartidas en las Unidades.

La integración de las tareas citadas a la normativa preventiva, a nuestro juicio, repercutirá de manera significativa en la seguridad y salud de los restantes

464. Vid. El manual, MI-001, nivel I (docente), que incluye las tareas necesarias para convertir a un aspirante civil en soldado o combatiente elemental. nivel II (profesional), que constituye un complemento del anterior para conseguir el perfeccionamiento en el combate genérico. nivel III (jefe de pelotón/equipo), que recopila lo que cualquier jefe de pelotón/equipo necesita con relación a este tipo de combate. nivel IV (jefe de sección), que, de forma análoga al anterior, está constituido por las tareas que debe conocer cualquier jefe de sección.

465. El nivel I es común a todos los cuerpos y escalas del Ejército, encontrándose incluida en los planes de estudios de la enseñanza de formación, que permite el acceso a su correspondiente Cuerpo y Escala. Para González Vallés, en su art. sobre la formación y preparación militar del cadete de la Academia General Militar, «el cadete de primer curso debe alcanzar unos objetivos de instrucción individual muy exigentes al finalizar el año escolar. Tiro, Topografía e Instrucción Individual del Combatiente son las tres patas en las que se basa el nacimiento de nuestros oficiales». Vid. GONZÁLEZ VALLÉS, op.cit., pág. 74

niveles de la Instrucción hasta culminar en el Adiestramiento. De su evaluación, se extraerán los riesgos en el origen, cuya detección repercutirá positivamente en la seguridad y salud del personal militar.

8.1. El sistema de gestión de la PRL en el Ejército de Tierra para las actividades comunes

El sistema de gestión de la PRL en el Ejército de Tierra para las actividades comunes se plasma en la Directiva del JEME 02/11, de 18 de febrero. Su objeto, definido en su punto 2, establece los criterios y desarrolla de forma general la estructura y procedimientos del SVPRL en el Ejército de Tierra. En la Directiva, se ordena con claridad en su punto 3, su aplicación a todas las actividades comunes que realizan el personal militar y civil destinados en las respectivas UCO. Sin embargo, no deja lugar a dudas, excluye las actividades de I/A y Operativas, cumpliendo lo establecido por el art. 6.4 del RDPRLFAS, pues para éstas no existe sistema de gestión que de forma general rijan el procedimiento a seguir. Lejos de profundizar la Directiva sobre las particularidades específicas de estas actividades, se limita a repetir en el punto 8.4 la exclusión redactada en el RD antes nombrado, que, como se expone en este capítulo, no está exenta de controversias.

Para orientar a las Unidades sobre las normas propias de seguridad y operación a seguir en las actividades de I/A y Operativas, hay que utilizar la publicación militar «OR7-20 Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza». Estas orientaciones, se publicaron cinco años antes de la promulgación del RDPRLFAS. En ellas, se definen conceptos que se contradicen con la normativa preventiva publicada posteriormente, tales como la seguridad

funcional. Esta seguridad, área integrante de la Protección de la Fuerza, es definida como aquella que: *«[...]pretende proteger a las tropas, los empleados civiles, material y equipo contra los riesgos producidos por utilizar procedimientos inadecuados o no prestar el adecuado cuidado en los mismos o derivados de la propia actividad militar. Se consigue fundamentalmente mediante la instrucción y la prevención de accidentes»*. Se observa en su definición, que aglutina al personal civil y militar en la gestión del riesgo, sin diferencia alguna de su condición, de las actividades que realice, ni de los procedimientos a adoptar para evitar los riesgos. En principio, parece difícil aplicar estas normas de seguridad como normas propias de seguridad a las actividades de I/A y Operativas. A su vez, en su capítulo 4, no aclara las diferencias de las actividades excluidas y las comunes. Y además aplica terminología y procedimientos de la LPRL y de su normativa de desarrollo, lo que suscita un gran interrogante, sobre cuáles son las normas propias de seguridad a aplicar en las actividades de I/A y Operativas.

Quince años después de su publicación, estas orientaciones fueron derogadas por Resolución 513/09200/17, de 28 de junio de 2017. Se desconocen los motivos oficiales que llevaron a tal decisión, pero de su lectura, se desprende que las orientaciones relacionadas con medidas preventivas no se ajustaban a la legislación vigente. Actualmente, no existe referencia explícita alguna por parte de la Directiva citada, para adoptar los procedimientos necesarios que orienten sobre la aplicación de las normas propias de seguridad en las actividades excluidas. Queda sujeto, por lo tanto, al buen criterio de los respectivos Jefes de BAE/UCO, que dicten normas internas particulares que

carecen de seguridad jurídica y, por ende, están sometidas a modificaciones arbitrarias sin instrumento de control alguno.

Para las actividades comunes, sujetas al marco normativo preventivo, se crea una estructura denominada SVPRL en el Ejército de Tierra⁴⁶⁶, encargada de activar los procedimientos y normas preventivas a través del Plan General de PRL del Ejército de Tierra⁴⁶⁷. Se trata de un instrumento de implantación, basado en un conjunto de principios, medidas y normas de organización interna, que permite a la actividad preventiva del Ejército de Tierra integrarse en su sistema general de gestión, por el que se establece su política de PRL, tanto en el conjunto de sus actividades, como en todos los niveles jerárquicos de su estructura organizativa.

Este plan se desarrolla mediante la Instrucción técnica del IGE 20/2011, de 7 de noviembre de 2011. En él se incardina a los SVPRL de las BAE/UCO en su área de responsabilidad, atribuyéndoles entre otros cometidos la realización de la evaluación de los riesgos, generales y específicos, en las actividades que constituyen las funciones del personal civil y militar. Ello está basado en lo preceptuado en el art. 3.1 del RSP, utilizando para ello la metodología descrita

466. La estructura del SVPRL se desarrolla en capítulo II de esta Tesis.

467. Reflejado en epígrafes anteriores y como cumplimiento del punto segundo de la Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones públicas. El Ministerio de Defensa, procedió a actualizar su Sistema de Gestión de la PRL, para ello elaboró un Plan General de PRL para cada una de las estructuras que se recogen en el art. 22.1 del RDPRLFAS, para el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y las UCO ajenas a los ejércitos. En cada UCO hasta el nivel que determine el Plan General, un Plan Ordinario de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se incluya la identificación del ejército, Unidad, su ámbito de aplicación y actividad general. En el que indicará el número de actividades de los empleados públicos, diferenciados por su relación laboral, su dispersión geográfica, sus riesgos genéricos y el número y características de los centros de trabajo donde desarrollan sus actividades. En estas últimas deben describirse aquellas, que por sus características puedan suponer aspectos significativos relacionados con la seguridad y la salud de los empleados públicos. Se incluirá, además, un análisis de la siniestralidad acaecida en periodos anteriores y por último, contemplará la forma establecida para asegurar las contingencias profesionales; la entidad concertada, el ámbito de actuación, empleados públicas a los que se le da la cobertura y cualquier otro dato relevante. El Sistema de Gestión de la PRL en el Ministerio de Defensa, queda por lo tanto definido en su capítulo 2, como la parte del Sistema General de Gestión del departamento ministerial, en la que se establecen las funciones y responsabilidades de todos los implicados en materia de prevención. En el que se definen, los procedimientos a seguir, y los recursos necesarios para llevar a cabo la política y conseguir los objetivos de la prevención. Es un instrumento que, en términos operativos, a través del establecimiento de una serie de «procedimientos y mecanismos», facilita el cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales.

en la Norma Técnica de Prevención (NTP) 330/1993, del INSST, «Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente». Y dejando abiertos los procedimientos a evaluaciones que requieran mediciones, análisis o ensayos, o bien a la utilización de otra metodología de evaluación de riesgos más apropiada. De los resultados que se obtengan, se procederá a un análisis que derivará en medidas correctoras a aplicar, que eliminen, mitiguen o reduzcan los riesgos, estableciéndose una planificación basada en prioridades. Para Garcés Bonet, esta Instrucción técnica debe de considerarse *contra legem*, dado que «*en las mismas circunstancias todo el personal debe gozar de los mismos derechos, pero la norma no se los concede*»⁴⁶⁸. Además, continua el autor, «*contiene muchos errores, algunos de importancia, lo que a su juicio no discrimina su intencionalidad o simple error de redacción*»⁴⁶⁹. A nuestro juicio, coincidimos con la opinión de Garcés Bonet, pues además de lo expuesto se observa que la Instrucción técnica tendría que haberse revisado transcurrido un año desde su publicación, hecho que hasta la fecha no se ha producido.

8.2. Selección de las tareas propuestas de integración

La OM núm. 42/2000, de 28 de febrero, establece las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de las enseñanzas de formación en los respectivos ejércitos, que permitan la capacitación militar y profesional de los militares profesionales de tropa y marinería. La I/A, comprenderá los ejercicios dirigidos a la adquisición de la práctica y habilidades profesionales, y la formación física y militar. Esta enseñanza, se realizará en dos fases:

468. GARCÉS BONET, op.cit., pág. 430.

469. Ibid.

1. Fase de Formación General Militar.
2. Fase de Formación Específica.

Corresponde a la primera el módulo de Formación Militar Básica, dirigido a la Instrucción del aspirante a Soldado/Marinero, estructurado en cinco ámbitos:

1. Ámbito de la formación general militar.
2. Ámbito de la formación cívica y humana.
3. Ámbito de la Instrucción táctica/marinera/técnica y de tiro.
4. Ámbito de la formación física militar.
5. Ámbito de las guardias y servicios.

De los cinco ámbitos descritos, se ha seleccionado el correspondiente a la Instrucción táctica/marinera/técnica y de tiro. La elección se justifica, por un lado, por incluir las tareas necesarias para convertir a un aspirante civil, sin conocimiento militar alguno en soldado o combatiente elemental, según el nivel I del SIAE. Por otro, por contener este ámbito las capacidades mínimas necesarias que debe adquirir todo militar, imprescindibles para la supervivencia en entornos hostiles, sea cual sea el puesto táctico. Esta selección permite el estudio pormenorizado de las fuentes de riesgo o condiciones en cada tarea, detecta las causas o factores de riesgos que pueden conducir a un peligro y, correlativamente, permite identificar los riesgos existentes y/o potenciales en cada uno de los factores de riesgo de las dimensiones analizadas, que posteriormente afectarán a otras categorías y niveles de la I/A ⁴⁷⁰.

470. Se define como «riesgos existentes», aquellos que ya se están presentando de forma efectiva por estar materializándose el factor de riesgo correspondiente, diferenciándose de los «riesgos potenciales», por ser aquellos, que o bien en el momento de la evaluación no han podido constatarse por falta de información, o bien a pesar de estar controlados en el momento de la evaluación mediante las medidas adoptadas pueden perder tal condición de control con relativa facilidad o pueden ser susceptibles de generar consecuencias muy graves en caso de presentarse.

El ámbito seleccionado se desarrolla en el seno del Ejército, mediante la Instrucción núm. 214/2001, de 3 de octubre, por la que el JEME establece los planes de estudio de las especialidades de los militares profesionales de tropa del Ejército, desglosados en las siguientes tareas:

- Instrucción de Orden Cerrado.
- Armamento, municiones, equipos y materiales de dotación individual reglamentaria, que se determinen.
- Teoría elemental del tiro.
- Prácticas de tiro con las armas y municiones de dotación individual reglamentaria, que se determinen.
- Instrucción táctica individual del combatiente/Formación marinera/Formación técnica, tanto diurna como nocturna, incluido ambiente NBQ (Nivel I).
- Orientación/Topografía básica.
- Primeros auxilios. Transporte de heridos. Normas de asistencia sanitaria. Material sanitario de urgencia.

Este ámbito, incluido dentro de la Fase de Formación General Militar, se corresponde con la categoría inicial del SIAE, denominada Instrucción Básica y se desarrolla mediante el módulo de Formación Militar Básica, está constituido por procedimientos y metodologías que faciliten su aprendizaje y plasmado en diferentes publicaciones militares, cuya redacción, aprobación y actualización es responsabilidad en el Ejército de Tierra del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC):

- PG-00 Orden Cerrado.
- MI-001 Manual de Instrucción. Tareas individuales comunes nivel I.
- MI6-001 Manual de Instrucción. Tiro con fusil de asalto HK-G36E.

Las publicaciones reflejadas proporcionan los conocimientos y la metodología necesaria para llevar a cabo el proceso de la Instrucción Básica en el ámbito seleccionado, que permita posteriormente su correspondiente mecanismo de evaluación.

9. Evaluación de las tareas seleccionadas

A tenor de lo expuesto en el art. 5.2 del RSP, el procedimiento de evaluación de los riesgos existentes en función de los criterios objetivos de valoración utilizados, deberá proporcionar confianza sobre su resultado. Además, añade que en caso de que se susciten dudas, siempre, desde una perspectiva preventiva, deberán adoptarse las medidas más favorables. Por otro lado, aunque se considera conveniente que la evaluación incluya la realización de mediciones, análisis o ensayos, estas actividades podrán omitirse cuando se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de realizarlos. En todo caso constituye un requisito *sine que non*, constatar que su resultado cumpla lo expuesto al principio de este párrafo.

Llegados a este punto, surge la cuestión de la justificación de la evaluación de las tareas seleccionadas en el punto anterior, y antes de continuar es conveniente recordar la importancia de evaluar los riesgos. De las distintas acepciones existentes del término «evaluar», se considera la más adecuada en

el ámbito de la PRL la siguiente: «*evaluar supone conocer anticipadamente una situación como paso previo para abordar medidas que, en caso necesario, mejoren esa situación*»⁴⁷¹. En esta definición se establecen dos elementos principales: el conocimiento anticipado que permite identificar los riesgos y la acción posterior para eliminarlos. Por lo tanto, la evaluación de las tareas seleccionadas constituye, *per se*, un instrumento que busca esta finalidad más allá del mero cumplimiento normativo, o del simple hecho de regirse por sus propias normas de seguridad. porque permitirá estimar la magnitud de los riesgos e implantar medidas preventivas y correctoras, que con carácter inminente los erradiquen. La evaluación de los riesgos constituye el paso imprescindible para atender de forma eficaz y coherente las actividades dirigidas a su eliminación⁴⁷². De ahí, su gran importancia en los distintos ámbitos, tanto en la empresa privada como en la Administración pública.

La evaluación de riesgos, como técnica analítica que identifica los riesgos laborales y los valora, constituye el eje central de la gestión preventiva. Este instrumento es el mejor elemento para poder afrontar riesgos innecesarios y a su vez controlar aquellos que una vez identificados no puedan eliminarse. Asimismo, se considera determinante para la elección del método adecuado, de forma que los resultados obtenidos ofrezcan una confianza que despeje toda duda sobre su validez.

471. Vid. Norma UNE 81902:1996 EX. Prevención de riesgos laborales. Vocabulario.

472. Cfr. RUBIO ROMERO, J.C., Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, Ediciones Díaz Santos, S.A., Madrid, 2004, pág. 22.

En función de la diferente metodología existente que permite evaluar los riesgos y oportunamente reducirlos o eliminarlos⁴⁷³, se ha optado en este estudio por crear un procedimiento *ad hoc*, proactivo y reactivo, apropiado para la actividad de Instrucción. Este procedimiento, ha permitido despejar a través de los análisis preliminares, todos los factores que interfieran en la determinación de los riesgos concretos, su probabilidad de materializarse en daños y como resultado, su magnitud. Además, en aquellas tareas en las que se ha identificado algún riesgo que deba ajustarse a una normativa específica de aplicación, el procedimiento se ha utilizado. La cuantificación de la probabilidad y sus consecuencias, son necesarias para una correcta valoración objetiva del riesgo. De tal forma, que una vez identificado y valorado el riesgo, se analiza aplicando métodos específicos más complejos, necesarios para alcanzar un nivel de profundización óptimo, que permita su correcta y definitiva evaluación.

La experiencia del doctorando, se considera relevante para la aportación de datos a esta investigación. Su condición de militar de carrera, le ha exigido superar las distintas asignaturas del plan de estudios en la Academia militar, incluida la formación de I/A, por lo que como sujeto pasivo, ha realizado todas las tareas descritas. Además, sus destinos en la Fuerza le han permitido consolidar su formación militar, y adquirir y aumentar su experiencia en las actividades de I/A, ofreciéndole una percepción directa de las mismas durante la ejecución de ejercicios tácticos. Sin olvidar las actividades Operativas, en las que ha participado como miembro de los contingentes en misiones internacionales, desarrolladas en Bosnia – Hercegovina y Afganistán. Posteriormente en sus

473. Se ha comprobado la metodología existente de evaluación de riesgos laborales a través del informe encargado por el INSST al centro de investigación en salud laboral de la Universitat Pompeu Fabra. Vid. Boix, P., *Buena práctica profesional en evaluación de riesgos laborales: informe bibliográfico*, CISAL, Barcelona, 2014.

destinos en Apoyo a la Fuerza, como profesor en los Centros de formación de tropa, ha impartido materias directamente relacionadas con la I/A a los aspirantes a militares profesionales de la Escala de tropa. Por último, su actual destino como Jefe del SVPRL y Técnico superior en PRL de un ARG del Ejército del Tierra, le ha permitido adquirir la suficiente experiencia en el trabajo de campo de la PRL, al ser miembro activo de la estructura de PRL en el Ejército de Tierra, evaluando los riesgos laborales de los cometidos ejecutados por el personal militar y civil en los distintos lugares y puestos de trabajo, durante el desarrollo de las actividades comunes en las BAE/UCO de su área de responsabilidad geográfica, ubicada en la provincia de Cádiz. Esta experiencia, empleada como un instrumento necesario, le ha permitido elaborar la evaluación de los riesgos de las tareas seleccionadas, pertenecientes a la actividad de Instrucción, basándola fundamentalmente en la observación participante. Es decir, la apreciación profesional de las tareas descritas, en la que no han influido percepciones personales o de otra índole, han permitido obtener unos resultados objetivos.

Por otro lado, el beneficio de desarrollar un procedimiento específico para la evaluación de las tareas seleccionadas de la actividad de Instrucción, en el que se utilizan los mismos procedimientos de evaluación empleados en el Ejército de Tierra para las actividades comunes, permite extraer las oportunas conclusiones que llevan a demostrar la posible integración de las actividades de Instrucción en el sistema de gestión de PRL para las actividades comunes, sin que por ello pierdan su finalidad.

9.1. Fases de la evaluación de las tareas de instrucción individual

Mediante el procedimiento descrito a continuación⁴⁷⁴, en el que se ha elegido la observación participante⁴⁷⁵ como método de recolección de datos se activa un proceso selectivo, considerado por Angrosino y de Pérez, como el «*más sistemático, en el cual el investigador se concentra en diferentes tipos de actividades para ayudar a delinear las diferencias en dichas actividades*»⁴⁷⁶. En él, se han identificado los riesgos de las tareas seleccionadas en la actividad de Instrucción. Sin despreciar aquellos que, en función de su potencialidad, se consideren, aunque no produzcan daños y lesiones al personal militar⁴⁷⁷. Pérez Guerrero y Rodríguez-Piñero Royo definen el factor de riesgo como «todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo que pueda contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o producir, aún a largo plazo, daños en la salud del trabajador»⁴⁷⁸. Sin duda este factor ha permitido revelar la existencia de riesgos que no han podido

474. Se han definido y analizados los conceptos relacionados con las tareas incluidas en las actividades de I/A específicas para el Ejército de Tierra, aglutinadas en sus planes generales. Para situarlos bajo un marco conceptual, que facilite la concreción y evite la limitación de las definiciones que se establecen en los documentos militares y que pudieran ser un obstáculo, a la aplicación de los principios de la actividad preventiva contenidas en la LPRL, de tal manera que tengan cabida en la normativa común preventiva. A través de la observación participante, se ha desarrollado un procedimiento que sirva para incrementar la validez del estudio y a su vez permita una mejor comprensión del contexto militar en la que se realiza el estudio. De las ventajas, se destaca la ofrecida por DeMunck y Sobo, «*la observación participante por encima de otros métodos, permite una descripción ricamente detallada*». Vid. DEMUNCK, V.C. Y SOBO, E.J., *Using methods in the field: a practical introduction and casebook*, Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998, pág.43. Esta ventaja será aprovechada por el doctorando al participar directamente en el objeto de este estudio, proporcionando la cantidad y calidad de los datos recogidos. KAWULICH, B.B, loc.cit., pág. 9. Para Schensul, Schensul y LeCompte, no es más que «el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador». Vid. SCHENSUL, S.L., SCHENSUL, J.J. Y LECOMPTE, M.D., *Essential ethnographic methods: Observations, interviews, and questionnaires* (Book 2 en Ethnographer's Toolkit). Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1999, pág.91. Este proceso, se diferencia de otros porque faculta a los investigadores a integrarse en las actividades que desarrollan las personas objetos del estudio, y en el caso que se trata, de la integración de las actividades de I/A, en el sistema de gestión de la PRL, que desarrolla el personal militar del Ejército de Tierra. Vid. DEWALT, K.M. Y DEWALT, B.R., *Participant observation: a guide for fieldworkers*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2002, pág. 7.

475. La elección del tipo metodología a aplicar en la investigación se ha decidido sobre una combinación teórico-empírica, justificada por su enfoque factual y, por ser un caso pragmático, observado desde la perspectiva cualitativa. Para ello se utiliza la observación participante, como instrumento para la recolección de los datos en esta investigación. La elección de este instrumento, utilizado en las investigaciones cualitativas, se justifica por ser la que más se ajusta al procedimiento llevado a cabo en la investigación. En palabras de Marshall y Rossman, la observación participante es «la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado». Vid. MARSHALL, C. Y ROSSMAN, G.B., *Designing qualitative research*. Newbury Park, CA: Sage, 1989, pág.79.

476. Vid. ANGROSINO, M.V. Y MAYS DE PÉREZ, K.A., «Rethinking observation: From method to context», DENZIN, N.K., Y LINCOLN, Y.S., (Eds.), *Handbook of Qualitative Research (second edition)*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2000, pág 677.

477. Vid. VALVERDE SERRANO, E., «Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo», RUBIO ROMERO, J.C. (Dir.), en *Manual para la formación de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales*, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2005, pág. 12.

478. Vid. PÉREZ GUERRERO, M.L. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., «Prevención y nuevos riesgos laborales. El caso de los trabajadores puestos a disposición», Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 50, 1999, pág. 106.

ser eliminados, constituyendo un factor determinante, para evaluarlos y posteriormente realizar cualquier acción de mejora⁴⁷⁹. Los criterios utilizados para la elaboración del procedimiento empleado en la evaluación han sido los siguientes⁴⁸⁰:

- Se han determinado los peligros derivados de las tareas y se han evaluado los riesgos asociados a estos peligros, para así poder planificar las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad del personal militar.
- En la evaluación de los riesgos, se han tenido en cuenta los equipos de trabajo y sustancias químicas que se utilizan.
- Se ha comprobado que las medidas preventivas adoptadas son adecuadas y no afectan al cumplimiento de la misión.
- Se han establecido prioridades en la adopción de medidas adicionales, en aquellos casos que han resultado necesarias en la evaluación.
- Se ha garantizado que las medidas preventivas y adicionales que se estiman necesarias y se adoptan tras una evaluación de riesgos, mejoran el nivel de protección del personal militar.

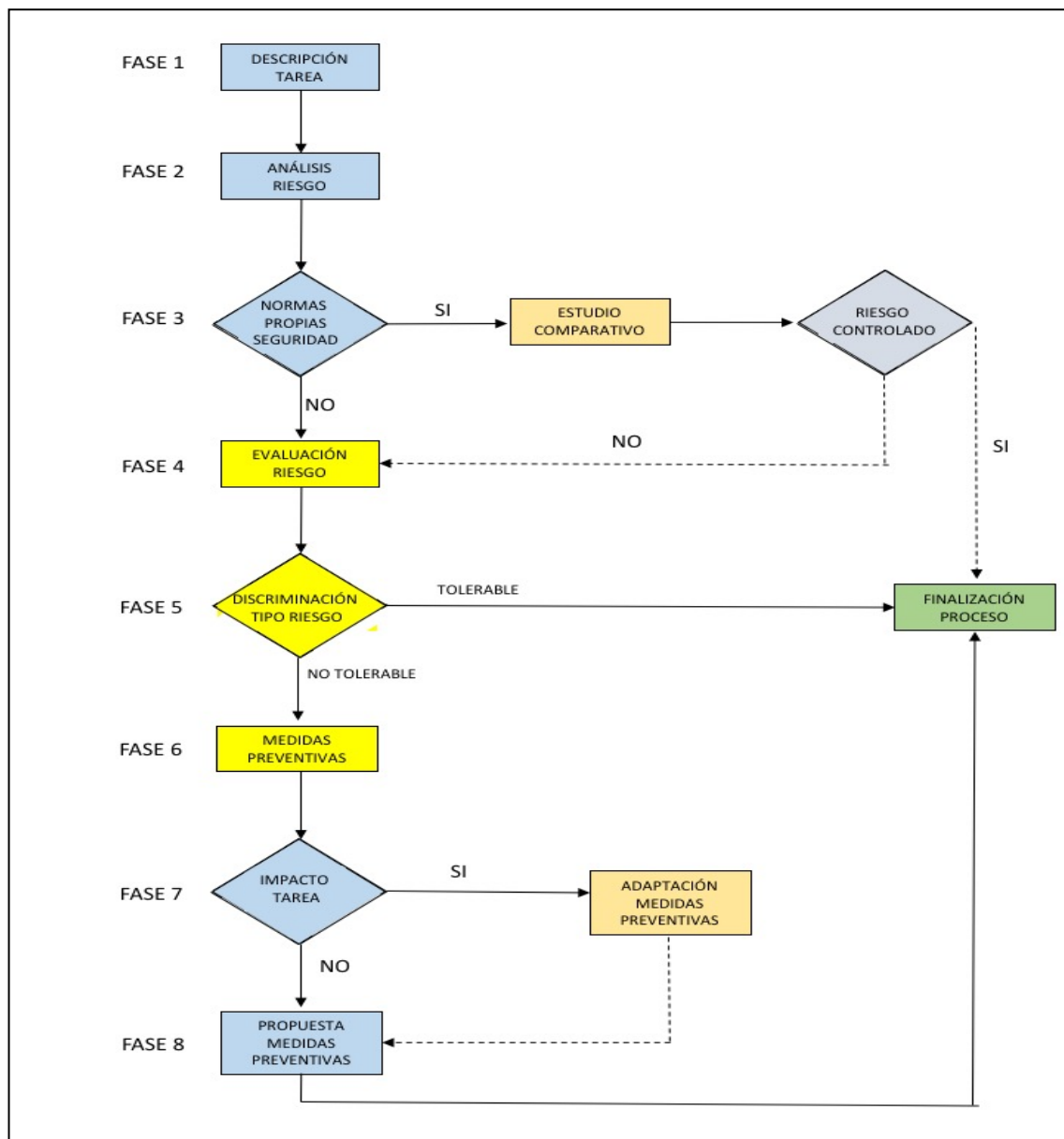
El nivel de detalle de la evaluación de riesgos es proporcional al nivel intrínseco de los peligros. En general, cuanto mayor es la magnitud de los peligros considerados, y cuanto mayor es la complejidad de los sistemas

479. Según Valero Capilla, *et al*, «en las instalaciones de adiestramiento militar, las lesiones osteomusculares se producen con una frecuencia doble de la de otras instalaciones militares, y constituyen el primer motivo de demanda asistencial durante los cursos de entrenamiento específico de combate. La incidencia lesional no solo tiene importancia médica, sino también operativa, ya que conllevan la inactividad física del alumno y pérdida de la eficiencia general del curso». Vid. VALERO CAPILLA, F.A., FRANCO BONAFONTE, L., RUBIO PÉREZ, F.J., «Lesiones de los sargentos alumnos del Ejército de Tierra y factores de riesgo lesional», *Revista Sanidad Militar*, vol. 70, núm. 4, 2014, pág. 264.

480. Cfr. Sitio web de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. [Consulta 30/03/2018], «<https://oiraproject.eu/es/purpose-risk-assessment>».

considerados, mayor ha sido el grado de rigor y robustez⁴⁸¹. Esta metodología toma en cuenta las condiciones en las que se llevará a cabo la Instrucción, y no olvida el requisito exigido de su cumplimiento, aunque su intención es mantener el nivel de riesgos tan bajo como sea razonable (ALARP)⁴⁸². El procedimiento de evaluación se divide en las siguientes fases:

Gráfico 10. Procedimiento de evaluación de riesgos. Fuente elaboración propia.



481. Vid. GADD S., KEELEY D., BALMFORTH H., *Good practice and pitfalls in risk assessment*. HSE Research Report 151, 2003, pág. 11.

482. ALARP, acrónimo del inglés «As Low As Reasonably», (Tan Bajo Como Sea Razonable). Término común empleado en la normativa británica de prevención de riesgos laborales. Vid. JSP 375, Part 2, Volume 1 Chapter 40 - Military Training for Land Systems. [Consulta 03/04/2018], «https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488854/20160101-375_2016_P2_Vol1_Chapter_40_V1-0_Military_Training.pdf».

- Fase 1. Descripción de la tarea

En la primera fase se describe la tarea según lo expuesto en las correspondientes publicaciones militares de referencia. En la descripción, fase previa a la observación participante de la tarea a evaluar, se detalla minuciosamente su desarrollo de forma sistemática con el fin de conocer todos los aspectos en los que se pueden determinar situaciones que puedan ocasionar riesgos que dañen y/o lesionen al personal militar que las realiza.

- Fase 2. Análisis del riesgo

Se requiere en esta fase la observación participante para la definición precisa del riesgo que permita su correcta identificación. De ello se desprenderá la probabilidad y las consecuencias de la materialización del peligro, para proceder a valorarlo y a su correcta evaluación. La ejecución de la tarea conlleva la implicación del doctorando durante un periodo amplio de tiempo (FFGM), a fin de observar a los alumnos del Centro de Formación, durante la ejecución de la tarea a analizar. Esta implicación está basada además en la experiencia previa que aportan tanto las vicisitudes derivadas de la formación propia, como las impresiones de los alumnos, extraídas de conversaciones y manteniéndose un proceso estructurado y organizado durante el trabajo de campo⁴⁸³.

Para recabar los datos necesarios durante las conversaciones y posteriormente facilitar la identificación del riesgo, se han seguido, a modo orientativo, los cuestionarios aportados por el INSST⁴⁸⁴. Asimismo, se toma

483. KAWULICH, B.B., op.cit. pág. 30.

484. BESTRATÉN BELLÓVÍ, *Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Metodología práctica*, INSST, Barcelona, 2004, pág. 8.

como referencia la clasificación de los riesgos ofrecida por el INSST, que a continuación se expone.

Tabla 8. Clasificación de los riesgos. Fuente INSST. Elaboración propia.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO		HIGIENE INDUSTRIAL	
010	Caída de personas a distinto nivel	310	Exposición a contaminantes químicos
020	Caída de personas al mismo nivel	320	Exposición a contaminantes biológicos
030	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	330	Ruido
040	Caída de objetos en manipulación	340	Vibraciones
050	Caída de objetos desprendidos	350	Estrés térmico
060	Pisada sobre objetos	360	Radiaciones ionizantes
070	Choques contra objetos inmóviles	370	Radiaciones no ionizantes
080	Choques contra objetos móviles	380	Iluminación
090	Golpes/cortes por objetos o herramientas		
100	Proyección de fragmentos o partículas		
110	Atrapamiento por o entre objetos		
120	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos		
130	Sobreesfuerzos		
140	Exposición a temperaturas ambientales extremas		
150	Contactos térmicos		
161	Contactos eléctricos directos		
162	Contactos eléctricos indirectos		
170	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas		
180	Contactos con sustancias caústicas y/o corrosivas		
190	Exposición a radiaciones		
200	Explosiones		
211	Incendios. Factores de inicio		
212	Incendios. Propagación		
213	Incendios. Medios de lucha		
214	Incendios. Evacuación		
220	Accidentes causados por seres vivos		
230	Atropellos o golpes con vehículos		
		ERGONOMÍA	
		410	Física. Posición
		420	Física. Desplazamiento
		430	Física. Esfuerzo
		440	Física. Manejo de cargas
		450	Mental. Recepción de información
		460	Mental. Tratamiento de la información
		470	Mental. Respuesta
		480	Fatiga crónica

- Fase 3. Normas propias de seguridad

Esta tercera fase tiene como objeto la determinación de publicaciones militares y normas internas del Ejército de Tierra que evalúen los riesgos identificados. En caso de su existencia, se realizará un estudio comparado con las normas preventivas utilizadas en la evaluación de las actividades comunes, para poder concluir si controlan y/o eliminan el riesgo identificado. En caso contrario, se continuará con la siguiente fase.

- Fase 4. Evaluación del riesgo

En el caso de ser infructuosa en la fase anterior la búsqueda de publicaciones militares y normas internas sobre la evaluación de los riesgos, y comprobado que el riesgo observado no es tolerable, se continuará con un proceso que permita conocer el orden de magnitud del riesgo. Para ello, en la cuarta fase se aplicará la metodología de evaluación más adecuada a la tipología del riesgo identificado, según la publicada por el INSST, o en el caso de existir normativa específica según la misma.

Para la evaluación de los riesgos identificados durante la ejecución de las tareas, se han dividido por la tipología general en la que se enmarcan:

- Seguridad en el trabajo o seguridad laboral

La seguridad laboral definida como, *«un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, lesiones, incluidos los efectos agudos producidos por agentes o productos potencialmente peligrosos»*⁴⁸⁵. Los daños y lesiones producidos en el personal militar en el lugar de trabajo, como consecuencia de los accidentes laborales, son resultado de una alteración imprevista que afecta a su integridad física, además de producir la interrupción en las tareas de la actividad de Instrucción, perjudicando su finalidad.

485. Vid. GRAU RÍOS, M., Y MORENO BELTRÁN, D.L., *Seguridad laboral*, 2002. [Consulta:07/04/2018], «http://www.Ffi.nova.es/F2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap04.pd», pág. IV-10.

- Higiene Industrial

La higiene industrial se encarga de estudiar, analizar y evaluar, las relaciones y efectos que producen sobre el trabajador un contaminante, ya sea físico, químico o biológico, detectado en su lugar de trabajo⁴⁸⁶. Los riesgos existentes, producidos por estos contaminantes conducen a la aparición de enfermedades profesionales, como resultado de un deterioro lento y paulatino de la salud del personal militar. Se observan casos en los que la aparición de una enfermedad profesional ocurre incluso después de varios años de estar apartado de la exposición a los contaminantes⁴⁸⁷. Sin embargo, en el cuadro de enfermedades profesionales que figura en el anexo 1 del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, no se hace mención a que las actividades que realiza el personal militar tengan relación alguna con aquellas que son capaces de producirlas.

○ Higiene - Riesgos Físicos - Ruido

Para los riesgos físicos de exposición al ruido, se ha tomado como procedimiento de evaluación específica la Guía del INSST, para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido, como desarrollo del RD 286/2006. Para el cálculo de la atenuación de los protectores

486. Cfr. RUBIO ROMERO, J.C., *Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales*, Ediciones Díaz Santos, S.A., Madrid, 2004, pág. 193.

487. Vid. REGO, F., «La Marina me mata», *El Mundo*, 16 de febrero de 2014. [Consulta:22/10/2018], «<https://www.elmundo.es/cronica/2014/02/16/52ff2482ca4741ca558b456a.html>». El amianto o abesto presente en los buques de guerra de la Armada española, es el causante de los marinos fallecidos por el mesotelioma, un tumor que destruye la pleura

auditivos, se ha utilizado la aplicación informática «Calculador de la atenuación de los protectores auditivos», disponible en el portal de internet del INSST

- Higiene – Riesgos Químicos - Líquidos

Para la evaluación de los riesgos derivados de la exposición a sustancias químicas, se ha seguido el modelo británico *COSHH Essentials*, recomendada por el INSST, basado en la estimación del riesgo potencial por exposición a agentes químicos, de reconocido prestigio en la comunidad científica internacional⁴⁸⁸. El procedimiento de evaluación asigna valores cualitativos a tres variables: peligrosidad, cantidad utilizada por operación y capacidad del agente de pasar al ambiente. A partir de la clasificación de las sustancias químicas en función de las variables citadas, se categorizan las situaciones u operaciones en cuatro grupos, denominados niveles de riesgo potencial creciente. A cada nivel, en correspondencia con la potencialidad del riesgo, se le asignan una serie de medidas preventivas. Esto hace que cuanto mayor sea el riesgo, más alto será su nivel y, por ende, más rigurosas serán sus medidas preventivas. La ventaja de este procedimiento reside en abordar el riesgo de forma global, lo que permite incrementar de manera significativa las medidas preventivas que lo eliminen o reduzcan⁴⁸⁹. Para una mayor facilidad

488. Vid. CAVALLÉ OLLER, N., *NTP 936, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (II). Modelo COSHH Essentials*, INSST, Madrid, 2012, pág.1. «La normativa legal para la prevención del riesgo por exposición a agentes químicos en el Reino Unido se denomina COSHH (Control of Substances Hazardous to Health)».

489. *COSHH Essentials*, establece consejos básicos sobre qué hacer para controlar la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. [Consulta:07/04/2018], «<http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm>».

en la resolución de los cálculos, se ha empleado la aplicación informática «Riskquim. Exposición a agentes químicos. Evaluación cualitativa», disponible en el portal de internet del INSST⁴⁹⁰.

- Ergonomía

La ergonomía está considerada como *«el estudio de los estados intermedios entre bienestar y enfermedad, en función de la carga de trabajo»*⁴⁹¹. Otra definición adoptada de manera oficial por los organismos de normalización, es la expuesta en la norma *«UNE-EN 614-1:2006+A1:2009. Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales. La ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema»*. La citada norma establece los principios fundamentales de la ergonomía, de los que se desprenden los requisitos necesarios para el diseño de sistemas de trabajo y de las máquinas, con la finalidad de aumentar su seguridad. La Asociación Internacional de Ergonomía, la define como: *«la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de la interacción entre los seres humanos y los demás elementos de un sistema, y la disciplina que aplica teoría, principios, datos y otros métodos al diseño para optimizar el bienestar humano y el*

490. Vid. Exposición a agentes químicos. Evaluación cualitativa. [Consulta:07/04/2018], [«http://riskquim.INSST.es/riskquim/cb/»](http://riskquim.INSST.es/riskquim/cb/).

491. Vid. GRANDJEAN, E. *Precis d'Ergonomie*. Instituto de Higiene del Trabajo en Zurich, 1969, Zurich. Citado por RUBIO ROMERO, op.cit. pág. 214.

*funcionamiento general del sistema»*⁴⁹². Cañas Delgado destaca que, mientras en la mayoría de los países en los que está implantada la PRL ésta sólo un ámbito de aplicación de la ergonomía, en España es todo lo contrario, obligando al ergónomo a ser prevencionista y un desconocimiento de la existencia de otros campos de aplicación de la Ergonomía⁴⁹³.

Según la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) abarcan cualquier daño o trastorno que se manifieste en las articulaciones y en otros tejidos. Los TME son definidos por problemas de salud que afectan al aparato locomotor (músculos, tendones, cartílagos, ligamentos, nervios y esqueleto óseo), que pueden afectar a miembros superiores, inferiores e incluso a la espalda, engloban desde lesiones leves hasta discapacitantes, inducidas o agravadas por la actividad laboral, o por las coyunturas en las que se realiza.

De la gran variedad de métodos de los que se dispone en la actualidad para la evaluación de la carga física, se ha seguido el documento y los criterios establecidos por el Grupo de Trabajo de TME, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo⁴⁹⁴. En el

492. Para mayor información sobre la asociación puede consultarse su sitio web «<https://www.iea.cc/>».

493. Vid. CAÑAS DELGADO, J.J., «Evolución de la Ergonomía a lo largo de los 20 años de PRL», 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, *Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC*, Madrid, 2015, págs. 295 a 296.

494. Según información del INSST, el Pleno de la Comisión nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su reunión plenaria del día 21 de junio de 2011, acordó la creación de un Grupo de Trabajo, de carácter temporal, cuyos trabajos se orientarán al análisis de los estudios realizados y de las fuentes de información de las Administraciones Públicas, sobre accidentes de trabajo notificados por sobreesfuerzos; al análisis de las herramientas, métodos y estudios técnicos sobre TME que hayan sido elaborados por los distintos agentes y Administraciones dedicadas a la prevención, con el objetivo de conocer el estado de situación y proponer acciones de mejora, fomentar la coordinación y la cooperación entre las Administraciones Públicas y las entidades privadas. La propuesta de creación de este Grupo tiene su origen en una proposición no de Ley del Congreso de los Diputados. Durante 2014 el grupo finalizó el documento Evaluación de factores de riesgo laboral relacionados con los TME que recoge una relación de métodos y normas que existen en relación a factores de riesgos

documento citado, se aglutinan todos los métodos y normas, en relación a los factores de riesgo asociados al trabajo repetitivo, manipulación manual de cargas, posturas forzadas y a la aplicación de fuerza⁴⁹⁵, dejando a elección del especialista de prevención, la selección del más adecuado, del que se ajuste a las características de las concretas tareas evaluadas.

En consecuencia, se han seleccionado los siguientes métodos a aplicar para los diferentes riesgos, en función de la sencillez de su metodología:

- Posturas forzadas

El método REBA (*Rapid Entire Body Assessment*)⁴⁹⁶, según la NTP 601 del INSST, permite evaluar y estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados con el trabajo, basándose en el análisis de las posturas adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas⁴⁹⁷. Además, define la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador; es aplicable a cualquier sector o actividad laboral, teniendo en cuenta las posturas estáticas y las dinámicas. Como instrumento de cálculo

asociados a trabajos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas y aplicación de fuerza. Durante el año 2015 el Grupo presentó una propuesta de adecuación del mandato del Grupo de TME, así como un documento sobre "Métodos de evaluación de factores de riesgo laboral relacionados con los TME", cuyo objetivo es que sirva a los técnicos de prevención en la elección del método de evaluación que se ajuste mejor a las condiciones de trabajo existentes. A lo largo de este año también presentó un documento sobre "Recursos documentales disponibles sobre TME" y ha trabajado en el diagnóstico de la situación. En 2016 el Grupo alcanzó un consenso en cuanto al documento Diagnóstico de situación y problemática asociada a los TME. Asimismo, y en cumplimiento de la ampliación del mandato del grupo aprobada en julio de 2015, como consecuencia de las prioridades recogidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre TME, se trabajó en la definición de objetivos y líneas de actuación de un plan de acción para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos, se toma como referencia el diagnóstico mencionado.

495. Vid. Art. 5, apartados 2º y 3º del RSP

496. Vid. NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (*Rapid Entire Body Assessment*). [Consulta: 09/04/2019], «http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_601.pdf»

497. Vid. NOGAREDA CUIXART, S., *NTP 601. Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (*Rapid Entire Body Assessment*)*, INSST, Madrid, 2003.

se ha utilizado la aplicación informática «REBA. Análisis de posturas forzadas», disponible en la página de internet del INSST, que permite estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados con el trabajo. Los resultados obtenidos se basan en el análisis de las posturas adoptadas por las extremidades inferiores (piernas), extremidades superiores (brazos, antebrazos y muñecas), cuello y tronco.

- Manipulación manual de cargas

Para su evaluación se han seguido las directrices de la Guía Técnica del INSST, para la evaluación de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas (RD 487/1997). Como instrumento de cálculo se ha utilizado la aplicación informática, «Manipulación manual de cargas: valores límite en operaciones de empuje, arrastre y transporte», disponible en la página web del INSST, cuya evaluación se efectúa por el levantamiento de la carga estableciéndose los resultados máximos en el transporte de una carga, para hombres y mujeres⁴⁹⁸.

- Fase 5. Discriminación del tipo de riesgo

Una vez conocido el orden de magnitud del riesgo, en la quinta fase se discrimina entre su carácter no tolerable o tolerable. En este último caso, se asume que el riesgo no causa daños, dando por finalizado el proceso de

498. Los resultados se basan en los estudios de Snook y Ciriello, que permiten establecer valores límites recomendados para el empuje, arrastre, levantamiento y descenso de cargas, en función de unas variables, sexo, altura de las manos, distancia recorrida, frecuencia y percentil de la población. [Consulta: 09/04/2019], «http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/SyC_ISO%2011228.pdf».

evaluación. En el caso de considerarse un riesgo no tolerable, se continua con el proceso de evaluación.

- Fase 6. Medidas preventivas

En la sexta fase se han desarrollado las medidas preventivas oportunas, que permitan anticiparse a los posibles sucesos imprevistos una vez que han sido identificados y analizados los riesgos.

- Fase 7. Impacto de las medidas preventivas en el desarrollo de la tarea

Se examinan las probables injerencias de las medidas preventivas adoptadas que puedan perjudicar al desarrollo de la tarea y, por ende, a su actividad. En el caso de observarse alguna, se adaptan para que no se interpongan a la finalidad de la actividad de Instrucción.

- Fase 8. Propuesta de medidas preventivas

Llegados a la octava y última fase, las medidas preventivas adoptadas, se elevan a la cadena de Mando, para su oportuna propuesta de integración e implementación en PMET, y en las demás normas que se hayan dictado con anterioridad a la evaluación del riesgo. Una vez integradas serán consideradas como normas propias de seguridad para la actividad de Instrucción individual, que en conjunto con las normas para las actividades de Adiestramiento y Operativas, constituirán el plan de prevención de riesgos laborales para estas actividades, dando así cumplimiento al art. 6.4 del RDPRLFAS.

9.1.1. Fase 1. Descripción de las tareas

Tarea de Orden Cerrado

La PMET PG-00, define el Orden Cerrado, como aquel que adopta una formación con sus fracciones formadas en línea o columna, con distancias normales o reducidas. En sus movimientos y evoluciones se observará, por lo general, el compás del paso y se exigirá exactitud, marcialidad y corrección máximas hasta en sus pequeños detalles. Estas características particulares, fomentarán la disciplina, la solidaridad y el espíritu de equipo, su finalidad será participar en formaciones y ceremonias militares en las que se exterioricen las virtudes militares citadas.

La tarea de Orden Cerrado comprende la Instrucción individual y la de las Unidades. Se selecciona la primera, por ser aquella en la que se realizan movimientos individuales, con o sin armas, integrado o no en su Unidad, lo que permitirá realizar análisis de riesgos con carácter individual, cuyos resultados podrán extrapolarse a la segunda.

El éxito del aprendizaje de esta Instrucción, culminará con el solemne acto de ceremonia de Jura de Bandera. En la misma el aspirante a militar profesional demostrará de forma pública su disciplina como factor de cohesión en la ejecución de los movimientos de forma coordinada con la Unidad en la que esté encuadrado, lo que realzará el objeto del acto. El aprendizaje de la Instrucción de Orden Cerrado, se basa en cuatro elementos: la enseñanza, la ejecución, la corrección y la reiteración de los movimientos. La mayor parte del tiempo invertido lo acopiará la ejecución, pues no puede obviarse que el aspirante a

militar profesional debe adaptarse a la realización de movimientos coordinados que posiblemente nunca haya realizado y en ocasiones tendrá dificultad en su asimilación. Ese problema se solventará con la continua repetición hasta conseguir una ejecución de movimientos de forma natural.

De igual forma, el análisis de la Instrucción evaluada en su origen, beneficiará durante toda la carrera del militar al tener éste que participar, en virtud de lo expuesto en el art. 416 del RD 2945/1983, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, en las principales ceremonias militares que se realizarán con motivo de los actos del juramento y honores a la bandera de España y su entrega a Unidades; paradas y desfiles, honores a las autoridades; tomas de posesión de mando, entrega de despachos, títulos o diplomas e imposición de condecoraciones; honras fúnebres y homenaje a los que dieron su vida por la Patria; festividades de los Santos Patronos y otras conmemoraciones relevantes de carácter nacional o castrense. A continuación, se describen los movimientos de Orden Cerrado a ejecutar por los alumnos⁴⁹⁹.

Los movimientos que se realizan en esta tarea se dividen en dos grupos: a pie firmes con armas o sin armas y marchando con armas o sin armas. En el primero se parte de la posición de firmes y a partir de ella se efectúan giros sobre su propio eje, izquierda, derecha y media vuelta o se pasa a la posición de descanso. El grado de complejidad de estos movimientos aumenta con la adición del arma a la posición de firmes, se añade el peso del arma y los movimientos hasta su situación final. Con la finalidad de conocer la exactitud de la ejecución

499. Extraídas de LA PMET PG-00 Orden Cerrado y en consonancia con lo exigido en su plan de estudios.

de estos movimientos y cómo pueden incidir en la seguridad y salud del militar se describe a continuación, a modo de ejemplo, minuciosamente la ejecución del movimiento firmes extraída de la publicación militar PG-00 Orden Cerrado, por ser esta posición estática de bipedestación prolongada en la militar puede permanecer, dependiendo del acto militar, hasta cincuenta minutos sin variar a otra posición: *«esta posición consiste en hallarse bien cuadrado al frente, observando para ello los principios siguientes: los talones estarán alineados y unidos, siempre que lo permita la morfología de la persona; las puntas de los pies, simétricamente abiertas, para que éstos formen un ángulo de unos cuarenta y cinco grados; las piernas, estiradas, sin doblar las rodillas; el peso del cuerpo, bien aplomado sobre las caderas; el pecho, ligeramente adelantado, evitando sacar el vientre; los hombros, retrasados y a la misma altura; los brazos, naturalmente caídos, sin unir los codos al cuerpo ni arquearlos en demasía; las manos, entreabiertas, con las palmas hacia adentro, tocando con la punta del dedo índice la costura del pantalón o sitio análogo; los dedos, semiflexionados y unidos, salvo el pulgar, que estará naturalmente extendido, estableciéndose un ligero contacto entre las yemas de éste y del índice; la cabeza, derecha, con la barbilla recogida y la vista al frente»*. En la descripción del movimiento se observa la disciplina en su ejecución que provoca la modificación de la higiene postural estática del militar y que favorece a la aparición de lesiones en huesos, ligamentos, articulaciones, músculos, tendones, vasos sanguíneos o nervios principalmente.

En el segundo grupo de los movimientos se parte de la posición de firmes con el arma en la posición de al brazo, sobre el hombro o sobre el hombro

derecho para iniciar el desfile, en la que el militar tendrá que marchar con su formación al tipo de paso ordinario, ligero o lento y a la cadencia y ritmo de pasos que se le marque.

Tabla 9. Detalle de la frecuencia de los distintos pasos sin armas. Fuente: PMET PG-00, pág.3-1. Elaboración propia.

Tipo de paso	Pasos por minuto	Longitud (cm)
Ordinario	124	75
Ligero	180	80
Lento	60	50

Las cifras que figuran en el siguiente cuadro son valores medios calculados sobre terreno llano y compacto, que pueden variar ligeramente en función de la naturaleza del suelo y su pendiente.

Tarea de armamento individual

La tarea de armamento individual viene definida en el capítulo 3, de la PMET MI-001 Tareas Individuales Comunes. Nivel I, que a su vez se divide en tareas que abarcan los conocimientos mínimos sobre armamento, municiones, equipos y materiales de dotación individual reglamentarios, que todo aspirante a militar profesional debe conocer. La primera tarea, de todas ellas la más importante, es la del conocimiento de su armamento individual, el Fusil de Asalto (FUSA)⁵⁰⁰, la denominada Instrucción Técnica y sobre ella se centrará la evaluación. Para el conocimiento del FUSA como arma del combatiente, su enseñanza se divide en dos fases:

500. El FUSA adoptado por el Ejército de Tierra, es el Heckler & Koch, modelo G36-E, fue creado según los requisitos del Ejército Federal Alemán, para ser utilizado como arma de infantería ligera, óptimo en el combate cuerpo a cuerpo, en su manejo, como en la densidad de fuego. Las características técnicas según el fabricante (<https://www.heckler-koch.com/en/products/military/assault-rifles/g36/g36/technical-data.html>), son las siguientes: calibre 5,56mmx45 OTAN, cadencia de disparo por minuto 750, longitud mínima (culatín plegado) 755mm, longitud máxima (sin machete) 1002mm, peso del arma (sin cargador) 3630 gr., peso del cargador 140 gr.

La primera fase corresponde al entrenamiento del desarmado y armado de sus piezas siguiendo un orden estándar⁵⁰¹. Para agilizar el proceso el aspirante deberá superarlo en los tiempos máximos indicados y en condiciones de baja visibilidad, ello contribuirá al conocimiento de las piezas prescindiendo del sentido de la vista, guiándose solo por el tacto. Ello le permitirá subsanar todas las interrupciones durante el tiro en la ejecución de misiones, de forma eficaz y en condiciones adversas.

La segunda fase se basa en el mantenimiento del FUSA. La limpieza y aceitado son garantía de un funcionamiento correcto del arma. Esta deberá realizarse por el aspirante de forma periódica y obligatoriamente después del tiro, limpiando todas las piezas expuestas a los gases de la pólvora y aplicando aceites autorizados. En caso de almacenamiento a corto o largo plazo, se procederá al engrase.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

Asimilados los conocimientos básicos del FUSA, durante el periodo de Formación General Militar el aspirante a militar profesional afronta un nuevo objetivo, la ejecución del tiro. Para ello recibirá previamente los conceptos sobre la teoría del tiro y su instrucción preparatoria, lo que le permitirá disponer de la aptitud necesaria para aplicarla mediante los ejercicios de Instrucción Básica inicial, que una vez superados le permitirán progresar con otros ejercicios que le

501. Vid. MI-001. *Tareas Individuales comunes. Nivel I*, Madrid, 2015, pág. F-1 «El desarmado del fusil puede ser parcial o de campaña y total. El desarmado parcial es para la limpieza, engrase o sustitución de alguna pieza defectuosa, siendo el único que puede realizar el combatiente. El desarmado total sólo será realizado por especialistas.».

harán más eficaz, aumentando su confianza y elevando su moral de combate. Una vez finalizadas, su formación tanto general como específica, podrá incorporarse a la Unidad de destino con un conocimiento y manejo de su arma con seguridad.

Esta evaluación de los riesgos que pueden materializarse, se centrará sobre el tiro de formación de la Instrucción Básica Inicial, cuya descripción se refleja en el MI6-001, que a continuación se resume. Los ejercicios del tiro de instrucción básica inicial se basan en el que el tirador adopte las distintas posiciones con el arma para efectuar el disparo, prescindiendo de los elementos de su equipo de combate que puedan molestarle en la ejecución y sin mermarse las medidas de seguridad. Desde diferentes distancias, de menor a mayor, el tirador realizará tandas de cinco disparos sobre blancos de diferentes diámetros, utilizando para ello las modalidades de tiro semiautomático y automático (en el este último realizará doce disparos), hasta completar nueve ejercicios que se ejecutaran en sesiones repartidas durante la Formación General Militar.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

La Instrucción táctica individual o Instrucción de combate es una de las tareas más importante de las capacidades que debe adquirir el aspirante a militar profesional durante su periodo de Formación General Militar. En ella se le instruirá sobre las diferentes habilidades y destrezas, que le permitan conocer las técnicas elementales del combate individual para poder combatir en un ambiente hostil dentro del marco de las operaciones bélicas, especialmente las basadas en el movimiento rápido y de gran radio de acción.

Para usar correctamente los procedimientos de utilización del terreno para su protección personal, se deberán conocer las técnicas de orientación con medios expeditos, así como el uso de la brújula y el plano. El aspirante portará su armamento y el equipo de combate, necesario para combatir, cargadores: munición, ración de previsión, útiles de supervivencia y demás material complementario, lo que supondrá un peso extra asumir.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

La finalidad perseguida por esta tarea es obtener por el aspirante a militar profesional, la formación sanitaria suficiente que le permita intervenir y afrontar situaciones tácticas en ambientes hostiles, en las que tenga que atender a los heridos en combate con eficacia, teniendo que proceder a examinar y evaluar su gravedad y posteriormente proceder a su evacuación. De las acciones mencionadas, la evacuación del combatiente herido efectuada de forma individual se considera de interés para la evaluación de los riesgos a los que se puede estar expuesto. El aspirante tendrá que enfrentarse no sólo al transporte de un herido, sino además cargar con su armamento y equipo. Los sobreesfuerzos y la manipulación manual de cargas que superan los límites permitidos en la normativa aplicada a las actividades comunes, podrán desencadenar la aparición de lesiones en el aspirante.

En el transporte de forma individual, sin la ayuda de compañero, el aspirante utiliza su propia fuerza para el transporte del herido, sin ayudarse de medio adicional o mecánico alguno, en el MI-001 se describen cinco métodos reflejados en la siguiente gráfica: del bombero (para transportar a un herido

inconsciente o con heridas graves); del cinturón (muy útil cuando hay que recorrer una gran distancia); de recogida de apoyo (para el caso de que el herido pueda caminar o, al menos, sostenerse sobre una pierna); de transporte en brazos (para distancias cortas, pero no emplear en caso de fractura de piernas o de lesión en la columna vertebral) y de transporte a caballo (para bajas que conserven el conocimiento y no estén muy debilitadas).

Gráfico 11. Métodos de transporte heridos, bombero y cinturón. Fuente: Ejército de Tierra, España, MADOC MI-001. Tareas Individuales comunes. Nivel I, Madrid, 2015, pág. 1-7.

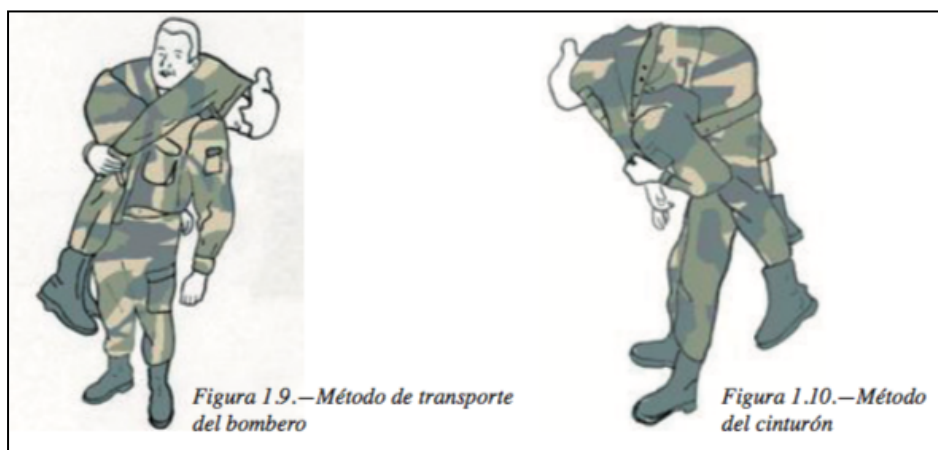
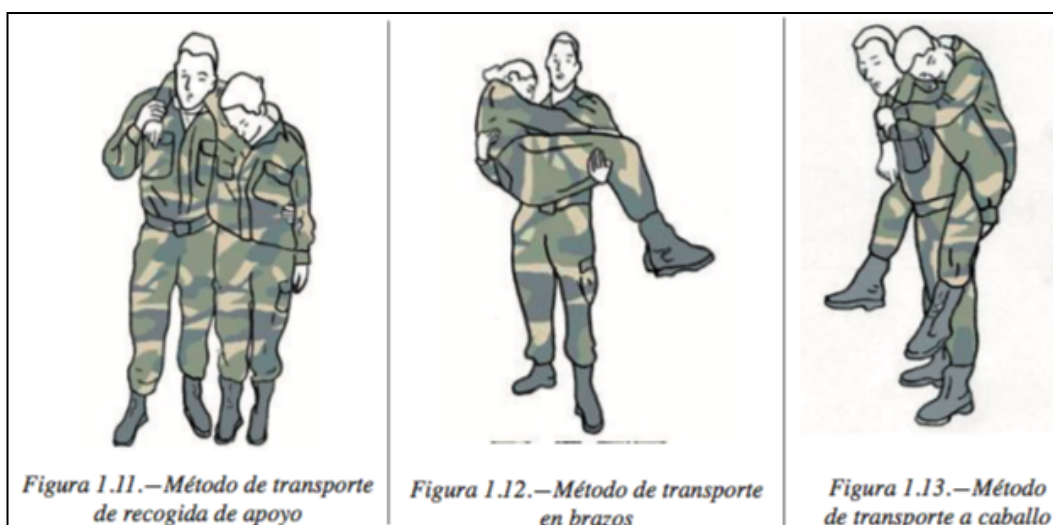


Gráfico 12. Métodos de transporte heridos, recogida de apoyo, en brazos y transporte a caballo. Fuente: Ejército de Tierra, España, MADOC. MI-001. Tareas Individuales comunes. Nivel I, Madrid, 2015, pág. 1-8.



Se considera que la efectividad de este tipo de transporte es limitada y recomendada para cortas distancias, debido a la incapacidad que algunas ocasiones mostrará el combatiente para evacuar al herido y a la vez utilizar su arma como defensa ante el fuego hostil⁵⁰². Por ello resulta de interés aplicar la metodología TME sobre los citados métodos, que permitirá identificar los riesgos a los que está expuesto el aspirante durante su formación en esta tarea.

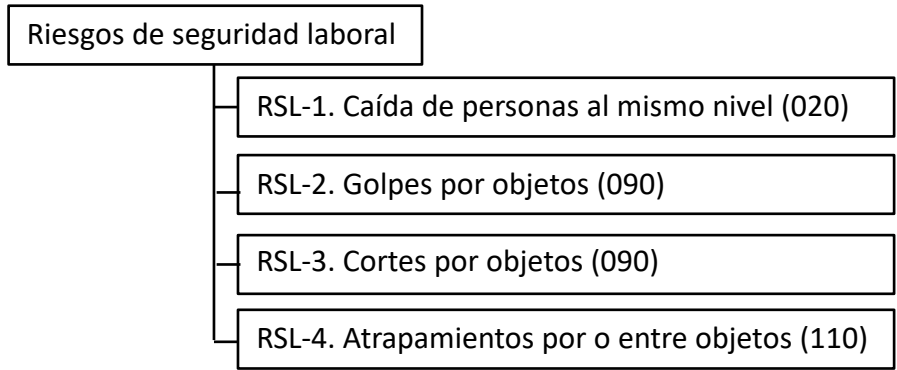
9.1.2. Fase 2. Análisis de los riesgos

Tarea de Orden Cerrado

De los movimientos individuales en la tarea de Orden Cerrado descritos en la publicación de referencia se observan los siguientes riesgos:

Riesgos de seguridad laboral:

Tabla 10. Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Orden Cerrado. Fuente elaboración propia.



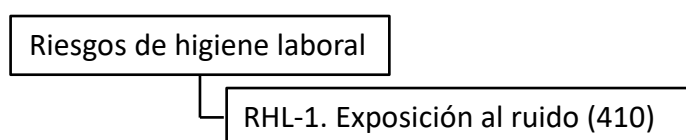
RSL-1. Caída de personas al mismo nivel (020), debido a superficies irregulares del terreno donde se realizan los movimientos a pie firme o marchando y a la utilización de distinto tipo de calzado (botas de instrucción de la uniformidad de campaña o zapatos negros de cordones del uniforme de gala o para actos de especial relevancia), cuya suela no se adapta a las

502. Vid. Ministerio de Defensa. *Manual de soporte vital avanzado en combate*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014, pág. 716.

características del terreno. RSL-2. Golpes por objetos (090), producidos al efectuar los distintos movimientos con armas. RSL-3. Cortes por objetos (090), al efectuar el movimiento con el machete de armar y envainar el cuchillo bayoneta en el arma. RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (110), al efectuar el movimiento de cargar el arma con la palanca de armar.

Riesgos de higiene laboral:

Tabla 11. Análisis de los riesgos de higiene laboral en la tarea de Orden Cerrado. Fuente elaboración propia.



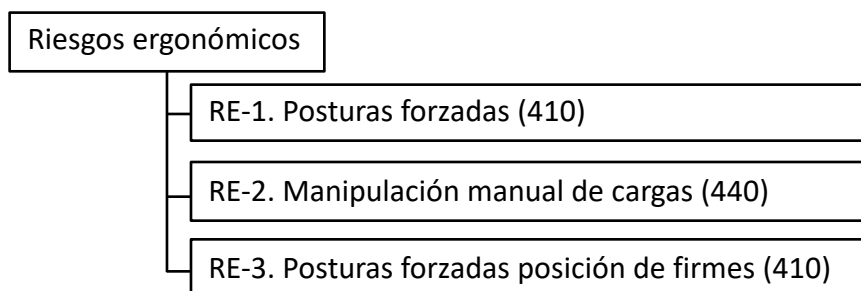
Para la identificación de los riesgos de higiene laboral se ha empleado como referencia el cuestionario del INSST «*Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico*», con las oportunas adaptaciones a la tarea de ejecución del tiro⁵⁰³. RH-1. Exposición al ruido (330)», por superar los valores límites de exposición al ruido L_{pico} , al efectuar las salvas de honores durante el acto a los caídos. En el momento del disparo se produce en primer lugar la explosión de la cápsula iniciadora que inicia una transmisión de la cadena de fuego a la pólvora que se encuentra en la vaina del cartucho, deflagrando esta y provocando una detonación. Tanto la explosión como la deflagración del disparo, superan niveles límites de exposición de ruido⁵⁰⁴.

503. Cuestionarios de ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico. [Consulta: 07/04/2019], «<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/naranja.pdf>». Cfr. GÓMEZ-CANO ALFARO, M., *Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico*, INBSST, Madrid, 2007.

504. Los valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: a) Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C), respectivamente. Vid. Art. 5 del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Riesgos ergonómicos:

Tabla 12. Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de Orden Cerrado. Fuente elaboración propia.



RE-1. Posturas forzadas (410), al adoptar posturas por los miembros superiores del cuerpo, tronco, cuello y piernas, durante los movimientos de armas. RE-2. Manipulación manual de cargas (440), el peso del fusil puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable al ejecutar los movimientos de armas, ya que interviene el esfuerzo humano de forma directa e indirecta, al mantenerlo alzado y sujeto con las manos y otras partes del cuerpo⁵⁰⁵. RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410), al permanecer en la posición militar de firmes, durante tiempo prolongado en las formaciones militares. Esta posición es conocida en el ámbito de la ergonomía, como bipedestación prolongada estática.

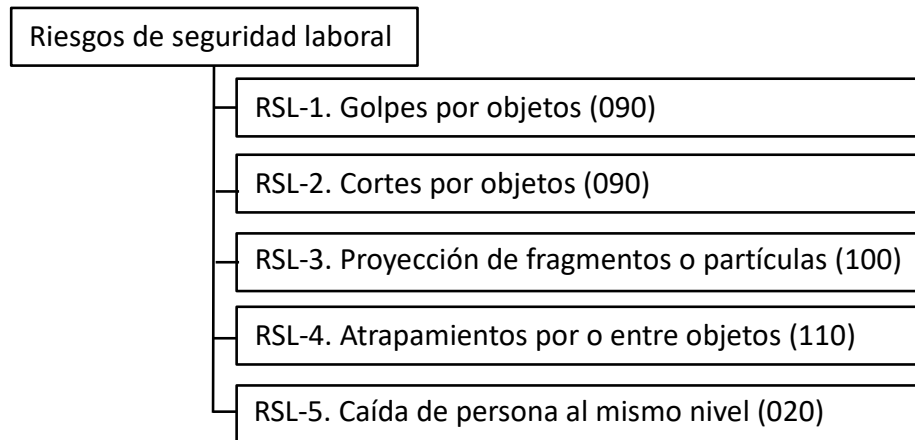
Tarea de armamento individual

Durante la ejecución del desarmado, armado, mantenimiento y engrase del armamento individual, se observan los siguientes riesgos:

505. Según la guía del INSST, el peso mínimo establecido para considerar que se realiza una manipulación manual de cargas es de 3 kg. Por lo tanto, el fusil de asalto (FUSA) HK-G36E reglamentario en el Ejército de Tierra y utilizado por los aspirantes a militares profesionales, al tener un peso sin cargador de 3,630 Kg. Se considera como manipulación manual de cargas. Vid. Guía del INSST, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, como desarrollo del RD 487/1997, de 14 de abril.

Riesgos de seguridad laboral:

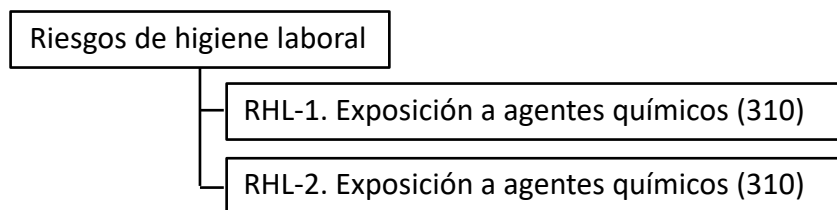
Tabla 13. Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de armamento individual.
Fuente elaboración propia.



RSL-1. Golpes por objetos (090) y RSL-2. Cortes por objetos (090), durante el desarmado y/o armado de las piezas del arma y del cuchillo bayoneta, al contacto con superficies con filo, (algunas piezas del arma están fabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio). RSL-3. Proyección de fragmentos o partículas (100), durante las operaciones de mantenimiento y limpieza del arma. RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (110), durante las operaciones de desarmado y/o armado del arma. RSL-5. Caídas de personas al mismo nivel (020), provocadas por derrames de aceites y grasas durante las tareas de mantenimiento y limpieza del FUSA.

Riesgos de higiene laboral:

Tabla 14. Análisis de los riesgos de higiene laboral en la tarea de armamento individual. Fuente elaboración propia.



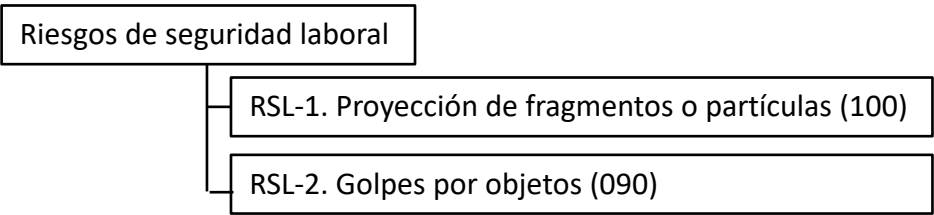
RHL-1. Exposición a agentes químicos (310), durante la tarea de mantenimiento, lubricación, limpieza y protección del arma. RHL-2. Exposición a agentes químicos (310), al realizar la tarea de mantenimiento, de engrase del arma, para el almacenamiento a corto/largo plazo.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

Durante la ejecución de los ejercicios de tiro programados en la Instrucción básica inicial, se observan los siguientes riesgos:

Riesgos de seguridad laboral:

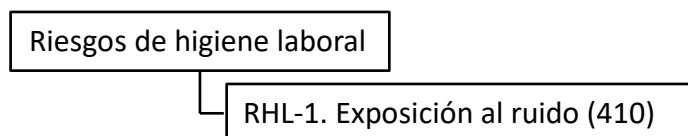
Tabla 15. Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de tiro individual. Fuente elaboración propia.



RSL-1. Proyección de fragmentos y/o partículas (100), durante la ejecución del tiro con el arma reglamentaria, el proyectil impulsado por los gases de la deflagración de la pólvora, abandona el arma por la boca de fuego desprendiendo los gases de empuje y partículas. RSL-2. Golpes por objetos (090), al adoptar el tirador las diferentes posiciones al ejecutar los ejercicios de tiro.

Riesgos de higiene laboral:

Tabla 16. Análisis de los riesgos de higiene laboral en la tarea de tiro individual. Fuente elaboración propia.



Para la identificación de los riesgos se ha empleado como referencia el cuestionario del INSST «*Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico*»⁵⁰⁶, con las oportunas adaptaciones a la tarea de ejecución del tiro. RHL-1. Exposición al ruido (330), durante la ejecución de los ejercicios de tiro con el arma reglamentaria, se produce en primer lugar la explosión de la cápsula iniciadora que transmite la cadena de fuego a la pólvora que se encuentra en la vaina del cartucho, deflagrando esta y provocando en su interior un aumento de la presión, que desengarzará el proyectil de su vaina, iniciando una velocidad a través del ánima hasta abandonar el arma por la boca de fuego. Tanto la explosión como la deflagración del disparo, superan los niveles límites de exposición de ruido⁵⁰⁷.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

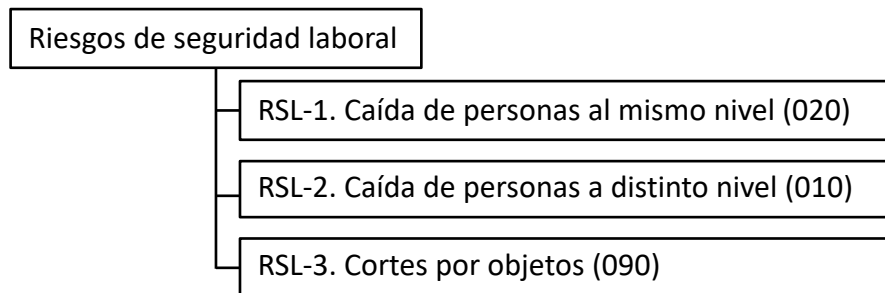
Durante la ejecución de la tarea de Instrucción táctica individual del combatiente y orientación básica, se observan los siguientes riesgos:

506. Cuestionarios de ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico. [Consulta: 07/04/2019], «<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/naranja.pdf>».

507. Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: a) Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 dB (C), respectivamente. Vid. Art. 5, RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Riesgos de seguridad laboral:

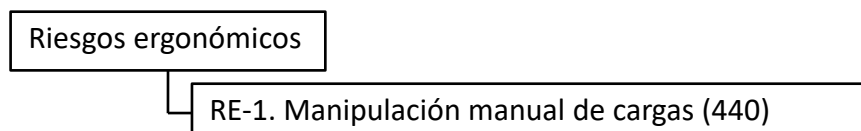
Tabla 17. Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de instrucción táctica individual. Fuente elaboración propia.



RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020) y RSL-2. Caídas de personas a distinto nivel (010). El avance y la progresión táctica del combatiente por terreno irregular, puede provocar caídas originadas por tropiezos y enganches con la vegetación, unido a que el peso de su armamento y equipo de combate genera una disminución de la estabilidad postural. RSL-3. Golpes por objetos (090), el desajuste del armamento y del equipo de combate, producido por el avance y progresión táctica, mediante saltos, puede generar golpes accidentales.

Riesgos ergonómicos:

Tabla 18. Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de instrucción táctica individual. Fuente elaboración propia.



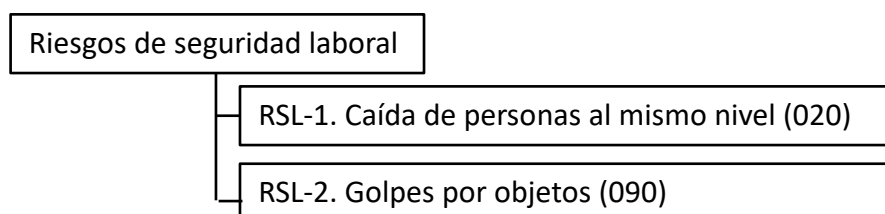
RE-1. Manipulación manual de cargas (440). Durante la ejecución de la tarea se observan riesgos ergonómicos producidos al transportar el armamento individual y el equipo de combate.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

De las prácticas de primeros auxilios y transportes de heridos descritos anteriormente se observan los siguientes riesgos:

Riesgos de Seguridad Laboral:

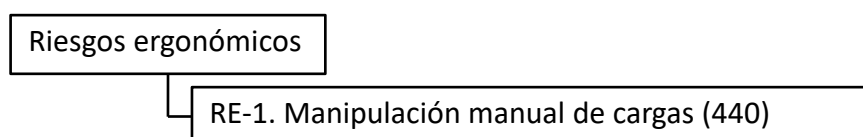
Tabla 19. Análisis de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de primeros auxilios. Fuente elaboración propia.



RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020), debido a superficies irregulares del terreno en el que se realiza la evacuación, el riesgo se ve incrementado a causa de la inestabilidad, al soportar el peso del evacuado. RSL-2. Golpes por objetos (090), producidos con partes del cuerpo del evacuado.

Riesgos Ergonómicos

Tabla 20. Análisis de los riesgos ergonómicos en la tarea de primeros auxilios. Fuente elaboración propia.



RE-1. Manipulación manual de cargas (440), al arrastrar, levantar y cargar el peso del combatiente herido.

9.1.3. Fase 3. Normas propias de seguridad

Revisada la publicación de referencia, no se encuentra alusión alguna a la observación y detección y, por ende, a la evaluación de riesgos previa a la realización de las tareas descritas en la fase uno. Tan sólo en la tarea de armamento individual se expresa la tajante prohibición de que durante estas operaciones el arma este municionada, alimentada y/o cargada. Y en la tarea de prácticas de tiro con armamento individual se observa en las normas de los Campos de Maniobras y Tiro, emitidas por la Jefatura de Apoyo a la Preparación, la obligatoriedad del uso de protectores auditivos y gafas de protección balística. Por lo tanto, se puede concluir que en estas tareas correspondientes a la actividad de instrucción individual no existen normas propias de seguridad que eliminen o reduzcan la mayoría de los riesgos descritos.

9.1.4. Fase 4. Evaluación de los riesgos

a) Evaluación de los riesgos de seguridad laboral

Para el análisis y evaluación de los riesgos de seguridad laboral, se ha utilizado el sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, del INSST, descrito en la Nota Técnica Preventiva (NTP) 330⁵⁰⁸. Esta metodología, utilizada por los SVPR del Ejército de Tierra para la evaluación de riesgos laborales de las actividades comunes, permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección.

508. Vid. NTP 330 NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. [Consulta:20/01/2019].
«http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_330.pdf»

Tarea de Orden Cerrado

Tabla 21. Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Orden Cerrado. Fuente elaboración propia.

IDENTIFICACIÓN	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			NIVEL CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO	NIVEL INTERVENCIÓN
			ND	NE	NP			
RSL-1	CAÍDAS O TROPIEZOS, PRODUCIDOS POR SUPERFICIES IRREGULARES DEL TERRENO DONDE SE REALIZAN LOS MOVIMIENTOS A PIE FIRME O MARCHANDO.	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (020)	2	3	6	10	60	III
	CAÍDAS O TROPIEZOS PRODUCIDOS POR LA UTILIZACIÓN DE DISTINTO TIPO DE CALZADO (BOTAS DE INSTRUCCIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE CAMPAÑA O ZAPATOS NEGROS DE CORDONES DEL UNIFORME DE GALA O PARA ACTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA), CUYA SUELA NO SE ADAPTA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (020)	2	3	6	10	60	III
RSL-2	GOLPES PRODUCIDOS AL EFECTUAR LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS CON EL ARMA.	GOLPES POR OBJETOS (090)	2	3	6	10	60	III
RSL-3	CORTES PRODUCIDOS AL EFECTUAR EL MOVIMIENTO DE ARMAR Y ENVAINAR EL CUCHILLO BAYONETA	CORTES POR OBJETOS (090)	2	3	6	25	150	II
RSL4	PRODUCIDOS AL EFECTUAR EL MOVIMIENTO DE "CARGAR EL ARMA" CON LA PALANCA DE ARMAR.	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS (110)	2	3	6	10	60	III

El nivel de deficiencia (ND) en los cuatros riesgos detectados es mejorable lo que permite establecer que riesgos de menor importancia. De igual forma los riesgos coinciden en el nivel de exposición (NE) por observarse que la aparición del mismo es frecuente en su jornada laboral. Al coincidir los niveles anteriores el resultado del producto del ND por el NE arroja el mismo nivel de probabilidad media (NP) en todos, por lo que nos encontramos ante una situación mejorable con exposición continuada o frecuente. No obstante, el nivel de consecuencias es diferente, para los riesgos RSL-1, 2 y 4, en ellos se observan pequeñas lesiones que no requieren hospitalización, en el riesgo RSL-3 este nivel aumenta y las consecuencias muestran lesiones con incapacidad laboral transitoria. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del NP por el nivel de consecuencias, a partir de él nos permite hallar el nivel de intervención, su resultado encuadra a los riesgos RSL-1, 2 y 4 en el nivel III de intervención lo

que nos otorga la posibilidad de mejorarlos. Para el riesgo RSL-3 el nivel de intervención II, nos obliga a corregirlo y a adoptar medidas de control.

Tarea de armamento individual

Tabla 22. Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de Armamento individual. Fuente elaboración propia

IDENTIFICACIÓN	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			NIVEL CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO	NIVEL INTERVENCIÓN
			ND	NE	NP			
RSL-1	GOLPES PRODUCIDOS DURANTE EL DESARMADO Y/O ARMADO DE LAS PIEZAS DEL FUSA.	GOLPES POR OBJETOS (090)	2	3	6	10	60	III
RSL-2	CORTES PRODUCIDOS DURANTE EL DESARMADO Y/O ARMADO DE LAS PIEZAS DEL FUSA, AL CONTACTO CON SUPERFICIES CON FILO. (ALGUNAS PIEZAS DEL ARMA ESTÁN FABRICADAS CON PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO).	CORTES POR OBJETOS (090)	2	3	6	25	150	II
RSL-3	DURANTE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARMA.	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS Y/O PARTÍCULAS (100)	2	3	6	25	150	II
RSL-4	PRODUCIDA CON LAS PIEZAS MÓVILES DEL FUSA, DURANTE LAS OPERACIONES DE DESARMADO Y/O ARMADO.	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS (110)	2	3	6	10	60	III
RSL-5	PROVOCADAS POR DERRAMES DE ACEITES Y GRASAS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL FUSA.	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (020)	2	3	6	25	150	II

El nivel de deficiencia (ND) en los cuatros riesgos detectados es mejorable lo que permite establecer que riesgos de menor importancia. De igual forma los riesgos coinciden en el nivel de exposición (NE) por observarse que la aparición del mismo es frecuente en su jornada laboral. Al coincidir los niveles anteriores el resultado del producto del ND por el NE arroja el mismo nivel de probabilidad media (NP) en todos, por lo que nos encontramos ante una situación mejorable con exposición continuada o frecuente. No obstante, el nivel de consecuencias es diferente, para los riesgos RSL-1 y 4, en ellos se observan pequeñas lesiones que no requieren hospitalización, en los riesgos RSL-2, 3 y 5, este nivel aumenta y las consecuencias muestran lesiones con incapacidad laboral transitoria. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del NP por el nivel de

consecuencias, a partir de él nos permite hallar el nivel de intervención, su resultado encuadra a los riesgos RSL-1 y 4 en el nivel III de intervención lo que nos otorga la posibilidad de mejorarlos. Para los riesgos RSL-2, 3 y 5 el nivel de intervención II, nos obliga a corregirlo y a adoptar medidas de control.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

Tabla 23. Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de prácticas de tiro individual. Fuente elaboración propia

IDENTIFICACIÓN	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			NIVEL CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO	NIVEL INTERVENCIÓN
			ND	NE	NP			
RSL-1	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TIRO CON EL ARMA REGLAMENTARIA, EL PROYECTIL IMPULSADO POR LOS GASES DE LA DEFLAGRACIÓN DE LA PÓLVORA, ABANDONA EL ARMA POR LA BOCA DE FUEGO DESPRENDIENDO LOS GASES DE EMPUJE Y PARTÍCULAS.	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS Y/O PARTÍCULAS (100)	6	3	18	60	1080	I
RSL-2	AL ADOPTAR EL TIRADOR, LAS DIFERENTES POSICIONES AL EJECUTAR LOS EJERCICIOS DE TIRO	GOLPES POR OBJETOS (090)	2	3	6	25	150	II

El nivel de deficiencia (ND) es diferente en los dos riesgos detectados, mientras en RSL-1 se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa se corregido, en RSL-2 es mejorable lo que permite establecer que riesgos de menor importancia. Los riesgos coinciden en el nivel de exposición (NE) por observarse que la aparición del mismo es frecuente en su jornada laboral. El resultado del producto del ND por el NE arroja nivel de probabilidad (NP) distinto: en el riesgo RSL-1 es alta, por encontrarnos en una ante una situación deficiente y en el riesgo RSL-2 media, por ser una situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Por todo lo anterior, el nivel de consecuencias es diferente, para el riesgo RSL-1 se observan lesiones graves que pueden ser irreparables y para el riesgo RSL-2 las consecuencias muestran lesiones con incapacidad laboral transitoria. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del NP por el nivel de consecuencias, a partir de él nos permite

hallar el nivel de intervención, su resultado encuadra al riesgo RSL-1 en el nivel I de intervención, una situación crítica que requiere una corrección urgente, para el riesgo el nivel de intervención II, nos obliga a corregirlo y a adoptar medidas de control.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

Tabla 24. Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de instrucción táctica individual. Fuente elaboración propia.

IDENTIFICACIÓN	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			NIVEL CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO	NIVEL INTERVENCIÓN
			ND	NE	NP			
RSL-1	CAÍDAS ORIGINADAS POR TROPIEZOS Y ENGANCHES CON LA VEGETACIÓN, AL PROGRESAR POR TERRENO IRREGULAR.	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (020)	2	3	6	10	60	III
RSL-2	CAÍDAS ORIGINADAS POR TROPIEZOS Y ENGANCHES CON LA VEGETACIÓN, AL PROGRESAR POR TERRENO CON DESNIVELES IRREGULARES.	CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL (010)	6	3	18	60	1080	I
RSL-3	GOLPES PRODUCIDOS POR DESAJUSTES DE LA CORREA DE TRANSPORTE DEL ARMAMENTO Y DE SU EQUIPO DE COMBATE, DURANTE EL AVANCE Y PROGRESIÓN TÁCTICA	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS Y/O PARTÍCULAS (100)	2	3	6	10	60	III

El nivel de deficiencia (ND) es diferente en los uno de los tres riesgos detectados, mientras en RSL-1 y 3 se han detectado factores de riesgo de menor importancia, en RSL-2 el factor de riesgo es significativo y precisa ser corregido. Los tres riesgos coinciden en el nivel de exposición (NE) por observarse que la aparición del mismo es frecuente en su jornada laboral. El resultado del producto del ND por el NE arroja nivel de probabilidad (NP) distinto: para los riesgos RSL-1 y 3 es media, por ser una situación mejorable con exposición continuada o frecuente, sin embargo, en el riesgo RSL-2 el nivel es alto por encontrarnos ante una situación deficiente. Por todo lo anterior, el nivel de consecuencias es diferente, para los riesgos RSL-1 y 3 se observan pequeñas lesiones que no requieren hospitalización y para el riesgo RSL-2 lesiones graves que pueden ser irreparables. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del NP por el nivel de consecuencias, a partir de él nos permite hallar el nivel de intervención,

su resultado encuadra al riesgo RSL-1 y 3 en el nivel III de intervención, lo que nos otorga la posibilidad de mejorarlos, para el riesgo RSL-2 un nivel de intervención I, una situación crítica que requiere una corrección urgente.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

Tabla 25. Evaluación de los riesgos de seguridad laboral en la tarea de primeros auxilios y transporte de heridos. Fuente elaboración propia.

IDENTIFICACIÓN	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			NIVEL CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO	NIVEL INTERVENCIÓN
			ND	NE	NP			
RSL-1	CAÍDAS O TROPIEZOS, PRODUCIDOS POR SUPERFICIES IRREGULARES DEL TERRENO DONDE SE REALIZAN LA EVACUACIÓN DEL COMBATIENTE HERIDO.	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (020)	2	3	6	10	60	III
RSL-2	GOLPES PRODUCIDOS AL EFECTUAR LA EVACUACIÓN DEL COMBATIENTE HERIDO, AL CONTACTAR CON PARTES DE SU CUERPO DE FORMA ENÉRGICA.	GOLPES POR OBJETOS (090)	2	3	6	10	60	III

El nivel de deficiencia (ND) en los dos riesgos detectados es mejorable lo que permite establecer que riesgos de menor importancia. De igual forma los riesgos coinciden en el nivel de exposición (NE) por observarse que la aparición del mismo es frecuente en su jornada laboral. Al coincidir los niveles anteriores el resultado del producto del ND por el NE arroja el mismo nivel de probabilidad media (NP) en todos, por lo que nos encontramos ante una situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Existe la misma coincidencia en el nivel de consecuencias, para los riesgos RSL-1 y 2, en ellos se observan pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. El nivel de riesgo viene determinado por el producto del NP por el nivel de consecuencias, a partir de él nos permite hallar el nivel de intervención, su resultado encuadra a los riesgos RSL-1 y 2 en el nivel III de intervención lo que nos otorga la posibilidad de mejorarlos.

b) Evaluación de los riesgos de higiene laboral

Tarea de Orden Cerrado

RH-1. Exposición al ruido (330), para el análisis de los riesgos de exposición de los tiradores al ruido, se medirá el valor de la exposición «Lpico», definido como el nivel máximo de presión acústica alcanzado en decibelios (dB), por considerarse los disparos, ruidos con impactos muy diferenciados y el empleo de una escala de ponderación «C», incorporada al instrumento de medición⁵⁰⁹. El arma y la munición utilizada para la obtención de las muestras de los niveles de presión acústica, son de dotación individual reglamentaria, correspondiendo al FUSA HK-G36E, y la munición calibre 5,56x45 mm, de fogeo. Los disparos se realizaron en la explanada de jura de bandera, al aire libre, durante los ensayos de jura de bandera⁵¹⁰. Los datos se han obtenido con un sonómetro integrador, normalizado por las normas *UNE-EN 61672-1:2014* y *UNE-EN 60804:2002*⁵¹¹. Hay que puntualizar que el rango de medida pico que alcanzan los sonómetros que se comercializan actualmente de uso profesional comprenden normalmente desde los 30 dB hasta los 143 dB, limitación que impide conocer con exactitud cuánto dB superan el valor límite de exposición al ruido (140 dB) pero que nos alerta de su superación. El procedimiento seguido para obtener los resultados se describe a continuación:

509. Vid. Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido, del INSST, pág. 42.

510. El procedimiento se realizará aprovechando los ejercicios programados sin que interfiera en el programa de formación.

511. Según el Anexo III del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, establece en su punto 2. Medición del Nivel de pico (Lpico), que los sonómetros empleados para medir el Nivel de pico o para determinar directamente si se sobrepasan los límites o niveles indicados en el artículo 4 (Lpico=140 dB (C)) deberán disponer de los circuitos específicos adecuados para la medida de valores de pico. Deberán tener una constante de tiempo en el ascenso igual o inferior a 100 microsegundos, o ajustarse a las especificaciones establecidas para este tipo de medición en la norma UNE-EN 61672:2005 o versión posterior de la misma. Nivel de pico, Lpico: es el nivel, en decibelios, dado por la expresión: $L_{pico} = 10 \log \left(\frac{P_{pico}}{P_0} \right)^2$ donde Ppico es el valor máximo de la presión acústica instantánea (en pascales) a que está expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C y Po es la presión de referencia (2·10⁻⁵ pascales).

1. El personal militar encuadrado en su Compañía, dividido en tres Secciones, se encuentra formado. De las tres Secciones, hay una en la que el personal al unísono, ejecutará una descarga de salvas. El número de componentes que la efectúa, fluctúa entre 39 y 45.

2. Colocación del micrófono del sonómetro y medición del ruido:
 - a. En el centro de la Sección, a 10 cms de distancia del oído del tirador, más cercano al arma.
 - b. En el extremo más alejado del centro de la Sección, a 10 cms de distancia del oído del tirador, más cercano al arma.
 - c. En el centro de la Compañía, a 10 cms de distancia del oído del tirador, más cercano al arma.
 - d. En el extremo más alejado del centro de la Compañía, a 10 cms de distancia del oído del tirador, más cercano al arma.

3. Se efectuará una salva de cuarenta y cinco (45) disparos simultáneos, en cada una de las posiciones del micrófono.

Las mediciones arrojaron los siguientes resultados:

Tabla 26. Medición de niveles pico de exposición al ruido. «RH-1. Exposición al ruido (330)».
Fuente elaboración propia.

DISPARO DE SALVAS	
Centro de la Sección	>143 dB
Extremo de la Sección	>143 dB
Centro de la Compañía	>143 dB
Extremo de la Compañía	>143 dB

La onda expansiva generada por la detonación de los cuarenta y cinco disparos aumenta el nivel de decibelios en función de su proximidad llegando a sobrepasar el nivel *Lpico* (143 dB) con creces. Esto hace que lo sufran, tanto aquellos que lo ejecutan (los componentes de la Sección), como el resto de la Compañía (las restantes dos Secciones) que asiste de forma pasiva al momento de las salvas, produciéndose una serie de daños y lesiones auditivas de distintas consideraciones a corto y largo plazo.

Tarea de armamento individual


Riesgos de higiene laboral, en las fichas de seguridad facilitadas por el fabricante del aceite lubricante, limpiador y protector de armas, y de la grasa de automoción y artillería utilizados por el Ejército de Tierra para el mantenimiento y almacenamiento del arma⁵¹², respectivamente, se describen las sustancias y se identifican los siguientes riesgos:

RHL-1. Exposición a agentes químicos (310), durante la tarea de mantenimiento, lubricación, limpieza y protección de arma. Características del aceite lubricante, limpiador y protector de armas: aceite para limpieza, lubricación, hidrofugación y protección anticorrosivo a corto plazo de armas automáticas. Riesgos en la ingestión, inflamación e inhalación de vapores.


512. El aceite lubricante, limpiador y protector de armas, seleccionado por el Ejército de Tierra, es el *Lubekrafft 70422*, «*Krafft, Sociedad Anónima*», de norma MIL-L-63460, y la grasa de automoción y artillería es la *Grasa Krafft 10924*, de «*Krafft, Sociedad Anónima*», de norma MIL-G-10924D, Amd.1. Ambas publicadas por Resolución 200/39161/1995, de 7 de noviembre, de la Jefatura del estado Mayor de la Defensa, por la que se publica la Lista Oficial de Productos Combustibles, Lubricantes y Asociados aceptados (LOPA) para las FAS. BOE, núm. 280, de 23 de noviembre de 1995, págs. 33909. Asimismo, aparecen publicados en el MT7-601. *Manual Técnico. Productos Funcionales y Cartas de Engrase*, Ministerio de Defensa, Granada, 1999, págs. 4-6 y 4-4. Y en la Guía Técnica de combustibles lubricantes y productos asociados para las Fuerzas Armadas, el aceite lubricante es denominado como S-758, MIL-PRF-63460 E, pág. 159 y la grasa de automoción y artillería como G-403, DEF. STAN. 91-27/3, pág. 95.

Frases H⁵¹³, H304, puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, H412, nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Frases P⁵¹⁴, P273, evitar su liberación al medio ambiente, P301+P310, en caso de ingestión llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico, P331, no provocar el vómito, P405, guardar bajo llave.


Gráfico 13. Resultados COSHH. «RHL-1. Exposición a agentes químicos (310)». Fuente: Calculadora INSST



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO

Resultados

Nombre de la operación: ACEITE LUBRICANTE, LIMPIADOR Y PROTECTOR FUSA S-758

Riesgo potencial TOTAL de la operación: 1

Tiempo del proceso: 70 minutos

Número de veces que se efectúa esta operación en una jornada: 1

Resultado de la evaluación:

Agente	Estado	Peligrosidad	Cantidad por operación	Capacidad de pasar al ambiente	Nivel de riesgo potencial	Comentarios	Acciones
157707-86-3	LIQ	A	Pequeña	Alta	1	Nota 3	
Riesgo potencial TOTAL de la operación					1		

Los resultados obtenidos son los siguientes: de los niveles de riesgo potencial⁵¹⁵, se alcanza el nivel 1, en el que el riesgo puede controlarse mediante la aplicación de los principios generales de prevención y una adecuada ventilación general (Nota 3).


513. Las frases «H» son indicadores de peligro que deben aparecer en la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Vid. Anexo VI del Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.


514. Las frases «P» son consejos de prudencia en la utilización de sustancias y mezclas que deben aparecer en la clasificación, etiquetado y envasado. Vid. Anexo VI del Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.


515. Los niveles de riesgos son cuatro: Nivel 1: El riesgo puede controlarse mediante la aplicación de los principios generales de prevención y una adecuada ventilación general. Nivel 2: El riesgo puede controlarse mediante técnicas de extracción localizada con mayor o menor grado de encerramiento, además de lo requerido en el nivel anterior. Nivel 3: Es necesario confinar el proceso, permitiendo aberturas o cargas y descargas puntuales. Nivel 4: Debido a la elevada peligrosidad del agente y, algunas veces, a las grandes cantidades utilizadas en la operación, es necesario que un higienista evalúe detalladamente la operación concreta. El modelo no es capaz de determinar a priori el nivel de control adecuado ni el resto de medidas a adoptar.

Una vez alcanzado por el aspirante el nivel cognitivo del mantenimiento del arma, el tiempo dedicado a esta tarea se podrá reducir. Realizada la evaluación se toma un nuevo tiempo de exposición, en el que se observa que los resultados no varían en función del mismo. Por lo tanto, el nivel de riesgo no varía por el aumento del tiempo de exposición.

Gráfico 14. Resultados COSHH. «RHL-1. Exposición a agentes químicos (310)». Fuente: Calculadora INSST.


GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO

Resultados

Nombre de la operación: ACEITE LUBRICANTE, LIMPIADOR Y PROTECTOR FUSA S-758

Riesgo potencial TOTAL de la operación: 1

Tiempo del proceso: 20 minutos


Número de veces que se efectúa esta operación en una jornada: 1


Resultado de la evaluación:


Agente	Estado	Peligrosidad	Cantidad por operación	Capacidad de pasar al ambiente	Nivel de riesgo potencial	Comentarios	Acciones
	LIQ	A	Pequeña	Alta	1	Nota 3	
Riesgo potencial TOTAL de la operación					1		

RHL-2. Exposición a agentes químicos (310), durante la tarea de mantenimiento, de engrase del arma, para el almacenamiento a corto/largo plazo. Características de la grasa de automoción y artillería: grasa mineral de uso general para lubricación de mecanismos de automoción y artillería, utilizada para el almacenamiento a corto/largo plazo del FUSA. Riesgo principal la ingestión, el contacto con los ojos y con la piel. Frases H, no precisa. Frases P, no precisa. A partir de esta información se utiliza para el cálculo de la exposición a agentes químicos, la aplicación informática «Riskim. Exposición a agentes químicos. Evaluación cualitativa», disponible en el portal de internet del INSST.

Gráfico 15. Resultados COSHH. «RHL-2. Exposición a agentes químicos (310)». Fuente: Calculadora INSST.


GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO

Resultados

Nombre de la operación: GRASA MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO FUSA G-403

Riesgo potencial TOTAL de la operación: 1

Tiempo del proceso: 20 minutos

Número de veces que se efectúa esta operación en una jornada: 1

Resultado de la evaluación:

Agente	Estado	Peligrosidad	Cantidad por operación	Capacidad de pasar al ambiente	Nivel de riesgo potencial	Comentarios	Acciones
	SOL	A	Pequeña	Baja	1	Nota 3	
Riesgo potencial TOTAL de la operación					1		

Los resultados obtenidos son los siguientes: de los niveles de riesgo potencial⁵¹⁶, se alcanza el nivel 1, en el que el riesgo puede controlarse mediante la aplicación de los principios generales de prevención y una adecuada ventilación general (Nota 3).

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

RHL-1. Exposición al ruido (330), para el análisis de los riesgos de exposición de los tiradores al ruido, se medirá el valor de la exposición L_{pico} , definido como el nivel máximo de presión acústica alcanzado en decibelios (dB), por considerarse los disparos ruidos con impactos muy diferenciados y el empleo de una escala de ponderación «C», incorporada al instrumento de medición⁵¹⁷. El arma y la munición utilizada para la obtención de las muestras de los niveles

516. Los niveles de riesgos son cuatro: Nivel 1: El riesgo puede controlarse mediante la aplicación de los principios generales de prevención y una adecuada ventilación general. Nivel 2: El riesgo puede controlarse mediante técnicas de extracción localizada con mayor o menor grado de encerramiento, además de lo requerido en el nivel anterior. Nivel 3: Es necesario confinar el proceso, permitiendo aberturas o cargas y descargas puntuales. Nivel 4: Debido a la elevada peligrosidad del agente y, algunas veces, a las grandes cantidades utilizadas en la operación, es necesario que un higienista evalúe detalladamente la operación concreta. El modelo no es capaz de determinar a priori el nivel de control adecuado ni el resto de medidas a adoptar.

517. Vid. Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido, del INSST, pág. 42.

de presión acústica, son de dotación individual reglamentaria, correspondiendo al FUSA HK-G36E, y la munición calibre 5,56x45 mm ⁵¹⁸. Los disparos se realizaron en campo de tiro al aire libre⁵¹⁹. Los datos se han obtenido con un sonómetro integrador, normalizado por las normas UNE-EN 61672-1:2014 y UNE-EN 60804:2002⁵²⁰. Hay que puntualizar que el rango de medida pico que alcanzan los sonómetros que se comercializan actualmente de uso profesional comprenden normalmente desde los 30 dB hasta los 143 dB, limitación que impide conocer con exactitud cuánto dB superan el valor límite de exposición al ruido (140 dB) pero que nos alerta de su superación. El procedimiento seguido para obtener los resultados se describe a continuación:

1. El tirador adoptará las posiciones de tendido, rodilla en tierra, sentado y de pie.
2. Colocación del micrófono del sonómetro y medición del ruido, a 10 cms de distancia del oído del tirador más cercano al arma.
3. Se efectuarán tres disparos en cada posición en la modalidad de tiro semiautomático y se registrará su medición.
4. Se efectuarán nueve disparos en tres ráfagas en la posición de tendido, en la modalidad de tiro automático y se registrará su medición.

518. La munición del calibre 5,56 x 45 mm, empleada por el Ejército de Tierra, se rige por el STANAG 4172, de 5 de mayo de 1993, utilizado para normalizar su uso por las FAS de la OTAN, garantizando su intercambiabilidad en Operaciones.

519. El procedimiento se realizará aprovechando los ejercicios programados sin que interfiera en el programa de formación.

520. Según el Anexo III del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, establece en su punto 2. Medición del Nivel de pico (Lpico), que los sonómetros empleados para medir el Nivel de pico o para determinar directamente si se sobrepasan los límites o niveles indicados en el artículo 4 (Lpico=140 dB (C)) deberán disponer de los circuitos específicos adecuados para la medida de valores de pico. Deberán tener una constante de tiempo en el ascenso igual o inferior a 100 microsegundos, o ajustarse a las especificaciones establecidas para este tipo de medición en la norma UNE-EN 61672:2005 o versión posterior de la misma. Nivel de pico, Lpico: es el nivel, en decibelios, dado por la expresión: $L_{pico} = 10 \log \left(\frac{P_{pico}}{P_0} \right)^2$ donde Ppico es el valor máximo de la presión acústica instantánea (en pascuales) a que está expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C y Po es la presión de referencia (2·10⁻⁵ pascuales).

Tabla 27. Medición de niveles pico de exposición al ruido. «RHL-1. Exposición al ruido (330)». Fuente elaboración propia.

MODALIDAD TIRO SEMIAUTOMÁTICO			
POSICIÓN	Disparo 1	Disparo 2	Disparo 3
Tendido	>143 dB	>143 dB	>143 dB
Rodilla en tierra	>143 dB	>143 dB	>143 dB
Sentado	>143 dB	>143 dB	>143 dB
De pie	>143 dB	>143 dB	>143 dB
MODALIDAD TIRO AUTOMÁTICO			
POSICIÓN	Ráfaga 1	Ráfaga 2	Ráfaga 3
Tendido	>143 dB	>143 dB	>143 dB

Los resultados arrojan un nivel superior al límite permitido de exposición al ruido nivel L_{pico} (143 dB). Los ejercicios de tiro programados para la Fase de formación General son unos 200 disparos por aspirante, o expresado con otras palabras, el aspirante está expuesto durante doscientas veces a un nivel de exposición al ruido superior al valor límite de exposición L_{pico} .

A continuación, se calculará la atenuación de los protectores auditivos, facilitados al aspirante, por el método de atenuación de nivel pico⁵²¹. Conocido el nivel de presión sonora con ponderación «C» y la composición cualitativa del ruido (frecuencias altas, medias-altas o bajas, proporcionadas por el fabricante)⁵²², se utiliza la aplicación informática «Calculador de la atenuación de

521. Protectores auditivos, modelo RUN-RUN fabricado por MEDOP, conforme a la Norma UNE EN 352-2:2003, SNR 22 dB, [consulta: 20/01/2019], «https://medop.es/web/WEBMP/WEBNEW/documentaciontecnica/RUNRUN_Cert_ES.pdf».

522. Datos proporcionados por el fabricante: atenuación global en frecuencias: Altas (H)=23, Medias (M)=19, Bajas (L)=17, [consulta: 20/01/2019], «https://medop.es/web/WEBMP/WEBNEW/documentaciontecnica/RUNRUN_FIC_ES.pdf».

los protectores auditivos», disponible en el portal de internet del INSST, mostrando el siguiente resultado.

Tabla 28. Resultados atenuación del nivel Lpico (C). «RHL-1. Exposición al ruido (330)».
Fuente: Calculador de la atenuación de los protectores auditivos INSST, elaboración propia.

Frecuencia	Atenuación	Lpico	Valor atenuación	Resultado
Baja (L)	17 dB	143 dB (C)	131 dB (C)	Atenua
		144 dB (C)	132 dB (C)	
		145 dB (C)	133 dB (C)	
		146 dB (C)	134 dB (C)	
		147 dB (C)	135 dB (C)	
		148 dB (C)	136 dB (C)	
		149 dB (C)	137 dB (C)	No atenua
Frecuencia	Atenuación	Lpico	Valor atenuación	Resultado
Media (M)	19 dB	143 dB (C)	129 dB (C)	Atenua
		149 dB (C)	135 dB (C)	
		150 dB (C)	136 dB (C)	
		151 dB (C)	137 dB (C)	No atenua
Frecuencia	Atenuación	Lpico	Valor atenuación	Resultado
Alta (H)	23 dB	143 dB (C)	120 dB (C)	Atenua
		149 dB (C)	126 dB (C)	
		151 dB (C)	128 dB (C)	
		160 dB (C)	137 dB (C)	No atenua

Analizados los resultados podemos concluir que los protectores auditivos utilizados evidencian que la atenuación es insuficiente en el nivel Lpico a partir de 149 dB en frecuencia Baja (L), en el nivel Lpico a partir de 151 dB en frecuencia Media (M) y en el nivel Lpico a partir de 160 dB en frecuencia Alta (H). Lo que provoca un cambio temporal del umbral auditivo a partir de dichas frecuencias, ocasionado por el sonido impulsivo del disparo; sonido de gran intensidad y corta duración que provoca lesiones instantáneas en el oído por el efecto del *blast auditivo*, tales como el dolor intenso y punzante en el oído,

hemorragias en el caso de rotura de tímpano, hipoacusia y tinnitus⁵²³. El término blast, según Navarro Suay, fue definido en 1916 por Moth, como *«lesión por sopló»*⁵²⁴. En el blast auditivo, *«El mecanismo de lesión se debe al efecto implosivo que puede aparecer después de sobrepresiones elevadas sobre el tímpano, la cadena de huesecillos y el laberinto»*⁵²⁵. Navarro Suay, coincide en las lesiones producidas por el traumatismo explosivo, presentándose estas en el 90% de los afectados, tales como sordera neurosensorial de corta duración y hemorragia, dolor agudo, vértigo y acúfenos⁵²⁶. En resumen, las lesiones causadas por el disparo deben considerarse el sumatorio de la energía sonora y la onda de choque⁵²⁷, el ruido al que está expuesto el tirador puede provocar alteraciones auditivas disminuyendo la capacidad auditiva de forma permanente (hipoacusia), siendo bilateral, irreversible y no evolutiva. Según Cañas Delgado, *«el ruido tiene un efecto sobre el nivel de activación y, por tanto, sobre el nivel de estrés»*, lo que se traduce que, además de los problemas auditivos el personal militar sujeto a la intensidad del ruido provocado por los disparos y la deficiente atenuación de los protectores auditivos, a partir de las frecuencias expuestas, tengan más probabilidades de sufrir enfermedades cardiacas ⁵²⁸.

523. Vid. RELANZÓN LÓPEZ, J.M., *Validez de los test predictivos de la fatiga auditiva en la prevención del trauma acústico*, Tesis Doctoral, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992, pág. 9.

524. Vid. NAVARRO SUAY, R., *Soporte vital avanzado en combate*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2009, pág. 90.

525. Vid. PUGH HL., *Blast Injuries*. Surg. Clin. North Am, 1943 23, págs. 1589 a 1602.

526. NAVARRO SUAY, op.cit., pág. 99.

527. Al respecto, se puede consultar el estudio «Protección auditiva contra el ruido de los disparos de rifles militares». Vid. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, *Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo*, 2006, págs. 32 a 34.

528. CAÑAS DELGADO, «Evolución de la Ergonomía a lo largo de los 20 años de PRL», op.cit., pág. 304.

c) Evaluación de los riesgos de ergonómicos

Tarea de Orden Cerrado

RE-1. Posturas forzadas (410), el análisis de posturas forzadas, utilizando la calculadora del método REBA de la página de internet del INSST, arroja un resultado de nivel riesgo medio, una vez introducidos los datos a los que se somete el tronco, cuello, piernas, brazos del aspirante cuando realiza los movimientos con su arma reglamentaria (FUSA HK G36E) descritos anteriormente.

RE-2. Manipulación manual de cargas (440), valores recomendados en la Guía Técnica del INSST⁵²⁹, sobre transporte de cargas. Para el análisis se ha empleado la aplicación del INSST, cuya evaluación se efectúa por el levantamiento de la carga. Para su cálculo se tienen en consideración los siguientes factores:

- a) Población a proteger, personal masculino y femenino entre 18 y 28 años⁵³⁰.
- b) Características de la carga, masa real de la carga levantada 3,4 kg (peso del FUSA de dotación reglamentaria).
- c) Tipo de agarre regular. Requerimientos posturales del levantamiento (altura media 170 cm).
- d) Altura del agarre, al inicio del levantamiento 110 cm y al final del levantamiento 150 cm.

529. Vid. Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. [Consulta: 09/04/2019], «<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf>».

530. Vid. Requisitos de acceso para la incorporación a las escalas de tropa y marinería. Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. BOE, núm. 66, de 18 de marzo de 2017, anexo I, punto .1. b).

- e) Distancia horizontal máxima entre el punto de agarre y el cuerpo 5 cm.
- f) Asimetría o dislocación angular del tronco al levantar la carga 15°.
- g) Técnica utilizada, se levanta la carga con una mano.
- h) Datos organizacionales, ¿se realiza siempre el levantamiento de la carga entre dos personas?: No.
- i) Frecuencia de un levantamiento por minuto.
- j) Duración continua de la tarea del levantamiento, menos de un minuto.

Gráfico 16. Resultados aplicación manipulación manual de cargas. «RE-2. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST

Índice de Levantamiento
Ficha: Resultados

Empresa: **EJERCITO DE TIERRA**

Sección: **INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO**

Descripción: **MOVIMIENTOS DE ORDEN CERRADO CON ARMAS**

Fecha: **14/01/2018**

Puesto: **ASPIRANTE A MILITAR PR**

Masa efectiva levantada: 3,30

Factores de riesgo por levantamiento de cargas

Masa de referencia (M.ref):	20
	x
Factor de calidad de agarre (CM):	0,95
	x
Factor de distancia vertical (VM):	0,90
	x
Factor de desplazamiento vertical (DM):	0,93
	x
Factor de distancia horizontal (HM):	5,00
	x
Factor de asimetría (AM):	0,97
	x
Factor uso de 1 extremidad (OM):	0,60
	x
Factor 2 personas (PM):	1,00
	x
Factor frecuencia y duración (FM):	0,94
Masa límite recomendada:	43,41 Kg.

Índice de riesgo y valoración

Índice de riesgo (IL):
 $\frac{\text{Masa levantada}}{\text{Masa recomendada}}$
=

0,1

Aceptable

Escala de valoración del riesgo:

Índice de riesgo	Color	Nivel de riesgo
Hasta 0,85	Verde	Aceptable
0,85 < LI ≤ 1	Amarillo	Muy leve o incierto
1 < LI ≤ 2	Rojo suave	Presente. Nivel bajo.
2 < LI ≤ 3	Rojo medio	Presente. Nivel significativo.
LI > 3	Rojo fuerte	Totalmente inaceptable.

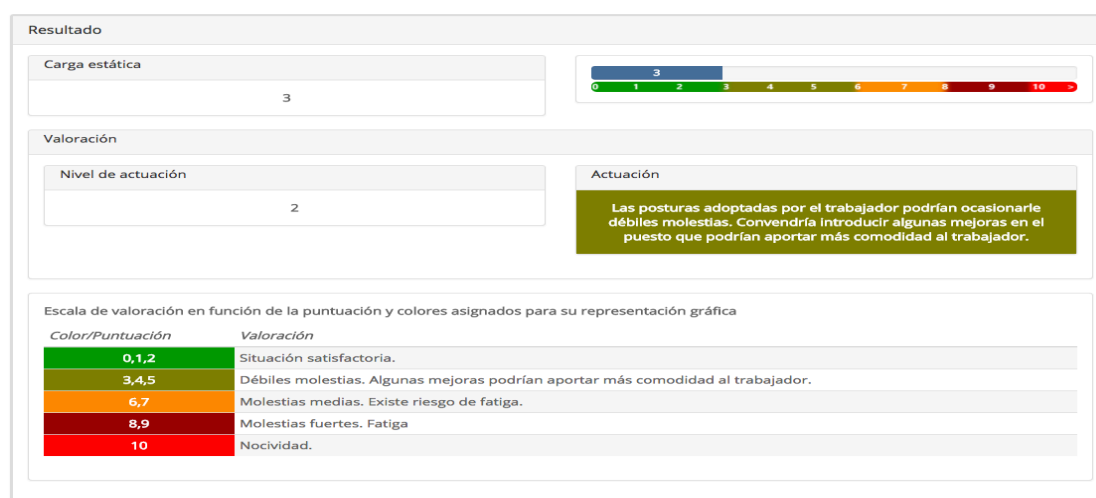
Estudio integración actividades I/A del ET en su sistema de gestión PRL

308

El resultado (0,1) indica un riesgo aceptable en la ejecución de este tipo de movimientos, dado que no supera el límite (0,85) indicado en la tabla. «RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410)», para Diego-Más, *«la adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos»*⁵³¹. Para la evaluación de la posición en bipedestación prolongada estática, se ha empleado la aplicación informática online EPR (Evaluación Postural Rápida), de Ergonautas (*Universitat Politècnica de Valencia*)⁵³², con los siguientes datos:

- Género hombre y mujer.
- Edad entre 18 y 28 años.
- Posición estática de pie normal.
- Tiempo que permanece en la posición es mas de 60 minutos.

Gráfico 17. Resultados EPR. «RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410)». Fuente: Aplicación informática online Ergonautas.



531. Vid. DIEGO-MAS, J.A., *EPR - Evaluación postural rápida*. Ergonautas, Universidad Politècnica de Valencia, 2015. [Consulta: 14/04/2018], « <http://www.ergonautas.upv.es/metodos/epr/epr-ayuda.php>».

532. La aplicación EPR está disponible en la página web « https://www.ergonautas.upv.es/metodos/epr/epr_online.php».

El resultado arroja que la postura evaluada podría ocasionarles débiles molestias. Sin embargo, en estos casos de bipedestación prolongada estática, hay que tener en cuenta otros factores: las condiciones meteorológicas (bajas/altas temperaturas, viento, lluvia e incluso granizo o nieve), que afectan a los actos militares que se realizan en las explanadas al aire libre. El peso del fusil con cuchillo bayoneta y cargador que deben portar. La disciplina de permanecer en la posición de firmes durante el acto militar. Todo ello resulta un sumatorio de posibilidades que dan como resultado el aumento del riesgo de sufrir lesiones y desmayos. Los desmayos se producen normalmente por una fatiga en la espalda y en las extremidades superiores e inferiores, lo que provoca una falta de oxigenación en las células del cerebro y como consecuencia, perder la conciencia. A partir de ese momento, el militar cae desplomado por su propio peso golpeándose con el suelo, y en ocasiones con su propio fusil. Estas consideraciones, replantean la evaluación anterior con nuevos parámetros a tener cuenta, que la hacen modificarse sustancialmente:

- Género hombre y mujer.
- Edad entre 18 y 28 años⁵³³.
- Posición estática de pie normal.
- Tiempo que permanece en la posición más de 60 minutos.
- Peso total que portan 4,270 Kg. (Fusil HK G6E: 3,630 Kg, peso cargador de 30 cartuchos (vacío): 0,140 Kg, peso del cuchillo bayoneta con tahalí: 0,50 Kg.).
- Tiempo máximo en el que no se realiza movimiento alguno 30 minutos.

533. Los requisitos de acceso para la incorporación a las escalas de tropa y marinería se establecen en la Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo.

- Sujetos a condiciones atmosféricas: Sí.

Gráfico 18. Resultados EPR. «RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410)». Fuente: Aplicación informática online Ergonautas.



Como se puede comprobar, el resultado indica que la postura en posición de firmes en actos militares, puede ocasionar al personal militar fuertes molestias en los pies, en la espalda, hombros y cuellos, e incluso fatiga. Además, el permanecer de pie durante un tiempo que exceda a los treinta minutos, puede provocar problemas en la columna vertebral, caderas, rodillas y pies.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

RE-1. Manipulación manual de cargas (440), se ha utilizado la aplicación del INSST «Manipulación manual de cargas: valores límite en operaciones de empuje, arrastre y transporte», se establecen los resultados máximos en el transporte de una carga de 20 kgrs para hombres y de 16 kgrs y mujeres:

Gráfico 19. Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST



Gráfico 20. Resultados calculadora Manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST



Los resultados obtenidos se apartan considerablemente de la carga que debe soportar el combatiente. Según Heredia Jiménez «El peso total que el soldado debe transportar en condiciones de combate, no debería superar el 30% del peso corporal de los sujetos, incluyendo equipo, armas, mochila y demás

elementos y blindajes»⁵³⁴. Si se supera este límite, supondría asumir un mayor riesgo de lesiones y por ende disminuir su capacidad de combate. En el estudio realizado por Valero Capilla, *et al.*, se desprende que las lesiones producidas en el aspirante durante la fase de formación se producen durante las actividades de campo y simulación de guerra, con su equipo y armamento reglamentario. Las marchas y despliegues tácticos son con frecuencia realizados en terreno desigual y en ambiente nocturno⁵³⁵.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

RE-1. Manipulación manual de cargas (440), para el análisis se ha empleado la aplicación del INSST, sobre valores recomendados en la Guía Técnica del INSST, cuya evaluación se efectúa por el levantamiento de la carga. Tomando para su cálculo los siguientes factores: población a proteger personal masculino y femenino, entre 18 y 45 años. Características de la carga, masa real de la carga levantada 75 kg. Tipo de agarre, malo. Requerimientos posturales del levantamiento (altura media 170 cm): Altura del agarre al inicio del levantamiento, 10 cm, al final del levantamiento: 150 cm. Distancia horizontal máxima entre el punto de agarre y el cuerpo, 25 cm. Asimetría o dislocación angular del tronco al levantar la carga, 20°.

534. Vid. HEREDIA JIMÉNEZ, J.M., *Efecto del peso de la mochila sobre parámetros biomecánicos de la locomoción en soldados de Infantería y su relación con la fatiga, la composición corporal y el estado físico*, departamento Educación Física y Deportiva, Universidad de Granada, Granada, 2017, pág. 49.

535. VALERO CAPILLA, *et al.*, op.cit., págs. 267 a 268.

Gráfico 21. Resultados aplicación manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST

Índice de Levantamiento

Ficha: Resultados

Empresa: EJÉRCITO DE TIERRA

Fecha: 16/01/2018

Sección: PRIMEROS AUXILIOS/TRANSPORTE DE HERII

Puesto: ASPIRANTE

Descripción: EVACUACIÓN HERIDO EN COMBATE

Masa efectiva levantada: 75,00

Peso excesivo

Factores de riesgo por levantamiento de cargas

Masa de referencia (M.ref): 20

x

Factor de calidad de agarre (CM): 0,90

x

Factor de distancia vertical (VM): 0,81

x

Factor de desplazamiento vertical (DM): 0,85

x

Factor de distancia horizontal (HM): 1,00

x

Factor de asimetría (AM): 0,94

x

Factor uso de 1 extremidad (OM): 1,00

x

Factor 2 personas (PM): 1,00

x

Factor frecuencia y duración (FM): 1,00

II

Masa límite recomendada: 11,60 Kg.

Índice de riesgo y valoración

Índice de riesgo (IL): $\frac{\text{Masa levantada}}{\text{Masa recomendada}}$ = 6,5

Totalmente inaceptable.

Escala de valoración del riesgo:

Índice de riesgo	Color	Nivel de riesgo
Hasta 0,85	Verde	Aceptable
$0,85 < LI \leq 1$	Amarillo	Muy leve o incierto
$1 < LI \leq 2$	Rojos suave	Presente. Nivel bajo.
$2 < LI \leq 3$	Rojos medio	Presente. Nivel significativo.
$LI > 3$	Rojos fuerte	Totalmente inaceptable.

El resultado indica un riesgo totalmente inaceptable en la ejecución de este tipo de movimientos.

Utilizando la aplicación del INSST «Manipulación manual de cargas: valores límite en operaciones de empuje, arrastre y transporte», se establecen

los resultados máximos en el transporte de una carga de 17 kgrs para hombres y de 14 kgrs y mujeres:

Gráfico 22. Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST



Gráfico 23. Resultados calculadora de manipulación manual de cargas. «RE-1. Manipulación manual de cargas (440)». Fuente: Calculadora INSST



El análisis desprende un cálculo totalmente desproporcionado de la masa peso del combatiente herido, con la masa máxima recomendada para el transporte.

9.1.5. Fase 5. Discriminación del tipo de riesgo

A continuación, se exponen las razones consideradas para la discriminación de los riesgos observados de las diferentes tareas de la actividad de Instrucción individual, en función del análisis efectuado.

a) Riesgos de seguridad laboral

Tarea de Orden Cerrado

RSL-1. Caída de personas al mismo nivel (020), aunque no son frecuentes las caídas, hay que destacar que los tropiezos al inicio de esta tarea son eminentemente potenciales, y que su probabilidad disminuye de forma progresiva conforme avanza el aprendizaje de los movimientos. Su prevención es acorde a adoptar medidas preventivas informativas.

RSL-2. Golpes por objetos (090), la existencia del contacto del arma con las superficies del cuerpo, unidos a la energía con que se efectúan los movimientos, provocan constantes golpes, su carácter es existente. Para su prevención es conveniente adoptar medidas correctivas, basadas en la información puntual de cómo deben realizarse los movimientos sin que produzcan lesiones.

RSL-3. Cortes por objetos (090), la inexperiencia del aspirante a militar profesional en el manejo del cuchillo bayoneta, puede provocar contactos

accidentales con su filo, al efectuar el movimiento con el machete de armar o desarmar el arma. El riesgo es eminentemente potencial, y disminuye de forma progresiva conforme avanza el aprendizaje de los movimientos. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas preventivas informativas para evitar cortes fortuitos, como asimismo la corrección de movimientos durante la Instrucción.

RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (110), al efectuar el movimiento de cargar el arma con la palanca de armar, con las manos enguantadas, se puede provocar un deslizamiento en la sujeción del arma y posterior atrapamiento. El riesgo es eminentemente potencial, y disminuye de forma progresiva conforme avanza el aprendizaje de los movimientos. Su prevención es acorde a adoptar medidas preventivas informativas.

Tarea de armamento individual

RSL-1. Golpes por objetos (090), los mismos se producen con carácter fortuito, durante el desarmado o armado de las piezas del arma. Su carácter es eminentemente potencial, pues no se garantiza que al realizar esta operación se tengan que producir y por otro lado no se puede descartar el suceso. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas preventivas informativas.

RSL-2. Cortes por objetos (090), los posibles cortes se producen con carácter fortuito, durante el desarmado o armado de las piezas del arma. Al contacto con superficies con filo, algunas piezas del arma están fabricadas con

plástico reforzado con fibra de vidrio; de igual forma, no se debe olvidar que el machete forma parte de la dotación del FUSA, y aunque carece de filo, no se debe considerar que carece de él como el recazo. Dada la existencia de las citadas superficies, el riesgo es eminentemente existente. Su prevención exige adoptar medidas preventivas correctivas y la utilización de guantes de protección cuando se proceda al mantenimiento de aquellas partes del arma que tengan superficies con filo.

RSL-3. Proyección de fragmentos o partículas (100), al utilizar las feminelas de cerda y cobre, así como el cepillo de limpieza, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza del arma, se produce la proyección de fragmentos o partículas, procedentes de restos de pólvora de la munición empleada para el tiro y/o de restos tierra adherida durante la instrucción de combate. Dada la existencia de los citados fragmentos, el riesgo tiene un carácter eminentemente existente. Su prevención requiere adoptar medidas preventivas correctivas y la utilización de equipos de protección individual, cuando se proceda al mantenimiento de aquellas partes del arma, con posterioridad a la instrucción de combate.

RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (110), los atrapamientos se producen con carácter fortuito, durante el desarmado o armado de las piezas del arma, su carácter es eminentemente potencial, pues no se garantiza que al realizar esta operación se tengan que producir y por otro lado no se puede descartar el suceso. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas preventivas informativas. «RSL-5. Caídas de personas al mismo nivel

(020)», los posibles derrames de aceites y grasas durante las tareas de mantenimiento y limpieza del arma, provocan superficies inestables y resbaladizas, que al pisarlas producen caídas, su carácter es eminentemente potencial, pues no se garantiza que al realizar esta operación se tengan que producir y por otro lado no se puede descartar el suceso. Su prevención requiere adoptar medidas preventivas informativas.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

RSL-1. Proyección de fragmentos y/o partículas (100), durante la ejecución del tiro con el arma reglamentaria, el proyectil impulsado por los gases de la deflagración de la pólvora, abandona el arma por la boca de fuego desprendiendo los gases de empuje y partículas. Dada la existencia de las gases y partículas, su carácter es eminentemente existente. Su prevención exige instaurar medidas preventivas correctivas y la utilización de gafas de protección.

RSL-2. Golpes por objetos (090), estos golpes se producen con carácter fortuito, al adoptar el tirador las diferentes posiciones al ejecutar los ejercicios de tiro. Su carácter es eminentemente potencial, pues no se garantiza que al realizar esta operación se tengan que producir y por otro lado, no se puede descartar el suceso. Su prevención requiere implantar a adoptar medidas preventivas informativas.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020), las irregularidades del terreno pueden provocar caídas originadas por tropiezos y enganches con la vegetación. Su carácter es eminentemente potencial, y está sujeto a la diferente morfología del terreno. Su prevención exige implantar medidas preventivas de reconocimiento previo de la zona a actuar.

RSL-2- Caídas de personas a distinto nivel (010), los desniveles irregulares del terreno, pueden provocar caídas originadas por tropiezos y enganches con la vegetación. Su carácter es eminentemente potencial, y está sujeto a la diferente morfología del terreno. Su prevención es acorde a adoptar medidas preventivas de reconocimiento previo de la zona a actuar.

RSL-3. Golpes por objetos (090), el avance y progresión táctica, provoca desajustes en las correas de transporte del armamento individual y de su equipo de combate, que ocasionaran golpes fortuitos durante su movimiento, su carácter es eminentemente existente, considerándose su prevención correspondiente, con la revisión previa y durante la progresión de las correas, así como con medidas correctoras tales como la sustitución de los elementos de cierre y presión de las mismas.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020), las irregularidades del terreno, provocan caídas y tropiezos, su carácter es eminentemente potencial, y

está sujeto a la diferente morfología del terreno. Su prevención requiere adoptar medidas preventivas de reconocimiento previo de la zona a actuar.

RSL-2. Golpes por objetos (090), la manipulación manual del herido para proceder a su evacuación, exige el contacto con su cuerpo. Su equipo de combate (casco, portaequipo de combate), su uniformidad (botas), y su propio cuerpo ocasionarán golpes fortuitos durante su evacuación. Riesgo de carácter potencialmente existente, considerando su prevención correspondiente, con el entrenamiento de las técnicas descritas para la evacuación.

b) Riesgos de higiene laboral

Tarea de Orden Cerrado

RHL-1. Exposición al ruido (330), durante la ejecución de las salvas en los ensayos y la celebración del acto a los caídos con el arma reglamentaria, se constata la vulnerabilidad del aspirante a padecer lesiones en el aparato auditivo. Su carácter es eminentemente existente, al no considerarse la utilización de protector auditivo alguno. Su prevención es acorde a adoptar medidas preventivas correctivas y a la utilización de protectores auditivos, que alcancen la atenuación del ruido por debajo de los límites de exposición que son permitidos.

Tarea de armamento individual

RHL-1. Exposición a agentes químicos (310), identificados los riesgos de la exposición a agentes químicos durante la tarea de mantenimiento, lubricación, limpieza y protección de arma, su carácter es eminentemente existente, dada la

necesidad y obligatoriedad de utilización del agente químico (aceite lubricante, limpiador y protector S-758), durante la citada tarea. Su prevención exige implantar adoptar medidas preventivas correctivas y a la utilización de equipos de protección individual.

RHL-2. Exposición a agentes químicos (310), Durante la tarea de mantenimiento, de engrase del arma, para el almacenamiento a corto/largo plazo. Su carácter es eminentemente existente, dada la necesidad y obligatoriedad de utilización del agente químico (grasa de automoción y artillería G-403) durante la citada tarea. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas preventivas correctivas y a la utilización de equipos de protección individual.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

RHL-1. Exposición al ruido (310), durante la ejecución de los ejercicios de tiro con el arma reglamentaria, se constata la vulnerabilidad del aspirante a padecer lesiones en el aparato auditivo. Su carácter es eminentemente existente, al no ser eficiente y suficiente la atenuación de los protectores auditivos. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas preventivas correctivas y a la utilización de protectores auditivos que alcancen la atenuación del ruido por debajo de los límites de exposición permitidos.

c) Riesgos ergonómicos

Tarea de Orden Cerrado

RE-1. Posturas forzadas (410), el aspirante a militar profesional, durante el transcurso de su periodo de formación general, deberá adoptar posturas de los miembros superiores del cuerpo: tronco, cuello y piernas, durante los movimientos de armas, a las que no está acostumbrado. El riesgo es potencialmente existente. Su prevención correspondiente, es acorde adoptar medidas correctivas, basadas en la información puntual de cómo deben realizarse los movimientos sin que se produzcan lesiones.

RE-2. Manipulación manual de cargas (440), el peso del fusil supera levemente el requisito mínimo exigido en la norma *ISO/CD 11228: Ergonomics Manual handling Part 1*, reflejada en la Guía del INSST para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación de cargas, como desarrollo del RD 487/1997, de 14 de abril. Sin embargo, puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable, al ejecutar los movimientos de armas; ya que interviene el esfuerzo humano de forma directa e indirecta, al mantener el arma alzada y sujeta con las manos y otras partes del cuerpo, su carácter es eminentemente potencial. Su prevención exige adoptar medidas informativas, basadas en la información puntual de cómo deben realizarse los movimientos sin que se produzcan lesiones.

RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410), la posición de firmes durante la celebración de actos militares, constituye el 85 % de los movimientos

que se realizan⁵³⁶. De los protocolos de vigilancia sanitaria específica, sobre posturas forzadas del Instituto Vasco de Seguridad y salud Laboral, se constata en el estudio de la actividad específica del personal militar, las articulaciones o complejos musculotendinosos que resultan afectadas, siendo éstas cadera y muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie⁵³⁷. Su prevención correspondiente, es acorde a adoptar medidas correctivas, basadas en la información puntual de cómo deben realizarse los movimientos sin que se produzcan lesiones y acompañadas del entrenamiento progresivo, que acostumbre y fortalezca las articulaciones o complejos musculotendinosos.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

RE-1. Manipulación manual de cargas (440), el peso del armamento y del equipo de combate, supera sustancialmente el recomendado en condiciones ideales de manipulación⁵³⁸ para realizar cualquier transporte, y aunque se trate de una circunstancia especial, en la que se cuenta con personal sano y entrenado, su límite, 40 kg., sería excesivo para situaciones de combate. Su carácter es eminentemente existente, considerándose su única prevención, la adecuación del peso total de la carga a las características antropométricas singulares de cada combatiente.

536. Este dato está extraído de la instrucción particular del desarrollo del acto de jura de bandera de un ciclo de formación de tropa del Ejército de Tierra. La duración del acto oscila entre 1 hora y 30 minutos a 2 horas en función del personal que participe, dado que el número de aspirantes a militar profesional varía según las plazas de acceso publicadas en la convocatoria. Los movimientos a pie firme son: posición de firmes, giro a derecha e izquierda y descanso. De estos cuatro movimientos, la posición de firmes constituye el 85% del tiempo empleado en el acto de jura de bandera.

537. CILVETI GUBIA, S., Y IDOATE GARCÍA, V., *Salud laboral protocolos de vigilancia sanitaria específica. Posturas forzadas*, OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Bizkaia, 2001, pág. 20.

538. La Guía Técnica del INSST, establece el peso máximo en 25 kg. en condiciones ideales de manipulación: postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. Vid. Guía Técnica del INSST, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

RE-1. Manipulación manual de cargas (440), el peso del combatiente herido supera sustancialmente el recomendado en condiciones ideales de manipulación para realizar cualquier transporte ⁵³⁹. Aunque se trate de una circunstancia especial, en la que se cuenta con personal sano y entrenado, su límite, 40 kg., sigue por debajo del peso de un combatiente herido. Su carácter es potencialmente existente, considerándose su única prevención con el entrenamiento de las técnicas descritas para la evacuación.

9.1.6. Fase 6. Medidas preventivas

Con respecto a los riesgos observados en las tareas de la actividad de Instrucción individual, se recomiendan las siguientes medidas preventivas.

a) Medidas preventivas de seguridad laboral

Tarea de Orden Cerrado

RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020), comprobar previamente la zona de ejecución de los movimientos, que esté libres de obstáculos y sea adecuada, realizar un período de adaptación progresiva de la ejecución de los movimientos, de distinto tipo de calzado (bota a zapato). Al inicio de la tarea, no efectuar cambios de ritmos o elevar la cadencia de marcha.

RSL-2. Golpes por objetos (090), información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar golpes con el arma.

539. La Guía Técnica del INSST, establece el peso máximo en 25 kg. en condiciones ideales de manipulación: postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. Vid. Guía Técnica del INSST, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas.

RSL-3. Cortes por objetos (090), información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar cortes con el cuchillo bayoneta.

RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (120), información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar atrapamientos con partes móviles del arma.

Tarea de armamento individual

RSL-1. Golpes por objetos (090), realizar el desarmado y armado del FUSA encima de una superficie lisa y estable, auxiliándose de una toalla doblada en forma rectangular, para amortiguar y proteger las piezas, iniciar el desarmado y posterior armado del FUSA, siguiendo el orden marcado por el fabricante; prestar atención a las piezas móviles en su desplazamiento libre. No introducir los dedos por la ventana de expulsión y extremar la precaución con las piezas aceitadas y engrasadas. EPI recomendado: guantes de protección contra riesgos mecánicos, según norma UNE EN 388:2004. La información del fabricante de los guantes de combate, proporcionados en el equipo básico de vestuario al personal de nueva incorporación⁵⁴⁰, es la siguiente: norma UNE EN 388:2004, resistencia a la abrasión nivel 3, resistencia al corte de cuchilla nivel 5, resistencia al rasgado nivel 4 y resistencia a la perforación nivel 2. Norma UNE EN 407:2005: comportamiento a la llama nivel 4, calor por contacto nivel 1, calor convectivo nivel 3, calor radiante nivel 3. Norma UNE EN 420:2004+A1/2010/2011: dexteridad nivel 5⁵⁴¹.

540. Vid. Norma técnica 16/09 de la Dirección de Sistemas de Armas del Ejército de Tierra.

541. Para Lara Laguna, la dexteridad o nivel de destreza que permiten los guantes de protección contra riesgos mecánicos, al que lo lleva, se relaciona inversamente proporcional a su nivel de protección, pues cuanto mayor sea este, menor es su

RSL-2. Cortes por objetos (090), realizar el desarmado y armado del FUSA encima de una superficie lisa y estable, auxiliándose de una toalla doblada en forma rectangular, para amortiguar y proteger las piezas, iniciar el desarmado y posterior armado del FUSA, siguiendo el orden marcado por el fabricante; prestar atención a las piezas que tengan filo, tales como el cajón de los mecanismos, la tapa del fondo del cargador, hebilla portafusil y al filo y punta del machete, cuando se extrae del tahalí, para su mantenimiento, no introducir los dedos por la ventana de expulsión y extremar la precaución con las piezas aceitadas y engrasadas. EPI recomendado: guantes de protección contra riesgos mecánicos, según norma UNE EN 388:2016. Los guantes de combate, proporcionados en el equipo básico de vestuario al personal de nueva incorporación, cumplen este requisito. Según el fabricante, proporcionan adicionalmente una protección al usuario frente a posibles cortes en las falanges de los dedos y en la palma de la mano, rasgado, perforación y abrasión.

RSL-3. Proyección de fragmentos o partículas (100), una vez desarmado el FUSA, proceder a la limpieza de sus piezas de restos de pólvora y suciedad, utilizando el cepillo y feminelas de dotación. EPI recomendado: gafas de protección individual de los ojos, que cumplan la norma UNE EN 1731:2007.

RSL-4. Atrapamientos por o entre objetos (110), realizar el desarmado y armado del FUSA encima de una superficie lisa y estable, auxiliándose de una toalla doblada en forma rectangular, para amortiguar y proteger las piezas, iniciar el desarmado y posterior armada del FUSA, siguiendo el orden marcado por el

dexteridad. Hecho que afortunadamente, va disminuyendo gracias a la evolución tecnológica y experimentada de la industria textil. Vid. LARA LAGUNA, A., *NTP 882. Guantes de protección contra riesgos mecánicos*, INSST, Madrid, 2010, pág.1.

fabricante, prestar atención a las piezas cuyo desarmado y/o armado necesiten de movimiento y/o giro, tales como: palanca de montar, conjunto del cierre, resorte de compresión del culatín y pernos de sujeción. EPI recomendado: guantes de protección contra riesgos mecánicos, según norma UNE EN 388:2016. Los guantes de combate, proporcionados en el equipo básico de vestuario al personal de nueva incorporación, cumplen este requisito. Según el fabricante, proporcionan adicionalmente una protección al usuario frente a posibles cortes en las falanges de los dedos y en la palma de la mano, rasgado, perforación y abrasión.

RSL-5. Caídas de personas al mismo nivel (020), los trasvases de aceites a recipientes pequeños (aceiteras), realizarlos encima de bandejas antivertidos o cubetas colectoras, que permitan la retención del aceite vertido, en caso de vertido accidental, confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua, secar con material absorbente inerte (por ejemplo, arena, serrín, aglomerante universal o gel de sílice) y señalizar el lugar donde se hayan producidos vertidos, hasta su limpieza y secado.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

RSL-1. Proyección de fragmentos y/o partículas (100), utilización de gafas de protección. EPI recomendado: gafas de protección balística, según norma UNE-EN 166:2002, protección individual de los ojos. Especificaciones, o MIL-PRF-31013, o STANAG 2920.

RSL-2. Golpes por objetos (090)», utilización de coderas y rodilleras, que permita la movilidad adecuada al tirador, con total protección en codos y rodillas.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020), reconocer previamente la zona y el itinerario de avance y progresión, adaptación ocular en condiciones de escasa visibilidad y ajuste de la carga (armamento/equipo de combate) que impida el desequilibrio postural.

RSL-2. Caídas de personas a distinto nivel (010), reconocer previamente la zona y el itinerario de avance y progresión, adaptación ocular en condiciones de escasa visibilidad y ajuste de la carga (armamento/equipo de combate) que impida el desequilibrio postural.

RSL-3. Golpes por objetos (090), revisión previa de correas de transporte de la carga (armamento/equipo de combate), sustitución de correas de transporte en mal estado y ajuste de la carga (armamento/equipo de combate). EPI recomendado: guantes de protección contra riesgos mecánicos, según norma UNE EN 388:2016. Coderas y rodilleras de combate.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

RSL-1. Caídas de personas al mismo nivel (020)», reconocer previamente la zona y el itinerario de evacuación.

RSL-2. Golpes por objetos (090), librar al combatiente herido de todo equipo de combate y uniformidad, que alivie su peso y evite contactos que generen golpes. EPI recomendado: guantes de protección contra riesgos mecánicos, según norma UNE EN 388:2016.

b) Medidas preventivas de higiene laboral

Tarea de Orden Cerrado

RHL-1. Exposición al ruido (330), utilización de protectores auditivos que atenúen de forma eficiente, por debajo del límite permitido, los ruidos impulsivos producidos por el disparo y que a su vez no interfieran en los sonidos de niveles normales que no sobrepasen el límite superior a $L_{pico} = 135 \text{ dB(A)}$ ⁵⁴². EPI recomendado: protectores auditivos, según norma UNE-EN 352-2, comprobada su atenuación eficiente al disparo. Además, se pone de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de este personal, por lo que se deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dicho personal, y estos someterse a ésta⁵⁴³.

Tarea de armamento individual

RHL-1. Exposición a agentes químicos (310), durante la tarea de mantenimiento, lubricación, limpieza y protección de arma. Aceite lubricante, limpiador y protector de armas: realizar la tarea de mantenimiento, lubricación, limpieza y protección del arma en espacios ventilados. No comer, ni beber, ni

542. A los efectos de este real decreto, los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80 \text{ dB(A)}$ y $L_{pico} = 135 \text{ dB(C)}$, respectivamente. $L_{Aeq,d}$, definido como el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A es el que tendría un ruido continuo que en el mismo tiempo de exposición transmitiera la misma energía que el ruido variable considerado. Vid. Art. 5, RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

543. Según lo dispuesto en el art. 11.1 del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

fumar durante su utilización. Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de manera sistemática finalizada la tarea de mantenimiento del arma. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EPI recomendado: guantes resistentes a los productos químicos, según norma UNE-EN ISO 374:2016. Gafas de seguridad con protecciones laterales, según norma UNE EN 1731:2007.

RHL-2. Exposición a agentes químicos (310), durante la tarea de mantenimiento, de engrase del arma, para el almacenamiento a corto/largo plazo. Grasa de automoción y artillería: realizar la la tarea de mantenimiento, de engrase del arma, para el almacenamiento a corto/largo plazo, en espacios ventilados. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de manera sistemática finalizada la tarea de mantenimiento del arma. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EPI recomendado: guantes resistentes a los productos químicos, según norma UNE-EN ISO 374:2016. Gafas de seguridad con protecciones laterales, según norma UNE EN 1731:2007.

Tarea de prácticas de tiro individual con armamento y munición de dotación individual reglamentaria

RHL-1. Exposición al ruido (330), utilización protectores auditivos que atenúen de forma eficiente, por debajo del límite permitido, los ruidos impulsivos producidos por el disparo y a su vez no interfieran en los sonidos de niveles

normales que no sobrepasen el límite superior a $L_{pico} = 135 \text{ dB(A)}$ ⁵⁴⁴. EPI recomendado: protectores auditivos, según norma UNE-EN 352-2, Protectores auditivos, comprobada su atenuación eficiente al disparo. Además, se pone de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de este personal, por lo que se deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dicho personal, y estos someterse a ésta⁵⁴⁵.

c) Medidas preventivas de ergonomía

Tarea de Orden Cerrado

RE-1. Posturas forzadas (410), calentamiento previo de grupos musculares que intervengan en los movimientos. Información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar posturas inadecuadas que conlleven esfuerzos importantes, realizar pausas durante la ejecución de los movimientos, para realizar estiramientos de los grupos musculares implicados. Informar de los factores de riesgo que favorecen a la aparición de TME y de las lesiones.

RE-2. Manipulación manual de cargas (440), calentamiento previo de grupos musculares que intervengan en los movimientos. Información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar posturas inadecuadas que conlleven esfuerzos importantes, realizar pausas durante la ejecución de los movimientos, para realizar estiramientos de los grupos musculares implicados. Informar de los

544. Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80 \text{ dB(A)}$ y $L_{pico} = 135 \text{ dB(C)}$, respectivamente. $L_{Aeq,d}$, definido como el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A es el que tendría un ruido continuo que en el mismo tiempo de exposición transmitiera la misma energía que el ruido variable considerado. Vid. Art. 5, RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

545. Según lo dispuesto en el art. 11.1 del RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

factores de riesgo que favorecen a la aparición de TME y de las lesiones. Establecer un periodo de adaptación a realizar los movimientos con manos enguantadas.

RE-3. Posturas forzadas. Posición de firmes (410), entrenamiento progresivo, manteniendo esta posición en las mismas condiciones y circunstancias que en los actos militares. Calentamiento previo de grupos musculares que intervengan en los movimientos. Información detallada del movimiento a ejecutar, a fin de evitar posturas inadecuadas que conlleven esfuerzos importantes. Informar de los factores de riesgo que favorecen a la aparición de TME y de las lesiones. El día anterior al acto militar: no cenar copiosamente, no beber bebidas alcohólicas/sustancias psicotrópicas y dormir 8 horas. El día del acto militar: desayuno con aporte de carbohidratos, realizar Instrucción Físico Militar ligera, hidratación y evitar posiciones en bipedestación prolongada estática innecesarias.

Tarea de instrucción táctica individual del combatiente, orientación y orientación básica

RE-1. Manipulación manual de cargas (440), adaptación del peso de la carga (armamento/equipo de combate), a las características antropométricas singulares de cada combatiente, calentamiento previo de grupos musculares que intervengan en los movimientos y realización de un periodo de adaptación progresiva al levantamiento de pesos, incrementándolo paulatinamente, hasta conseguir una resistencia muscular adecuada al peso a transportar.

Tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos

RE-1. Manipulación manual de cargas (440)», calentamiento previo de grupos musculares que intervengan en los movimientos, realización de un periodo de adaptación progresiva al levantamiento de pesos, incrementándolo paulatinamente, hasta conseguir una resistencia muscular adecuada al peso a transportar, y utilización de medios alternativos de arrastre por un solo individuo, tales como el arnés de transporte del combatiente herido, basado en correas y hebillas que permitan cargarlo como una mochila, distribuyendo su peso uniformemente para que pueda ser evacuado con prontitud⁵⁴⁶. O con correas y hebillas que permiten el arrastre del herido por un solo combatiente⁵⁴⁷.

Gráfico 24. Hasty Harness® y DRAGON®. Fuente: NARECUE.
«<https://www.narescue.com/>»



9.1.7. Fase 7. Impacto de las medidas preventivas en el desarrollo de la tarea de las tareas

El art. 9 del RD 1755/2007, de 28 de diciembre, expone que la formación en materia de prevención de riesgos laborales quedará garantizada mediante su

546. Vid. HASTY HARNESS®, [Consulta:15/04/2018], «<https://www.narescue.com/catalog/product/view/id/4207>».

547. Vid. DRAGON®, [Consulta:15/04/2018], «<https://www.narescue.com/dragon-handle-system>»,

inclusión en los diferentes niveles de la enseñanza militar. Sin embargo, las tareas descritas y evaluadas de la actividad de Instrucción individual no se rigen por lo preceptuado en él, sino por sus normas propias de seguridad. Correlativamente, se comprueba que los riesgos laborales observados no se contemplan, ni son evaluados. Eso sí, ello no impide que existan limitaciones a la hora de efectuar el análisis y evaluación, como es el caso de la tarea de Orden Cerrado en las que los movimientos que puedan suponer riesgos de TME varían en función de las características singulares de cada aspirante a militar profesional; o en el caso de la tarea de prácticas de primeros auxilios y transporte de heridos, en la que los resultados arrojan la imposibilidad de adopción de medidas correctivas que los eliminen, pues su única solución sería impedir la evacuación de forma individual del combatiente herido, dada la invariabilidad de la masa a transportar, u obligar a que la evacuación se realice como mínimo por binomios. Esta decisión colisionaría con los valores morales que se imprimen al personal, pues supondría no evacuar al compañero herido hasta recibir ayuda para realizarlo, circunstancia que durante el combate no es inmediata y que por lo tanto, conllevaría una pérdida de tiempo vital para el herido. Por ende, se observa que las medidas preventivas a adoptar no suponen injerencia alguna durante la ejecución de las tareas evaluadas y por ello, se cree conveniente que se adopten medidas preventivas además de las propias normas de seguridad. No cabe duda de que al incluirlas en las publicaciones militares de Instrucción, éstas deberían modificarse a fin de adaptarse al conocimiento de los riesgos observados.

9.1.8. Fase 8. Propuesta de medidas preventivas

Llegados a la octava y última fase se recomienda que se eleven a la cadena de Mando las medidas preventivas adoptadas descritas en epígrafes anteriores, para su oportuna propuesta de integración e implementación en las publicaciones militares del Ejército de Tierra y en las demás normas que se hayan dictado con anterioridad a la evaluación del riesgo. Una vez integradas estas medidas preventivas podrán ser consideradas como normas propias de seguridad para la actividad de Instrucción individual, que en conjunto con las normas para las actividades de Adiestramiento y Operativas, constituyendo el plan de prevención de riesgos laborales para estas actividades, y dando así cumplimiento al art. 6.4 del RDPRLFAS.

10. Resumen de la evaluación de las tareas de la actividad de Instrucción individual

En la actividad de Instrucción individual, durante la Fase de Formación General Militar del aspirante a militar profesional, se han evaluado, utilizando los instrumentos en materia de PRL, las tareas correspondientes al ámbito de la Instrucción táctica, técnica y de tiro. Los resultados arrojan un computo de dieciséis riesgos que afectan a la seguridad laboral, tres que afectan a la higiene laboral y cinco que afectan a la ergonomía en el trabajo.

Para obtener dichos resultados, se ha utilizado la misma metodología de evaluación de riesgos laborales que se emplea en las actividades comunes del Ejército de Tierra, además de aplicaciones informáticas de organismos de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien,

se han introducidos parámetros singulares, para que puedan ser analizados en las tareas militares de la actividad de Instrucción.

Como dato significativo se destaca que, tanto para la detección de los riesgos como para sus medidas preventivas, se ha empleado la normativa específica en PRL empleada para las actividades comunes que a continuación se desarrolla, lo que demuestra la compatibilidad con las normas propias de seguridad sin que afecten a su ejecución:

- Para los riesgos laborales de seguridad laboral se ha empleado lo expuesto en el RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ya que las áreas de los centros militares, con independencia de que estén edificadas o no, donde se realiza la Fase General de Instrucción se ajusta a la definición expresada en el art. 2 del citado RD⁵⁴⁸.
- La exposición al ruido y a los riesgos sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos se han empleado respectivamente: el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

548. En el art. 2 del RD 486/1997, establece que se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos. Lo que nos muestra el amplio alcance de la definición.

los agentes químicos durante el trabajo, por ser afines a los riesgos descritos.

- Los riesgos laborales de ergonomía se han seguido por lo preceptuado en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. Los riesgos observados tales como el manejo del arma, la carga del portaequipo de combate y el transporte de heridos encajan perfectamente en la definición de manipulación manual de cargas reflejada en el art. 2: *«cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores».*

En la siguiente tabla se reflejan de forma esquemática los riesgos agrupados por tareas y modalidad:

Tabla 29. Resumen de riesgos laborales. Fuente elaboración propia.

	ORDEN CERRADO	ARMAMENTO INDIVIDUAL	TIRO	TÁCTICA	PAS
SEGURIDAD LABORAL					
(010) Caída de personas a distinto nivel				X	
(020) Caídas de personas al mismo nivel	X	X		X	X
(090) Golpes por objetos	X	X	X	X	X
(090) Cortes por objetos	X	X			
(100) Proyección de fragmentos o partículas		X	X		
(110) Atrapamientos por o entre objetos	X	X			
HIGIENE LABORAL					
(310) Químico - Líquido Exposición a contaminantes químicos		X			
(330) Físico - Exposición al ruido	X		X		
ERGONÓMICOS					
(410) Físico. Posturas forzadas. Movimientos en general	X				
(410) Físico. Posturas forzadas. Posición de firmes	X				
(440) Físico. Manipulación manual de cargas	X			X	X

Por otro lado, se observa que en las normas propias de seguridad por las que se rigen estas tareas comprendidas en la actividad de Instrucción, no se contempla la evaluación de los riesgos laborales descritos. Mediante el proceso desarrollado en puntos anteriores, el Jefe de la unidad dispone del conocimiento de la situación respecto a la seguridad y salud de su personal. Además de un diagnóstico en materia de PRL, que le permite adoptar las medidas preventivas necesarias para la eliminación de los riesgos, lo que se traduce en un aumento de la seguridad y salud del personal evaluado y, por ende, de su operatividad.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

1. Conclusiones

Sobre la estructura PRL

Primera. -

Se constata que a lo largo del periodo comprendido entre los siglos XIX y XX, la preocupación del legislador por velar por la seguridad e higiene en el trabajo, siempre se ha dirigido al personal de carácter civil. No existe ninguna mención o reseña en el ordenamiento jurídico de este periodo al personal militar. La legislación publicada en el último cuarto del siglo XX, en su mayoría vigente en la actualidad, no contempló derecho alguno al personal militar en el ámbito de la PRL. A su vez, se observa que, entre los principios rectores de la política social y económica promulgados en el art. 40.2 de la CE, se destaca el siguiente: *«Los poderes públicos, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo»*, y sin embargo se obvia al personal militar, ya que la legislación preventiva que cumplimenta y desarrolla esta obligación, la LPRL, no lo incluyó en su ámbito de aplicación. En otras palabras, parece que no ha existido interés o preocupación por garantizar la seguridad y salud de este personal mediante una normativa reguladora.

Segunda. -

Promulgada la DM y transpuesta en el acervo jurídico español a través de la LPRL y otras normas, se detecta que sólo afecta al personal civil, lo que provoca el fallo de la STJUE de 12 de enero de 2006, en la que se condenó al Reino de España por no haber adaptado o sólo parcialmente los arts. 2 aptdo.

primero y segundo, y cuatro de esta Directiva. A partir de la sentencia dictada, la legislación preventiva experimenta un giro radical, al tener que modificarse la LPRL y abarcar en su ámbito a todo el personal, sin discriminación alguna según su carácter civil o militar.

Tercera. -

La demora en la transposición de los preceptos derivados de la DM, ha marcado significativamente su implementación en el Ejército de Tierra. La modificación de la LPRL en el año 2006, provocó en las FAS la promulgación de RDPRLFAS en el año 2007. No obstante, adicionalmente se produce una dilación de cuatro años en la constitución de los Servicios de PRL en los respectivos ejércitos. Durante ese periodo de carencia de la normativa interna de PRL en las FAS, el personal militar no estuvo amparado por la LPRL. En el año 2011, se publica la normativa interna que instituye la PRL en los respectivos Ejércitos. En el caso del Ejército de Tierra la Directiva del JEME 02/11, es considerada el punto de partida en la implantación de la estructura de la PRL en el Ejército. Consecuentemente, ha existido un retraso de más de quince años.

Cuarta. -

La implantación inicial de la PRL en el Ministerio de Defensa, derivada de la adaptación de la LPRL a la AGE, no supuso cambio alguno en su estructura orgánica. Incardinándose en un organismo ya existente, la Dirección General de Personal, simplemente como una función más a asumir. Este hecho es constatado al comprobarse que, con motivo del cumplimiento de la normativa de adaptación de la legislación de PRL a la AGE, se eligió para la organización de

los recursos necesarios destinados a la gestión preventiva del Ministerio de Defensa, la modalidad de gestión por un Servicio de Prevención Ajeno. Ello revela el escaso interés del departamento ministerial por constituir un Servicio de Prevención Propio que asumiera las competencias de la gestión preventiva en cada BAE/UCO, a pesar de contar con un número elevado de personal civil a su servicio. Hasta la modificación de la LPRL producida por la Ley 31/2006, no se crea un organismo *ad hoc*, para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los miembros del Ministerio de Defensa. Si inicialmente se decidió implantar un Servicio de Prevención Ajeno; a posteriori, la ampliación de la prevención de riesgos laborales al personal militar, hizo tomar una nueva decisión, basada en la obligatoriedad impuesta en el RSP, involucrando de lleno al Ministerio y obligando a modificar su estructura e introducir un nuevo organismo: la UCSVPRL, que gestionará el Servicio de Prevención de la Defensa y, por ende, la estructura orgánica básica de las FAS, creándose los respectivos Servicios de Prevención subordinados funcionalmente a éste.

Quinta. -

La creación de una estructura prevencionista en el seno de los ejércitos, hasta el año 2011 inexistente, requirió de un considerable esfuerzo. Al asumir los preceptos de la LPRL, los ejércitos tuvieron que enfrentarse a problemas de distinta índole: la dotación de recursos humanos militares cualificados con los que no se contaban, Técnicos Superiores e Intermedios, cuya titulación solo puede obtenerse a través del sistema general educativo; la readaptación de la plantilla de personal militar por parte de la División de Planeamiento del Estado Mayor del Ejército de Tierra a esta incipiente estructura, sin provocar ello

aumento alguno de la misma para respetar así las plantillas reglamentarias aprobadas por Consejo de ministros; la austeridad en el presupuesto económico, al no dotarse de cuantía alguna. Problemas que, en mayor o en menor medida, subsisten actualmente y que no cuentan con soluciones a corto plazo.

Sexta. -

El criterio empleado en la implantación de la estructura de la PRL, es distinto en cada ejército y no obedece a una directriz común. Aunque la normativa del Ministerio de Defensa ordena su establecimiento y la creación de las Secciones y Servicios de prevención, no prevé una estructura común a los ejércitos, sino que por el contrario la deja a la libre elección de sus respectivos Jefes de Estado Mayor. La repercusión de esta opción es significativa y puede que lleve a una interpretación errónea sobre a qué actividades van dirigidas las medidas de PRL. Mientras que en el Ejército de Tierra la gestión de la PRL se encuadra en el Apoyo a la Fuerza, núcleo responsable, entre otros, de la dirección, gestión, administración, coordinación y control de las materias relacionadas con las infraestructuras y aquellas otras que se determinen relacionadas con la vida y funcionamiento de las Unidades en la Armada. En el Ejército del Aire, por el contrario, la gestión se centraliza en su Cuartel General, núcleo que encuadra los recursos humanos y materiales que necesitan el AJEMA y el JEMA para el ejercicio del mando de sus respectivos ejércitos, con la diferencia de que uno lo desarrolla por la cadena de Mando de la División de Logística de su Estado Mayor y el otro por la cadena de Mando de la División de Operaciones de su Estado Mayor.

Tres ejércitos y tres estructuras distintas para la gestión preventiva, una dirigida fundamentalmente a las BAE, la del Ejército de Tierra, otra incardinada desde la función logística, la de la Armada y por último, otra dirigida a las Operaciones, la del Ejército del Aire. Tres implantaciones distintas en las que las actividades de I/A, quedan excluidas de su ámbito. A nuestro juicio, una estructura basada en los recursos humanos y no en las instalaciones, como ocurre en el Ejército de Tierra, permitiría la inclusión de las tareas de I/A.

Séptima. -

La Armada es el único ejército que cuenta en su estructura de PRL con la denominada Seguridad Operativa (SEGOP). Por lo que sus técnicos en PRL realizan una doble tarea. Por un lado, la gestión de la PRL para preservar la seguridad y salud del personal de la Armada, ya sea civil o militar. Y por otro, la SEGOP dirigida a asegurar su operatividad, preservando tanto sus medios humanos como materiales al más alto nivel de eficacia posible para cumplir sus misiones. De esta forma, aglutina en un mismo instrumento la gestión de todos los riesgos del personal, con independencia de las actividades que realice, ya sean comunes o no.

La sinergia de estas dos disciplinas aporta a la Armada las herramientas y procedimientos necesarios para alcanzar el objetivo de contribuir a aumentar su operatividad, mediante la reducción del número de accidentes y su gravedad, la mejora de la salud de sus miembros y la eliminación o disminución de riesgos a niveles aceptables, a través de una adecuada gestión de los mismos. Un mismo técnico de PRL, aporta sus conocimientos en materia preventiva que,

conjugándolos con su formación militar, proporciona una visión más amplia que la de los técnicos de PRL de los ejércitos de Tierra y Aire, cuya finalidad sólo se limita a los riesgos de las actividades comunes.

De las peculiaridades de los miembros de las FAS

Octava. -

Las particularidades e idiosincrasia inherentes al personal castrense, son factores determinantes que hacen que la Administración militar se diferencie de la Administración civil. Pero no se considera tan relevante como para provocar que este personal fuera excluido de la LPRL. El propio EBEP, les incorpora en el ámbito subjetivo sobre el que actúan los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la AGE, con la limitación de que no contradigan su legislación específica. Esto coadyuva a justificar que el personal militar disfrute de los mismos derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que el resto de los empleados públicos de la AGE, excluyéndose sólo aquellas actividades que, por sus características particulares, no por criterios extensivos, impidan la aplicación de la LPRL. El principal obstáculo que tiene la Administración pública es la adaptación de la regulación de la PRL de origen laboral, a las distintas peculiaridades del personal que la Administración integra. Ese es el caso de las FAS, encuadradas orgánicamente en el Ministerio de Defensa, a las que el carácter militar de sus miembros y la naturaleza de sus actividades hacen diferente del resto de organismos. La capacidad de resistir, recuperarse, rehacerse y adaptarse del militar a circunstancias y situaciones adversas que por su profesión tienen que afrontar, devenidas del cumplimiento de las misiones legalmente atribuidas, les hacen asumir riesgos inevitables. Sin

embargo, es obvio que no por esa razón puede excluírseles del amparo de la legislación preventiva. Por ello, el RDPRLFAS supuso la aplicación y adaptación de la LPRL al personal militar, y excluyó únicamente aquellas actividades de las FAS cuyas singularidades lo impidieran. Sin embargo, se observan tareas, en las actividades excluidas, que pueden ser compatibles con una adecuada protección de la salud, seguridad e higiene en el trabajo y con la necesidad de salvaguardar los intereses de la defensa nacional, sin menoscabo o perjuicio de la adecuada operatividad y eficacia de las Unidades.

Novena. -

Se evidencia un agravio comparativo entre los derechos del personal civil y los del personal militar de la Administración militar, reflejado en los reconocimientos médicos efectuados a ambos colectivos. Cabe recordar que la vigilancia de salud, de carácter preceptivo según la LPRL, no se asume por parte del Ministerio de Defensa y, por ende, de sus respectivos ejércitos, por acogerse éstos como SVPRL propio, a la externalización de las actividades de la especialidad preventiva de medicina del trabajo. Se constata que, durante la formalización de contratos realizados por la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, el importe del valor estimado en la contratación de SVPRL ajenos para realizar los reconocimientos médicos a los respectivos colectivos, arroja una diferencia desproporcionada entre los costes derivados de las plantillas de personal civil y militar. Esto ocasiona que, mientras los reconocimientos del personal civil son sufragados totalmente, el exiguo presupuesto destinado al personal militar, exige racionalización económica, ya que no se contempla partida presupuestaria que

abarque dichos reconocimientos en su totalidad. En este contexto de austeridad, se procede a una rigurosa selección del personal militar que se somete a reconocimientos médicos, basada en los riesgos específicos de su puesto de trabajo, eligiéndose aquellos que ocupan puestos de trabajo en los que la SCPRLET ha determinado un mayor riesgo (trabajos en altura, exposición a radiaciones ionizantes, uso de productos fitosanitarios, exposición a riesgos biológicos, exposición a sustancias químicas), y apartando al resto de este derecho debido a la precariedad económica del presupuesto asignado. Como dato significativo, se observa que no se contempla presupuesto alguno para los reconocimientos médicos del personal militar que desarrolla las actividades de I/A, realizándose únicamente los reconocimientos médicos previos al desarrollo de las pruebas físicas obligatorias, que no obedecen a protocolo específico alguno relacionado con el puesto de trabajo, sino con el esfuerzo de las propias pruebas físicas.

Sobre la implantación de la PRL en otros países de la UE

Décima. -

La adopción e implementación de una norma específica en materia preventiva que afecta tanto al personal civil como al militar y la previsión de su inaplicación en aquellas actividades cuyas particularidades inherentes son propias de la profesión militar, ha sido el denominador común en Francia e Italia, al igual que en España. Sin embargo, Portugal carece de normativa estatal y específica en materia preventiva que afecte al personal militar, por lo que parece que incumple la DM. Este aspecto diferenciador hace que las actividades excluidas en Francia e Italia sean comunes a las definidas por España, aunque

con nombres diferentes, caso contrario al de Portugal cuya reglamentación no las contempla las actividades que desarrolla el personal militar. Como dato significativo encontramos que el desarrollo específico de la legislación en materia preventiva estatal que afecte al personal militar del Ministerio de Defensa, sólo existe en Francia y España, pues la legislación italiana trata a los trabajadores públicos, civiles o militares, de forma igualitaria, haciendo mención a las actividades excluidas en su normativa preventiva. En Portugal, la incertidumbre, el vacío normativo en la materia preventiva en lo relativo al personal militar, repercutirá negativamente sobre el mismo, vulnerándose sus derechos al no garantizarse su seguridad y salud en su actividad profesional. En este sentido, el Jefe de Estado Mayor del *Exército português*, consciente de la precariedad de la normativa preventiva estatal que no recoge al personal militar de su ejército, ha asumido la responsabilidad de implantar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en sistema OSHAS 18001, para el personal militar que realiza su labor en Unidades, Establecimientos y Órganos, que permita aumentar su seguridad.

Aspecto común en los ejércitos de Tierra de Francia, Italia y España es que han implementado un sistema de gestión de la PRL, a diferencia del portugués, basado en su propia normativa. A nuestro juicio, existen una gran similitud del sistema empleado por Francia y España, desde la transposición de la DM hasta la publicación de una normativa preventiva específica que afecta al Ministerio de Defensa de los respectivos países. No parece adecuado, en nuestra opinión el criterio adoptado por Italia al aglutinar en la misma normativa al personal civil y militar sin que exista una normativa específica de desarrollo

para el militar. A pesar de sus carencias, la iniciativa del *Exército português* de dotar a sus miembros de una norma interna de seguridad y salud es positiva, aunque al estar basada en una norma internacional de carácter civil tendría que ser adaptada a las singularidades del propio ejército.

De la diferenciación entre las actividades de I/A y Operativas

Undécima. -

Existen aspectos diferenciales entre las actividades de I/A y Operativas que no justifican el criterio utilizado por el legislador para aglutinarlas en el conjunto de las actividades excluidas de la aplicación de la LPRL: 1.- La diferente localización de su ejecución, unas en entornos seguros en tiempo de paz y otras en entornos hostiles e inseguros. 2.- La preparación constante de la Fuerza, mediante el desarrollo programado de la I/A, que proporcionará una mayor capacidad de combate durante el transcurso de una operación. 3.- La ausencia de bajas en combate durante la I/A frente a las que se asumen en las actividades Operativas. 4.- La rutina programada de la I/A frente el carácter excepcional de las Operativas. El conjunto de estos datos constituye argumento suficiente para considerar que el criterio empleado por el legislador para agrupar estas actividades en un mismo grupo, no es el adecuado.

Duodécima. -

Las tareas encuadradas dentro de las actividades de I/A y Operativas, tienen un mayor impacto en el personal militar destinado en Unidades que pertenecen a la Fuerza, ya que en este núcleo se desarrollan los PGIA/PAP que las contemplan. En menor medida, y por este orden, los núcleos de Apoyo a la Fuerza y del Cuartel General, se caracterizan por un mayor desarrollo de las

tareas comprendidas en las actividades comunes. Sin embargo, no por ello se puede obviar a estos núcleos de la realización de las tareas de I/A, puesto que sus PGIA/PAP también las contemplan. Además, su personal militar puede ser comisionado para formar parte de los contingentes militares que ejecutan misiones Operativas.

De la diferenciación entre las actividades de I/A

Décimo tercera. -

Las actividades de I/A tienen distinta finalidad. Por un lado, la actividad de Instrucción, ya sea impartida como enseñanza de formación, o como complementaria de aplicación y de mandos, cumple el objetivo de proporcionar a los componentes del Ejército de Tierra la aptitud necesaria en los aspectos técnicos, morales y físicos para el desempeño de sus tareas, tanto de forma individual como colectiva. Por otro, la actividad de Adiestramiento se dirige a proporcionar a las Unidades la aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas o aquellas en las que esté previsto su empleo. La sinergia de ambas actividades proporciona la capacidad de combate del Ejército de Tierra, pero con procedimientos diferentes. Por ello, la aplicación de medidas de seguridad y salud a ambas debería tratarse de forma diferenciada.

Décimo cuarta. -

Las actividades de I/A, cuya finalidad es la preparación adecuada del personal militar para la ejecución de las operaciones militares, no deben considerarse «acontecimientos excepcionales», que impidan la aplicación de la LPRL, al realizarse estas de forma periódica en las Unidades militares. La

inaplicación de la PRL a estas actividades, a nuestro juicio, genera una interpretación distinta y generalista, diferente a la pronunciada por el TJUE. Sin embargo, se considera correcta la exclusión de las actividades Operativas, pues se presentarán circunstancias en las que del cumplimiento de la operación dependa la seguridad e integridad de la colectividad.

Décimo quinta. -

El criterio empleado por el legislador para definir la actividad de Instrucción, interpretado literalmente, provoca efectos distorsionadores. Por un lado, se encuentra la actividad de Instrucción, recogida en los PGIA y ejecutada en el seno de las Unidades. Por otro, la actividad de Instrucción impartida en los centros docentes militares de formación, encuadrada en la enseñanza de formación, dentro de sus planes de estudios, dirigida a la capacitación del militar. Esta última, al no estar recogida en los PGIA podría considerarse no excluida de la normativa preventiva, lo que ocasionaría un resultado arbitrario. Pues dependiendo de su inclusión en un plan o en otro, la misma actividad quedaría sujeta a sus propias normas de seguridad, o a la normativa preventiva.

La inadecuada exclusión de las actividades de I/A de la aplicación LPRL

Décimo sexta. -

Las peculiaridades inherentes al personal militar, diferenciadoras del resto de empleados públicos, a nuestro juicio, no deberían servir de pretexto para excluir de la LPRL a las actividades de I/A que se realizan en tiempo de paz y en situaciones no bélicas. La asunción de los riesgos de la vida castrense, la consagración de servir a la patria, e incluso entregar su vida por ella si fuera

preciso, no sustenta una base sólida que respalde el argumento de esta exclusión. Mantenerla provoca la banalización y trivialidad de la condición militar, por asumirse que estos riesgos existen *sine qua non* por ser militar y, que por lo tanto, no necesitan prevención alguna. El cumplimiento inevitable de las misiones encomendadas a las FAS por la LODN, englobadas en las actividades Operativas, goza de unas características singulares distintas a las previstas para las actividades de I/A. Los miembros de las FAS se enfrentarán a riesgos durante las actividades Operativas, que deben aceptar durante su transcurso y que les obligan en beneficio de la misión. Por el contrario, en las actividades de I/A no se le exige al personal militar que renuncien a su seguridad personal en beneficio de estas actividades, ni se produce cálculo previo alguno de bajas, pues solo como vicisitud durante el transcurso de un ejercicio táctico, éstas son simuladas para que las Unidades se adapten y evolucionen en función de su capacidad de combate y, en el caso de producirse un accidente real, se paraliza la actividad.

Décimo séptima. -

La interpretación extensiva utilizada para excluir a las actividades de I/A y Operativas de la aplicación de la LPRL, al aglutinar éstas una gran variedad de tareas, es contraria a la finalidad perseguida por los principios de la actividad preventiva y, además, en determinadas circunstancias se observan dificultades para garantizar la seguridad y salud del personal militar sólo con las medidas de seguridad internas. Por ello, se considera necesario un criterio adecuado que matice su exclusión, diferenciando aquellas tareas que son incompatibles con la aplicación de la normativa preventiva, tales como situaciones de combate, y aplicándose al resto.

Décimo octava. -

La defensa nacional no debe esgrimirse como principio limitador que conlleve la exclusión del personal militar de la aplicación de la LPRL durante el desempeño de las actividades de I/A. A lo sumo, llegado el momento de una agresión contra la sociedad española (que vulnere valores superiores, principios e instituciones, el ejercicio de los derechos y libertades, las garantías; o la independencia e integridad territorial de España), se podrían restringir los derechos de este personal, en materia preventiva, pero no antes. Es decir, a nuestro juicio, la salvaguarda de la defensa nacional, no constituye un principio limitador que permita argumentar sólidamente la inaplicación de la LPRL en todas las actividades de I/A. Por un lado, las misiones encomendadas al Ejército en tiempo de paz, son orientadas a la preparación de sus miembros para lograr la operatividad de las Unidades, y que estén en disposición de asumir los eventuales riesgos derivados de un conflicto bélico, lo que no les exime de regirse por normas de seguridad y salud. Y por otro, la salvaguarda de la defensa nacional no es una obligación que se le atribuye exclusivamente al personal militar, todo lo contrario, es compartida con el resto de la población, y esta no deja por este motivo de estar protegida bajo el manto de la LPRL.

Décimo novena. -

No existe diferenciación entre el personal militar que realiza actividades comunes y el que desarrolla las actividades de I/A. Se puede afirmar que todo el personal militar desarrolla ambas durante su destino en las Unidades, aunque lógicamente no de forma simultánea. La carga de trabajo de ambas actividades es diferente, según se pertenezca al Cuartel General, la Fuerza o al Apoyo a la

Fuerza, pero ello no es un indicador válido para que este personal quede sujeto, de forma arbitraria a distintas normas, unas dimanadas de la LPRL y otras consideradas propias, lo que podría constituir una potencial lesión al art. 14 de la CE. Por ello, a nuestro juicio, regir las actividades de I/A por los mismos preceptos preventivos que las actividades comunes, proporcionaría un aumento de la seguridad y salud en el trabajo de este personal, eliminándose todos aquellos criterios particulares que pueden provocar sesgos y desviaciones durante la ejecución de estas actividades.

De la carencia de las normas propias de seguridad y operación

Vigésima. -

Las normas propias de seguridad y operación se basan, en caso de existir, en la normativa interna particular de los ejércitos *ad hoc*, que no se rigen por los mismos parámetros que se señalan para la prevención en las actividades comunes. Estas pautas dimanar de la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas de la UE que constituyen el acervo jurídico comunitario en materia de seguridad y salud en el trabajo. Correlativamente, parece incorrecto que el RDPRLFAS denomine al conjunto de estas normas como plan de prevención de riesgos laborales, pues están desprovistas de una publicidad adecuada, carecen de fuerza imperativa y no tienen la especificidad, precisión y claridad requeridas para cumplir las exigencias derivadas de la seguridad jurídica. Asimismo, los criterios utilizados para su elaboración difieren de los utilizados en el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades comunes observándose carencias preventivas.

Vigésima primera. -

Las vigentes normas propias de seguridad desarrolladas para las actividades de I/A y Operativas, no deben ser estancas y aisladas. Para su redacción se considera conveniente seguir las recomendaciones en materia de PRL que dimanen de la estructura preventiva. La función de estas últimas es complementar a las primeras, de tal forma que prime la seguridad y simultáneamente se evite cualquier conflicto o incompatibilidad que pudiera mermar la eficacia y operatividad del personal y, por ende, de sus Unidades. Se constata un escaso interés del Ejército de Tierra por aprovechar los principios preventivos aplicados a las actividades comunes en el desarrollo de las normas propias de seguridad para las actividades de I/A. La exclusión preceptuada en el RDPRLFAS, se interpreta erróneamente como una imposición legal inamovible que no admite aprovechamiento alguno de los instrumentos empleados en las actividades comunes, para la detección y corrección de los riesgos en el desempeño profesional de las actividades de I/A. Más aun, cuando en ocasiones no existen normas propias de seguridad o las orientaciones que sirven como modelo para su desarrollo están obsoletas y derogadas.

Actualmente en el Ejército de Tierra no existe publicación militar alguna, que con carácter general sirva de orientación para la regulación de las normas propias de seguridad a las que están sujetas las actividades de I/A y Operativas. No por ello se puede afirmar que no existan las normas de seguridad, si bien hay que resaltar que no abarcan todas las tareas que se desarrollan en las citadas actividades. Las existentes son creadas en el seno de las propias Unidades. Consiguientemente, sobre las mismas actividades pueden ser empleados

distintos criterios, lo que ocasiona una falta de uniformidad que repercute en la seguridad y salud del personal militar.

Vigésima segunda. –

La carencia del plan de prevención de riesgos laborales para las actividades de I/A y Operativas en el seno del Ejército de Tierra, como documento único conformado por el conjunto de las normas propias de seguridad, suscita dudas sobre su efectividad y eficiencia. En contraposición, para las actividades comunes existen un Plan General de PRL, desarrollado específicamente en las BAE, denominado Plan Ordinario de PRL. La elaboración de este Plan Ordinario para las actividades de I/A y Operativas, en unión con el existente para las actividades comunes crearía una sinergia, cuyo beneficio se plasmaría en una regulación armonizada, que permitiría detectar incoherencias y ambigüedades, aumentando la seguridad y salud de sus miembros.

De los accidentes de trabajo. -

Vigésimo tercera. -

La investigación de los accidentes acaecidos durante la ejecución de las actividades de I/A, no se enfoca desde la perspectiva empleada en los accidentes de las actividades comunes, «encontrar la causa que evite su repetición», sino que va dirigida fundamentalmente a la depuración de las responsabilidades implicadas en el siniestro. La utilización de la metodología prevencionista, permitiría aminorar la incidencia de las causas que los originan, siguiendo los principios de Prevención-Evaluación-Planificación.

Vigésimo cuarta. -

Los datos estadísticos revelan que los procedimientos empleados para la investigación de los accidentes ocurridos durante la ejecución de las actividades de I/A en el Ejército de Tierra, no son eficaces, dado que no neutralizan su repetición. Sin embargo, la utilización de las técnicas empleadas en la investigación de los siniestros producidos durante el desarrollo de las actividades comunes, aporta evidencias vinculadas a las causas que lo originaron, diferentes de las distintas responsabilidades a las que puede estar sometido el sujeto, y conduce a la no repetición del siniestro, elemento primordial para aumentar la seguridad y salud del personal militar y, por ende, la operatividad de las Unidades al disminuir su tasa de siniestralidad.

De la evaluación de los riesgos de las tareas de la actividad de Instrucción

Vigésimo quinta. -

La utilización de un procedimiento específico, proactivo y reactivo basado en la metodología empleada por el Ejército de Tierra para evaluación de riesgos laborales de las actividades comunes, se ha estimado apropiado para evaluar las tareas comprendidas en la actividad de Instrucción de la Fase de Formación General Militar del aspirante a militar profesional. Ello ha permitido demostrar la potencial inexistencia de la prevención de estos riesgos en las normas propias de seguridad y, a su vez, la compatibilidad de aplicar las medidas correctivas y preventivas adecuadas para la eliminación de los riesgos laborales detectados sin que por ello se afecte al objetivo de la Instrucción, lo que se traduce en un aumento de la seguridad y salud del personal evaluado y, por ende, de su operatividad.

Del beneficio de la integración de las actividades I/A en la gestión preventiva del Ejército de Tierra

Vigésimo sexta. -

La existencia de instrumentos preventivos que se utilizan en la evaluación de los riesgos laborales de las actividades comunes, basados en técnicas contrastadas y reconocidas por organizaciones internacionales de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de ser aplicadas a las actividades de I/A del Ejército de Tierra, facilitaría la detección, reducción, e incluso eliminación de los riesgos. Asimismo, sería necesaria la revisión de todas las tareas en las que se subdividen las actividades de I/A de Ejército de Tierra por parte de la estructura de la PRL y su clasificación, de forma que se pudiera crear un catálogo común a todas las Unidades del Ejército de Tierra, en el que se diferenciarian aquellas a las que sí se puede aplicar la gestión preventiva prevista para las actividades comunes, sería positivo y repercutiría en el incremento de la seguridad y salud laboral.

Vigésimo séptima. -

La asunción de la cultura preventiva de todos los miembros del Ejército de Tierra, personal civil y militar, se conforma como un instrumento fundamental para alcanzar unos niveles óptimos de seguridad y salud. Actualmente, la difusión de la responsabilidad y obligaciones previstas en la LPRL, misión atribuida a los Jefes de Unidades, mandos intermedios y resto de personal, supone un gran esfuerzo motivador que obliga a comprender el alcance que persigue la prevención. La inserción de la estructura orgánica de la PRL en el Ejército, como un mero soporte burocrático de obligado cumplimiento por

imperativo legal, sin comprender el beneficio de su implantación, supone un lastre que hay que abandonar. Ello supone la aceptación de la integración de los principios preventivos en la mayoría de las tareas, ya sean actividades comunes o de I/A. Como contraprestación, probablemente se observarán beneficios palpables en la seguridad y salud de sus miembros, y la disminución de la tasa de siniestralidad.

Vigésimo octava. -

La integración de actividades de I/A en el sistema de gestión de la PRL en el Ejército de Tierra, seleccionadas entre aquellas tareas que no interfieran en el desarrollo de las misiones militares que se encomiendan, permitirá, por un lado, la mejora de la seguridad y salud en el trabajo del personal militar; y, por otro, evitar o disminuir algunas situaciones de riesgo o peligro durante su desarrollo. Con esta idea, se han elegido varias tareas de la Instrucción individual del combatiente, dado que es la primera actividad que recibe el aspirante a militar profesional, con independencia del empleo al que opte. La utilización de los mismos conceptos, técnicas y normativas empleados para las actividades comunes es compatible con la actividad de Instrucción y evidencia la carencia en las publicaciones militares del Ejército de Tierra de procedimientos similares que permitan desarrollar las normas propias de seguridad. De ello se deduce que en este contexto no se contemplan riesgos laborales evaluados, a pesar de demostrarse su existencia.

2. Propuestas de mejora

Primera. - Elaboración de un catálogo de integración de actividades

El estudio específico, realizado en el capítulo IV dentro del ámbito del objetivo general marcado en la investigación, evidencia la plausibilidad de integrar las tareas de la Instrucción en la normativa preventiva, sin que por ello se menoscabe el cumplimiento del objetivo fundamental del Ejército de Tierra, la operatividad de sus miembros y de sus Unidades. La línea más clara de investigación que pudiera derivarse de esta Tesis, consistiría en demostrar una posible integración preventiva de las tareas en las que se subdividen las actividades de I/A del Ejército de Tierra. Los resultados, unidos a la operatividad de aquellas normas propias de seguridad existentes, imprimirían una sinergia cuyo beneficio sería de inestimable valor para aumentar la eficacia de las Unidades.

Segunda. - Creación de la Seguridad Específica

Una propuesta de mejora, es la creación dentro de la actual estructura orgánica preventiva del Ejército, de un instrumento que desarrolle las normas propias de seguridad y operación de las actividades de I/A y Operativas. Este órgano se denominaría «seguridad específica», sería el encargado de cuidar el grado de cumplimiento de la misión, fijando criterios que evaluaran correctamente los posibles riesgos de estas actividades en consonancia con los principios preventivos. A su vez, permitiría a los Jefes de las Unidades velar por la protección y seguridad del personal subordinado, cuando ejecute estas actividades. La finalidad perseguida por este órgano, estaría dirigida a consolidar la operatividad del Ejército de Tierra, adaptando los principios preventivos empleados en la PRL, y construyendo sinergias que permitieran alcanzar altas

cotas de eficacia en el cumplimiento de las misiones. Si bien, no hay que olvidar que esta seguridad solo se aplicaría al personal de carácter militar, al ser éste el único de la Administración militar que realiza estas actividades.

Tercera. - Modificación de la estructura orgánica preventiva

El planeamiento y control de la PRL no derivada de las actividades propias de la preparación y empleo de las Unidades, actualmente está incardinada a la Sección de Acuartelamiento e Infraestructura de la DIVLOG del Estado Mayor del Ejército de Tierra. A su vez la IGE, como órgano del Apoyo a la Fuerza, es la responsable de la dirección, gestión, coordinación y control de la PRL en aquellos aspectos contemplados en la normativa correspondiente. Como se ha observado, toda actividad que esté relacionada con la preparación y empleo de las Unidades queda excluida de la PRL, o expresado de otra forma, las actividades de I/A y Operativas. Esta investigación ha demostrado la compatibilidad de los principios preventivos con al menos algunas de las actividades excluidas, y en base a esta premisa cabe la posibilidad de modificar la estructura preventiva. Por ello, se eleva una propuesta dirigida a la modificación de la estructura orgánica actual del Ejército de Tierra en materia preventiva, en la que la DIVOPE del Estado Mayor del Ejército de Tierra, como órgano responsable del planeamiento y control del área preparación y del seguimiento permanente de las actividades de la Fuerza y de las operaciones militares en las que participa el Ejército de Tierra, asuma el planeamiento y control de la PRL derivados de las actividades propias de la preparación y empleo de las Unidades. Correspondiendo a su Sección de Preparación, la dirección, gestión, coordinación y control de la PRL de las actividades de I/A. Todo ello con un objetivo común, la creación del Plan General de Prevención de

Riesgos Laborales, constituido por el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, y por el plan ordinario de prevención de riesgos laborales para las actividades comunes. Esta modificación, permitiría una mayor fluidez en la coordinación entre las diferentes estructuras, permitiendo la diferenciación, no exclusión, de las actividades en función de criterios preventivos.

Cuarta. - Adaptación de la gestión preventiva del Ejército de Tierra a los reconocidos estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo

El sistema de gestión de la PRL en el Ministerio de Defensa y, por ende, del Ejército de Tierra, no se rige por el estándar internacional de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la actual norma ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Aunque su sistema, desarrollado de forma interna, cumple con los requisitos exigidos en la LPRL, no puede ser certificado por auditorías externas. Correlativamente, ello no permite conocer las carencias de su implementación y gestión por fuentes externas a la Administración militar y, completar así el ciclo de mejora continua del sistema, de modo acorde al estándar citado. La adopción del sistema internacional vigente actual en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, además de lo anterior, proporcionaría un notable impacto económico de ahorro en la Administración militar, al aunar los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) y medioambiental (ISO 14001), con el sistema de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001), en un sistema de gestión integrado. La triple corona alcanzada facilitaría, por un lado, una información importante sobre aspectos, en su caso, a mejorar. Y por otro, una mayor confianza ante sus miembros y la propia Administración de su eficacia y eficiencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., *Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Metodología práctica*, INSST, Barcelona, 2004.
- AA.VV., *Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos en el lugar de trabajo*, Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, 2004.
- AA.VV., «El concepto de daño laboral en España y su comparativo internacional: revisión legislativa española, hispano-americana y europea», *Revista CES Salud Pública*, Volumen 3, núm.1, 2012, págs. 73 a 93.
- AA.VV., *I Jornadas la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas*, Universidad Nebrija, 2013. [Consulta: 23/07/2017], «<https://vimeo.com/79770361>»
- ABAD RIPOLL, E., «La defensa nacional, la piedra angular de la Seguridad Nacional», *La Gaceta*, 9 de mayo de 2017. [Consulta: 21/05/2017], «<http://gaceta.es/noticias/defensa-nacional-piedra-angular-seguridad-nacional-09052017-1955>».
- Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, *Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo*, 2006, págs. 32 a 34.
- AGÜERO, F., *Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada*, Alianza editorial, Madrid, 1995.
- AJANGIZ SÁNCHEZ, R., «Intervenciones humanitarias y opinión pública: de la exigencia al desencanto», *Revista CIDOB d'Afers Internationals*, núm. 60, 2002-2003, págs. 23 a 42.
- ALFONSO MELLADO, C.L., «Constitución, Tratados internacionales y Derecho del Trabajo», *Revista jurídica de los Derechos Sociales*, núm. 5, 2015, págs. 1 a 88.
- ALLI TURRILLAS, J.C., *La profesión militar. Análisis jurídico tras la Ley 17/1999, de 18 de mayo, reguladora del personal de las Fuerzas Armadas*. INAP, Madrid, 2000.
- ALONSO OLEA, M., «El origen de la Seguridad Social en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900», *Papeles y memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, núm. 8, 200, págs. 2 a 13.
- ANGROSINO, M.V. Y MAYS DE PEREZ, K.A., «Rethinking observation: From method to context», DENZIN, N.K., Y LINCOLN, Y.S., (Eds.), *Handbook of Qualitative Research (second edition)*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2000, págs. 673 a 702.

- ARETAGA MARTÍN, F., «El factor europeo en la revisión estratégica española; la nueva dimensión europea de la Defensa», en, AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 59 a 76.
- ARRAZOLA MARTÍNEZ, A, *La banalización de la naturaleza militar en las Fuerzas Armadas*, Premios Defensa 2015. Trabajos seleccionados, Madrid, 2015.
- ARUFE VARELA, A., «La jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas sobre incumplimientos por los estados miembros de sus deberes de transposición y “específicas” en materias de seguridad y salud laboral», *Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral*, núm. 221, 2009, págs. 8 a 13.
- AVILÉS FARRÉ, J., «Por un concepto amplio de seguridad», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 17 a 44.
- BALLESTEROS MARTÍN, M.A., *En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016.
- BARRANTES OLÍAS DE LIMA, D., *El (des)conocimiento de la defensa en la sociedad española*, Real Instituto Elcano, Blog Elcano [Consulta: 1/06/2019], «<https://blog.realinstitutoelcano.org/el-desconocimiento-de-la-defensa-en-la-sociedad-espanola/>».
- BARDAJÍ LÓPEZ, R., «Intereses y ambiciones de seguridad», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 45 a 58.
- BARTOLOMÉ CONDE, S., «Siniestralidad laboral en Melilla. Quinquenio 2012-2016», *Revista Ejército*, núm. 918, 2017, págs. 26 a 31.
- BEEVOR, A., *El día D. La batalla de Normandía*, Grupo Planeta Spain, Barcelona, 2015.
- BERRIO ÁLVAREZ SANTULLANO, F., «Defensa nacional y sociedad actual», *Cuadernos de estrategia*, núm. 52, 1992, págs. 39 a 47.
- BLANCO ANDE, J., *Defensa nacional y Fuerzas Armadas*, Dykinson, S.L., Madrid, 1987.
- BLASCO LAHOZ, J.F., «La adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la administración general del estado consecuencia del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero», *CEF Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social*, núm. 328, 2010, págs. 139 a 156.
- BLASCO ROBLEDO, F.J., «La resiliencia como factor de la decisión», *Revista Ejército*, núm. 905, 2016, págs. 30 a 35.

- BOIX, P., *Buena práctica profesional en evaluación de riesgos laborales: informe bibliográfico*, CISAL, Barcelona, 2014.
- BORNACHEA FERNÁNDEZ, J.I., «Seguridad e higiene en trabajo: por principio», *El País*, 29 de diciembre de 1987. [Consulta:11/02/2018], «https://elpais.com/diario/1987/12/29/economia/567730803_850215.html».
- BOUTROS GHALI, B., *Un programa de paz*, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, A/47/277, S/2411, 17 de junio de 1992, pág. 6, párr. 20.
- CABALLERO DOMÍNGUEZ, M., «La cuestión marroquí y su corolario de Annual como causa y consecuencia de la crisis del sistema restauracionista», *Revista Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, nº 17, 1997, págs. 219 a 242.
- CAMPOS DAROCA, J.M., *Empleo público laboral. Puestos de trabajo, clases de empleados públicos laborales y extinción de la relación laboral*, Editorial Fundación Asesores locales, Málaga, 2011.
- CARDENAL CARRO, M., «La prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado», *Revista Aranzadi Social*, núm. 5, 1998, págs. 115 a 126.
- CARDONA ESCANERO, G., *El gigante descalzo*, Aguilar, Madrid, 2003.
- CALONGE VELÁZQUEZ, A., «El concepto de Administración pública en la Unión Europea: Administración pública nacional y Administración pública comunitaria», *Revista de Derecho de la Unión Europea*, núm. 19, 2º semestre, 2010, págs. 11 a 30.
- CAÑAS DELGADO, J.J., *Ergonomía en los sistemas de trabajo*, Secretaría de Salud Laboral de la UGT-CEC, Madrid, 2011.
- *Guía de Buenas prácticas en Ergonomía aplicada a la prevención de riesgos laborales de tipo psicosocial*, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, Madrid, 2016.
 - «Evolución de la Ergonomía a lo largo de los 20 años de PRL», *20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, Madrid, 2015, págs. 293 a 316.
- CASTELLÁ LÓPEZ, J.L., *La Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de integración de la Unión Europea*, OIT, Lima, 1996.
- CAVALLÉ OLLER, N., *NTP 936, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (II). Modelo COSHH Essentials*, INSST, Madrid, 2012.
- CILVETI GUBÍA, S., Y IDOATE GARCÍA, V., *Salud laboral protocolos de vigilancia sanitaria específica. Posturas forzadas*, OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Bizkaia, 2001.

- COBOS SANCHÍS, D., «Los estudios universitarios de los profesionales de la salud ocupacional en Francia, Portugal y Reino Unido: aproximación comparada.», *Revista Fuentes*, núm. 9, 2009, págs. 212 a 228.
- COLOM PIELLA, G., «La revisión cuatrienal de la Defensa», *Revista Ejército de Tierra español*, núm. 882, 2014, págs. 14 a 23.
- «El proceso de planeamiento de la defensa nacional», *Revista general de marina*, núm. 260, 2011, págs. 833 a 842.
 - «Los límites de la política común de seguridad y defensa», *Revista general de marina*, núm. 266, 2014, págs. 447 a 454.
 - «El proceso de transformación militar en España (2004-2011)», *UNISCI Discussion Papers*, núm. 26, 2011, págs. 117 a 131.
- COLL BUCHER, F., «Visión del JEME 2025», *Periódico Tierra, Boletín informativo del Ejército Español*, núm. 174, 2009, págs. 8 a 9.
- COMAS ABAD, R., «La preparación de las Unidades de la Fuerza Terrestre como NRF/VJTF», *Revista Ejército*, núm. 898, 2016, págs. 102 a 107.
- Comisión Europea, *Guía para la aplicación de las Directivas basadas en el nuevo enfoque y en el enfoque global*, Bruselas, 1999.
- *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, sobre la aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas de salud y seguridad en el trabajo 89/31(Directiva marco), 89/654 (Lugares de trabajo), 89/655 (Equipos de trabajo), 89/656 (Equipos de protección individual), 90/269 (Manipulación manual de cargas) y 90/270 (Pantallas de visualización)*, Bruselas, 2004.
- CORRALES Elizondo, A., «Introducción y presentación. El marco constitucional de las misiones de las fuerzas armadas, CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz*, Cuadernos de estrategia IEEA, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 10 a 19.
- CORN, G.S., «La verdadera naturaleza del concepto de “responsabilidad” en el mando responsable», *Revista Internacional de la Cruz Roja*, núm. 895/896, 2015, págs. 901 a 917.
- CORTICEIRO NEVES, M.A., *Tese de Dissertação. A Adequabilidade dos Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho às Forças Armadas e GNR*, Universidad de León, León, 2011.
- COSIDÓ GUTIERREZ, I., «Introducción», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 9 a 16.
- «Informe Cultura de Defensa, gasto militar y Fuerzas Armadas en España», *Congreso Internacional de Historia de nuestro tiempo*, Instituto de Seguridad y Cultura, Logroño, 2017, págs. 3 a 15.

- COTINO HUESO, L., *El modelo constitucional de Fuerzas Armadas*, INAP, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.
- CUESTA RICO, F., «Los parámetros constitucionales de la acción exterior de las Fuerzas Armadas españolas», Marrero Rocha, I. (Coord.), Liñán Nogueras, D.J., y Roldán Barbero, J. (Edits.), en *El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior*, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2008, págs. 233 a 320.
- CUI, S., *Il Diritto penale del lavoro*, Halley Editrice, Matelica MC (Italia), 2007
- CRUZ ARTICO, J., «El riesgo permitido en el derecho penal: fundamentos y determinación», *Revista pensamiento penal*, 2015, págs. 1 a 18. [Consulta 11/01/2019], «<http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42070-riesgo-permitido-derecho-penal-fundamentos-y-determinacion>».
- DANKHE, O., *Investigación y comunicación*. McGraw Hill de México, México, 1976.
- DE HERAS DURÁN, J.M., «Marco jurídico interno de las funciones, no de defensa, de las fuerzas armadas en tiempo de paz», CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz*, Cuadernos de estrategia IEEE, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 178 a 223.
- DE BLAS POMBO, A., «De la Banalización de la condición militar. ¿Somos los militares realmente distintos?», *Revista Ejército de Tierra español*, núm. 828, 2010, págs. 16 a 23.
- DE LA IGLESIA MIRANDA, B., «La prevención de riesgos Laborales y la Guardia Civil», *Cuadernos de la Guardia Civil*, 2008, núm. 38, págs. 9 a 25.
- DE MUNCK, V.C. Y SOBO, E., J., *Using methods in the field: a practical introduction and casebook*, Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998.
- DEL VADO, D.F., «Margarita Robles expone su programa en el Congreso», *Revista Defensa*, núm. 352, págs. 6 a 15.
- DEL VALLE MELENDO, J., «Una cultura de seguridad y defensa para la España de principios del siglo XXI», *Boletín I.E.E.E.*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, págs. 610 a 624.
- DE OLIVEIRA PAIS, S., «Algumas reflexões sobre o princípio da interpretação conforme no contexto da 'transposição judicial' das directivas», *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, ano VII, 2010 (especial), págs. 489 a 517.
- DE PAOLIS, A., «Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forzearmate - 4. Conclusioni», OLYMPUS, 2012. [Consulta 29/04/2017], «http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id

[=6584:2012-antonio-de-paolis-il-decreto-legislativo-n-81-del-2008-e-le-forze-armate&catid=98&Itemid=126&showall=&limitstart=22».](#)

- DEWALT, K.M. Y DEWALT, B.R., *Participant observation: a guide for fieldworkers*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2002.
- DÍAZ ALCANTUD, F., «Nuevos instrumentos de la defensa nacional», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 167 a 204.
- DÍAZ FERNÁNDEZ, A.M., «Experiencias de la participación militar española en misiones internacionales (2000 – 2012)», *Revista española de ciencia política*, núm. 32, 2013, págs. 205 a 223.
- DÍAZ VÁZQUEZ, J.E., GEREZ MIRAS, J., «Sinergia entre la Gestión de la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales», *IV Congreso de Ingeniería y Organización*, Sevilla, 2001.
- DIEGO-MAS, J.A., *EPR - Evaluación postural rápida*. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consulta: 14-04-2018], «<http://www.ergonautas.upv.es/metodos/epr/epr-ayuda.php>».
- DIEZ NICOLÁS, J., «La transición política y la opinión pública española ante los problemas de la defensa y hacia las fuerzas armadas», *Revista española de investigaciones sociológicas (REIS)*, 1986, núm. 36, págs. 13 a 24.
- DI SPILIMBERGO, I., «I volontari», PERSIANI, M., Y LEPORE, M. (Dirs.), en *Il nuovo Diritto della sicurezza sul lavoro*, UTET Giuridica, Torino (Italia), 2012, págs. 48 a 54.
- DOMINGO GUERRA, J.C., «Unas Fuerzas Armadas para la España emergente», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 105 a 166.
- DOMÍNGUEZ BUJ, J., «Mensaje institucional del Jefe de Estado Mayor del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 898, 2016, págs. 4 a 8.
- Ejército de Tierra, MADOC. M-0-3-3. *Metodología de la Instrucción*, Madrid, 1979.
- MT7-601. *Manual Técnico. Productos Funcionales y Cartas de Engrase*, Ministerio de Defensa, Granada, 1999.
 - OR7-020. *Orientaciones. Prevención de Riesgos y Medidas de Seguridad en la Fuerza*, Ministerio de Defensa, Granada, 2002.
 - PD1-001. *Empleo de las Fuerzas Terrestres*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005
 - *Concepto Derivado 01/05. Bajas por fuego propio*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005.

- MA1-001. *Manual de Adiestramiento. Manual de los Sistemas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación*, Ministerio de Defensa, Granada, 2005.
- MI6-001. *Manual de instrucción. Tiro con Fusil de asalto HK-g 36E*, Ministerio de Defensa, Granada, 2006.
- PD2-001. *Operaciones. Conceptos Generales.*, Ministerio de Defensa, Granada, 2013.
- MI-001. *Tareas Individuales comunes. Nivel I*, Madrid, 2015.
- PG-00. *Orden Cerrado*, Granada, 2016.

ENTRENA CUESTA, R., «El concepto de administración pública en la doctrina y el derecho positivo españoles», *Revista de Administración pública*, núm. 32, 1960, págs. 55 a 74.

Estrategia de seguridad nacional 2017. Presidencia del Gobierno. [Consulta 29/03/2019],
«http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/gobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf».
Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Presidencia del Gobierno.

FAJARDO TERRIBAS, R., *Tesis Doctoral. El ejército en la transición hacia la democracia (1975-1982). Acercamiento a la política reformista de Gutiérrez Mellado*, Universidad de Granada, Granada, 2000.

FELIÚ ORTEGA, L., *Las Fuerzas Armadas y la defensa nacional*, Presentación en la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), Madrid, 2015.

FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., *Régimen Jurídico de la prevención de riesgos laborales en las Administraciones públicas*, Comares, Granada, 2009.

FERNÁNDEZ GARCÍA, I., «La sujeción especial del militar tras la nueva Ley Orgánica de derechos y deberes», *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 102, Madrid, págs. 127 a 166.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., *El rey y otros militares. Los militares en el cambio de Régimen Político en España (1969 – 1982)*, Trotta, Madrid, 1998.

- «Los militares y la política en los siglos XIX-XX», *hispanoteca.eu*. [Consulta 28/01/2018], «<http://hispanoteca.eu/Landeskunde-Spanien/Historia/Los%20militares%20y%20la%20pol%C3%ADtica%20en%20los%20siglos%20XIX-XX.htm>».

FERNÁNDEZ-MAZARAMBROZ BERBABÉU, M.A., «Operaciones de mantenimiento de la paz», en *Segundas Jornadas de defensa nacional*, CESEDEN, Ministerio de Defensa, Madrid, 1993, págs. 55 a 69.

FERNÁNDEZ RAMOS, S., «Los falsos empleados públicos: el personal eventual», *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 34, 2013, págs. 1 a 37.

- FERRADANS CARAMÉS, C., «La reordenación del sector público tras las crisis: algunos efectos jurídicos laborales», *Revista española derecho del Trabajo*, núm. 155, 2012, págs. 101 a 123.
- FOJÓN LAGO, J.E., «Una revisión de los criterios básicos de la defensa nacional», AMOR HUIDOBRO, J.M. (Coord.), en *Revisión de la defensa nacional*, Monografías del CESEDEN, núm. 55, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 77 a 104.
- Foment del Treball Nacional, *Guía de equivalencias PRL entre países*, Foment del Treball Nacional, Barcelona, 2014
- FONFRÍA, A., *Proyecciones del gasto de defensa 2040*, Documento de investigación 0/2018, I.E.E.E., Ministerio de Defensa, Madrid, 2018.
- FONFRÍA, A. Y MARÍN, R., *Factores explicativos del gasto en defensa en los países de la OTAN*, I.E.E.E., Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.
- FONTANA DE GRASSA, F., «Sistema de Mando y Dirección del Ejército de Tierra», Boletín de información CESEDEN, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999, págs. 53 a 63.
- FRIAS SÁNCHEZ, C.J., El sistema internacional y las Fuerzas Armadas en el horizonte 2050, I.E.E.E, Ministerio de Defensa, Madrid, núm. 106/2017, págs. 495 a 511.
- FRIEYRO DE LARA, B., «La transición en el ejército español de 1975: del modelo institucional al plural», QUIROSA-CHEYROUZE, R. (Coord.), en Los inicios del proceso de democratización, *Congreso Internacional Historia de la Transición en España*, Almería, 2005, págs. 1 a 17.
- FULLADOSA, M., «¿Sabes cuál es el origen de la prevención en España?», Blog *Prevenblog*, 1 de marzo de 2015. [Consulta: 30/09/2018], «<http://prevenblog.com/sabes-cual-es-el-origen-de-la-prevencion-en-espana/>».
- GADD S., KEELEY D., BALMFORTH H., *Good practice and pitfalls in risk assessment*. HSE Research Report 151, 2003.
- GARCÉS BONET, E., *La prevención de riesgos laborales en el Ejército de Tierra*, Bosch Editor, Barcelona, 2017.
- GARCÍA ARIAS, L., *La guerra moderna y la organización internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, pág. 342.
- GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E., «El concepto de personalidad jurídica en el Derecho Público», *Revista de administración pública*, núm. 129, 1992, págs. 195 a 210.

- GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E., Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T., *Curso de Derecho administrativo I*, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017.
- GARCÍA DEL MAZO, S., *El espíritu de las leyes por Montesquieu*, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1906.
- GARCÍA FRAILE-GASCÓN, A., «Apuntes sobre política contra la criminalidad», *Revista Cuadernos de la Guardia Civil*, núm.7, 1992, págs. 129 a 141.
- GARCÍA LABAJO, J.M., «Reflexiones en torno a las bases de la organización militar», CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz*, Cuadernos de estrategia IEEA, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 114 a 176.
- GARCÍA GONZÁLEZ, G., «Prevención de riesgos laborales y fuerzas armadas», *UNIRRevista*, [http://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/noticias/prevencion-de-riesgos-laborales-y-fuerzas-armadas-ii/549201447435/], 2012.
- «Seguridad e higiene en el trabajo durante el primer franquismo: estructuras jurídicas e institucionales», *Revista Jurídica de los Derechos Sociales*, núm. 1, págs. 123 a 143.
- GARCÍA MACHO, R., *Las relaciones especiales de sujeción en la Constitución Española*, Tecnos, Madrid, 1992.
- GARCÍA MURCIA, J., Y CASTRO ARGUELLES, MA., Preliminar: un nuevo centenario para la seguridad social», GARCÍA MURCIA, J., Y CASTRO ARGUELLES, MA., (Dirs.), en *La previsión social en España. Del Instituto Nacional de Previsión al Instituto Nacional de Seguridad Social*, Proyecto 2007/65 FIPROS, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2007, págs. 4 a 11.
- GARCÍA NINET, J.I., «La prevención de riesgos laborales en la Administración civil y militar», GÁRATE CASTRO, F.J. (Coord.), en *Las relaciones laborales en las administraciones locales*, Fundación Democracia y Gobierno Local, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2004, Madrid, págs. 225 a 262.
- «Algunas particularidades de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado», *Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral*, núm. 149, 2003, págs. 5 a 10.
- GARCÍA VALVERDE, M.D., «El esperado e imperioso RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.», *Actualidad Laboral*, núm. 1, 1999, págs. 285 a 301.
- GARCÍA-VAQUERO PRADAL, A., «La DIDOM: un factor clave en la preparación del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 879, 2014, págs. 72 a 73.

- GARRIDO CUENCA, N.M., y DELGADO PIQUERAS, F., «Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia». *Revista catalana de dret públic*, núm. 51, 2015, págs. 1 a 33.
- GARRIGA ZUCAL, J.A. «Por el pancho y la coca. Apuntes sobre las representaciones del trabajo entre los policías de la provincia de Buenos Aires», *Revista Papeles de Trabajo*, núm. 8, 2014, págs. 34 a 53.
- GARROCHO SALCEDO, A.M., «Los delitos de omisión de los mandos militares y superiores civiles ante... la comisión de crímenes internacionales en el código penal español». *Revista de derecho penal y criminología*, 3.^a Época, n.º 17 (enero de 2017), págs. 47 a 92.
- GIMBERNAT ORDEIG, E., «Teoría de la evitabilidad versus teoría del aumento del riesgo», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Tomo 68, Fasc/Mes 1, 2015, págs. 21-62.
- GÓMEZ-CANO ALFARO, M., *Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico*, INBSST, Madrid, 2007.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, R., *El estatuto jurídico-constitucional del militar de carrera en España. Antecedentes, fundamento y situación actual*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2008.
- GÓMEZ OCHOA, F., «El liberalismo conservador español del siglo XIX: la forja de una identidad política, 1810-1840 (1)», *Historia y Política*, 2007, págs. 37 a 68.
- GONZÁLEZ, M., *España se compromete con la OTAN a aumentar en un 80% su gasto militar para 2024*, periódico digital El País. [Consulta 29/07/2018], «https://elpais.com/politica/2017/12/26/actualidad/1514312944_214046.html»
- *Defensa aumenta sus gastos un 10,7%, el segundo que más crece tras Fomento*, periódico digital El País. [Consulta 29/07/2018], «https://elpais.com/economia/2018/04/03/actualidad/1522751308_495238.html».
- GONZÁLEZ ARRIETA, A., *Identificación del arma y la munición utilizadas en un disparo con técnicas conexionistas*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000.
- GONZÁLEZ FUENTES, F.J., «La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la Armada», *Revista de la Armada*, marzo 2014, págs. 251 a 260.
- GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas.», *Temas Laborales*, núm. 72, 2003, págs. 13 a 33.
- GONZÁLEZ VALLÉS, J., «Formación moral y preparación del cadete», *Revista Ejército de Tierra*, núm. 915, 2017, págs. 73 a 78.

- GRANDJEAN, E. *Precis d'Ergonomie*. Instituto de Higiene del Trabajo en Zurich, 1969, Zurich.
- GRAU RÍOS, M., Y MORENO BELTRÁN, D.L., *Seguridad laboral*, 2002. [Consulta:07/04/2018], «http://www.Ffi.nova.es/F2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap04.pd».
- GUAITA MARTORELL, A., «La Administración militar», *Revista de Administración Pública*, nº 7, 1952, págs. 105-122.
- HAMEL, G., Y VÄLIKANGAS, L., «The quest for resilience», *Harvard Business Review*, 2003, págs. 1 a 13.
- HEREDIA JIMÉNEZ, J.M., *Efecto del peso de la mochila sobre parámetros biomecánicos de la locomoción en soldados de Infantería y su relación con la fatiga, la composición corporal y el estado físico*, Departamento Educación Física y Deportiva, Universidad de Granada, Granada, 2017.
- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., «Nueva organización básica de las FAS», *Revista Española de Defensa*, núm. 311, 2014, págs. 16 a 18.
- IGLESIAS MARTÍNEZ, V., «Organización y gestión de la prevención de riesgos laborales», GONZÁLEZ ORTEGA, S., Y CARRERO DOMÍNGUEZ, C. (Dir.), en *Manual de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas*, INAP, Madrid, 2012, págs. 167 a 202.
- JAVATO MARTÍN, A.M., «El concepto de funcionario y autoridad a efectos penales», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 2, 2011, págs. 145 a 172.
- JIMÉNEZ MARTÍNEZ, C., «Interacción con la defensa nacional», *Cuadernos de Trabajo social*, núm. 52, 1992, págs. 25 a 28.
- JIMÉNEZ VILLAREJO, J., «Derechos y deberes del militar profesional en la constitución española», *Revista española de Derecho Militar*, núm. 77, 2001, págs. 445 a 472.
- KAWULICH, B.B., «Participant observation as a data collection method», *Forum Qualitative Social Research*, Volumen 6, No. 2, Art. 43, 2005.
- KERLINGER, F. *Investigación del comportamiento. técnicas y metodología*. Nueva editorial Interamericana, México, 1975.
- LABAJOS FERNÁNDEZ, A., «La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas», MATAMOROS MARTÍNEZ, R. (Dir.), en *Jurisdicción militar, riesgos laborales y operaciones militares internacionales. Una aproximación técnico-jurídica*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, págs. 11 a 92.

- LABORIE IGLESIAS, M., «La evolución del concepto de seguridad», *Documento marco 05/2011*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2011.
- LAGUNA SANQUIRICO, F., «Reflexiones sobre el problema de la cultura de Defensa», *Documento Opinión IEEE*, núm. 132, Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.
- «La cuestión del profesorado militar.», *Revista Ejército*, núm. 876, 2014, págs. 46 a51.
- LARA LAGUNA, A., *NTP 882. Guantes de protección contra riesgos mecánicos*, INSST, Madrid, 2010
- LASAGABASTER HERRARTE, I., *Las relaciones de sujeción especial*, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1994.
- LLERA RAMO, F.J., «Las Fuerzas Armadas y sociedad», *Cátedra Miguel de Cervantes, Zaragoza*, 2010, págs. 2 a 12.
- LÓPEZ BENÍTEZ, M., *Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones de sujeción especial*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba. Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1994.
- LÓPEZ DE GEA, J., «El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas», *Revista de Derecho UNED*, núm. 12, 201, págs. 391 a 411.
- LÓPEZ RAMÓN, F., «Principios de Ordenación Constitucional de las Fuerzas Armadas», Martin-Retortillo Baquer, S.B. (Coord.), en *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Vol. 3. La Corona. Las Cortes. Del Gobierno y la Administración Pública*, Civitas, Madrid, 1991, págs. 2547 a 2598.
- *La función militar en el actual ordenamiento constitucional español*, (Ed.) JIMÉNEZ RAMÍREZ M., LÓPEZ RAMÓN, F. (Dirs.), y FERNÁNDEZ LÓPEZ J. (Coord.), Trotta, Fundación Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 'Lucas Mallada', Academia General Militar, Madrid, 1995.
 - *La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.
- LÓPEZ RUBIA, M.E., «El Real Decreto 1932/1998. ¿Adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los centros y establecimientos militares?», *Revista de Derecho Social*, núm. 5, 1999, págs. 209 a 220.
- LORENZO PONCE DE LEÓN, R., «Las Reglas de enfrentamiento (ROE) como paradigma del Estado de derecho en operaciones militares», *Revista española de derecho militar*, núm. 99, 2012, págs. 37-220.
- MAILLARD, P., «La defensa nacional y espíritu de defensa», *Boletín de información CESEDEN*, núm. 18, 1967, págs. 1 a 13.

- MANIGART, P., «Opinion and european defense», *Royal Military Academy*, Bélgica, 2001, págs. 4 a 11.
- MARGOSSIAN, N., *RisquesProfessionels. Caractéristiques.Reglamentation. Prévention*, 3ª édition, Dunod, París, 2011.
- MARIÑO LAMAMIE DE CLAIRAC, M., *Soldados españoles en Afganistán: tendencias culturales en una misión de paz*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, Murcia, 2015.
- MARQUES, R., *Organização da SHST nasForças Armadas. Caracterização e contributos*. Estudo realizado no âmbito da Unidade Científico-Pedagógica de Ciências e Tecnologias, no Instituto Superior de Educação e Ciências. Lisboa, 2011.
- MARSHALL, C. Y ROSSMAN, G.B., *Designing qualitative research*. Newbury Park, CA: Sage, 1989.
- MARTÍN DELPÓN, J.L., «Naturaleza y carácter militar de los miembros de la Guardia Civil: comentario a la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2012», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 34, 2014, págs. 1 a 21.
- MARTÍN LÓPEZ, E., «Defensa nacional y espíritu de defensa», *Cuadernos de Trabajo social*, núm. 7, 1994, págs. 123 a 139.
- MARTÍN PÉREZ, M.A., «Capacidades futuras de las Fuerzas Armadas. Conclusiones», *Monografías Escuela Superior de las Fuerzas Armadas*, núm. 140, 2014, págs. 243 a 250.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R.C., «Las Fuerzas Armadas en España: ¿último bastión del franquismo?», *Revista Prolegómenos Derechos y Valores*, págs. 104 a 109.
- MARTÍNEZ PAGÁN, C., *Aspectos diferenciales de la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las actividades de Instrucción, Adiestramiento y Operativas*, Monografías CEMFAS, CESEDEN, Ministerio de Defensa, Madrid, 2017.
- MARTÍNEZ PEÑAS, L., «Los inicios de la la legislación laboral española: la Ley Benot», *Revista Aequitas: Estudios sobre historia, derecho e instituciones*, núm. 1, 2011, págs. 25 a 70.
- MASON, M.R., AR., *Platform Firearns & Calibers*, First \$trike, USA, 2015.
- MERCADER UGUINA, JR., *Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales*, La Ley, Madrid, 2007.
- MERCADER UGUINA, J.R., Y TOLOSA TRIBIÑO, C., «Las "especialidades" de la responsabilidad de las Administraciones Públicas en materia de

prevención de riesgos laborales: ¿del buen uso de la lentitud?», *Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica*, núm. 2, 2002, págs. 1087 a 1106.

MATAMOROS MARTÍNEZ, R., Y ORTIZ HERNÁNDEZ, J.M., «Las Administraciones Públicas», en *Introducción al estudio de las Administración Militar y los procedimientos administrativos*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, págs. 7 a 34.

MICCUCI, V.C.G.S., *Modelo Pró-ativo de Gerenciamento de Riscos da Cadeia de Suprimentos*, Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

MOLINA BENITO, J.A., *Historia de la seguridad en el trabajo en España*. Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo Dirección General de Trabajo y prevención de riesgos laborales, Valladolid, 2006.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, España. *Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020*, INSHT, Madrid, 2015.

Ministerio de Defensa, España. *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2011. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.

- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2011. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2011. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
- *Guía Técnica de combustibles, lubricantes y productos asociados para las Fuerzas Armadas. Junta Militar de Combustibles y Lubricantes (JMCL)1*. Estado Mayor de la Defensa. Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, 8ª Edición.
- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2012. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2012. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2012. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central*. Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.

- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2013. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2013.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2013. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2013.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2013. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2013.*
- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2014. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2014. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2014. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.*
- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2015. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2015.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2015. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2015.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2015. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2015.*
- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2016. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2016.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2016. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2016.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2017. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2016.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del*

Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2017. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2017.

- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2017. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2017.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2017. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2017.*
- *Estadísticas de Accidentes y Agresiones en las Fuerzas Armadas. Año 2018. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2018.*
- *Estadísticas de Personal militar de carrera de las FAS de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del Cuerpos de la Guardia Civil. Año 2018. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2018.*
- *Estadísticas de Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas voluntario. Año 2018. Secretaría General Técnica. Unidad de Estadísticas del Órgano Central. Ministerio de Defensa, Madrid, 2018.*
- *Manual de soporte vital avanzado en combate. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.*
- *Comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ante la Comisión de Defensa del Senado, Madrid, 2017.*

Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, «Informe-resumen sobre recursos y actividades, desarrolladas por la AGE, durante el año 2016 en materia de PRL, de la Dirección General de la Función Pública», pág. 24. [Consulta 25/03/2019], «http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Relaciones_Laborales_y_Dialogo_Social/Prevencion_riesgos_laborales/Memorias/MEMORIA_PRL_2016_ANEXOS.pdf».

Ministry of Defence, United Kingdom

- JSP 375, Pt.2 Vol 1 (V1.0 Jan 16). *Chapter 02 - Office & General Workplace Safety.*
- JSP 375, Pt.2 Vol 1 (V1.0 Jan 16). *Chapter 18 - Lone Working.*
- JSP 375, Pt.2 Vol 1 (V1.0 Jan 16). *Chapter 40 - Military Training for Land Systems.*
- JSP 375, Pt.2 Vol 3 (V1.0 Jan 16). *High Risk Activities on the Defence Infrastructure.*
- JSP 815, (V1.0 Jan 16). *Leaflet 06 - Demonstrating that Risk is ALARP.*

MOLINA BENITO, J.A., *Historia de la seguridad en el trabajo en España*. Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo Dirección General de Trabajo y prevención de riesgos laborales, Valladolid, 2006.

- MONEREO PÉREZ, J.L., y MOLINA NAVARRETE, C., «La caracterización general de la prevención de los riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídicos-críticos del «nuevo» modelo de acción preventiva», MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE C. (Dirs.), y OLARTE ENCABO S., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. (Coords.), en *Tratado de Prevención de Riesgos Laborales. Teoría y Práctica*, Editorial Tecnos (Grupo Anaya), Madrid, 2015, págs. 15 a 66.
- «Objeto, ámbito de aplicación y definiciones», MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M.A. (Dirs.), *Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios*, Comares, Granada ,2004, págs. 38 a 92.
- MONSERRAT, C., Y GONZÁLEZ, M., «62 militares mueren al estrellarse el avión en el que volvían de cumplir su misión en Afganistán», *El País*, 27 de mayo de 2003. [Consulta:15/06/2019], «https://elpais.com/diario/2003/05/27/espana/1053986401_850215.html»
- MONTERO DABOUZA, F.N., *La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas españolas*, Premios Defensa 2013. Trabajos seleccionados, premio José Francisco Querol y Lombardero, Madrid, 2013.
- MORENO MÁRQUEZ, A.M., «Incumplimiento del Estado español de la obligación de adaptar el ordenamiento jurídico interno en lo relativo al ámbito de aplicación de la Directiva 89/391/CEE, comentario a la Sentencia STJCE de 12 de enero de 2006 (asunto C-132/04) (TJCE 2006, 12)», *Revista Aranzadi Social*, núm. 1, 2006, págs. 3137 a 3142.
- «Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.», González Ortega, S., y Carrero Domínguez, C. (Dirs.), en *Manual de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas*, INAP, Madrid, 2012, págs. 53 a 82.
 - «La seguridad y salud laboral del personal militar: principios inspiradores», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, núm. 83, Sevilla, 2006, págs. 75 a 100.
- MORENO VIDA, M.N., «La situación jurídica del personal sanitario. El régimen estatutario de los profesionales de la sanidad», MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. Y MORENO VIDA, M.N. (Dirs.), *Comentario práctico a la legislación reguladora de la sanidad en España*, Comares, Granada, 2007, págs. 145 a 171.
- MORET MILLÁS, V., «Los deberes constitucionales en el ordenamiento jurídico español: el inestable binomio derechos-responsabilidades», *Anuario de Derecho parlamentario*, núm. 30, 2018, págs. 205 a 272.
- MUÑOZ ALONSO, J.M., *Derecho Administrativo Militar, Vol. II*, Autor-Editor, Madrid, 1989.
- MUÑOZ RUIZ, A.B., *El sistema normativo de Prevención de Riesgos Laborales*, Lex Nova, 2009.
- NAVAJAS ZUBELDÍA, C., *La transición militar una transición larga (1975-1989)*, Universidad de la Rioja, Logroño, 2014, págs. 27 a 45.

- NAVARRO, F., «El Árbol de Causas y la Investigación de Accidentes Laborales», Revista digital INESEM, 2014. [Consulta: 05/08/2018], «<https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/el-arbol-de-causas-y-la-investigacion-de-accidentes-laborales-i/>».
- NAVARRO SUAY, R., *Soporte vital avanzado en combate*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2009.
- NOGAREDA CUIXART, S., *NTP 601. Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)*, INSST, Madrid, 2003.
- ORTEGA SANTIAGO, C., *La dimensión constitucional de la guerra: Conflictos armados e intervenciones militares en el extranjero*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documento de Trabajo núm. 43/2004, Madrid, 2004.
- PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., «La ordenación jurídica de la seguridad e higiene en el trabajo, durante el primer y segundo franquismo, de la Guerra Civil a la Ordenanza General, 1393-1971», APARICIO TOVAR, J., Y SARACÍBAR SAUTÚA, A. (Coords.), en *Historia de la prevención de riesgos laborales en España*, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España, 2007, págs. 122 a 213.
- PARADA VÁZQUEZ, R., *Derecho Administrativo I*, 2ª ed., OPEN Ediciones Universitarias, Madrid, 2014.
- *Concepto y fuentes del derecho administrativo*, Marcial Pons, Madrid, 2012
- PASCUA MATEO, F., *Fuerzas Armadas y derechos políticos*, Colección Monografías, Congreso de los Diputados, Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, Departamento de Publicaciones, Madrid, 2006.
- PAYNE, S.G., «El Ejército, la República y el estallido de la Guerra Civil», RAYMOND CARR, (Ed.), en *Estudios sobre la República y la guerra civil española*, Biblioteca de la Historia núm. 23, Ediciones SARPE, Madrid, 1985, págs. 106 a 142.
- PEÑARRUBIA IZA, J.M., *Presupuestos constitucionales de la Función militar en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
- PÉREZ, A., «Las Fuerzas Armadas como servicio público: percepción y realidad», Grupo de estudios estratégicos, [Consulta: 01/06/2019], «<http://gees.org/articulos/las-fuerzas-armadas-como-servicio-publico-percepcion-y-realidad>».
- PÉREZ GONZÁLEZ, M., «Fundamentos jurídicos-internacionales de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz», CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en*

tiempo de paz, Cuadernos de estrategia IEEE, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 22 a 62.

PÉREZ GUERRERO, M.L., «La aplicación del acuerdo nacional de negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales», *Revista digital de salud y seguridad en el trabajo*, núm. 1, 2009, págs. 1 a 19.

PÉREZ GUERRERO, M.L. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., «Prevención y nuevos riesgos laborales. El caso de los trabajadores puestos a disposición», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, núm. 50, 1999, págs. 105 a 148.

PÉREZ MUINELO, F., *El presupuesto de defensa en España, 1946-2006*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006.

Periódico digital La Vanguardia, «El Consejo de Ministros modifica la estructura del Ministerio de Defensa», *La Vanguardia*, 24 de noviembre de 2017. [Consulta:01/03/2018], «
<http://www.lavanguardia.com/vida/20171124/433146459504/el-consejo-de-ministros-modifica-la-estructura-del-ministerio-de-defensa.html>».

PIGNATELLI Y MECA, F., «La intervención armada por razón de humanidad», CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz*, Cuadernos de estrategia IEEE, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 94 a 141.

PUELL DE LA VILLA, F., *Gutiérrez Mellado: Un militar del siglo XX (1912-1995)*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

- *La transición militar*, Documento de Trabajo número 6, Fundación Transición Española, Madrid, 2012.

PUGH HL., *Blast Injuries*. Surg. Clin. North Am, 1943 23, págs. 1589 a 1602.

QUERO RODILES, F., *Introducción a la Teoría de la Seguridad Nacional*, Madrid, Ediciones Ejército, 1989.

RELANZÓN LÓPEZ, J.M., *Tesis Doctoral Validez de los test predictivos de la fatiga auditiva en la prevención del trauma acústico*, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992.

RIBEIRO COSTA, A.C., «Segurança e saúde no trabalho – particularidades e problemas no âmbito da Administração Pública», LEITE, J. (Dir.), REIS (Coord.), J., *Escritos Jurídico-Laborais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, págs. 285 a 308.

RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., «La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas a la luz del Derecho de la Unión Europea», *Revista Trabajo y Derecho*, núm. 25, 2017, págs. 61 a 73.

- RODRÍGUEZ TEN, J., Y CARNICER ESCUSOL, E., «Normativa sobre PRL en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos de Seguridad», *Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, núm. 32, 2006, págs. 42 a 49.
- «La aplicación "ratione materiae" de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, a partir de la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Revista española de Derecho Militar*, núm. 89, 2007, págs. 295 a 314.
- RODRÍGUEZ-VIGIL RUBIO, J.L., *Integración o desmoronamiento. Crisis alternativas del Sistema Nacional de Salud Español*, Civitas, Cizur Menor, 2008.
- RIMBAU GILABERT, E., «Liderazgo y prevención de riesgos laborales». *Revista Seguridad y Salud en el Trabajo*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013, nº 75, págs. 10 a 17.
- RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., «Análisis de la legislación extranjera en relación con las misiones de las fuerzas armadas en tiempo de paz», CORRALES ELIZONDO, A. (Coord.), en *El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz*, Cuadernos de estrategia IEEEE, núm. 116, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, págs. 64 a 92.
- ROMERO RODRÍGUEZ, D., «La plena operatividad de las Unidades de la Fuerza Terrestre para NRF/VJTF», *Revista Ejército*, núm. 907, 2016, págs. 32 a 40.
- RUBIO ROMERO, J.C., *Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales*, Ediciones Díaz Santos, S.A., Madrid, 2004.
- RUBIO RUIZ, A., *Manual de derechos, obligaciones y responsabilidades en la prevención de riesgos laborales*, FC Editorial, Madrid, 2002.
- RUIZ RESA, J.D., *Los derechos de los trabajadores en el franquismo*, Dykinson, Madrid, 2015.
- RUIZ RODRÍGUEZ, L.R., «La reforma penal de los delitos contra la salud pública como respuesta a las innovaciones científicas y tecnológicas», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 18, 2016, pág. 1 a 23. [Consulta: 14/07/2019], «<http://criminnet.ugr.es/recpc/18/recpc18-19.pdf>».
- «El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial uso de la fuerza y responsabilidad penal», *Nuevo Foro Penal*, núm. 83, 2014, págs. 39 a 70.
- SABBAG, P.Y., *Resiliência: competência para enfrentar situações extraordinárias na sua vida profissional*, Elsevier, Rio De Janeiro, 2012.
- SALAS FRANCO, T., *El Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

- SAN PÍO ALADREN, P., Y ZAMARRÓN MORENO, C., *Catálogo de la colección de documentos de Vargas Ponce, que posee el Museo Naval*, Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1980.
- SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., *La relación laboral del personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares. (Coordenadas y peculiaridades de su régimen jurídico)*. Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, Murcia, 1996.
- La adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los establecimientos militares y el RD 1932/1998, de 11 de septiembre. *Revista Aranzadi Social*, núm. 5, 1999, págs. 439 a 464.
- SARRIÓN ESTEVE, J., *Apuntes de Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanc, Valencia, 2016.
- SEMPERE NAVARRO, A.V., Y CARDENAL CARRO, M., *Transposición de la Directiva Marco de Seguridad Laboral en diferentes países de Europa*, Editorial MAPFRE S.A., Madrid, 2000.
- SEMPERE NAVARRO, A.V., Y QUINTANILLA NAVARRO, Y., «El personal laboral al servicio de las Corporaciones Locales», PALOMAR OLMEDA, A. (Coord.), *El Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia en el ámbito local*, CEMCI, Granada, 2007, págs. 527 a 650.
- SERRA, N., *La transición militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas*. Debate, Barcelona, 2008.
- SEPÚLVEDA MUÑOZ. I., «Tres décadas de historia. Ciclos de transformación», SEPÚLVEDA, I., Y VACA, R. (Edits.), en *II Congreso de historia de la Defensa. El Ministerio de Defensa creación, desarrollo y consolidación*, Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, Madrid.
- SILVELA DIAZ-CRIADO, E., «La fuerza letal: esencia de la profesión militar», *Revista Ejército*, núm. 887, 2015, págs. 116 a 123.
- SPRINGER, B.A., ROSS, A.E., Borden Institute, WALTER REED Army Medical Center, DOUGHERTY, P.J., *Musculoskeletal injuries in military women*. US Army Medical Department Center & School 2011. Borden Institute Monograph Series.
- SUÁREZ GONZÁLEZ, A., «Consideraciones sobre la transición española», *Revista Cuenta y razón del pensamiento actual*, núm. 41, 1988. [Consulta: 27/07/2016], «http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/041/Num041_002.pdf»
- SUREDA, J., COMAS, R., OLIVER, M.F., Y GUERRERO, R.M., *Fuentes de información bibliográfica a través de Internet para investigadores en educación*. REDINED, Palma. Islas Baleares, 2010.

- TERRADILLOS BASOCO, J.M., ACALE SÁNCHEZ, M., GALLARDO GARCÍA, R.M., *Siniestralidad laboral. Un análisis criminológico y jurisprudencial*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005.
- TAMAYO, M. *El proceso de investigación científica*. Limusa, México, 1993.
- VALERO CAPILLA, F.A., FRANCO BONAFONTE, L., RUBIO PÉREZ, F.J., «Lesiones de los sargentos alumnos del Ejército de Tierra y factores de riesgo lesional», *Revista Sanidad Militar*, vol. 70, núm. 4, 2014, págs. 263 a 269.
- VALIÑO CASTRO, A., «Evolución reciente del presupuesto y el gasto español en Defensa», *Cuadernos de información económica*, núm. 248, 2015, págs. 45 a 59.
- VALVERDE SERRANO, E., «Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo», RUBIO ROMERO, J.C. (Dir.), en *Manual para la formación de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales*, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2005, págs. 3 a 20.
- VAQUERIZO RODRÍGUEZ, F.D., «Afganistán. La evolución del Ejército», *Revista Ejército*, núm. 908, 2016, págs. 20 a 26.
- VIDA FERNÁNDEZ, R., *Tesis Doctoral. Las relaciones laborales en las Administraciones públicas*, Universidad de Granada – Facultad de Derecho, Granada, 2016.
- VIDA SORIA, J., «El marco normativo de la prevención de riesgos laborales», VIDA SORIA, J. (Dir.), Y VIÑAS ARMADA, J.M. (Coord.), *Manual para la formación en prevención de riesgos laborales*, Lex Nova, Valladolid, 2006, págs. 109 a 130.
- VALLECILLO ORELLANA, A., «Capítulo XIX. Evolución normativa y jurisprudencial en la consideración del empleado público. Especial referencia al empleado público laboral», SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., y GARRIDO PÉREZ, E. (Dirs.), en *El Derecho del trabajo y la Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral*, Ediciones Laborum, Murcia, 2015, págs. 271 a 286.
- VILLABELLA ARMENGOL, C.M., *La metodología de la investigación y la comunicación jurídica*, 2ª ed. Editorial Félix Varela, La Habana, 2012.
- ZAMORA NAVARRO, J.F., «El derecho y el deber de servir a España», *Revista Ejército*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2018, núm. 928, págs. 58 a 63.

ANEXO NORMATIVO

UNIÓN EUROPEA

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 30 de marzo de 2010, *Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. C 326/13, de 30 de marzo de 2010.

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco). *Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L183, de 29 de junio de 1989.

Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo de 18 de julio de 1994 por el que se crea la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo. *Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L216/1, de 20 de agosto de 1994.

ESPAÑA

Constitución Española. *BOE*, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero. *BOE*, núm. 9, de 11 de enero de 1967.

Ley Orgánica 6/1980, de 17 de noviembre, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. *BOE*, núm. 165, de 10 de julio de 1980.

Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. *BOE*, núm. 6, de 7 de enero de 1984.

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. *BOE*, 8 de agosto de 1985, núm. 189.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. *BOE*, núm. 63, de 14 de marzo de 1986.

Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. *BOE*, núm. 171, de 18 de julio de 1987.

Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la defensa nacional. *BOE*, núm. 276, de 18 de noviembre de 2005.

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 180, de 28 de julio de 2011.

Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, (Gaceta).

Ley Reguladora del Fuero del Trabajo aprobado por Decreto de 9 de marzo de 1938 (Gaceta).

- Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. *BOE*, núm. 64, de 14 de marzo de 1980.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. *BOE*, de 20 de julio de 1990, núm. 173.
- Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. *BOE*, núm. 173, de 20 de julio de 1990.
- Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. *BOE*, núm. 313, de 31 de diciembre de 1994.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. *BOE*, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995.
- Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. *BOE*, de 15 de abril de 1997, núm. 90.
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. *BOE*, núm. 285, de 28 de noviembre de 1997.
- Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. *BOE*, de 7 de mayo de 2002, núm. 109.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. *BOE*, de 13 de diciembre de 2003.
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. *BOE*, de 17 de diciembre de 2003, núm. 301.
- Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. *BOE*, de 25 de abril de 2006, núm. 98.
- Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. *BOE*, núm. 250, de 19 de octubre de 2006.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. *BOE*, núm. 89, de 13 de abril de 2007.
- Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. *BOE*, núm. 278, de 20 de noviembre de 2007.
- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. *BOE*, núm. 226, de 17 de septiembre de 2014.

- Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. *BOE*, núm. 288, de 28 de noviembre de 2014.
- Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. *BOE*, de 29 de noviembre de 2014, núm. 289.
- Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. *BOE*, núm. 174, de 22 de julio de 2015.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. *BOE*, núm. 236, de 2 de octubre de 2015.
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. *BOE*, de 30 de octubre de 2015, núm. 260.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. *BOE*, de 2 de octubre de 2015, núm. 236.
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. *BOE*, núm. 153, de 28 de junio de 2017.
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. *BOE*, núm. 161, de 4 de julio de 2018.
- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado. *BOE*, de 15 de febrero de 1964, núm. 40.
- Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. *BOE*, núm. 96, de 22 de abril de 1966.
- Decreto 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino. *BOE*, de 21 de abril de 1967, núm. 95.
- Real Decreto Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas. *BOE* núm. 244, de 11 de octubre de 1976.
- Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. *BOE*, de 14 de julio de 2012, núm. 168.
- Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. *BOE*, de 15 de junio de 2000, núm. 142.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. *BOE*, de 31 de octubre de 2015, núm. 261.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. *BOE*, núm. 261, de 31 de octubre de 2015.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. *BOE*, núm. 261, de 31 de octubre de 2015.
- Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados Órganos de la Administración Central del Estado. *BOE*, núm. 159, de 5 de julio de 1977.
- Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, por el que se estructura orgánica y funcionalmente el Ministerio de Defensa, *BOE*, núm. 265, de 5 de noviembre de 1977.
- Real Decreto 836/1978, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 11/1977, de 8 de febrero, *BOE*, núm. 102, de 29 de abril de 1978.
- Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos militares. *BOE*, núm. 251, de 8 de octubre de 1980.
- Real Decreto 252/1982, de 12 de febrero, por el que se reestructuran determinados órganos del Ministerio de Defensa, *BOE*, núm. 39, de 15 de febrero de 1982.
- Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra. *BOE*, núm. 285, de 29 de noviembre de 1983.
- Real Decreto 135/1984, de 25 de enero, por el que se reestructura el Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 27, de 1 de febrero de 1984.
- Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, por el que se determina la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 2, de 2 de enero de 1987.
- Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar. *BOE*, de 20 de julio de 1994, núm. 172.
- Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. *BOE*, de 10 de abril de 1995, núm. 85.
- Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educación y Cultura, de Trabajo y Asuntos

Sociales, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Administraciones Públicas, de Sanidad y Consumo. y de Medio Ambiente. *BOE*, núm. 115, de 11 de mayo de 1996.

Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 189, de 6 de agosto de 1996.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. *BOE*, núm. 27, de 31 de enero de 1997.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. *BOE*.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. *BOE*, núm. 97, de 23 de abril de 1997.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. *BOE*, núm. 256, de 25 de octubre de 1997.

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. *BOE*, núm. 170, de 17 de julio de 1998.

Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. *BOE*, núm. 224, de 18 de septiembre de 1998.

Real Decreto 76/2000, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, de 22 de enero de 2000, núm. 19.

Real Decreto 138/2000, de 21 de enero, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. *BOE*, de 16 de enero de 2000, núm. 40.

Real Decreto 64/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 76/2000, de 21 de enero. *BOE*, de 27 de enero de 2001, núm. 24.

Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 186, de 4 de agosto de 2001.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. *BOE*, de 31 de enero de 2004, núm. 27.

Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 154, de 26 de junio de 2004.

Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. *BOE*, núm. 49, de 26 de febrero de 2005.

Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. *BOE*, de 17 de enero de 2006, núm. 14.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. *BOE*, núm. 60, de 11 de marzo de 2006.

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. *BOE*, núm. 302, de 19 de diciembre de 2006.

Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. *BOE*, de 27 de diciembre de 2007, núm. 310.

Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 16, de 18 de enero de 2008.

Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa. *BOE*, de 21 de febrero de 2008, núm. 45.

Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 166, de 10 de julio de 2008.

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 33, de 7 de febrero de 2009.

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. *BOE*, núm. 36, de 10 de febrero de 2010.

- Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas. *BOE*, de 1 de junio de 2010, núm. 133.
- Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, de 23 de octubre de 2010, núm. 257.
- Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa. *BOE*, de 30 de octubre de 2010, núm. 317.
- Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional. *BOE*, de 5 de abril de 2011, núm. 81.
- Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. *BOE*, de 31 de mayo de 2011, núm. 129.
- Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 307, de 22 de diciembre de 2011.
- Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 315, de 31 de diciembre de 2011.
- Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 56, de 6 de marzo de 2012.
- Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 151, de 21 de junio de 2014.
- Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. *BOE*, núm. 234, de 26 de septiembre de 2014.
- Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 252, de 17 de octubre de 2014.
- Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura

orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 227, de 22 de septiembre de 2015.

Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. *BOE*, de 17 de octubre de 2015, núm. 249.

Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». *BOE*, de 17 de octubre de 2015, núm. 249.

Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 267, de 4 de noviembre de 2016.

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 274, de 12 de noviembre de 2016.

Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, por el que se regulan las competencias y cometidos de apoyo a la atención sanitaria del personal militar no regulado por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el ámbito estrictamente militar. *BOE*, núm. 52, de 15 de marzo de 2017.

Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 162, de 8 de julio de 2017.

Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 287, de 25 de noviembre de 2017.

Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. *BOE*, núm. 37, de 10 de febrero de 2018.

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 152, de 23 de junio de 2018

Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica

básica de los departamentos ministeriales. *BOE*, núm. 158, de 30 de junio de 2018.

Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. *BOE*, núm. 176, de 21 de julio de 2018.

Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 284, de 24 de noviembre de 2018.

Directiva de defensa nacional 1/2004, de 30 de diciembre de 2004.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. *BOE*, de 16 de marzo de 1971, núm. 64.

Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, sobre directrices generales de los planes de estudios para la Enseñanza Militar de Formación de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería. *BOD*, núm. 44, de 3 de marzo de 2000.

Orden, de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. *BOE*, de 16 de marzo de 1971, núm. 64.

Orden 68/1994, de 28 de junio, sobre organización y actualización de la Seguridad de Vuelo en los accidentes de Aeronaves Militares Españolas. *BOE*, de 8 de julio de 1994, núm. 162.

Orden PRE/2457/2003, de 29 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militares. *BOE*, de 9 de septiembre de 2003, núm. 216.

Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos. *BOE*, núm. 303, de 19 de diciembre de 2003.

Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa. *BOE*, de 10 de diciembre de 2008, núm. 297.

Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos. *BOE*, de 25 de mayo de 2009, núm. 126.

Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las Unidades e instalaciones del Ejército de Tierra. *BOD*, núm. 150, de 2 de agosto de 2011.

- Orden DEF/2362/2014, de 28 de noviembre, sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de Defensa. *BOE*, núm. 304, de 17 de diciembre de 2014.
- Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 35, de 10 de febrero de 2015.
- Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 107, de 5 de mayo de 2015.
- Orden DEF/1668/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa. *BOE*, núm. 188, de 7 de agosto de 2015.
- Orden DEF/1362/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra. *BOE*, de 30 de junio de 2015, núm. 155.
- Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa. *BOE*, de 18 de septiembre de 2015, núm. 224.
- Resolución 200/39161/1995, de 7 de noviembre, de la Jefatura del estado Mayor de la Defensa, por la que se publica la Lista Oficial de Productos Combustibles, Lubricantes y Asociados aceptados (LOPA) para las Fuerzas Armadas. *BOE*, núm. 280, de 23 de noviembre de 1995.
- Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. *BOE*, de 1 de agosto de 1998, núm. 183.
- Resolución 430/38077/2018, de 16 de abril, de la Subsecretaría, por la que se delegan competencias en materia de prevención de riesgos laborales. *BOE*, de 25 de abril de 2018, núm. 100.
- Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. *BOE*, de 8 de marzo de 1996, núm. 59.

Instrucción 214/2001, de 3 de octubre, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra sobre Planes de Estudio de las especialidades de los militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra. *BOD*, núm. 210, de 26 de octubre de 2001.

Instrucción 016/2009, de 5 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan normas sobre la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Defensa y se aprueba su plantilla orgánica.

Instrucción 109/2007, de 26 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se crea la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza. *BOD*, de 13 de agosto, núm. 158.

Instrucción 18/08, de 30 de diciembre, del Teniente General Jefe del Mando de Personal, de Protocolos unificados para los reconocimientos médicos en el Ejército de Tierra.

Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra. *BOD*, núm. 196, de 6 de octubre de 2011.

Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar. *BOD*, núm. 11, de 16 de enero de 2013.

Instrucción Técnica 03/12, de 30 de abril de 2012 del Teniente General Jefe del Mando de Apoyo Logístico a Ejército “Actuaciones para determinar las causas técnicas de los accidentes relacionados con armamento, material, municiones o explosivos”.

Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra. *BOD*, núm. 13, de 21 de enero de 2016.

Resolución comunicada 431/0014/2014, de 28 de enero, de la Dirección General de Personal, aprobación de la estructura de los Servicios de Prevención de las Unidades, Centros y Organismos ajenos a la estructura de los Ejércitos.

Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. *BOE*, núm. 66, de 18 de marzo de 2017.

Instrucción Permanente Logística 02/2010, de 17 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se regula la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad Operativa en la Armada. Armada, Madrid, 2010.

Directiva JEME 02/11, de 18 de febrero de 2011, de Prevención de Riesgos Laborales en el Ejército de Tierra. Ejército de Tierra, Madrid, 2011.

Directiva 11 /2011, de 28 de febrero, del jefe de estado mayor del ejército del aire por la que se regula el proceso de creación de la estructura de Prevención de Riesgos Laborales en el Ejército del Aire. Ejército del Aire, Madrid, 2011.

Directiva 5/2018, de 22 de febrero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre política de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa en la Armada.

Instrucción Técnica IGE 20/2011. Plan General de prevención de riesgos laborales del Ejército de Tierra. Ejército de Tierra, Barcelona, 2011.

NOP 2/16, de 22 de abril de 2016, de la Dirección de Acuartelamiento, "Investigación de accidentes y siniestralidad laboral"

Norma Técnica 16/09, de 7 de agosto de 2009, de Dirección de Sistema de Armas, "Equipamiento del personal incorporado a los Centros de Formación".

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Cortes Generales. Diario de Sesiones Senado. XII Legislatura. Comisión de presupuestos, sesión celebrada el 8 de junio de 2017, núm. 133, págs. 1 a 119.

FRANCIA

Code de la défense, version consolidée au 30 mars 2017.

Code du travail, version consolidée au 6 avril 2017.

Code de la santé publique, version consolidée au 8 avril 2017.

Code de la sécurité sociale, version consolidée au 8 avril 2017.

Loi n° 84-16, du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Version consolidée au 08 avril 2017.

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail. Version consolidée au 21 avril 2017.

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. JORF n°0184 du 9 août 2016.

Décret n°82-453, du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. (n.i. BO ; JO du 30 mai 1982 p. 1737) modifié.
Version consolidée au 08 avril 2017.

Décret n° 2011-774, du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Décret n° 2009-1179, du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
Version consolidée au 08 avril 2017.

Décret n° 2010-974, du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale. Version consolidée au 08 avril 2017.

Décret n° 2011-184, du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Version consolidée au 08 avril 2017.

Décret n° 2012-422, du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, JORF n°0077 du 30 mars 2012 texte n° 16. (JO n° 77 du 30 mars 2012, texte n° 16; signalé au BOC 29/2012; BOEM 125.1, 300.1.2.4.1, 404.3.2.2) modifié.

Arrêté, du 8 mars 1999 (BOC, 1999, p. 2248; BOEM 125.1) modifié.

Arrêté, du 9 août 2012, fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, (JO n° 201 du 30 août 2012, texte n° 24; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 124.1, 125.1).

Arrêté, du 3 septembre 2012, portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des unités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées.

Arrêté, du 9 avril 2013 (JO n° 93 du 20 avril 2013, texte n° 20; signalé au BOC 27/2013; BOEM 125.1).

Arrêté, du 12 avril 2013 (JO n° 119 du 25 mai 2013, texte n° 21; signalé au BOC 31/2013; BOEM 110.5.3) modifié.

Arrêté, du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre, version consolidée au 11 avril 2017. JORF n°0115 du 18 mai 2014
texte n° 12.

Arrêté, du 1er décembre 2014 (JO n° 288 du 13 décembre 2014, texte n° 30; signalé au BOC 65/2014; BOEM 125.1).

Arrêté, du 21 décembre 2015 (JO n° 300 du 27 décembre 2015, texte n° 52; signalé au BOC 57/2015; BOEM 124.1, 125.1).

Arrêté, du 18 février 2016 (BOC n° 8 du 25 février 2016, texte 5; BOEM 110.5.1).

L'avis émis par la commission centrale de prévention le 8 septembre 2011.

L'avis émis par la commission interarmées de prévention le 12 septembre 2011.

L'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction militaire le 9 décembre 2011.

Circulaire n° 310041/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/RSSF, du 28 janvier 2016 relative à la diffusion du guide juridique d'application des dispositions du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense et de l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense.

Instruction n° 1/DEF/EMA/PERF/PMRE du 21 septembre 2015 (BOC n° 5 du 4 février 2016, texte 8; BOEM 125.1).

Instruction n° 500186/DEF/SGA/SID, relative à l'organisation de la prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail au profit du personnel civil et du personnel militaire du service d'infrastructure de la défense, du 18 janvier 2017. (BOC n° 10 du 2 mars 2017, texte 1).

PIA – 4.0.2 Publication interarmées. Instruction relative à l'organisation de la prévention au profit du personnel militaire au sein des forces servant en opération. N° D-13-000156/DEF/EMA/SCSOUT/PPS/NP du 07 janvier 2013.

Directive n° 500072/DEF/EMAT/PS/BPMR/NP, du 15 février 2012. Schema directeur prévention et maîtrise de risques de l'armée de Terre.

Doctrine interarmées n°1 relative à l'emploi des forces.

Doctrine interarmées n°3 relative au commandement des engagements opérationnels.

ITALIA

Legge 3 agosto 2007, n° 123. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (Gazzetta Ufficiale n° 185 del 10 agosto 2007).

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori durante il lavoro. (Gazzetta Ufficiale n° 265 del 12/11/94 - Supplemento ordinario n° 141).

Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242. Modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626. (Gazzetta Ufficiale n° 104 del 06/05/96 - Supplemento ordinario n° 75).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30/04/08).

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n° 180 del 5 agosto 2009).

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 66. Codice dell'Ordinamento militare ed Il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 de marzo de 2010, n° 90. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

SGD-G-022 Direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del ministero della difesa. Ministero della Difesa, Roma, 2010.

Linea Guida sugli adempimenti a carico dei Comandanti di Enti/Distaccamenti/Reparti/Comandi in merito alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Comando Logistico dell'Esercito, 2010.

PORTUGAL

Constituição da República Portuguesa, 2 de abril de 1976.

Lei n° 11/89, de 1 de Junho. Bases gerais do estatuto da condição militar.

Lei n° 7/2009, de 12 de Fevereiro. Código do Trabalho.

Lei n° 102/2009, de 10 de Setembro de 2009. Regime jurídico da segurança e saúde no trabalho, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n° 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de Junho.

Lei n° 35/2014, de 20 de Junho. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro. Estabelece o regime jurídico do enquadramento da segurança, higiene e saúde no trabalho.

Decreto-Lei nº 26/94, de 1 de Fevereiro, Estabelece o regime de organização e funcionamento das actividades e serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, previstos no artigo 13º do Decreto-Lei 441/91, de 14 de Novembro.

Decreto-Lei nº 133/99, de 21 de Abril de 1999. Altera o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, relativo aos princípios da prevenção de riscos profissionais, para assegurar a transposição de algumas regras da directiva quadro relativa à segurança e saúde dos trabalhadores nos locais de trabalho.

Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, com as alterações e rectificações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 10-BI/99, de 31 de Julho, Lei n.º 25/2000, de 23 de Agosto, Decreto-Lei n.º 232/2001, de 25 de Agosto, Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70/2005, de 17 de Março, Decreto-Lei n.º 166/2005, de 23 de Setembro, Decreto-Lei n.º 310/2007, de 11 Setembro.

Decreto-Lei nº 488/99, de 17 de Novembro. Define as formas de aplicação do regime jurídico de segurança, higiene e saúde no trabalho à Administração Pública.

Decreto-Lei nº 109/2000, de 30 de Junho. Altera o Decreto-Lei nº 26/94, de 1 de Fevereiro, que contém o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, republicando-o em anexo.

Decreto Regulamentar nº 69/2007, de 28 de Junho. Estabelece as atribuições, organização e competências da Inspecção-Geral do Exército.

Directiva nº 90/CEME/07, de 27 de marzo.

Ministério da Defesa Nacional, Exército português, PDE 1-23-00 Manual do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do Exército, Março de 2012.

OTAN

Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive Interim V2.0 (Chapter 4 - Operational Level), 04 october 2013.

STANAG 2908/1981, Preventive measures for an Occupational health programme, 11 september 1981.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto 26/62. Entre NV (Sociedad Anónima) *Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos* y *Nederlandse administratie der belastingen* (Administración Tributaria neerlandesa). Sentencia de 5 de febrero de 1963.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta). Asunto C-79/95. Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. Sentencia de 26 de septiembre de 1996.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Quinta). Asunto C-49/00, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 21 de septiembre de 1999.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Primera). Asunto C-362/98, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 16 de marzo de 2000.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2000\234. Asunto C-303/98. Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contra Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. Sentencia de 3 de octubre de 2000.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2001\219. Asunto C-241/99. Confederación Intersindical Galega (CIG) contra Servicio Galego de Saúde (Sergas). Sentencia de 3 de julio de 2001.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Quinta). Asunto C-5/00, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Federal de Alemania. Sentencia de 7 de febrero de 2002. Conclusiones del abogado General, presentadas el 28 de junio de 2001, segundo punto, pág. I-1318s.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Sexta). Asunto C-455/00, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 24 de octubre de 2002.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Sexta). Asunto C-65/01, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 10 de abril de 2003.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Quinta). Asunto C-441/01, Comisión de las Comunidades Europeas, contra el Reino de los Países Bajos. Sentencia de 22 de mayo de 2003. Conclusiones del abogado General, presentadas el 16 de enero de 2003, tercer punto, pág. I-5473s.

Tribunal de justicia de la Unión Europea. 2004/272. Asunto C-397/01 a C-404/01. Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) y Matthias Döbele (C-403/01) contra

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV. Sentencia de 5 de octubre de 2004.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Segunda). Asunto C-168/03, Comisión de las Comunidades Europeas, contra el Reino de España. Sentencia de 14 de septiembre de 2004.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda). Asunto C-287/03, Comisión de las Comunidades Europeas, contra el Reino de Bélgica. Sentencia de 12 de mayo de 2005.

Tribunal de justicia de la Unión Europea. 2005\249. Asunto C-52/04. Personalrat der Feuerwehr Hamburg contra Leiter der Feuerwehr Hamburg. Auto de 14 de julio de 2005.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda). Asunto C-132/04. Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. Sentencia de 12 de enero de 2006.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera). Asunto C-428/04. Comisión de las Comunidades Europeas contra Republica de Austria. Sentencia de 6 de abril de 2006.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Primera). Asunto C-504/06, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 15 de julio de 2006.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Segunda). Asunto C-307/05, Comisión de las Comunidades Europeas, contra la República Italiana. Sentencia de 15 de julio de 2006.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Gran Sala). Asunto C-268/06.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Tercera). Asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07.

Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 194/1989, de 16 de noviembre, recurso de amparo 1340-1987, 612-1988.

Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 101/1991, de 13 de mayo, recurso de inconstitucionalidad 993-1985.

Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia núm. 132/2001, de 8 de junio, recurso de amparo 1608-2000.

Tribunal Supremo (Sala de lo Social). Sentencia de 19 de septiembre de 2007, núm. de recurso 3750/2006.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia de 13 de julio, núm. de recurso 42/2008.

Tribunal Supremo (Sala de Conflictos). Sentencia, núm. 3/2011, de 13 de abril, núm. de recurso 6/2010.

Tribunal Supremo (Sala Cuarta). Sentencia, de 22 de julio de 2010, núm. de recurso 3516/2009.

Tribunal Supremo (Sala Cuarta). Sentencia, de 2 de noviembre de 2011, núm. de recurso 1157/2011.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Auto, recurso núm. 3188/2012, de 18 de julio.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Auto, recurso núm. 3774/2014, de 12 de noviembre.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia de 23 de diciembre, núm. de recurso 42/2015.

Tribunal Supremo (Sala de lo Militar), Sentencia núm. 76/2018, de 30 de julio, núm. de recurso 14/2017.

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. (Sala de lo Social). Sentencia núm. 41/2003, de 23 de enero, núm. de recurso 630/2002.

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. (Sala de lo Social). Sentencia núm. 353/2005, de 31 de octubre, núm. de recurso 320/2005.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. (Sala de lo Social). Sentencia núm. 93/2014, 21 de enero, núm. de recurso 2694/2013.

Audiencia Provincial de Vizcaya. (Sección 5). Sentencia Civil núm. 216/2014, de 11 de diciembre, núm. de recurso 240/2014.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Norma UNE-EN 1731:2007, Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

Norma UNE-EN 60804:2002, Sonómetros. Integradores-promediadores.

Norma UNE-EN 420:2004+A1:2010, Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

Norma UNE-EN 407:2005, Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

Norma UNE-EN 61672-1:2014, Sonómetros. Parte1. Especificaciones.

Norma UNE-EN 388:2016, Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Norma UNE-EN ISO 374:2016, Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.

Norma UNE-EN 166:2002, Protección individual de los ojos. Especificaciones

Norma ISO/CD 11228: *Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting and carrying. prEN 1005 - 2: Safety of machinery - Human physical performance. Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery*

SITIOS WEB

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
<https://osha.europa.eu/es/>

ARMÉE DE TERRE, sitio web oficial del Ejército de Tierra francés,
<http://www.defense.gouv.fr/terre>

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, sitio web oficial del Poder Legislativo (Portugal).
<https://www.parlamento.pt/>

AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL, sitio web oficial de la Autoridad Marítima Nacional (Portugal), <http://www.amn.pt/AMN/Paginas/Missao.aspx>

BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L., sitio web de privado de asesoría jurídica (Italia), <http://www.bosettiegatti.eu/>

CNI, sitio web oficial del CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA de España,
<https://www.cni.es/es>

COMUNIDAD DE SALUD LABORAL DEL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA, <http://ergo.ibv.org/>

DIÁRIO DA REPÚBLICA ELECTRÓNICO, sitio web oficial de publicación del Diario de la República portuguesa, <https://dre.pt/>

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ONLINE, sitio web del Derecho. Biblioteca Virtual Legal. Diccionario Jurídico Online, <http://leyderecho.org/>

EJÉRCITO DE TIERRA, sitio web oficial del Ejército de Tierra español,
<http://www.ejercito.mde.es/>

- Sitio web oficial del Ejército de Tierra, «
<http://www.ejercito.mde.es/personal/reservistas-voluntarios.html>».

ESERCITO, sitio web oficial del Ejército de Tierra italiano,
<http://www.esercito.difesa.it/>

EXÉRCITO PORTUGUÊS, sitio web oficial del Ejército de Tierra portugués,
<https://www.exercito.pt/pt>

ESTADO MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS, sitio web oficial del Estado mayor de las Fuerzas Armadas portuguesas, <http://www.emgfa.pt/>

FORZE ARMATE, sitio web privado de asesoría jurídica, asistencia e información para el personal de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de la función pública, (Italia),
<http://www.forzearmate.org/wordpress/>

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, sitio web oficial de la Guardia Nacional Republicana (Portugal), <http://www.gnr.pt/>

GAZZETA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, sitio web oficial de la Gaceta Oficial de la República italiana, <http://www.gazzettaufficiale.it/>

HEALTH and SAFETY EXECUTIVE, sitio web del Ejecutivo de Seguridad y Salud del Reino Unido, <http://www.hse.gov.uk/index.htm>

HECKLER & KOCH, sitio web de la empresa de armamento Heckler & Koch, <https://www.heckler-koch.com/en/products/military/assault-rifles/g36/g36/technical-data.html>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
<http://www.ine.es>

INSTITUTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (NIOSH), https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/wp-solutions/2013-104_sp/

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION (IEA), sitio web de la IEA, federación de sociedades de ergonomía y factores humanos de todo el mundo que tiene derecho como organización internacional fundada en Zurich (Suiza), <https://www.iea.cc/>

LIVRARIA JURÍDICA, sitio web de publicación de la revista de la Facultad de derecho de la Universidad de Oporto (Portugal), <http://www.livrariajuridica.com/>

MINISTÉRIO DA DEFENSA NACIONAL, sitio web oficial del Ministerio de Defensa portugués, <http://www.defesa.pt/>

MINISTERIO DE DEFENSA, sitio web oficial del Ministerio de Defensa español, <http://www.defensa.gob.es/>

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, sitio web oficial del Ministerio de Defensa francés, <http://www.defense.gouv.fr/>

MINISTERO DELLA DIFESA, sitio web oficial del Ministerio de Defensa italiano, <http://www.difesa.it/>

MINISTRY OF DEFENCE, sitio web del Ministerio de Defensa del Reino Unido, <https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence>

OLYMPUS, sitio web privado del observatorio para la vigilancia permanente de la legislación y la jurisprudencia en la seguridad laboral, realizada por el Departamento de Derecho de la Universidad de Urbino Carlo Bo (Italia), <http://olympus.uniurb.it/>

PERIÓDICO EXPANSIÓN, periódico digital, <http://www.expansion.com/>

